

86ª REUNION — Continuación de la 14ª SESION EXTRAORDINARIA
26 DE ENERO DE 1962

Presidencia de los señores diputados Federico F. Monjardín, Oscar López Serrot,
Francisco Hipólito Uzal, Isaac Breyter y Rodolfo Ricardo Carrera

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

SECRETARIO DE ESTADO PRESENTE:

de Hacienda,

doctor JORGE WEHBE

DIPUTADOS PRESENTES:

ACOSTA, Julio E.
ADROGUÉ, Carlos A.
AGUINAGA, Carlos Ernesto
ALARCIA, Fermín
ALEMAN URQUIZA, Luis César
AQUINO, Porfirio Antonio
ABIETA, Ignacio
ARITO, Juan
ARMENDARIZ, Alejandro
AYBAR, José Antonio
BAIGORRIA, Nélida Rosa T.
BECERRA, Olegario Antonio
BENEVENTANO, Domingo
BLANCO, Rubén Victor M.
BOFFI, Luis L.
BOGLIANO, Palmiro B.
BONET CONVALIA, Salvador
BREYTER, Isaac
BUSQUET SERRA, Manuel
CALABRESE, Pablo
CAMARLINGHI, Alfredo E.
CAMET, Carlos Ernesto
CARDENAS, Juan Carlos
CARRERA, Rodolfo Ricardo
CASAS, José B.
CASATI, Hércules H.
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTE, Luis
CORTAZAR, Eleodoro M.
CHAMORRO, Cristino
DECAVI, Jorge Raúl
DESPOUY, Pablo Pedro
DÍAZ, Rosario Domingo
DOMINGORENA, Horacio Osvaldo
DOURS, Roberto José
ELENA, Reinaldo
ERREA, Daniel
ESCALADA, Alfredo H.
FERNANDEZ, José Manuel
FERRARI, Luis
FERREIRA, Jorge W.
FOSERO, Raúl F.
FOSSATI, Evers Nelson
FREGA, José
FUERTES, A. Ricardo
GAILLARD, Augusto

GALLO, Luis M.
GARAY, F. Alfredo
GARCIA FLORES, José L.
GARCÍA SOLÁ, Héctor
GARCÍA VEIGA, Ignacio
GABONA, Alberto Agustín
GILL, Miguel
GÓMEZ BELLO, Miguel Ángel
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GOROSPE, Valentín
GOYA, Israel
GRANDI DE MARTÍN, Palmira A.
GUTIERREZ, José María
GUTIERREZ, Victorino H. B.
HEREDIA, Gilberto L.
HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Rafael
INSAURRALDE, Leopoldo S.
JARA MELAGRANI, Ubaldo H.
JUAREZ PEÑALVA, Miguel Ángel
JUNIN, Simón
JURI, Jorge
LAGOS, César M.
LAROCCA, José R.
LAVALLE, Ricardo
LICEAGA, José V.
LONGHI, Julio P.
LÓPEZ, Juan Raúl
LÓPEZ SANSON, Ernesto
LÓPEZ SERROT, Oscar
LLUGDAR, Eneas N.
MALUF, Emilio
MANES, Juan Carlos
MARCONATO, Pedro Luis
MARCHINI, Atilio Enrique O.
MARINI, Anselmo A.
MONJARDÍN, Federico F.
MONTEAGUDO, Francisco
NAIM, Juan
NASSIF NEME, Carim
NOUGUÉS, Isaías Juan
PANELO, Ricardo E.
PARENTTE, Miguel A.
PARRY, Enrique
PAVIOLO, Ricardo J.
PERKINS, Jorge Walter
PETRAGLIA, Ángel N.
POLOGNA, Aurelio José
POSSE, Melchor S.
POZZIO, Antulio F.
PRECE, Ángel Oscar
RECIO, José A.
RODRÍGUEZ ARAYA, Agustín

RODRÍGUEZ DEL REBOLLAR, José
ROJAS, Nerio
ROSENKRANTZ, Eduardo S.
SAGO, Fayiz
SALIM, Abraham
SAURET, Héctor E.
SAYAGO VALDEZ, Miguel Ángel
SCHWEIZER, Bernardo
SOLARI, Juan Alberto
SPANGENBERG, Enrique
SUÁREZ, Facundo Roberto
TARULLI, Pascual
TELLO HERRERA, José Aurelio
UZAL, Francisco Hipólito
VALLE, Salvador
VECCHIETTI, Augusto Néstor
VESCO, José Luis
VINCIGUERRA, Rómulo
ZADOFF, Arón
ZARRIELLO, Raúl Jorge
ZUBIAURRE, Alberto

AUSENTES, EN COMISION:

BURDEOS, José Antonio
CONTE (h.), Adolfo
GARCIA, Ernesto
MATHOV, Arturo
SUJEROS, Pedro Ignacio P.

AUSENTES, CON LICENCIA:

ABAROA, Rufino Vicente
BECERRA, Carlos Alberto
ESPINA, Juan Carlos
FREYTES, Ángel E.
GÓMEZ, Augusto
LOYOLA, Virgilio
RUIZ, Lucio Carlos
SANTONI, Nabucodonosor
STORANI, Conrado Hugo

AUSENTES, CON AVISO:

FASCE, Antonio
MERCADER, Emir E.
FENNACCHI, Alfredo Arquímedes D.
BABANAL, Francisco
SOLANAS, Juan Carlos

AUSENTES, SIN AVISO:

ABDALA, Felipe
ABRAHAM, Réstem
ACUNA, Ramón Edgardo
AIDAR, Miguel

ALZABÉ, Pedro Bernabé
 ANGARONI, Héctor Marcelo
 BARRETO, Miguel
 BAUDUCCO, Enrique
 BEIRO, Angel Francisco
 BELNICOFF, Manuel
 BERTONE, Marcos E.
 BILBAO, Alfredo C.
 BONIFACIO, Juan José
 BROUWER DE KONING, Julio R.
 BULIT GONL, Enrique A.
 BUSANICHE, Julio J.
 BUSTOS, Jerónimo L.
 CANEDO, Raúl
 CAPRIOTTI, Roberto A.
 CONTÍN, Carlos R.

COSTA, Abelardo M.
 CUEVAZ, Agustín
 FERNÁNDEZ IRUJO, Ricardo
 FERRARIS, Jorge Domingo
 GALEANO, Roberto A.
 GIORDANO ECHEGOYEN, Mario
 GONZÁLEZ, Ricardo A.
 JOFRE, Emilio
 LAFUENTE, Augusto Antonio
 LÓPEZ, Juan Carlos Godofredo
 LÓPEZ AGUIRRE, Juan J.
 LUELMO, Horacio Flavio
 MARTÍNEZ ROLÓN, José
 MÁS, Juan Antonio
 MIHURA, Emilio
 MONTE, Ricardo Álvaro

MORENO, Eufemio Tecló
 MOSCA, Gabriel Carlos J.
 MURIAS, José
 MUSACCHIO, Vicente M.
 OREJA, Pablo Fermín
 PELÓN, Raúl
 PERETTE, Carlos H.
 PÉREZ, Inocencio A.
 PINTOS ROSAS, Francisco M.
 ROBERTO, Mario
 ROMERO, Manuel Ángel
 SAMMARTINO, Ernesto E.
 SANTAGADA, Nírido E.
 SEGOVIA, Carlos A.
 TONELLI, Haroldo Juan
 TROILO, Eleogardo B.

SUMARIO

1.—Manifestaciones. (Pág. 6234.)

2.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de reformas al régimen impositivo (orden del día 1.108½). (Pág. 6234.)

3.—Apéndice:

I.—Inserción de documentos. (Pág. 6393.)

II.—Asuntos entrados:

I.—Comunicaciones oficiales (Pág. 6403.)

II.—Comunicaciones de comisión. (Pág. 6403.)

III.—Dictámenes de comisión. (Pág. 6403.)

IV.—Peticiones particulares. (Pág. 6404.)

V.—Proyecto de ley del señor diputado Vesco: subsidio al Unión Football Club y Biblioteca Sarmiento, de Alto Alegre, Córdoba. (Pág. 6404.)

VI.—Proyecto de resolución del señor diputado Chamorro referente a reorganización del Banco Hipotecario Nacional. (Pág. 6404.)

VII.—Proyecto de declaración del señor diputado Blanco y otros sobre supresión de la Dirección General de Enseñanza Agrícola y traspaso de escuelas agropecuarias a las provincias. (Pág. 6405.)

VIII.—Proyecto de declaración del señor diputado Spangenberg referente a la industrialización del girasol, y colocación de productos exportables de la industria aceitera. (Pág. 6405.)

IX.—Proyecto de resolución del señor diputado Vesco: transformación en sucursal de la estafeta de Correos y Telecomunicaciones de Chilibroste, Córdoba. (Página 6406.)

X.—Proyecto de resolución del señor diputado Vesco: servicio telefónico en la localidad de Alto Alegre, Córdoba. (Página 6406.)

XI.—Proyecto de resolución del señor diputado Zubiaurre y otros: pedido de infor-

mes sobre exportación de carne a la República Federal Alemana. (Pág. 6406.)

XII.—Proyecto de resolución del señor diputado Rodríguez Araya: pedido de informes sobre adjudicación de un predio ubicado en las provincias de Chubut y Río Negro, y cesantías de personal de la ex Dirección de Tierras. (Pág. 6407.)

XIII.—Proyecto de resolución de los señores diputados Díaz y Spangenberg: pedido de informes sobre modificación del convenio suscrito entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales y la empresa petrolera South Eastern Company. (Pág. 6407.)

—En Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de enero de 1962, a las 14 y 5:

1

MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Uzal).—Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor diputado Rodríguez Araya.

Sr. Rodríguez Araya.—Señor presidente: solicito que se continúe llamando hasta las 16.

Sr. Presidente (Uzal).—Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Uzal).—Se continuará llamando.

—Se continúa llamando.

—A las 16:

2

REGIMEN IMPOSITIVO

Sr. Presidente (Breyter).—Por Secretaría se va a dar cuenta del dictamen sobre reformas al régimen impositivo.

(Orden del día número 1.108½)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre reformas al régimen impositivo; y, por las razones que dará el miem-

bro informante, aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Procedimiento

Artículo 19 — Modifícase la ley 11.683 (texto ordenado en 1960 y sus modificaciones) en la siguiente forma:

- 19 Inclúyese en el tercer párrafo del artículo 89, entre las facultades del director general, la de dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: inscripción de agentes de retención y forma de documentar la deuda fiscal por parte de los contribuyentes.
- 29 Sustitúyese el párrafo 5º del artículo 14 por el siguiente:

La dirección sólo quedará obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio:

- a) Cuando se trate de cambio a un domicilio real o legal, si la notificación de dicho cambio ha sido hecha por el contribuyente en la forma y condiciones que ella establezca;
- b) Cuando se trate de cambio a un domicilio especial, en el caso de que el cambio haya sido expresamente aceptado por ella.

- 39 Sustitúyese el artículo 23 por el siguiente:

Artículo 23. — Al ejercer las facultades de verificación la dirección procederá a emplazar al contribuyente para que en el término de 15 días presente declaraciones juradas o, si las hubiera presentado, ratifique o rectifique su contenido, aportando en ambos casos los libros, registros y comprobantes de los datos denunciados.

Si las conclusiones de la fiscalización llevada a cabo no concordaran con las resultantes del emplazamiento previsto en el párrafo anterior, corresponderá que la dirección proceda a determinar de oficio la obligación impositiva, sea en forma directa por el conocimiento cierto de la materia imponible, sea mediante estimación si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquélla.

Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los impuestos, no constituyen determinación administrativa de aquéllos, la que sólo compete a los fun-

cionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos (artículos 10 y 11).

- 49 Sustitúyese el artículo 24 por el siguiente:

Artículo 24. — El procedimiento de determinación de oficio se iniciará con una vista al contribuyente de las impugnaciones o cargos que se formulen, para que en el término de quince (15) días, que podrá ser prorrogado, formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho.

Evacuada la vista o transcurrido el término señalado, se dictará resolución fundada que determine el impuesto e intime su pago dentro del plazo de quince (15) días.

La contestación a la vista previa y los recursos que se interpongan ante la Dirección General Impositiva, deberán ser presentados por escrito en los lugares que al efecto habilite la misma.

El decreto reglamentario establecerá en forma expresa los requisitos que, a los fines de su validez, deberán reunir los escritos que presenten los contribuyentes o responsables.

No será necesario dictar resolución determinando de oficio la obligación impositiva si antes de ese acto prestase el contribuyente su conformidad con la liquidación que hubiese practicado la dirección, la que sufrirá entonces los mismos efectos que una declaración jurada.

- 59 Sustitúyese el artículo 26 por el siguiente:

Artículo 26. — Si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad quedará subsistente la obligación del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente, bajo pena de las sanciones de esta ley.

La determinación del juez administrativo del impuesto, en forma cierta o presuntiva, una vez firme, sólo podrá ser modificada en contra del contribuyente en los siguientes casos:

- a) Cuando en la resolución respectiva se hubiere dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación de oficio practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la fiscalización, en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados expresamente en la determinación anterior;

- b) Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior (cifras de ingresos, egresos, valores de inversión y otros).

- 6º Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:

Artículo 28. — Podrá la dirección exigir, dentro del período fiscal en curso, el ingreso de importes a cuenta del impuesto que se deba abonar al término de aquél. Estos anticipos podrán ser fijados proporcionalmente a la fracción transcurrida del período fiscal y sobre la base del impuesto correspondiente al período inmediato anterior o bien en base a otros índices, tales como rentas, capitales, ventas, importe de suministros o inversiones.

- 7º Sustitúyese el artículo 33 por el siguiente:

Artículo 33. — Los responsables determinarán, al efectuar los pagos o los ingresos a cuenta, a qué deudas deberán imputarse. Cuando así no lo hicieren, y las circunstancias especiales del caso no permitiesen establecer la deuda a que se refieren, la dirección determinará a cuál de las obligaciones no prescritas deberán imputarse los pagos o ingresos.

En los casos de prórroga por obligaciones que abarque más de un ejercicio, los ingresos, en la parte que corresponda a impuestos, se imputarán a la deuda más antigua.

- 8º Sustitúyese el artículo 42 por el siguiente:

Artículo 42. — Sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43 y 45, la falta total o parcial de pago a su vencimiento de los impuestos, anticipos o ingresos a cuenta hace surgir, sin necesidad de interpelación alguna, la obligación de abonar juntamente con aquéllos un recargo del 3 % mensual calculado sobre el monto del gravamen adeudado.

La obligación de abonar los recargos subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la dirección al recibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de prescripción para el cobro de ésta.

El director general podrá, con carácter general y cuando medien circunstan-

cias excepcionales debidamente justificadas, redimir en todo o en parte la obligación de abonar los recargos. Así mismo, en los casos de ajustes efectuados con intervención de la dirección, podrá autorizar a los jueces administrativos a reducir o dejar de exigir los mencionados recargos si, a juicio de los mismos, la omisión del impuesto debiera atribuirse a error excusable de hecho o de derecho.

Las precedentes disposiciones serán de aplicación para todos los gravámenes no prescritos al tiempo de exigirse el pago de los recargos.

- 9º Elévanse las multas mínima y máxima previstas por el artículo 43 a \$ 1.000 y \$ 100.000, respectivamente.
10. Derógase el artículo 44.
11. Sustitúyese el artículo 45 por el siguiente:

Artículo 45 — Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de multas de uno hasta diez veces el impuesto en que se defraudó al fisco o se haya pretendido defraudarlo, sin perjuicio de la responsabilidad criminal por delitos comunes, los contribuyentes responsables y terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra que tenga por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial de los tributos.

Con igual pena serán reprimidos los agentes de retención que mantengan en su poder impuestos retenidos después de haber vencido los plazos en que debieron efectuar los respectivos ingresos.

En los casos de multas firmes aplicadas de conformidad con lo dispuesto en este artículo, la Dirección General Impositiva dispondrá la publicación periódica, por los medios de divulgación que estime adecuados, del nombre, domicilio y actividad de cada infractor y del importe de la sanción impuesta.

12. Agréganse al artículo 46 como incisos g) y h) los siguientes:

g) La omisión, por parte de los responsables, de presentar sus declaraciones juradas e ingresar el gravamen adecuado, cuando de las características del caso, tales como: la naturaleza o volumen de las operaciones realizadas, la cuantía de los beneficios obtenidos o la personalidad del infractor, resulte que el mismo no podía ignorar su calidad de contribuyente o responsable y la

existencia de las obligaciones emergentes de tal condición;

- h) La omisión total o parcial de la obligación de actuar como agente de retención y concurren las circunstancias agravantes a que se refiere el inciso anterior.

13. Sustitúyese el artículo 47 por el siguiente:

Artículo 47. — En los casos del artículo 45, cuando la multa a aplicar resultara inferior a mil pesos (\$ 1.000), la Dirección General Impositiva queda facultada para no imponer pena al responsable.

En los supuestos del artículo 43, el juez administrativo podrá eximir de sanción al responsable cuando a su juicio la infracción no revistiera gravedad.

14. Sustitúyese el artículo 48 por el siguiente:

Artículo 48. — Las multas aplicadas deberán ser satisfechas por los responsables dentro de los quince (15) días de notificadas, salvo que se hubiera optado por interponer contra las mismas las acciones o recursos que autorizan los artículos 71, 75 y 85.

15. Sustitúyese el artículo 49 por el siguiente:

Artículo 49. — Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los impuestos, recargos, intereses y multas ejecutoriadas, los importes respectivos devengarán un interés punitivo del tres por ciento (3 %) mensual, que se computará desde la fecha de la interposición de la demanda.

16. Sustitúyense los párrafos 1º y 3º del artículo 51 por los siguientes:

No están sujetos a los recargos establecidos por el artículo 42 ni a las multas previstas en los artículos 43 y 45: las sucesiones indivisas, el cónyuge cuyos réditos propios percibe o de que disponga en su totalidad el otro, los incapaces, los penados a que se refiere el artículo 12 del Código Penal, los concursados civilmente y los quebrados.

Las sanciones previstas en los artículos 42, 43 y 45 no serán de aplicación en los casos en que ocurra el fallecimiento del infractor, aun cuando la resolución respectiva haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.

17. Sustitúyese el artículo 62 por el siguiente:

Artículo 62. — Se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales:

1. Desde la fecha de intimación administrativa de pago de impuestos determinados, cierta o presuntivamente, con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado. Cuando mediare recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal la suspensión, hasta el importe del impuesto liquidado, se prolongará hasta sesenta (60) días después de notificada la sentencia del mismo que declare su incompetencia, o determine el impuesto, o apruebe la liquidación practicada en su consecuencia.
2. Desde la fecha de la resolución condenatoria por la que se aplique multa, con respecto a la acción penal. Si la multa fuere recurrida ante el Tribunal Fiscal, el término de la suspensión se contará desde la fecha de la resolución recurrida hasta sesenta (60) días después de notificada la sentencia del mismo.

18. Elévase de diez (10) a quince (15) días el plazo establecido en el artículo 67 y agrégase, a continuación de la palabra «días» la expresión «que podrá ser prorrogado».
19. Sustitúyese el artículo 73, por el siguiente:

Artículo 73. — Sustanciado el recurso, el juez administrativo dictará resolución dentro del término de sesenta (60) días y la notificará al interesado, con todos sus fundamentos, en la forma dispuesta por el artículo 99 de esta ley.

20. Sustitúyese al final del 2º párrafo del artículo 74 la palabra «reclamo» por la expresión «recurso de repetición o de reconsideración de repetición» y el 4º párrafo por el siguiente:

La reclamación del contribuyente por repetición de impuestos facultará a la dirección, cuando estuvieren prescritas las acciones y poderes fiscales, para verificar la materia imponible por el período fiscal a que aquélla se refiere y dado el caso para determinar y exigir el impuesto que resulta adeudarse, hasta anular el saldo por el que prosperase el recurso.

21. Agrégase al artículo 91, el siguiente párrafo:

La sentencia será apelable cuando el monto por el que prosperen las excep-

ciones sea superior a cuatro mil pesos (\$ 4.000).

22. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 99, por los siguientes:

Artículo 99. — Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etcétera, serán practicadas en cualesquiera de las siguientes formas:

- a) Por carta certificada con aviso especial de retorno, a cuyo efecto se convendrá con el correo la forma de hacerlo con la mayor urgencia y seguridad.

El aviso de retorno servirá de suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del contribuyente aunque aparezca suscrito por un tercero;

- b) Personalmente, por medio de un empleado de la Dirección General, quien dejará constancia en acta de la diligencia practicada y del lugar, día y hora en que se efectuó, exigiendo la firma del interesado. Si éste no supiere o no pudiere firmar, podrá hacerlo, a su ruego, un testigo.

Si el destinatario no estuviere o se negare a firmar, dejará igualmente constancia de ello en acta. En días siguientes, no feriados, concurrirán al domicilio del interesado dos funcionarios de la Dirección para notificarlo. Si tampoco fuere hallado, dejarán la resolución o carta que deban entregar en sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare en el mismo, haciendo que la persona que la reciba suscriba el acta.

Si no hubiere persona dispuesta a recibir la notificación o si el responsable se negare a firmar, procederán a fijar en la puerta de su domicilio y en sobre cerrado el instrumento de que se hace mención en el párrafo que antecede.

Las actas labradas por los empleados notificadores harán fe mientras no se demuestre su falsedad.

23. Sustitúyese el quinto párrafo del artículo 100, por el siguiente:

El secreto establecido en el presente artículo no regirá:

- a) En cuanto concierne a las publicaciones dispuestas por la parte final del artículo 45;
- b) Para el supuesto de que por desconocerse el domicilio del responsable, sea necesario recurrir a la notificación por edictos;

- c) Para los organismos recaudadores provinciales y municipales, siempre que las informaciones que éstos soliciten estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones.

24. Sustitúyese el último párrafo del artículo 110, por el siguiente:

La aplicación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes se regirá por la presente ley, con las limitaciones que establezca la reglamentación.

25. Agrégase en el artículo 122, a continuación de la palabra «designará», la expresión «por sorteo».

26. Sustitúyese en el artículo 123 la expresión «los términos de esta ley» por «los términos de este título».

27. Sustitúyese en el último párrafo del artículo 136 la expresión «hasta en un cincuenta por ciento (50 %)» por la siguiente: «hasta en un ciento por ciento (100 %)».

28. Elévase a treinta (30) días el plazo establecido en la primera parte del artículo 164 y por el artículo 166.

29. Agrégase al artículo 165 el siguiente párrafo:

Concedida la autorización, ésta será válida para todos aquellos casos en que, a través de la sentencia del Tribunal Fiscal, resulte que se trata de una cuestión estrictamente análoga a la que dio lugar a esa autorización.

30. Agrégase el siguiente artículo:

Artículo ... — La Dirección General Impositiva acordará con los bancos el procedimiento para que éstos devuelvan a sus clientes todos los cheques librados a la orden de la Dirección General Impositiva una vez cancelados y satisfechos los requisitos de orden interno de acuerdo con las prácticas bancarias.

31. Agrégase la siguiente disposición transitoria:

Artículo ... — En los casos de intimaciones notificadas y multas aplicadas que no estuvieran firmes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, serán de aplicación las normas de recargos y multas contenidas en la legislación anterior.

Con relación a los sobrepagos a los combustibles vencidos y no satisfechos con anterioridad a la promulgación de la presente ley, se aplicarán los recargos

que establece el artículo 42 de la misma, en sustitución de los intereses punitivos que establecía el artículo 8º del decreto 7.926/51, a menos que ya se hubiera requerido el pago de estos últimos con respecto a esos sobreprecios.

Impuesto a los réditos

Art. 2º — Modifícase a partir del 1º de enero de 1962 la ley del impuesto a los réditos, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, en la forma que se indica a continuación:

1º Sustitúyese el inciso q) del artículo 19 por el siguiente:

q) Las utilidades provenientes de la venta de semillas de categoría «original», obtenidas por criaderos fiscalizados por la autoridad nacional competente, mediante la aplicación de principios de genética vegetal.

2º Agrégase al inciso l) del artículo 62, como segundo párrafo, el siguiente:

Si se tratare de asesoramiento de carácter exclusivamente técnico-industrial prestado a las explotaciones mineras, empresas de transporte, astilleros navales e industrias manufactureras o de transformación, se presumirá que el 50 % de las sumas abonadas por tal concepto cubren gastos o costos del beneficiario del exterior, debiendo practicar la retención sobre el excedente. En ningún caso el monto a considerar como costo o gasto podrá exceder de los límites que al efecto fije la reglamentación.

3º Agrégase al artículo 62, como inciso p) el siguiente:

p) La contribución dispuesta por la ley 14.155.

4º Modifícase el artículo 76 en la siguiente forma:

a) Suprímese del primer párrafo el término «sólo».

b) Agrégase al segundo párrafo y a continuación de «vocales de las cámaras de apelaciones y jueces» las palabras «y vocales del Tribunal de Cuentas de la Nación».

Impuestos a los beneficios extraordinarios

Art. 3º — Modifícase la ley de impuesto a los beneficios extraordinarios, texto ordenado en 1960, en la siguiente forma:

1º Modifícase el artículo 1º en la siguiente forma:

a) Exclúyese del segundo párrafo la expresión: «o explotaciones».

b) Sustitúyese el tercer párrafo, por el siguiente:

Quedan exentos los réditos extraordinarios que provengan de la actividad de comisionistas, corredores, rematadores, viajantes de comercio, despachantes de aduana y demás agentes auxiliares del comercio.

2º Modifícase el artículo 4º en la siguiente forma:

a) Sustitúyese el primer párrafo por el siguiente:

Artículo 4º — El capital y reservas libres computables, estarán dados por la diferencia existente al final de cada ejercicio entre el activo y pasivo ajustados conforme a la ley del impuesto a los réditos y en la forma que establezca la reglamentación, no admitiéndose las revaluaciones o asignaciones de valores a los bienes del negocio, salvo los casos en que el revalúo sea computable para dicha ley. Cuando el capital así determinado, no sea representativo del utilizado en el curso del ejercicio, en virtud de variaciones de importancia producidas en los tres (3) últimos meses del mismo, la dirección o los responsables, podrán ajustar el capital computable, proporcionando dichas variaciones en función al tiempo.

b) Suprímese del cuarto apartado la locución «en función al tiempo de su inversión».

c) Derógase el último párrafo.

3º Derógase el artículo 8º.

4º Las modificaciones que se establecen por el presente artículo serán de aplicación a los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 1961, inclusive.

Impuesto a las ventas

Art. 4º — Modifícase, a partir del 1º de enero de 1962, la ley 12.143, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, en la siguiente forma:

1º Agrégase al artículo 8º, como inciso f), el siguiente:

f) Los gastos directos de venta que incidan sobre las enajenaciones que los industriales efectúen al menudeo y al público consumidor, en la forma y condiciones que fije la reglamentación.

2º Inclúyese en el artículo 11, como inciso j), el siguiente:

j) Las ventas de maquinaria agrícola.

3º Agrégase el siguiente artículo:

Artículo ... — Las ventas de productos importados tendrán el mismo tratamiento fiscal que las ventas de productos similares nacionales, tanto en lo relativo a las tasas aplicables como en cuanto al régimen de exención; quedando derogada toda disposición que importe un tratamiento discriminatorio en razón del origen de los productos.

Impuestos internos

Art. 5º — Modifícase la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1956 y sus modificaciones, en la siguiente forma:

1º Aréjanse en el artículo 14 a continuación del primer párrafo, los siguientes:

Así mismo, cuando se trate de reincidencia en infracciones a las disposiciones del artículo 30 de esta ley y la mercadería sea de procedencia extranjera, podrá la Dirección General Impositiva disponer complementariamente de la multa la clausura por el término de hasta cinco (5) días de los locales en que se encuentren las mercaderías en infracción.

A tal efecto, cuando los productos o sus envolturas, etiquetas o envases tengan marcas, leyendas o atestaciones de las que resulte su origen extranjero, no se admitirá prueba en contrario en cuanto a ese origen.

Para hacer efectiva la clausura dispuesta, podrá la Dirección General Impositiva requerir por medio del director general o demás funcionarios autorizados expresamente por el mismo, el auxilio de la fuerza pública, el que deberá ser acordado sin demora. En su defecto, el funcionario o empleado policial responsable de la negativa u omisión incurrirá en la pena establecida por el Código Penal.

2º Sustitúyese el artículo 31 por el siguiente:

Artículo 31. — Los cigarros y cigarrillos, así como los tabacos que se expendan para ser consumidos en hoja, despalillados, picados, en hebra, pulverizados (rapé), en cuerda, en tabletas y despuntes, tributarán un impuesto que graduará el Poder Ejecutivo en función de la calidad y/o peso de los productos. Este impuesto en ningún caso podrá ser superior al treinta por ciento (30 %) del precio de venta del fabricante o importador.

3º Deróganse los artículos 32, 33 y 34.

4º Sustitúyese el artículo 107, por el siguiente:

Artículo 107. — Los hilados de seda natural, de producción nacional o importados, abonarán en concepto de impuesto interno la tasa del diez por ciento (10 %).

Los tejidos de producción nacional o importados y los artículos confeccionados que contengan seda natural en una proporción de cuarenta por ciento (40 %) o más, tributarán un impuesto del quince por ciento (15 %).

5º El Poder Ejecutivo podrá incorporar al régimen del Título I de la ley algunos de los gravámenes que actualmente figuran en el Título II, y viceversa, transformando, en su caso, las tasas específicas en tasas *ad valorem*, las que en ningún caso podrán exceder del veinte por ciento (20 %) del precio de venta.

6º Los productos importados gravados por la ley, tendrán el mismo tratamiento fiscal que los productos similares nacionales, tanto en lo relativo a las tasas aplicables como en cuanto al régimen de exenciones; quedando derogada toda disposición que importe un tratamiento discriminatorio en razón del origen de los productos.

7º Las disposiciones precedentes entrarán en vigor a partir del 1º de enero de 1962.

8º Sustitúyese el artículo 66 por el siguiente:

Artículo 66. — Las entidades aseguradoras legalmente establecidas o constituidas en el país pagarán un impuesto del diez por ciento (10 %) sobre las primas de seguros que contraten, excepto los seguros sobre riesgos personales, accidentes del trabajo y responsabilidad civil por daños a personas, que pagarán un impuesto del 4 %. Los contratos de seguros de exportación pagarán el 9 % y los de importación el 8½ % sobre las primas. Los seguros de vida, y de accidentes personales, individuales o colectivos, estarán exentos, así como también los seguros contra riesgos que afecten la agricultura y la ganadería.

9º La modificación dispuesta por el apartado anterior entrará en vigencia dentro del régimen y los términos de la ley 14.390 a partir del momento en que todas las provincias adhieran a dicha modificación, derogando los impuestos locales de sellos sobre todas las operaciones de seguros y reaseguros y obligándose a no establecerlos en lo sucesivo. En la misma oportunidad quedará

derogado el impuesto de sellos nacional sobre dichas operaciones con el mismo alcance.

10. Agrégase como capítulo IX del título II, lo siguiente:

Artículo 113. — Los productos que a continuación se enumeran, de fabricación nacional o extranjera, pagarán en concepto de impuestos internos las siguientes tasas:

- a) Las bebidas gasificadas, no alcanzadas específicamente por otros impuestos internos, diez por ciento (10 %);
- b) Los refrescos en general, quince por ciento (15 %);
- c) Los jarabes, extractos o concentrados aptos para la preparación de bebidas sin alcohol, quince por ciento (15 %).

Los fabricantes de las bebidas de los incisos a) y b) tendrán derecho a computar como pago a cuenta del impuesto correspondiente, el quince por ciento del importe de la compra de los jarabes, extractos o concentrados sujetos al impuesto del inciso c), utilizados como materia prima para la elaboración de aquéllas. Están exentos de este gravamen los jarabes que se expendan como especialidades medicinales o veterinarias, o que se utilicen en preparaciones de ese carácter y las aguas minerales o gaseosas.

Impuesto de sellos

Art. 6º — Modificase la ley de sellos, texto ordenado en 1961, en la forma que se indica a continuación:

- 1º Modificase el artículo 1º en la siguiente forma:

- a) Reemplázase en el inciso a) la expresión «civiles o comerciales» por «civiles comerciales o laborales».
- b) Sustitúyese el inciso b) por el siguiente:
 - b) Las actuaciones judiciales;

- 2º Sustitúyese el artículo 3º, por el siguiente:

Artículo 3º — El impuesto de sellos se abonará:

- a) Habilitando con estampillas fiscales los instrumentos extendidos en papel simple;
- b) Mediante el uso autorizado de máquinas timbradoras;

- c) Mediante depósito bancario, con o sin declaración jurada, en las condiciones que determinará la reglamentación.

- 3º Derógase el artículo 5º.

- 4º Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 6º por el siguiente:

Las demás cartas u otros documentos que sin reunir las condiciones arriba expresadas se refieran a obligaciones o actos preexistentes o a crearse, abonarán el impuesto en el momento de ser presentadas en juicio o al ser elevadas a escritura pública por las partes. En estos casos no se pagará más que un solo impuesto por todas las cartas que se refieran a la misma obligación.

- 5º Sustitúyese en el artículo 7º la expresión «cinco centavos moneda nacional (m\$.n. 0,05)» por «un peso moneda nacional (m\$.n. 1)».

- 6º Derógase el artículo 12.

- 7º Sustitúyese el artículo 13 por el siguiente:

Artículo 13. — Cuando los instrumentos sean extendidos en varios ejemplares de un mismo tenor, se pagará en uno de ellos el impuesto. En los demás ejemplares deberá dejarse constancia de lo pagado en el original. A solicitud de parte, los demás ejemplares podrán ser visados por la repartición del ramo, la cual certificará al margen de los mismos el impuesto pagado en el original.

- 8º Modificase el artículo 14 en la siguiente forma:

- a) Sustitúyese el inciso j) por el siguiente:

- j) Los contratos de mutuo y los reconocimientos de deuda cualquiera sea su origen;

- b) Sustitúyese el inciso l) por el siguiente:

- l) Las letras de cambio, giros y órdenes de pago. Los pagaderos a su presentación o hasta cinco días vista sólo abonarán este impuesto cuando no se aceptaren, pagaren o protestaren dentro de un mes de la fecha de su otorgamiento;

- c) Agrégase como inciso t) el siguiente:

- t) Los contratos que estipulan la constitución de derechos reales que no deban por la ley ser hechos en escritura pública.

- 9º Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 20 por el siguiente:

Cuando por carecerse de estos antecedentes no pudiera practicarse una estimación razonable del valor económico atribuible al acto de valor indeterminado se satisfará el impuesto de ciento cincuenta pesos moneda nacional (\$ 150) por foja, considerándose como tal cada cincuenta (50) líneas de quince (15) centímetros de dimensión.

10. Intercálase en el artículo 21, a continuación del tercer párrafo, el siguiente:

La instrumentación de las prórrogas dará lugar al pago del impuesto aun cuando hayan sido previstas en un contrato anterior y ellas deban producirse por el solo silencio de las partes.

11. Sustitúyese en el artículo 22 la expresión «en los artículos 20 ó 51 incisos r) o s), según el caso», por la siguiente: «en el artículo 20».

12. Derógase en el artículo 24 la siguiente expresión final: «Debiendo abonarse por el acto de la constitución provisional el gravamen del artículo 51, inciso o).»

13. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 25 por el siguiente:

Artículo 25. — La transformación de una sociedad en otra de tipo jurídico distinto, cuando haya sido prevista en la ley, contrato o estatutos constitutivos de la sociedad, está exenta de impuesto de sellos.

14. Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 27 la expresión final «el impuesto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51, inciso n), por la siguiente: «el impuesto fijo de ciento cincuenta pesos (\$ 150) por foja previsto en el párrafo tercero del artículo 20».

15. Sustitúyese en el artículo 30 la expresión «treinta pesos (\$ 30)» por la siguiente: «ciento cincuenta pesos (\$ 150)».

16. Sustitúyese en el artículo 31 la expresión «cuatro por ciento (4 %)» por la siguiente: «seis por ciento (6 %)».

17. Suprímese en el artículo 34, a continuación de la expresión «todo crédito o débito en cuenta», la expresión «no documentado».

18. Suprímese en el artículo 36 inciso e) la coma existente después de la palabra «bancarios» y agréganse como incisos h) e i), los siguientes:

h) Las operaciones documentadas en instrumentos sujetos al impuesto del artículo 14, incisos h) y j);

i) Las operaciones concertadas en jurisdicción provincial con los bancos de la ley 12.156 y complementarias.

19. Sustitúyese el artículo 41 por el siguiente:

Artículo 41. — Cada una de las aplicaciones o certificados de embarque de pólizas flotantes abonará el impuesto que corresponda conforme a los artículos anteriores.

20. Sustitúyese el artículo 42 por el siguiente:

Artículo 42. — Las pólizas de reaseguros referentes a riesgos que hayan abonado el impuesto no abonarán nuevo impuesto.

21. Derógase el artículo 45.

22. Sustitúyese el artículo 47 por el siguiente:

Artículo 47. — Quedan exentos del impuesto establecido en este capítulo:

- a) Los seguros contra riesgos que afecten a la agricultura o a la ganadería, mientras los productos asegurados no salgan de poder del productor;
- b) Los que cubran riesgos sobre bienes situados en el extranjero o destinados al país (seguros de importación);
- c) Los contratos u operaciones referentes a los seguros de vida individuales o colectivos y de accidentes personales;
- d) Los títulos de ahorro y capitalización;
- e) Las pólizas flotantes;
- f) Los contratos preliminares de reaseguros de carácter general, celebrados entre aseguradores, en los que se estipulen las bases y condiciones para la cesión de una parte de la responsabilidad;
- g) Los certificados provisionales de seguros cuando la póliza definitiva se emita con efecto retroactivo, dentro de los noventa (90) días.

23. Sustitúyese el artículo 48 por el siguiente:

Artículo 48. — Los cheques que se libren contra cuentas radicadas en jurisdicción nacional y los librados por los bancos a la orden de un tercero y a cargo de sí mismos pagarán veinte centavos (\$ 0,20).

24. Sustitúyese el artículo 49, bajo el título «Escrituras Públicas y Actuaciones Notariales», por el siguiente:

Artículo 49. — Corresponde impuesto fijo de ciento cincuenta pesos (\$ 150) a los poderes y sus sustituciones y a los contradocumentos otorgados en escritura pública.

25. Deróganse los artículos 50 a 68.

26. Sustitúyese el artículo 69 por el siguiente:

Artículo 69. — Las actuaciones que se inicien ante el Poder Judicial de la Nación y Tribunales Arbitrales, cuando el valor del juicio exceda de mil pesos (\$ 1.000) o se trate de juicio cuyo valor sea indeterminado, abonarán en concepto de reposición de fojas un impuesto del veinticinco por ciento (25 %) de las tasas que establece el artículo 82, debiendo ser como mínimo de doscientos pesos (\$ 200) y como máximo de cinco mil pesos (\$ 5.000).

El pago será único hasta la terminación de la actuación en todas las instancias, salvo cuando por ampliación posterior, acumulación de acciones o receonvención se aumente el valor cuestionado, en cuyo caso se pagará o se completará el impuesto hasta el importe que corresponda.

En las actuaciones no sujetas al pago de impuesto de justicia el gravamen a satisfacer por reposición de fojas será de doscientos pesos (\$ 200).

En los juicios ejecutivos y de apremio se pagará la mitad del impuesto fijado en los párrafos primero y tercero.

27. Sustitúyese el artículo 70 por el siguiente:

Artículo 70. — Ante los jueces nacionales de primera instancia de paz, los del trabajo, cuando el valor del juicio no exceda el límite de competencia de la justicia de paz de la Capital Federal, y ante los jueces de paz del territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el impuesto de actuación será de cien pesos (\$ 100).

Ante los jueces y tribunales del trabajo el impuesto se pagará con posterioridad a la sentencia definitiva, y ante los demás jueces y tribunales, en la misma oportunidad que en cada caso establece el artículo 86.

28. Sustitúyese el artículo 71 por el siguiente:

Artículo 71. — El impuesto de actuación será considerado como parte de las cuotas del juicio y soportado en definitiva por las partes en la misma proporción en que dichas costas deben ser satisfechas.

En los expedientes judiciales o arbitrales en que una de las partes se halle eximida del impuesto que establece esta ley, la parte contraria que resulte vencida con imposición de costas de-

berá reponer el total del impuesto de actuación.

En las tercerías será de aplicación lo dispuesto en el artículo 83.

29. Deróganse los artículos 72 a 79.
30. Sustitúyese el último párrafo del artículo 80 por los siguientes:

Quando el presunto infractor sea la parte actora o todas las partes intervinientes, el juicio quedará paralizado hasta el pago o afianzamiento de la multa e impuesto que corresponda.

Quando el presunto infractor sea la parte demandada y la parte actora aparezca prima facie exenta de responsabilidad, el juicio seguirá su curso, formándose incidente por separado con la sola intervención del representante fiscal y del presunto infractor.

Quando corresponda paralizar las actuaciones, ambas partes o cualesquiera de ellas podrán obtener que el juicio siga su curso, depositando a la orden del juzgado, en el Banco de la Nación Argentina, a las resultas de la sentencia que se dicte sobre la presunta infracción, el importe del impuesto y multa reclamados por el representante fiscal.

31. Agrégase en el artículo 86, en el inciso a), a continuación de la cita del inciso k), la cita del inciso q).

32. Sustitúyese el artículo 87 por el siguiente:

Artículo 87. — De toda presunta infracción al impuesto de justicia se dará vista al representante del fisco a que se refiere el artículo 121.

33. Modifícase el artículo 91 en la siguiente forma:

- a) Suprímese en el inciso 3º la palabra «gratuita» e intercálase la palabra «religiosas» antes de «educación e instrucción»;
b) Sustitúyese en el inciso 7º la expresión «poderes públicos» por «poder judicial»;
c) Sustitúyense los incisos 5º, 6º, 9º y 10 por los siguientes:

5º Los instrumentos y operaciones a título gratuito, o cuyo valor no exceda de veinticinco mil pesos (\$ 25.000), salvo los previstos en los incisos h), i), j), l) y s) del artículo 14, que lo será hasta quinientos pesos (\$ 500).

6º El Arzobispado de Buenos Aires.

99 Las transferencias postales o telegráficas y los giros vendidos por instituciones bancarias pagaderos a su presentación o hasta cinco (5) días vista aunque no se aceptaren, pagaren o protestaren dentro de un mes de la fecha de su otorgamiento.

10. Los instrumentos en que se documente la transferencia de bienes muebles e inmuebles en los casos de aporte de capital a sociedades o de disolución y liquidación de las mismas.

d) Deróganse los incisos 11 a 13, 17, 18, 20, 23, 26, 27, 31 a 38, 41, 46 a 48 y 50.

34. Derógase el artículo 96.

35. Deróganse los artículos 98, 103, 124 a 126 y 137.

36. Las disposiciones de la ley de sellos, texto ordenado en 1961, relativas al ingreso del gravamen en papel sellado se entenderán referidas a las otras formas de ingreso previstas en esta ley, conforme lo establezca la reglamentación.

37. Aclárase que los instrumentos, actos y operaciones cuyos gravámenes se derogan por este artículo quedan exentos de impuesto de sellos.

38. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a partir del 1º de enero de 1962. Las actuaciones judiciales en curso a esa fecha se regirán por la legislación anterior.

Art. 7º — Agrégase al artículo 5º del decreto ley 7.101/56, modificado por el artículo 1º del decreto ley 6.264/58, como párrafo segundo, el siguiente:

La Comisión Permanente, a los fines de su cometido, podrá requerir a los importadores, comerciantes o revendedores de mercaderías introducidas al amparo de las franquicias de este decreto ley todos los informes, declaraciones y elementos de juicio que estime pertinentes, así como la exhibición de los libros, papeles y demás documentos comerciales que hagan al caso, y aquéllos quedan obligados a proporcionárselos o a exhibírselos, según corresponda. Todo aquel que incurra en falsedad en las informaciones que proporcione a la comisión o se niegue a suministrarlas o que impida o entorpezca la acción de la misma será penado con una multa de hasta cien mil pesos (\$ 100.000), previa información sumaria resuelta por el organismo, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponderle en el ámbito de cada gravamen en que haya incurrido en infracción.

Art. 8º — Auméntase, a partir del 1º de enero de 1962, en un ciento por ciento (100 %) las tasas y el derecho máximo establecidos por la ley de derechos de inspección de sociedades anónimas, texto ordenado en 1955, modificado por la ley 14.789.

Art. 9º — Modifícase la ley de aduana, texto ordenado en 1956 y sus modificaciones, en la siguiente forma:

1º Sustitúyese el artículo 16 por el siguiente:

Artículo 16. — En los casos de transgresión simultánea a las leyes de aduana y a las comunes a que se refiere el artículo 1.060 de las ordenanzas de aduana y en los casos de contrabando definido por el artículo 187 de la presente ley, la autoridad aduanera sustanciará el sumario administrativo a los fines fiscales, debiendo dentro de las 24 horas de tener conocimiento del hecho comunicarlo a la autoridad policial competente a fin de que ésta, con la intervención judicial que corresponda, instruya el sumario de prevención correspondiente.

2º Sustitúyese el artículo 20 por el siguiente:

Artículo 20. — Cuando cualquier otra autoridad independiente de la aduana aprehendiere un contrabando o tuviere conocimiento de una infracción a las leyes o reglamentos de aduana, deberá poner el hecho en conocimiento del administrador a los efectos de la sustanciación del sumario fiscal.

Si el caso fuere de aprehensión de un contrabando deberá, además, comunicarlo a la autoridad policial competente para que instruya el respectivo sumario de prevención, remitiéndole simultáneamente las personas que se hubieran detenido; los efectos aprehendidos serán enviados a la autoridad aduanera que corresponda.

3º Sustitúyese el artículo 21 por el siguiente:

Artículo 21. — Es facultad privativa del administrador o del funcionario que lo reemplace tomar medidas que signifiquen disponer de las mercaderías o efectos en general afectados a sumarios y adoptar disposiciones que importen correcciones disciplinarias sobre firmas o personas registradas en la aduana para operar ante la misma. Tales facultades no podrán ser delegadas en oficina o funcionario alguno.

4º Agréganse al artículo 198 los siguientes párrafos finales:

Lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo no será aplicable a las mercaderías de origen extranjero sujetas al pago de impuesto interno que se hallen en plaza, en lugares destinados a su comercialización, sin el estampillado fiscal respectivo. En estos supuestos, se presume de derecho que tales mercaderías no han tributado los gravámenes a la importación, y no se instruirá sumario, disponiéndose de inmediato su comiso y la aplicación de las penas indicadas en este artículo, sin perjuicio de la que pudiera imponerse posteriormente por contrabando. Facúltase al Poder Ejecutivo para aumentar en estos casos hasta el ciento por ciento (100 %) el importe de la participación que corresponda a los denunciantes y aprehensores, y a integrar un fondo especial con el producido de la recaudación aduanera, destinado a pagar, dentro de los quince días siguientes al secuestro de la mercadería, el importe de la adjudicación. Facúltase igualmente al Poder Ejecutivo para determinar el importe sobre el cual se liquidará la participación a denunciantes y aprehensores, y para disponer la comercialización de las mercaderías secuestradas por intermedio de los industriales del ramo y/o de sus cámaras representativas.

Impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes

Art. 10. — Prorrógase por el término de diez (10) años el impuesto establecido en el título I de la ley de impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes (texto ordenado en 1960) con las modificaciones que se establecen seguidamente:

1º Sustitúyese el artículo 1º por el siguiente:

Artículo 1º — Establécese con carácter transitorio un gravamen sustitutivo del impuesto a la transmisión gratuita de bienes que se aplicará en todo el territorio de la Nación a los capitales resultantes de los balances anuales que cierran hasta el 30 de diciembre de 1971, con arreglo a las disposiciones del presente título. La reglamentación fijará el procedimiento a seguir para los casos en que no se efectúen balances anuales.

2º Sustitúyese el artículo 2º por el siguiente:

Artículo 2º — Están sujetas al impuesto de este título:

a) Las sociedades de capital que revisan tal carácter a los efectos del pago

del impuesto a los réditos, con exclusión de las asociaciones civiles aludidas en el inciso c) del artículo 54 de la ley 11.682, texto ordenado en 1960;

b) Las empresas unipersonales y las sociedades de personas que revistan tal carácter a los efectos del impuesto a los réditos, matriculadas como comerciantes en las condiciones establecidas por el Código de Comercio.

Las sociedades de economía mixta tributarán el impuesto en proporción al capital perteneciente a los accionistas privados.

Las sociedades anónimas en formación están sujetas al gravamen desde la fecha y en las condiciones que establezca la reglamentación.

3º Sustitúyese en el segundo apartado del artículo tercero la locución «excluido las inversiones en acciones de otras empresas y en bienes situados con carácter permanente en el exterior» por «excluido las inversiones en acciones o en participaciones en otras empresas sujetas al gravamen de esta ley y en bienes situados con carácter permanente en el exterior».

4º Sustitúyese el artículo 4º por el siguiente:

Artículo 4º — Del capital que se determine conforme a las normas anteriores, se deducirán los siguientes conceptos:

a) Honorarios del directorio y síndico en las sociedades de capital;

b) Habilitaciones y gratificaciones que se paguen o pongan a disposición dentro de los cinco (5) meses o tres (3) meses de cerrado el ejercicio, según se trate de sociedades de capital o de los demás responsables de esta ley;

Excepcionalmente, y cuando las circunstancias lo justifiquen, la Dirección General Impositiva admitirá dicha deducción aun cuando la distribución se efectúe con posterioridad al vencimiento del plazo indicado;

c) El impuesto a los réditos del ejercicio, las sociedades anónimas y de economía mixta. Las firmas unipersonales y sociedades en comandita por acciones o de personas, un porcentaje a fijar por el Poder Ejecutivo, aplicado sobre las utilidades ajustadas de acuerdo con las normas de la ley 11.682;

d) El impuesto a los beneficios extraordinarios del ejercicio.

5º Derógase el artículo 5º.

6º Sustitúyese el artículo 6º por el siguiente:

Artículo 6º — El pago del gravamen tiene carácter de definitivo aunque a su vencimiento no se prorrogue la vigencia de esta ley.

7º Sustitúyese el artículo 9º por el siguiente:

Artículo 9º — Las provincias que adhieran al régimen de este título se obligan a:

1º Derogar los gravámenes locales, cualquiera sea su característica y denominación, que inciden directamente sobre la materia imponible a que se refiere este título, con prohibición de implantarlos en lo sucesivo.

2º Modificar el régimen de los impuestos locales a la transmisión gratuita de bienes a efectos de excluir la materia imponible a que se refiere este título en la determinación del haber sucesorio.

8º El gravamen que se crea por este artículo, en cuanto alcanza a las empresas unipersonales y sociedades de personas, se aplicará exclusivamente en la Capital Federal y en las provincias que adhieran a esta reforma.

En caso de adhesión parcial, deberán excluirse en la determinación del capital los bienes radicados económicamente en las provincias no adheridas, en la forma que determinará la reglamentación.

9º Las modificaciones del presente artículo serán de aplicación para los ejercicios que se cierran a partir del 31 de diciembre de 1961, inclusive.

Art. 11. — Modifícase el título II de la ley del impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes (texto ordenado en 1960) en la siguiente forma:

1º Sustitúyese el artículo 12 por el siguiente:

Artículo 12. — Las personas físicas, por la parte de sus patrimonios no sujeta al régimen del título I, podrán optar por abonar un impuesto anual, en sustitución del impuesto local a la transmisión gratuita de bienes por causa de muerte establecido por la ley 11.287, en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes de este título.

Impuesto a la transmisión gratuita de bienes

Art. 12. — Modifícase la ley 11.287 (texto ordenado en 1961) en la siguiente forma:

1º Sustitúyese el primer párrafo del artículo 9º por el siguiente:

En el caso de inmuebles, el impuesto se liquidará sobre la valuación que se determine en la forma que disponga la Dirección General Impositiva.

2º Sustitúyese el artículo 14 por el siguiente:

Artículo 14. — Para determinar el monto imponible sujeto a este impuesto no se computará:

a) El valor de las inversiones en acciones emitidas por entidades alcanzadas por la ley de impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes (texto ordenado en 1960);

b) A partir del 31 de diciembre de 1961, el valor de las inversiones en acciones nominativas y los importes que pertenezcan al dueño o socios en empresas unipersonales y sociedades de personas alcanzadas por el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes;

c) Los montos cubiertos por el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes para las personas físicas.

A los efectos precedentes se considerará como fecha de la transmisión la del fallecimiento del causante o la de celebración del acto que la exteriorice, si se tratare de transmisión entre vivos.

Tampoco se computarán las inversiones en los casos en que el fallecimiento del accionista o socio hubiere ocurrido antes del 31 de diciembre de 1961, pero en el transcurso de un ejercicio alcanzado por el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes.

3º Derógase el artículo 25.

Art. 13. — A partir del 1º de enero de 1962 la aplicación, percepción y fiscalización del impuesto municipal a las actividades lucrativas estará a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

A tal efecto, facúltase a la Dirección General Impositiva —actualmente a cargo de dicho gravamen— para convenir con el ente municipal la forma y condiciones en que se procederá a concretar la correspondiente transferencia.

Las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, y las del

reglamento de dicha ley que se refieren al impuesto a las actividades lucrativas, continuarán siendo de aplicación mientras la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires no dicte nuevas normas al respecto. Esta disposición será igualmente de aplicación a las actuaciones en trámite al 1º de enero de 1962 que, en virtud del convenio a que se refiere este artículo, puedan transitoria o definitivamente seguir a cargo de la Dirección General Impositiva.

El intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires tendrá las mismas facultades que la ley 11.683 (t. o. en 1960) otorga a la Dirección General Impositiva para entender en las cuestiones vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización del impuesto municipal a las actividades lucrativas que se susciten con los contribuyentes y demás responsables por los años en que dicho gravamen se rigió por los preceptos de esa ley.

Art. 14. — Modifícase el segundo párrafo del artículo 5º de la ley 12.704 en la siguiente forma:

Los recargos que establece el Concejo Deliberante por atraso en el pago de los gravámenes municipales no podrán exceder del ciento por ciento de los mismos.

Art. 15. — Modifícase la ley 13.487 en la siguiente forma:

1º Agrégase al artículo 1º, inciso 3º, como segundo párrafo, el siguiente:

En los casos de actividades de intermediación en que existan precios de venta al intermediario y precios de venta al público fijados unilateralmente por el fabricante, el impuesto no excederá de la alícuota básica que se fije con carácter general.

2º Sustitúyese el último párrafo del artículo 5º por el siguiente:

Los infractores de las reglamentaciones que la municipalidad dicte en virtud de las facultades acordadas por este artículo serán pasibles de multas de \$ 100 a \$ 10.000, sin perjuicio de los recargos que pudieran corresponder por aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5º de la ley 12.704.

3º Sustitúyese el artículo 6º por el siguiente:

Artículo 6º — Los contribuyentes y demás responsables que hayan evadido total o parcialmente las obligaciones impositivas serán pasibles de multas de

hasta cinco veces el impuesto o contribución evadidos.

Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de multas de una hasta diez veces el impuesto defraudado que se haya pretendido defraudar, sin perjuicio de la responsabilidad criminal por delitos comunes, los contribuyentes responsables y terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra que tenga por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial de los tributos.

Con igual pena serán reprimidos los agentes de retención que mantengan en su poder impuestos retenidos después de haber vencido los plazos en que debieron hacerlos ingresar.

Las multas fijadas por el artículo anterior y por el presente serán graduadas por la municipalidad de acuerdo con las circunstancias y gravedad de los hechos.

Art. 16. — CANCELÁNSE las deudas por contribución territorial y contribución inmobiliaria, sus recargos, intereses y multas correspondientes a ejercicios anteriores a 1952.

CONDÓNANSE los recargos, intereses y multas por mora en el pago de la contribución inmobiliaria de los años 1952 a 1960, ambos años inclusive, a condición de que los responsables ingresen el gravamen adeudado antes del 1º de mayo de 1962. Los cobradores fiscales percibirán como única retribución el diez por ciento del impuesto que tuvieren en gestión de cobro y que se ingrese con motivo de esta disposición.

Art. 17. — Modifícase la ley de impuesto para aprendizaje (texto ordenado en 1959) en la siguiente forma:

1º Sustitúyese en el artículo 1º la denominación de «impuesto para aprendizaje» por la de «impuesto para educación técnica», y la mención «Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional» por la de «Consejo Nacional de Educación Técnica».

2º Modifícase el artículo 2º en la siguiente forma:

a) Reemplázase la expresión «de aprendizaje» por «de educación técnica»;

b) Sustitúyese el texto final de este artículo, a continuación de «asociaciones o cámaras gremiales», por el siguiente: «siempre que tales cursos o escuelas estén aprobados por el Consejo Nacional de Educación Técnica».

3º Derógase el artículo 3º.

4º Agrégase al artículo 4º el siguiente párrafo:

A los efectos de esta ley se calificarán también como establecimientos industriales aquellos en los que se efectúen trabajos de construcción, transformación, adaptación o reparación de cualquier clase de materiales o elementos elaborados o semielaborados.

5º Agrégase el siguiente artículo:

Artículo ... — La Dirección General Impositiva transferirá a la cuenta «Fondo para Educación Técnica, orden Consejo Nacional de Educación Técnica» el producido del impuesto establecido por la presente ley.

Art. 18. — Elévase al uno por ciento (1 %) el adicional establecido por el artículo 19 de la ley 15.273.

Art. 19. — Facúltase al Poder Ejecutivo para instituir un impuesto de hasta un cinco por ciento (5 %) sobre el precio básico a las rifas o sorteos de carácter privado que se autoricen en las condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 20. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 1961.

*Angel Oscar Prece. — Enrique Bau-
ducco. — Julio R. Brouwer de Ko-
ning. — Rodolfo Ricardo Carrera.
— Domingo A. Condoluci. — José
Manuel Fernández. — Luis M. Ga-
llo. — Ignacio García Veiga. —
Ricardo A. González. — Gilberto L.
Heredia. — Miguel Angel Juárez
Peñalva. — Augusto Antonio La-
fuente. — Juan Carlos Godofredo
López. — Ernesto López Sansón,
— Raúl Pellón. — Manuel Angel
Romero. — Rómulo Vinciguerra.*

En disidencia:

*Eleodoro M. Cortázar. — Carlos R.
Contín. — Angel R. Freytes. —
Mario Giordano Echegoyen. — An-
selmo A. Marini. — Emir E. Mer-
cader.*

En disidencia parcial:

Carlos Ernesto Aguinaga.

**CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA LEGISLACION VIGENTE EN MATERIA IMPOSITIVA,
EL PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO Y EL DICTAMEN DE LA COMISION
DE PRESUPUESTO Y HACIENDA**

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION Y PERCEPCION DE IMPUESTOS

DISPOSICION VIGENTE

LEY 11.683 (texto ordenado en 1960, con las modificaciones introducidas por la ley 15.798)

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

DICTAMEN DE COMISION

Artículo 1º—Modifícase la ley 11.683 (texto ordenado en 1960 y sus modificaciones), en la siguiente forma:

Art. 1º Igual.

Artículo 8º—El director general está facultado para impartir normas generales obligatorias para los contribuyentes y demás responsables, en aquellas materias en que las leyes autorizan a la Dirección General para reglamentar la situación de los contribuyentes, otros responsables y terceros, frente a la administración. Dichas normas entrarán en vigor desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y mientras no sean modificadas por el propio director general o por la Secretaría de Hacienda. En especial, podrá dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la materia imponible, como así para fijar el valor de las transacciones de importación o exportación a los fines de simplificar la aplicación del impuesto a las ventas; inscripción de responsables; forma y plazo de presentación de declaraciones juradas; modos, plazos y formas extrínsecas de la percepción de los gravámenes, pagos a cuenta de los mismos, accesorios y multas; intervención y supresión de agentes de retención; libros y anotaciones que de modo especial deberán llevar los contribuyentes, demás responsables y terceros, y término durante el cual deberán conservarse aquéllos y los documentos y demás comprobantes; deberes de unos y otros ante los requerimientos tendientes a realizar una verificación y cualquier otra medida que sea conveniente para facilitar la recaudación, tipo de interés que devengarán las prórrogas y exención total o parcial, con carácter general, de recargos e intereses punitivos.

1º Inclúyese en el tercer párrafo del artículo 8º, entre las facultades del director general, la de dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: inscripción de agentes de retención y forma de documentar la deuda fiscal por parte de los contribuyentes.

1º Igual.

Artículo 14.—El domicilio de los contribuyentes y responsables, en el concepto de esta ley y de las leyes de los impuestos, es el domicilio general (real o, en su caso legal) legislado en el Código Civil. Será este domicilio el que ellos deben consignar en las declaraciones juradas y escritos que presenten a la Dirección General.

Sólo se considerará que existe cambio de domicilio cuando se haya efectuado la traslación del anteriormente mencionado.

La dirección podrá admitir la constitución de domicilio especial en aquellos casos en que considere que de ese modo se facilita la determinación y percepción de los impuestos.

Todo contribuyente o responsable que haya enviado una vez una declaración jurada u otra comunicación a la dirección, está obligado a denunciar todo cambio de domicilio dentro de los cinco (5) días de efectuado, bajo las sanciones de esta ley. Incurrirá igualmente en infracción el contribuyente o responsable que consigne en sus declaraciones o escritos un domicilio distinto del real.

Sin perjuicio de lo expuesto, la dirección podrá reputar subsistente para todos los efectos administrativos y judiciales el último domicilio consignado en la declaración jurada, comunicación o escrito, mientras no se denuncie otro.

Cuando el contribuyente se domicilie en el extranjero y no tenga representante en el país o no se pueda establecer el domicilio de éste, se considerará como domicilio fiscal el del lugar de la República en que el contribuyente tenga su principal negocio o explotación o la principal fuente de sus rentas o, subsidiariamente, el lugar de su última residencia en el país.

Artículo 23.—Cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas, la dirección procederá a determinar de oficio la obligación impositiva, sea en forma directa, por el conocimiento cierto de la materia imponible, sea mediante estimación, si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquélla.

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

2º Sustitúyese el párrafo 5º del artículo 14, por 2º Igual.
el siguiente:

La dirección sólo quedará obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio:

- a) Cuando se trate de cambio a un domicilio real o legal, si la notificación de dicho cambio ha sido hecha por el contribuyente en la forma y condiciones que ella establezca;
- b) Cuando se trate de cambio a un domicilio especial, en el caso de que el cambio haya sido expresamente aceptado por ella.

3º Sustitúyese el artículo 23, por el siguiente:

Artículo 23.—Al ejercer las facultades de verificación la dirección procederá a emplazar al contribuyente para que en el término de 15 días presente declaraciones juradas o, si las hubiera presentado, ratifique o rectifique su contenido, aportando en ambos casos los libros, registros y comprobantes de los datos denunciados.

DICTAMEN DE COMISION

3º Igual.

Artículo 23.—Al ejercer las facultades de verificación la dirección procederá a emplazar al contribuyente para que en el término de 15 días presente declaraciones juradas o, si las hubiera presentado, ratifique o rectifique su contenido, aportando en ambos casos los libros, registros y comprobantes de los datos denunciados.

El procedimiento de determinación sobre base cierta se iniciará con una vista al contribuyente de las impugnaciones o cargos que se formulen, para que en el término de quince días prorrogable a su pedido, formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho. Evacuada la vista o transcurrido el término señalado, se dictará resolución fundada que determine el impuesto e intime su pago dentro del plazo de quince días. Dicha resolución podrá ser recurrida, a opción del contribuyente, por recurso de reconsideración ante la misma dirección general o por apelación ante el Tribunal Fiscal competente. A falta de recurso la resolución quedará firme y deberá cumplirse dentro de los quince (15) días de notificada. Igual efecto tendrá la decisión administrativa que recaiga en el recurso de reconsideración interpuesto.

El contribuyente que pague el impuesto requerido por resolución de la dirección general, sin haber apelado ante el Tribunal Fiscal, conservará la acción para la repetición posterior del gravamen.

La determinación administrativa del impuesto, cierta o presuntiva no podrá ser modificada, en contra del contribuyente, en aquellos aspectos que hayan sido objeto de pronunciamiento expreso de los funcionarios que hayan actuado como jueces administrativos, por aplicación de nuevas interpretaciones de las normas impositivas o por el empleo de otros procedimientos técnicos en la liquidación del gravamen. Podrá en cambio ser modificada, aun en dichos aspectos, cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior (cifras de ingresos, egresos, valores de inversión y otros).

Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los impuestos, no constituyen determinación administrativa de aquéllos, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos (artículos 10, inciso b), y 11).

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

Si las conclusiones de la fiscalización llevada a cabo no concordaran con las resultantes del emplazamiento previsto en el párrafo anterior, corresponderá que la dirección proceda a determinar de oficio la obligación impositiva, sea en forma directa por el conocimiento cierto de la materia imponible, sea mediante estimación si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquélla.

Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los impuestos, no constituyen determinación administrativa de aquéllos, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos (artículos 10 y 11 de esta ley).

DICTAMEN DE COMISION

Si las conclusiones de la fiscalización llevada a cabo no concordaran con las resultantes del emplazamiento previsto en el párrafo anterior, corresponderá que la dirección proceda a determinar de oficio la obligación impositiva, sea en forma directa por el conocimiento cierto de la materia imponible, sea mediante estimación si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquélla.

Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los impuestos, no constituyen determinación administrativa de aquéllos, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos (artículos 10 y 11).

Artículo 24.— Cuando al ejercer las facultades de verificación la dirección se encuentre en la imposibilidad de determinar en forma directa y cierta la materia imponible, sea porque el contribuyente no tenga o no exhiba los libros, registros y comprobantes debidos, sea porque los exhibidos no merezcan fe o sean incompletos, se le emplazará para que dentro del término de quince (15) días presente declaraciones juradas, o, si las hubiera presentado, ratifique o rectifique su contenido, aportando en ambos casos los comprobantes de los datos denunciados.

Si, no obstante, los elementos de juicio aportados por el contribuyente y los recogidos por la dirección, no pudiera determinarse en forma cierta el impuesto, se estimará de oficio la materia imponible mediante resolución fundada, con el consiguiente requerimiento de pago del impuesto que resultara adeudarse.

No será necesario dictar la resolución estimando de oficio o el emplazamiento arriba previsto, si antes de uno u otro acto prestase el contribuyente su conformidad con la liquidación presuntiva que hubiera practicado la dirección, la que surtirá entonces los mismos efectos de una declaración jurada.

Artículo 26.— La determinación sobre base presunta quedará firme a los quince (15) días de notificada la resolución respectiva, si dentro de dicho término no se interpusiere recurso de reconsideración ante la dirección general o de apelación ante el Tribunal Fiscal competente. A falta de uno u otro recurso, la resolución que recaiga deberá cumplirse dentro de los quince (15) días de su notificación. Igual efecto tendrá la decisión administrativa que recaiga en el recurso de reconsideración interpuesto.

Si la estimación resultare inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente, bajo pena de las sanciones de esta ley y sin perjuicio de la nueva determinación de oficio que haga la dirección general en las condiciones previstas en el artículo 23, párrafo 4º.

4º Sustitúyese el artículo 24, por el siguiente:

Artículo 24.— El procedimiento de determinación de oficio se iniciará con una vista al contribuyente de las impugnaciones o cargos que se formulen, para que en el término de 15 (quince) días, que podrá ser prorrogado, formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho. Evacuada la vista o transcurrido el término señalado, se dictará resolución fundada que determine el impuesto e intime su pago dentro del plazo de 15 (quince) días.

La contestación a la vista previa y los recursos que se interpongan ante la Dirección General Impositiva, deberán ser presentados por escrito en los lugares que al efecto habilite la misma.

El decreto reglamentario establecerá en forma expresa los requisitos que, a los fines de su validez, deberán reunir los escritos que presenten los contribuyentes o responsables.

No será necesario dictar resolución determinando de oficio la obligación impositiva si antes de ese acto prestase el contribuyente su conformidad con la liquidación que hubiese practicado la dirección la que surtirá entonces los mismos efectos que una declaración jurada.

5º Sustitúyese el artículo 26, por el siguiente:

Artículo 26.— Si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente, bajo pena de las sanciones de esta ley.

La determinación del juez administrativo del impuesto, en forma cierta o presuntiva, una vez firme, sólo podrá ser modificada en contra del contribuyente en los siguientes casos:

- a) Cuando en la resolución respectiva se hubiere dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación de oficio practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la fiscalización, en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados expresamente en la determinación anterior;

4º Igual.

5º Igual.

Artículo 28. — Podrá la dirección exigir, dentro del período fiscal en curso, el ingreso de importes a cuenta del impuesto que se deba abonar al término de aquél, los que se fijarán proporcionalmente a la fracción transcurrida del período fiscal y sobre la base del impuesto correspondiente al período inmediato anterior.

Artículo 33. — Los responsables determinarán, al efectuar los pagos o los ingresos a cuenta, a qué deudas deberán imputarse. Cuando así no lo hicieren, y las circunstancias especiales del caso no permitiesen establecer la deuda a que se refieren, la dirección determinará a cuál de las obligaciones no prescritas deberán imputarse los pagos o ingresos.

Artículo 42. — La falta de pago a su vencimiento de los impuestos, anticipos e ingresos a cuenta hace surgir, sin necesidad de interrelación alguna, la obligación de abonar juntamente con aquéllos, los recargos que se establecen a continuación, calculados sobre el impuesto adeudado:

Hasta un mes de retardo	5 %
Más de un mes y hasta dos meses de retardo	10 %
Más de dos meses y hasta tres meses de retardo	15 %

b) Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior (cifras de ingresos, egresos, valores de inversión y otros).

6º Sustitúyese el artículo 28, por el siguiente:

6º Igual.

Artículo 28. — Podrá la dirección exigir, dentro del período fiscal en curso, el ingreso de importes a cuenta del impuesto que se deba abonar al término de aquél. Estos anticipos podrán ser fijados proporcionalmente a la fracción transcurrida del período fiscal y sobre la base del impuesto correspondiente al período inmediato anterior o bien en base a otros índices, tales como rentas, capitales, ventas, importe de suministros o inversiones.

7º Sustitúyese el artículo 33, por el siguiente:

7º Igual.

Artículo 33. — Los responsables determinarán, al efectuar los pagos o los ingresos a cuenta, a qué deudas deberán imputarse. Cuando así no lo hicieren y las circunstancias especiales del caso no permitiesen establecer la deuda a que se refieren, la dirección determinará a cuál de las obligaciones no prescritas deberán imputarse los pagos o ingresos.

En los casos de prórrogas por obligaciones que abarquen más de un ejercicio, los ingresos, en la parte que correspondan a impuestos, se imputarán a la deuda más antigua.

8º Sustitúyese el artículo 42, por el siguiente:

8º Igual.

Artículo 42. — Sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43 y 45, la falta total o parcial de pago a su vencimiento de los impuestos, anticipos o ingresos a cuenta hace surgir, sin necesidad de interrelación alguna, la obligación de abonar juntamente con aquéllos, un recargo del 3 por ciento mensual calculado sobre el monto del gravamen adeudado.

La obligación de abonar los recargos subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la dirección al recibir el pago de la deuda prin-

Igual.

Igual.

DISPOSICION VIGENTE

LEY 11.683 (texto ordenado en 1960, con las modificaciones introducidas por la ley 15.798)

Más de tres meses y hasta seis meses de retardo	20 %
Más de seis meses y hasta un año de retardo	40 %
Más de un año y hasta dos años de retardo	75 %
Más de dos años y hasta tres años de retardo	100 %
Más de tres años y hasta cuatro años de retardo	150 %
Más de cuatro años y hasta cinco años de retardo	200 %
Más de cinco años de retardo	250 %

La obligación de abonar los recargos subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la dirección al recibir el pago de la deuda principal, y mientras no haya transcurrido el término de prescripción para el cobro de ésta.

El director general podrá, con carácter general y cuando medien circunstancias excepcionales debidamente justificadas, remitir en todo o en parte la obligación de abonar los recargos.

Artículo 43. — Los infractores a las disposiciones de esta ley, de las respectivas leyes impositivas, de los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo, de las instrucciones impartidas por el director general y de las disposiciones administrativas de los directores que establezcan o requieran el cumplimiento de deberes formales tendientes a determinar la obligación impositiva y a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los contribuyentes y responsables (presentación de declaraciones juradas, suministro de informaciones, cumplimiento de citaciones, sometimiento a la verificación, etcétera), serán reprimidos con multas de 100 a 10.000 pesos moneda nacional, sin perjuicio de los recargos que pudieran corresponder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 44. — Toda omisión de impuesto no prevista en el artículo siguiente, en que se incurra por la presentación de declaraciones juradas inexactas o por no denunciar que la estimación de oficio practicada era inferior a la realidad según así resulte de la posterior deter-

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

cial y mientras no haya transcurrido el término de prescripción para el cobro de ésta.

El director general podrá, con carácter general y cuando medien circunstancias excepcionales debidamente justificadas, remitir en todo o en parte la obligación de abonar los recargos. Así mismo, en los casos de ajustes practicados por la dirección, podrá reducir o aun dejar de exigir los mencionados recargos, si a juicio del juez administrativo la omisión de impuesto deba atribuirse a error excusable en la aplicación al caso de las normas impositivas en que incurra quien debe por esta ley pagar el impuesto por cuenta propia o ajena.

Las precedentes disposiciones serán de aplicación para todos los gravámenes no prescritos al tiempo de exigirse el pago de los recargos.

9º Elévanse las multas mínima y máxima previstas por el artículo 43. a m\$n. 1.000 y m\$n. 100.000, respectivamente.

10. Derógase el artículo 44.

DICTAMEN DE COMISION

El director general podrá, con carácter general y cuando medien circunstancias excepcionales debidamente justificadas, remitir en todo o en parte la obligación de abonar los recargos. Así mismo, en los casos de ajustes efectuados con intervención de la dirección, podrá autorizar a los jueces administrativos a reducir o dejar de exigir los mencionados recargos, si a juicio de los mismos, la omisión del impuesto debiera atribuirse a error excusable de hecho o de derecho.

Igual.

9º Igual.

10. Igual.

minación del impuesto que en forma cierta o presuntiva realice la dirección, será reprimida con una multa graduable desde un cincuenta por ciento (50 %) a tres tantos del gravamen dejado de pagar oportunamente, cuando la omisión del impuesto no deba atribuirse a error excusable en la aplicación al caso de las normas impositivas, en que incurra quien debe por esta ley pagar el impuesto por cuenta propia o ajena.

Artículo 45.—Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de multas de tres hasta diez veces el impuesto en que se defraudó al fisco o se haya pretendido defraudarlo, sin perjuicio de la responsabilidad criminal por delitos comunes, los contribuyentes, responsables y terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra que tenga por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial de los tributos.

Con igual pena serán reprimidos los agentes de retención que mantengan en su poder impuestos retenidos, después de haber vencido los plazos en que debieron hacerlos ingresar.

Artículo 46.—Se presume la intención de defraudar al fisco, salvo prueba en contrario, cuando se presente cualquiera de las siguientes o análogas circunstancias:

- a) Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes correlativos, con los datos que surjan de las declaraciones juradas;
- b) Manifiesta disconformidad entre los preceptos legales y reglamentarios y la aplicación que de los mismos se haga al determinar el impuesto;

11. Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:

Artículo 45.—Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de multas de uno hasta diez veces el impuesto en que se defraudó al fisco o se haya pretendido defraudarlo, sin perjuicio de la responsabilidad criminal por delitos comunes, los contribuyentes, responsables y terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra que tenga por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial de los tributos.

Con igual pena serán reprimidos los agentes de retención que mantengan en su poder impuestos retenidos, después de haber vencido los plazos en que debieron efectuar los respectivos ingresos.

En los casos de multas firmes aplicadas de conformidad con lo dispuesto en este artículo, la Dirección General Impositiva disponará la publicación periódica, por los medios de divulgación que estime adecuados, del nombre, domicilio y actividad de cada infractor y del importe de la sanción impuesta.

12. Agréganse al artículo 46, como incisos g) y h) los siguientes:

11. Igual.

12. Igual.

- c) Declaraciones juradas que contengan datos falsos;
- d) Exclusión de algún bien, actividad u operación que implique una declaración incompleta de la materia imponible;
- e) Producción de informaciones inexactas sobre las actividades y negocios, concernientes a ventas, compras, existencia o valuación de mercaderías, capital invertido o cualquier otro factor de carácter análogo o similar;
- f) No llevar o no exhibir libros, contabilidad y/o documentos de comprobación suficiente, cuando la naturaleza o el volumen de operaciones desarrolladas no justifique esa omisión.

Se reprimirá como defraudación fiscal el declarar, admitir o hacer valer ante la dirección general formas y estructuras jurídicas manifiestamente inapropiadas para configurar la efectiva situación, relación u operación económica gravada por las leyes impositivas, cuando deba razonablemente juzgarse que ha existido intención de evitar la imposición justa.

Artículo 47. --- Las multas que se impongan de acuerdo con los artículos 44 y 45 no podrán

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

DICTAMEN DE COMISION

- g) La omisión, por parte de los responsables, de presentar sus declaraciones juradas e ingresar el gravamen adeudado, cuando de las características del caso tales como: la naturaleza o volumen de las operaciones realizadas, la cuantía de los beneficios obtenidos o la personalidad del infractor, resulte que el mismo no podía ignorar su calidad de contribuyente o responsable y la existencia de las obligaciones emergentes de tal condición;
- h) La omisión total o parcial de la obligación de actuar como agente de retención, cuando esa omisión provocare un evidente perjuicio fiscal y concurran las circunstancias agravantes a que alude el inciso anterior.

13. Sustitúyese el artículo 47, por el siguiente:

Artículo 47. --- En los casos del artículo 45, cuando la multa a aplicar resultara inferior

Igual

- h) La omisión total o parcial de la obligación de actuar como agente de retención y concurran las circunstancias agravantes a que se refiere el inciso anterior.

13. Igual.

ser inferiores a cien pesos moneda nacional (m\$.n. 100).

En los casos de infracciones contempladas en los artículos 43 y 44 será facultad del juez administrativo, cuando las considere leves, eximir de sanción al infractor.

Artículo 48.—Las multas aplicadas deberán ser satisfechas por los responsables dentro de los quince (15) días de quedar notificada y firme la resolución respectiva.

Artículo 49.—Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los impuestos, recargos, intereses y multas ejecutoriadas, los importes respectivos devengarán un interés punitivo del uno y medio por ciento (1½ %) mensual, que se computará desde la fecha de interposición de la demanda, por regla general, o desde la fecha de la intimación de pago cuando la demanda se haya entablado al solo efecto de interrumpir la prescripción de la acción judicial.

Artículo 51.—No están sujetos a las multas previstas en los artículos 43, 44 y 45: las sucesiones indivisas; el cónyuge cuyos réditos propios perciba o de que disponga en su totalidad el otro; y los incapaces, los penados a que se refiere el artículo 12 del Código Penal, los concursados civilmente, los quebrados y las sociedades en liquidación, a menos que sean contribuyentes con motivo de actividades cuya gestión o administración escape al contralor de sus representantes, liquidadores de sus bienes, etcétera.

Todos los demás contribuyentes enumerados en el artículo 16, sean o no personas de existencia visible, están sujetos a las multas previstas en los artículos 43, 44 y 45, por las infracciones que ellos mismos cometan o que, en su caso, les se-

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

a \$ 1.000 (mil pesos), la Dirección General Impositiva queda facultada para no imponer pena al responsable.

En los supuestos del artículo 43, el juez administrativo podrá eximir de sanción al responsable cuando a su juicio la infracción no revistiera gravedad.

14. Sustitúyese el artículo 48, por el siguiente:

Artículo 48.—Las multas aplicadas deberán ser satisfechas por los responsables dentro de los quince (15) días de notificadas, salvo que se hubiera optado por interponer contra las mismas las acciones o recursos que autorizan los artículos 71, 75 y 85.

15. Sustitúyese el artículo 49, por el siguiente:

Artículo 49.—Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los impuestos, recargos, intereses y multas ejecutoriadas, los importes respectivos devengarán un interés punitivo del tres por ciento (3 %) mensual, que se computará desde la fecha de la interposición de la demanda.

16. Sustitúyese el párrafo primero del artículo 51, por el siguiente:

No están sujetos a los recargos establecidos por el artículo 42 ni a las multas previstas en los artículos 43 y 45: las sucesiones indivisas, el cónyuge cuyos réditos propios percibe o de que disponga en su totalidad el otro, los incapaces, los penados a que se refiere el artículo 12 del Código Penal, los concursados civilmente y los quebrados.

DICTAMEN DE COMISION

14. Igual.

15. Igual.

16. Sustitúyense los párrafos 1º y 3º del artículo 51, por los siguientes:

Igual.

rán imputadas por el hecho u omisión en que incurran sus representantes, directores, gerentes, administradores o mandatarios, o, con relación a unos y otros, por el hecho u omisión de quienes les están subordinados como sus agentes, factores o dependientes.

Las sanciones previstas en los artículos 43, 44 y 45 no serán de aplicación en los casos que ocurra el fallecimiento del infractor, aun cuando la resolución respectiva haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.

Artículo 62. — Se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales:

1. Desde la fecha de intimación administrativa de pago de impuestos determinados, cierta o presuntivamente, con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado. Cuando mediare recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal la suspensión se prolongará hasta sesenta días después de la sentencia del mismo que determine el impuesto o de la resolución que apruebe la liquidación practicada en su consecuencia y hasta el importe del impuesto liquidado.
2. Desde la fecha de la resolución del recurso de reconsideración interpuesto contra una multa superior a cien pesos moneda nacional (m\$N 100) con respecto a la acción penal. Si la multa fuere recurrida ante el Tribunal Fiscal, el término de la suspensión se contará desde la fecha de la resolución recurrida, hasta sesenta días después de la sentencia del mismo.

Artículo 67. — Tanto el acta como la resolución interna, en las que deberá constar claramente el acto u omisión que se atribuye al presunto infractor, serán notificadas a éste, a quien se le acordará un plazo de diez (10) días para que alegue su defensa por escrito, y proponga o entregue las pruebas que hagan a su derecho.

17. Sustitúyese el artículo 62, por el siguiente:

Artículo 62. — Se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales:

1. Desde la fecha de intimación administrativa de pago de impuestos determinados, cierta o presuntivamente, con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado. Cuando mediare recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal la suspensión, hasta el importe del impuesto liquidado, se prolongará hasta sesenta (60) días después de notificada la sentencia del mismo que declare su incompetencia, o determine el impuesto, o apruebe la liquidación practicada en su consecuencia.
 2. Desde la fecha de la resolución condenatoria por la que se aplique multa, con respecto a la acción penal. Si la multa fuere recurrida ante el Tribunal Fiscal, el término de la suspensión se contará desde la fecha de la resolución recurrida hasta sesenta (60) días después de notificada la sentencia del mismo.
18. Elévase de diez (10) a quince (15) días el plazo establecido en el artículo 67.

Las sanciones previstas en los artículos 42, 43 y 45 no serán de aplicación en los casos en que ocurra el fallecimiento del infractor, aun cuando la resolución respectiva haya quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.

17. Igual.

18. Elévase de diez (10) a quince (15) días el plazo establecido en el artículo 67 y agrégase a continuación de la palabra «días, la expresión «que podrá ser prorrogado».

Artículo 73.—Sustanciado el recurso, los directores dictarán resolución dentro del término de sesenta (60) días y la notificarán al interesado, con todos sus fundamentos, por carta certificada con aviso especial de retorno.

Artículo 74.—Los contribuyentes y demás responsables tienen acción para repetir los impuestos y sus accesorios que hubieren abonado de más, ya sea espontáneamente o a requerimiento de la dirección general.

En el primer caso deberán interponer reclamo ante ella. Contra la resolución denegatoria podrá el contribuyente interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 71 u optar, dentro de los quince (15) días de la notificación entre apelar ante el Tribunal Fiscal o interponer demanda contenciosa ante la justicia nacional de primera instancia. Análoga opción tendrá si no se dictare resolución dentro de tres (3) meses de presentarse el reclamo.

Si el impuesto se pagare en cumplimiento de una determinación cierta o presuntiva de la repartición recaudadora, la repetición se deducirá mediante demanda que se interponga, a opción del contribuyente, ante el Tribunal Fiscal o ante la justicia nacional.

La reclamación del contribuyente por repetición de impuestos facultará a la dirección para verificar la materia imponible por el período fiscal a que aquélla se refiere, aunque estuvieran prescritas las acciones y poderes fiscales y dado el caso, para determinar y exigir el impuesto que resultare adeudarse, hasta la medida del importe que se pretenda repetir.

Cuando a raíz de una verificación fiscal, en la que se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho imponible determinando impuesto a favor de la dirección, se compruebe que la apreciación rectificada ha dado lugar a pagos imprevistos o en exceso por el mismo u otros gravámenes, la Dirección General Impositiva compensará los importes pertinentes, aun cuando la acción de repetición se hallare prescrita.

19. Sustitúyese el artículo 73, por el siguiente:

Artículo 73.—Sustanciado el recurso, el juez administrativo dictará resolución dentro del término de sesenta (60) días y la notificará al interesado, con todos sus fundamentos, en la forma dispuesta por el artículo 99 de esta ley.

20. Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 74, por el siguiente:

19. Igual.

20. Substitúyese al final del 2º párrafo del artículo 74, la palabra «reclamo» por la expresión «recurso de repetición o de reconsideración de repetición» y sustitúyese el 4º párrafo por el siguiente:

La reclamación del contribuyente por repetición de impuestos facultará a la dirección, cuando estuvieren prescritas las acciones y poderes fiscales, para verificar la materia imponible por el período fiscal a que aquélla se refiere y dado el caso para determinar y exigir el impuesto que resulta adeudarse, hasta anular el saldo por el que prosperase el recurso.

Igual.

Artículo 91. — El cobro judicial de los impuestos, intereses y recargos y de las multas ejecutoriadas se hará por la vía de apremio establecida en el título XXV de la ley 50, sirviendo de suficiente título a tal efecto la boleta de deuda expedida por la Dirección General Impositiva o por el Tribunal Fiscal, en los casos del artículo 52 de la ley respectiva. En este juicio sólo podrán oponerse las excepciones de pago y espera documentados, prescripción e inhabilidad del título, basada exclusivamente en vicio de la forma de la boleta de deuda o en no haberse observado, en el procedimiento de determinación del impuesto, los actos y términos procesales establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de esta ley; pero no podrá oponerse la nulidad de una sentencia del Tribunal Fiscal, la que sólo podrá ventilarse por la vía autorizada por el artículo 85.

Artículo 99. — Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etcétera, serán hechas por medio de cartas certificadas con aviso especial de retorno, a cuyo efecto se convendrá con el correo la forma de hacerlo con la mayor urgencia y seguridad. En casos especiales, las notificaciones podrán hacerse personalmente, por medio de empleados de la dirección general.

Si las citaciones, notificaciones, etc., no pudieran practicarse en la forma antedicha por no conocerse el domicilio del contribuyente, se efectuarán por medio de edictos publicados durante cinco (5) días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de que también se practique la diligencia en el lugar donde se presuma que pueda residir el contribuyente.

21. Agrégase al artículo 91, el siguiente párrafo: 21. Igual.

La sentencia será apelable cuando el monto por el que prosperen las excepciones sea superior a \$ 4.000 (cuatro mil pesos).

22. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 99, por los siguientes: 22. Igual.

Artículo 99. — Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etcétera, serán practicadas en cualesquiera de las siguientes formas:

a) Por carta certificada con aviso especial de retorno, a cuyo efecto se convendrá con el correo la forma de hacerlo con la mayor urgencia y seguridad.

El aviso de retorno servirá de suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del contribuyente aunque aparezca suscrito por un tercero;

b) Personalmente por medio de un empleado de la dirección general, quien dejará constancia en acta de la diligencia practicada y del lugar, día y hora en que se efectuó, exigiendo la firma del interesado. Si éste no supiere o no pudiese firmar podrá hacerlo, a su ruego, un testigo.

Si el destinatario no estuviere o se negare a firmar dejará igualmente constan-

Igual.

Igual.

Igual.

Igual.

Si el destinatario no estuviere o se negare a firmar dejará igualmente constan-

cia de ello en acta. En días subsiguientes, no feriados, concurrirán al domicilio del interesado dos funcionarios de la dirección para notificarlo. Si tampoco fuere hallado dejarán la resolución o carta que deban entregar en sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare en el mismo, haciendo que la persona que la recibiera suscriba el acta.

Si no hubiere persona dispuesta a recibir la notificación o si el responsable se negare nuevamente a firmar, procederán a fijar en la puerta de su domicilio y en sobre cerrado el instrumento de que se hace mención en el párrafo que antecede.

Las actas labradas por los empleados notificadores harán fe mientras no se demuestre su falsedad.

23. Sustitúyese el quinto párrafo del artículo 100, por el siguiente:

cia de ello en acta. En días siguientes, no feriados, concurrirán al domicilio del interesado dos funcionarios de la dirección para notificarlo. Si tampoco fuera hallado dejarán la resolución o carta que deban entregar en sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare en el mismo, haciendo que la persona que la recibiera suscriba el acta.

Si no hubiere persona dispuesta a recibir la notificación o si el responsable se negare a firmar, procederán a fijar en la puerta de su domicilio y en sobre cerrado el instrumento de que se hace mención en el párrafo que antecede.

Igual.

23. Igual.

Artículo 100. — Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que el contribuyente, responsable o terceros presenten a la dirección, y los juicios de demanda contenciosa, en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretas.

Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la dirección, están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones, sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos.

Las informaciones expresadas no serán admitidas como prueba en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en los procesos criminales por delitos comunes, cuando éstas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen; o que las solicite el interesado, en los juicios en que sean parte contraria el fisco nacional, provincial o municipal, y en cuanto la información no revele datos referentes a terceros.

Los terceros que divulguen o reproduzcan dichas informaciones, o el contenido de las instrucciones internas impartidas por el director general o los directores con carácter expreso de «confi-

denciales», incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal, para aquellos que divulguen actuaciones o procedimientos que por la ley deben quedar secretos.

El secreto establecido en el presente artículo no registrá para los organismos recaudadores provinciales y municipales, siempre que las informaciones que éstos soliciten estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones.

En casos debidamente justificados a juicio de la Secretaría de Hacienda, ésta podrá autorizar a la dirección a suministrar a otras reparticiones oficiales que ejerzan funciones del Estado como poder público las informaciones que le sean requeridas, siempre que éstas no tengan por objeto verificar el cumplimiento de obligaciones cuya observancia se haya dispuesto en virtud de normas generales vinculadas con la actividad económica ejercida por el contribuyente.

Artículo 109. — En cualquier momento podrá la Dirección General solicitar embargo preventivo por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables, y los jueces deberán decretarlo en el término de veinticuatro (24) horas bajo la responsabilidad del fisco.

Este embargo podrá ser sustituido por garantía real o personal suficiente, y caducará si dentro del término de sesenta (60) días la dirección no iniciara el correspondiente juicio de apremio.

El secreto establecido en el presente artículo no registrá:

- a) En cuanto concierne a las publicaciones dispuestas por la parte final del artículo 45;
- b) Para el supuesto de que por desconocerse el domicilio del responsable, sea necesario recurrir a la notificación por edictos;
- c) Para los organismos recaudadores provinciales y municipales, siempre que las informaciones que éstos soliciten estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones.

24. Sustitúyese el artículo 109, por el siguiente:

Suprimido.

Artículo 109. — Establécese un embargo preventivo a favor de la Nación Argentina, sin perjuicio de las inembargabilidades legales vigentes, sobre todos los bienes y derechos, ya sean reales o personales, de cualquier contribuyente o responsable que, siendo deudor de impuestos firmes, sus accesorios o multas, también firmes, no cumpliera la intimación administrativa de pago. El embargo se prolongará hasta que sea satisfecho el crédito fiscal o prescriba la acción para obtener su cobro, o en su caso se conceda la prórroga prevista por el artículo 39.

Para que el embargo surta efectos contra terceros, éstos deberán ser notificados en la forma y condiciones que determine la reglamentación.

Si mediante la notificación del embargo a uno o más terceros quedare asegurado el cobro del crédito fiscal, la Dirección General procederá en un término no mayor de diez (10) días a liberar de la traba los restantes bienes del deudor, comunicándole tal medida. Igual temperamento deberá adoptarse si el responsable

afianzare su deuda con garantía real o personal suficiente.

Sin perjuicio de ello, cuando no estuviera determinado el impuesto ni aplicada la multa, podrá la dirección solicitar ante el juez competente embargo preventivo por el término de noventa (90) días, por la cantidad que presumiblemente adeudaren los contribuyentes y responsables, y los jueces deberán decretarlo en el término de 24 horas, bajo la responsabilidad del fisco. Este embargo podrá ser sustituido por garantía real o personal suficiente.

Si el contribuyente interpusiera contra la resolución que determine el impuesto o aplique la multa, alguno de los recursos previstos en esta ley, el embargo podrá ser prorrogado, en las condiciones del párrafo anterior, hasta treinta (30) días después de la fecha en que, agotada la instancia, quede firme el impuesto o la multa, en que será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

25. Sustitúyese el último párrafo del artículo 110 por el siguiente:

24. Igual.

Artículo 110. — Sin perjuicio de los preceptos contenidos en las leyes que establecen los gravámenes, las disposiciones de esta ley que no sean de aplicación exclusiva para determinado tributo, rigen con relación al impuesto a los réditos, impuesto a los beneficios extraordinarios, impuesto a las ventas, impuesto a las apuestas en los hipódromos de carreras, impuesto para aprendizaje, impuesto a las ganancias eventuales, impuestos internos a los fósforos, cervezas, artículos de tocador, objetos suntuarios, cubiertas y llantas de goma macizas, azúcares, hilados y tejidos de seda, impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes aplicable a las sociedades de capital y personas físicas, impuesto a la transferencia de automotores, impuesto a los pasajes al exterior, contribución de mejoras establecida por el artículo 19 de la ley 14.385, derecho de exhibición a los estrenos de películas extranjeras de largo metraje, impuesto especial sobre el precio básico de cada localidad o entrada a salas cinematográficas, impuesto a los avisos comerciales trans-

mitidos por radio y televisión, impuesto a los ingresos brutos por explotación del servicio de radiodifusión y/o televisión, gravamen a las utilidades provenientes de exportaciones agrícolas, gravámenes a las cubiertas y automotores con destino al «Fondo Nacional Complementario de Vialidad», impuesto nacional a los combustibles y aceites lubricantes para aeronaves, impuesto a la revaluación de los activos y gravamen de emergencia.

La aplicación de los impuestos de sellos, derechos de inspección de sociedades anónimas, arancel consular, canon minero y contribución sobre petróleo crudo y gas, se regirá por las leyes respectivas. Con relación a tales impuestos, el director general ejercerá en lo pertinente las funciones que le confieren los artículos 8º, 9º y 10 de la presente ley. Serán de aplicación, con relación a los mencionados impuestos, las facultades de verificación que se establecen en esta ley.

La aplicación del impuesto a las actividades lucrativas y del sobreprecio a los combustibles se regirá por la presente ley, facultándose al Poder Ejecutivo para establecer las excepciones, aclaraciones o modificaciones que considere convenientes para adaptar a las características de tales gravámenes el régimen de esta ley.

Será de aplicación para el impuesto a la transmisión gratuita de bienes lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley.

Art. 122. — Para celebrar las audiencias de vista de la causa o los acuerdos para dictar sentencia el tribunal quedará válidamente integrado, en cada caso, con el presidente y dos miembros que él designará de acuerdo con el reglamento del procedimiento. Cuando el presidente lo juzgare necesario para unificar jurisprudencia, la causa será resuelta por el tribunal en pleno. En este supuesto el presidente tendrá doble voto en caso de empate. Cualquier miembro actuará como vocal instructor de la causa por designación del presidente.

La aplicación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes se regirá por la presente ley, con las limitaciones que establezca la reglamentación.

25. Agrégase en el artículo 122 a continuación de la palabra «designará», la expresión «por sorteo».

Art. 123.— Todos los términos de esta ley serán de días hábiles y se suspenderán durante el periodo anual de feria del tribunal.

Artículo 136.— Cuando se apelare una determinación tributaria, quedará suspendido el curso de los recargos del artículo 42 de la ley 11.683, y en su lugar se devengará, hasta el momento de cumplirse la sentencia condenatoria del tribunal, un interés equivalente al que cobre la dirección general, al tiempo de la apelación, en las prórrogas para el pago de impuestos.

El fallo del tribunal podrá eximir expresamente de dicho interés al contribuyente, si estimare que tenía fundadas razones para considerar improcedente el impuesto.

Cuando el tribunal juzgare que la apelación es manifiestamente improcedente, podrá disponer que, sin perjuicio del interés antes mencionado, se liquide el recargo hasta el momento del fallo, que podrá aumentar hasta en un cincuenta por ciento (50 %). Cuando no pueda liquidarse el recargo por tratarse de impuestos cuya ley respectiva no establezca ese tipo de sanción, se aplicará el interés previsto en el primer párrafo aumentado en uno o dos tantos.

Artículo 164.— Los responsables o infractores podrán interponer el recurso de revisión y de apelación limitada a que se refiere el artículo 85 de la ley 11.683, para ante la cámara nacional competente dentro de quince días de notificárseles la sentencia del tribunal y, con sujeción a lo dispuesto en el artículo siguiente, igual derecho tendrá la Dirección General Impositiva. No interpuesto el recurso, la sentencia pasará en autoridad de cosa juzgada y deberá cumplirse dentro de quince días de quedar firme.

Art. 166.— La apelación de las sentencias del tribunal se concederá en ambos efectos, salvo la de aquellas que condenaren el pago de impuestos y accesorios, que se otorgará en el solo efecto

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

DICTAMEN DE COMISION

26. Sustitúyese en el artículo 123 la expresión «los términos de esta ley» por «los términos de este título».

26 Sustitúyese en el último párrafo del artículo 136 la expresión «hasta en un cincuenta por ciento (50 %), por la siguiente: «hasta en un ciento por ciento (100 %)».

27. Igual.

27. Elévase a treinta (30) días el plazo establecido en la primera parte del artículo 164.

28. Elévase a treinta (30) días el plazo establecido en la primera parte del artículo 164, y por el artículo 166

devolutivo. En este caso, si no se acreditaré el pago de lo adeudado dentro del plazo de quince días desde la notificación de la sentencia o desde la notificación de la resolución que apruebe la liquidación practicada, el secretario expedirá de oficio una constancia de deuda y la remitirá a la Dirección General Impositiva a los efectos de su cobro.

Art. 165.—La Dirección General Impositiva tendrá derecho a apelar de la sentencia, siempre que el escrito del recurso se acompañe con autorización escrita para el caso dado, emanada del subsecretario de Hacienda. A ese fin, el director general de la repartición recaudadora presentará ante el mencionado funcionario un informe fundado sobre la conveniencia de apelar del fallo del Tribunal Fiscal.

29. Agrégase al artículo 165 el siguiente párrafo:

Concedida la autorización, ésta será válida para todos aquellos casos en que, a través de la sentencia del Tribunal Fiscal, resulte que se trata de una cuestión estrictamente análoga a la que dio lugar a esa autorización.

28. Agrégase el siguiente artículo:

Artículo ...—La Dirección General Impositiva acordará con los bancos el procedimiento para que éstos devuelvan a sus clientes todos los cheques librados a la orden de la Dirección General Impositiva una vez cancelados y satisfechos los requisitos de orden interno de acuerdo con las prácticas bancarias.

29. Agrégase la siguiente disposición transitoria:

Artículo ...—En los casos de intimaciones notificadas y multas aplicadas que no estuvieran firmes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, serán de aplicación las normas de recargos y multas contenidas en la legislación anterior.

Con relación a los sobreprecios a los combustibles vencidos y no satisfechos con anterioridad a la promulgación de la presente ley, se aplicarán los recargos que establece el artículo 42 de la misma, en sustitución de los intereses punitivos que establecía el artículo 8º del decreto 7.926/51, a menos que ya se hu-

30. Igual.

31. Igual.

IMPUESTO A LOS REDITOS

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

biera requerido el pago de estos últimos con respecto a esos sobreprecios.

Artículo 2º — Modifícase a partir del 1º de enero de 1962 la ley del impuesto a los réditos, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, en la forma que se indica a continuación:

Art. 19. — No están sujetos al gravamen:

a) Los réditos de los fiscos nacional, provinciales y municipales y los de las instituciones pertenecientes a los mismos.

Las empresas formadas por capitales de particulares e inversiones de los fiscos nacional, provinciales y municipales, estarán exentas en la parte de réditos que corresponda a estos últimos;

b) Los réditos de entidades exentas de impuestos por leyes nacionales, en cuanto la exención que éstas acuerdan comprenda el gravamen de esta ley y siempre que los réditos deriven directamente de la explotación o actividad principal que motivó la exención a dichas entidades;

c) Las remuneraciones percibidas en el desempeño de sus funciones por los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros en la República; las rentas de los edificios de propiedad de países extranjeros destinados para oficina o casa-habitación de sus representantes y los intereses provenientes de depósitos fiscales de los mismos, todo a condición de reciprocidad;

d) Las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier denominación (retorno, interés accionario, etc.), distribuyan las cooperativas de consumo entre sus socios;

e) Los réditos de las instituciones religiosas;

f) Los réditos que obtengan las asociaciones y entidades civiles de asistencia social, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual, siempre que tales réditos y el patrimonio social se destinen a los fines de su crea-

DICTAMEN DE COMISION

Art. 2º — Igual.

1º Sustitúyese el inciso q) del artículo 19 por el siguiente:

ción y en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre los socios. (1)

Se excluye de la exención establecida en el párrafo anterior, a aquellas entidades organizadas jurídicamente como sociedades anónimas u otra forma comercial y las que obtienen sus recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares;

- g) Los réditos de las entidades mutualistas que cumplan las exigencias de las normas legales y reglamentarias pertinentes, y los beneficios que éstas proporcionen a sus asociados;
- (2) h) Los intereses de depósitos en caja de ahorro, cualquiera sea la modalidad adoptada para su liquidación y pago;
- (3) i) Las indemnizaciones que se reciban en forma de capital o renta por causa de muerte o por incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia

(1) Agrégase el siguiente párrafo:

En caso de que estos réditos provengan de dividendos de sociedades anónimas, la dirección devolverá las sumas percibidas por impuestos de réditos a dichos dividendos contra presentación de los comprobantes necesarios.

(2) Sustituido por el siguiente:

- h) Los intereses de depósitos en caja de ahorro, cualquiera sea la modalidad adoptada para su liquidación y pago y los producidos por las sumas que las empresas acrediten a sus empleados en concepto de depósitos o préstamos, dentro de los límites que establezca la reglamentación

(3) Sustituido por el siguiente:

- i) Las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido y las que se reciban en forma de capital o renta por causa de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro. No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúan percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad y las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido;

de un contrato de seguro. No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad y las indemnizaciones por preaviso y despido;

- j) Los derechos amparados por la ley 11.723, en la parte que no excedan de cuatrocientos mil pesos (\$ 400.000) por año fiscal y siempre que el impuesto recaiga directamente sobre los autores y que las respectivas obras estén debidamente inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual;
- k) Los réditos de títulos, acciones, cédulas, bonos y valores similares, emitidos por entidades oficiales o mixtas, en la parte que corresponda a la Nación, provincias o municipalidades, cuando exista una ley general o especial que así lo disponga;
- l) Las dietas de los legisladores salvo manifestación expresa en contrario del interesado;
- m) Quedan exentas del pago del impuesto a los réditos y de todo otro impuesto nacional las asociaciones deportivas y de cultura física y los inmuebles de su propiedad en que funcionen sus campos de deportes, instalaciones inherentes a sus fines y sedes administrativas y/o sociales, siempre que las mismas no persigan fines de lucro, exploten o autoricen juegos de azar y/o cuyas actividades de mero carácter social priven sobre las deportivas conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo;
- n) La diferencia entre las primas o cuotas pagadas y el capital recibido al vencimiento en los casos de seguros de vida y mixtos y en los de títulos o bonos de capitalización;
- o) Los intereses originados por créditos obtenidos en el exterior para financiar importaciones destinadas al equipamiento industrial del país;

DISPOSICION VIGENTE

- p) Los intereses de los títulos, letras, bonos, debentures, y otras obligaciones así como los dividendos fijos de acciones preferidas con rescate preestablecido que emitan en moneda nacional o extranjera empresas públicas o privadas o consorcios financieros para financiar obras o inversiones que a los fines de esta franquicia se declaren de interés nacional por el Poder Ejecutivo. Esta exención continuará en vigor hasta la total cancelación o rescate de dichas obligaciones o acciones;
- q) Las utilidades provenientes de la venta de semillas de categoría «original», de oleaginosos, forrajeras y arroz obtenidas por criaderos fiscalizados por la autoridad nacional competente, mediante la aplicación de principios de genética vegetal;
- r) Los réditos provenientes de servicios personales cumplidos en el país por períodos no superiores a dieciocho (18) meses por técnicos contratados no radicados en el país, con las limitaciones que determine la reglamentación;
- s) Los intereses de los préstamos de fomento otorgados por instituciones oficiales extranjeras, con las limitaciones que determine la reglamentación.

Autorízase al Poder Ejecutivo para eximir de impuesto a los réditos, a partir del 1º de enero de 1951, a los intereses de los títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos hasta la fecha y que se emitan en el futuro por la Nación, las provincias y las municipalidades.

Artículo 43. — Constituyen réditos de la segunda categoría:

- a) Los derivados de títulos, cédulas, bonos, letras de tesorería, debentures, cauciones o créditos en dinero o valores privilegiados o quirografarios, consten o no en escritura pública y toda suma que sea el producto de la colocación del capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago;

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

DICTAMEN DE COMISION

- q) Las utilidades provenientes de la venta de semillas de categoría «original», obtenidas por criaderos fiscalizados por la autoridad nacional competente, mediante la aplicación de principios de genética vegetal.

1º Sustitúyese el inciso c) del artículo 43, por Suprimido.
el siguiente:

DISPOSICION VIGENTE

- b) Los réditos de la locación de cosas muebles y derechos, las regalías y los subsidios periódicos;
- c) Los ingresos que en forma de uno o más pagos se perciban por la transferencia temporaria o definitiva de derechos de llave, marcas, patentes de invención, regalías y similares, aun cuando no se efectúen habitualmente esta clase de operaciones;
- d) Las rentas vitalicias y los beneficios o participaciones en seguros sobre la vida;
- e) Las sumas percibidas en pago de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una actividad. Sin embargo, estos réditos serán considerados como de la tercera o cuarta categoría, según el caso, cuando la obligación sea de no ejercer un comercio, industria, profesión, oficio o empleo;
- f) Las utilidades que bajo cualquier denominación (retorno, interés accionario, etcétera) distribuyan entre sus socios las cooperativas, excepto las de consumo, sin tener en cuenta el origen de los fondos con los cuales se realiza su pago.

Cuando se trate de las cooperativas denominadas de trabajo, será de aplicación lo dispuesto en el inciso f) del artículo 60;

- g) Los dividendos de acciones de sociedades constituidas en el país, sin tener en cuenta el origen de los fondos con los cuales se realiza su pago (reservas anteriores, ganancias de capital, rentas exentas de impuesto, etcétera).

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

DICTAMEN DE COMISION

- c) Los ingresos que en forma de uno o más pagos se perciban por la transferencia temporaria o definitiva de derechos, aun cuando no se efectúen habitualmente esta clase de operaciones.

2º Agréganse como incisos h) e i) del artículo 43, los siguientes:

- h) El mayor valor asignado a bienes aportados a sociedades, cualquiera sea su forma jurídica, cuando no exista conjunto económico entre la sociedad y el aportante;
- i) La cesión a título oneroso de cuotas sociales.

Suprimido.

Artículo 57. — Los dividendos o utilidades que las sociedades de capital reparten a sus accionistas en dinero o en especie, quedan íntegramente sujetos al impuesto cualesquiera sean los fondos sociales con que se realice su pago, como ser: reservas anteriores cualquiera sea la fecha de su constitución, ganancias de fuente extranjera, de capital, exentas de impuesto, provenientes de primas de emisión, etcétera, ya se repartan en dinero, mediante acciones liberadas o en cualquier otra forma.

Cuando los dividendos se distribuyan en especie —excepto acciones liberadas— la diferencia entre el valor corriente en plaza a la fecha de la distribución y su costo, se considera beneficio alcanzado por este impuesto o el de ganancias eventuales, según fuese la naturaleza de los bienes. Dicha diferencia deberá incluirse en el balance impositivo de la sociedad correspondiente al ejercicio en que tenga lugar la distribución.

Los accionistas computarán los dividendos en especie al valor corriente en plaza, excepto las acciones liberadas que serán consideradas a su valor nominal.

Artículo 62. — Con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrán deducir del rédito del año fiscal:

- a) Los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas;
- b) Los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que producen rédito, excepto los excluidos por el artículo 66, inciso d). Cuando los impuestos y tasas computables como gastos necesarios para obtener, mantener y conservar los réditos gravados (contribución territorial, patentes, etcétera) se hayan abonado con multa, ésta será deducible de las entradas brutas, salvo cuando haya sido impuesta por defraudación al fisco;
- c) Las primas por seguro que cubran riesgos sobre bienes que producen réditos;
- d) Las sumas que pagan los asegurados por seguros para casos de muerte; en los seguros mixtos sólo será deducible la parte de la prima que cubre el riesgo de muerte.

3º Suprimese en el segundo párrafo del artículo 57, la siguiente expresión: „o el de ganancias eventuales, según fuese la naturaleza de los bienes„.

Suprimido.

- te. Fijase como importe máximo a deducir por los conceptos indicados en este inciso, la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional (m\$.n. 50.000) anuales, se trate o no de prima única;
- e) Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes que producen réditos, como: incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros, en cuanto no fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones;
 - f) Las pérdidas debidamente comprobadas, a juicio de la dirección, originadas por delitos cometidos contra los bienes de explotación de los contribuyentes por empleados de los mismos, en cuanto no fuesen cubiertas por seguros o indemnizaciones;
 - g) Los gastos que origine la percepción de los réditos. En caso de beneficiarios del exterior que perciban intereses por préstamos otorgados a personas o firmas radicadas en el país, se admitirá como deducción por todo concepto el cincuenta por ciento (50 %) de los importes efectivamente percibidos;
 - h) Las contribuciones o descuentos para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales;
 - i) Los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas, en la suma reconocida por la dirección;
 - j) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales, municipales y a las instituciones comprendidas en el artículo 19, incisos e), f) y g). Sin perjuicio de esta deducción, los contribuyentes podrán computar como pago a cuenta del impuesto el diez por ciento (10 %) de las sumas donadas;
 - k) Las amortizaciones por desgaste y agotamiento y las pérdidas por desuso, de acuerdo con lo que establecen los artículos pertinentes;
 - l) Las remuneraciones o sueldos que se abonen a miembros de directorios, consejos u otros organismos directivos que actúen en el extranjero y los honorarios u otras re-

2º Agrégase al inciso l) del artículo 62, como segundo párrafo, el siguiente:

muneraciones pagadas por asesoramiento técnico-financiero o de otra índole, prestado desde el exterior. Sobre estos importes corresponderá que la persona que los pague o acredite, retenga e ingrese el treinta y ocho con treinta y seis por ciento (38,36 %) con carácter único y definitivo;

- m) Las sumas efectivamente invertidas con posterioridad al 30 de noviembre de 1948 en nuevas plantaciones forestales o en la ampliación de las existentes.

Esta deducción podrá diferirse, cuando se trate de inversiones efectuadas desde el 1º de abril de 1958, al ejercicio en que comience el corte o explotación;

- n) Las sumas efectivamente invertidas con posterioridad al 31 de marzo de 1958 en gastos directos de exploración en las explotaciones mineras;
- ñ) Las sumas invertidas en la suscripción directa de acciones de cooperativas eléctricas y de otras empresas que sean declaradas de interés nacional por el Poder Ejecutivo;
- o) Los honorarios médicos y odontológicos, así como los gastos de laboratorios de análisis, de radiografías, de internación en clínicas y sanatorios, de sepelio, del contribuyente y de las personas a su cargo, en las condiciones y con las limitaciones que determine la reglamentación. Se admitirá sin prueba esta deducción hasta la cantidad de seis mil pesos moneda nacional (m\$.n. 6.000) anuales por contribuyente.

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

DICTAMEN DE COMISION

Si se tratare de asesoramiento de carácter exclusivamente técnico-industrial prestado a las explotaciones mineras, empresas de transporte, astilleros navales e industrias manufactureras o de transformación, se presumirá que el 50 % de las sumas abonadas por tal concepto cubren gastos o costos del beneficiario del exterior, debiendo practicar la retención sobre el excedente. En ningún caso el monto a considerar como costo o gasto podrá exceder de los límites que al efecto fije la reglamentación.

DISPOSICION VIGENTE
LEY 11.682 (Texto ordenado en 1960, con las modificaciones introducidas por la ley 15.798)

Artículo 76. — En los casos de sueldos, jornales, honorarios de directores y síndicos de sociedades anónimas y otras retribuciones similares, sólo podrá deducirse como gasto necesario para obtener, mantener y conservar dichas rentas, el importe correspondiente al descuento que en concepto de aporte jubilatorio deben efectuar —de conformidad con las disposiciones legales en vigor— los titulares de tales rentas.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros de los tribunales provinciales, vocales de las cámaras de apelaciones y jueces, tributarán el impuesto, salvo su manifestación expresa en contrario, sobre el importe de los sueldos que tienen asignados en los respectivos presupuestos, previa deducción del mínimo no imponible, cargas de familia y aporte jubilatorio que les corresponda, de acuerdo a las disposiciones vigentes.

Quedan comprendidos en lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios judiciales nacionales y provinciales que dentro de los respectivos presupuestos, tengan asignados sueldos superiores al de los jueces de primera instancia.

DISPOSICION VIGENTE
(Texto ordenado en 1960 modificado por ley 15.798)

DISPOSICION VIGENTE
(Texto ordenado en 1960)

Artículo 1º — Establécese con carácter transitorio, durante el término de veintitrés años, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios origi-

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

4º Agrégase al artículo 62, como inciso p) el siguiente:

p) La contribución dispuesta por la ley 14.155.

5º Suprímese del primer párrafo del artículo 76 el término «sólo».

DICTAMEN DE COMISION

3º Igual.

4º Modifícase el artículo 76 en la siguiente forma:

a) Suprímese del primer párrafo el término «sólo».

b) Agrégase al segundo párrafo y a continuación de «vocales de las cámaras de apelaciones y jueces, las palabras «y vocales del Tribunal de Cuentas de la Nación».

IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 3º — Derógase a partir del 1º de enero de 1962 la ley de impuesto a las ganancias eventuales, texto ordenado en 1960.

IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 4º — Modifícase la ley de impuesto a los beneficios extraordinarios, texto ordenado en 1960, en la siguiente forma:

1º Modifícase el artículo 1º, en la siguiente forma:

DICTAMEN DE COMISION

Suprimido.

DICTAMEN DE COMISION

Art. 3º — Igual.

1º Igual.

nados en el ejercicio del comercio, de la industria, de la minería, de la explotación agropecuaria y de cualquier otra actividad que importe la transformación o disposición habitual de bienes.

El presente impuesto afecta todos los beneficios incluidos en el balance comercial, con excepción de los no computables para el impuesto a los réditos y los exentos de acuerdo con las presentes disposiciones. El gravamen recae sobre las empresas o explotaciones pertenecientes a personas de existencia jurídica o visible siendo responsables del pago los titulares, socios, directores o representantes, según el caso.

Quedan exentos los réditos extraordinarios que provengan total y exclusivamente del trabajo personal de sus titulares, como ser los de los comisionistas, corredores, rematadores, despachantes de aduana y demás agentes auxiliares del comercio, siempre que su obtención no dependa también de una inversión de capital en la forma que lo establezca la reglamentación.

Están además exentos los primeros trescientos mil pesos moneda nacional (m\$.n. 300.000) del beneficio extraordinario determinado, conforme a los artículos siguientes.

Artículo 3º — Se entiende por utilidad del año el beneficio establecido de acuerdo con la ley del impuesto a los réditos, con las siguientes modificaciones:

- a) En el caso de sociedades anónimas, se podrá deducir en concepto de retribuciones al directorio y síndico las sumas realmente pagadas hasta el límite del ocho por ciento (8 %) de la ganancia impositiva del ejercicio, sin perjuicio de las sumas adicionales que la Dirección General Impositiva autorice en los casos de los directores que simultáneamente desempeñen funciones de gerente, contador u otros cargos;
- b) Los honorarios u otras remuneraciones, a que se refiere la segunda parte del inciso l) del artículo 62 de la ley 11.682, texto ordenado en 1960, sólo serán deducibles cuando se trate de erogaciones necesarias para la obtención de los beneficios computables para esta ley, a cuyo efecto la

- a) Exclúyese del segundo párrafo la expresión: "o explotaciones";
- b) Sustitúyese el tercer párrafo, por el siguiente:

Quedan exentos los réditos extraordinarios que provengan de la actividad de comisionistas, corredores, rematadores, viajeros de comercio, despachantes de aduana y demás agentes auxiliares del comercio.

Dirección General podrá valuar su monto, el que, en ningún caso, superará el uno por ciento (1%) de los beneficios impositivos;

- c) Las empresas individuales y las sociedades en general —excepto las anónimas— podrán deducir los importes que fije el Poder Ejecutivo por cada socio que trabaje efectivamente en el país al servicio de la empresa. Esta deducción alcanza a los socios colectivos de las sociedades en comandita por acciones, pero no a los accionistas;
- d) Las utilidades o pérdidas provenientes de participaciones en otras empresas comprendidas en esta ley no serán computadas a efectos de determinar el beneficio impositivo, en cuyo caso se deducirá también del capital y reservas libres el importe de la inversión correspondiente, en la forma establecida para las inversiones exentas (artículo 4º);

- e) El impuesto a los beneficios extraordinarios será deducible para el cálculo del impuesto a los réditos, pero no para la liquidación del presente gravamen;

El impuesto a los réditos no será deducible para la liquidación de este gravamen. En cambio, se admitirá deducir de la utilidad del año ajustada según las normas de esta ley y de su reglamentación, el porcentaje que fije el Poder Ejecutivo de acuerdo con las variaciones operadas en la tasa promedio del impuesto a los réditos;

- f) Para la determinación de la utilidad sujeta a este impuesto no se computará el resultado de la realización de los bienes del activo fijo a que alude el artículo 4º de la ley del impuesto a los réditos, salvo en los casos comprendidos en los incisos b) y c) del mismo artículo. Tampoco se computará el resultado de la enajenación de llave, marcas, patentes de invención, regalías y similares, siempre que no fuere de aplicación lo dispuesto en el artículo 3º, primer párrafo *in fine* de la citada ley.

Artículo 4º — Se considerará como capital y reservas libres la diferencia que resulte entre el activo y el pasivo ajustados de cada empresa o explotación, conforme a las disposiciones de la ley del impuesto a los réditos, y en la forma que establezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, no admitiéndose las revaluaciones o asignaciones de valores a los bienes del negocio, salvo los casos en que el revalúo sea computable para dicha ley.

Cuando existan inversiones susceptibles de producir renta exenta de impuesto a los réditos, la reglamentación fijará el procedimiento para el correspondiente ajuste de los capitales.

Las inversiones en títulos públicos nacionales, provinciales o municipales, se incluirán en el activo para la determinación del capital, computándose su renta como beneficio sujeto a este impuesto.

En las explotaciones individuales, sociedades colectivas, en comandita simple, de capital e industria, y de responsabilidad limitada, serán computados como capital los saldos acreedores de los dueños o socios en función al tiempo de su inversión. En las sociedades en comandita simple no se hará discriminación entre el capital solidario y en comandita, a los efectos de establecer la ganancia, cualquiera sea la forma en que dichos capitales estén retribuidos.

A los efectos de este impuesto se considerará capital efectivo de la empresa el cincuenta por ciento (50 %) de las utilidades computables para esta ley, obtenidas en el ejercicio. Recíprocamente, en caso de pérdidas el capital será rebajado en el cincuenta por ciento (50 %) de aquéllas.

Artículo 8º — La Dirección General Impositiva podrá reunir en un único balance impositivo los resultados de distintas empresas, cualquiera sea su naturaleza, siempre que constituyan un mismo conjunto económico y se hayan organizado o reorganizado después del 21 de abril de 1941, o se organicen o reorganicen en el futuro eludiendo el pago del presente impuesto mediante el desdoblamiento de sus capitales.

2º Modifícase el artículo 4º, en la siguiente forma:

a) Sustitúyese el primer párrafo por el siguiente:

Artículo 4º — El capital y reservas libres computables, estarán dados por la diferencia existente al final de cada ejercicio entre el activo y pasivo ajustados conforme a la ley del impuesto a los réditos y en la forma que establezca la reglamentación, no admitiéndose las revaluaciones o asignaciones de valores a los bienes del negocio, salvo los casos en que el revalúo sea computable para dicha ley. Cuando el capital así determinado, no sea representativo del utilizado en el curso del ejercicio, en virtud de variaciones de importancia producidas en los tres (3) últimos meses del mismo, la Dirección o los responsables, podrán ajustar el capital computable, proporcionando dichas variaciones en función al tiempo.

b) Suprímese del cuarto apartado la locución „en función al tiempo de su inversión„.

2º Igual.

Igual.

Igual.

c) Derógase el último párrafo.

3º Derógase el artículo 8º.

DISPOSICION VIGENTE
(Texto ordenado en 1960)

DISPOSICION VIGENTE

(Texto ordenado en 1960 modificado por ley 15.798)

Artículo 8º — Para determinar el monto del impuesto a pagar sobre las ventas en el mercado interno, se practicará una liquidación sobre la base del total de las ventas, efectuándose las siguientes deducciones:

- a) El importe de las bonificaciones, descuentos y devoluciones a que se refiere el artículo 4º;
- b) El importe de las ventas de mercaderías eximidas por la presente ley;
- c) El importe de las compras de mercaderías gravadas con el impuesto de esta ley, adquiridas en el mercado interno o importadas en las condiciones del artículo 7º para ser elaboradas o transformadas, agregadas o utilizadas para producir o industrializar mercaderías para la venta.

Las deducciones a que se refiere este inciso son aquellas de mercaderías que se adquieren para someterlas a proceso de industrialización, siempre que sean destinadas a formar una parte constitutiva o integrante del producto a venderse;

- d) El importe de las compras de mercaderías gravadas, adquiridas en el mercado interno o importadas en las condiciones del artículo 7º para ser revendidas en el mismo estado en que se compran. En estos casos se sumará al precio de compra un coeficiente de aumento que fijará la dirección;
- e) El importe de los impuestos internos nacionales y provinciales abonados.

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

3º Las modificaciones que se establecen por el presente artículo serán de aplicación a los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 1961, inclusive.

IMPUESTO A LAS VENTAS (LEY 12.143)

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

DICTAMEN DE COMISION

4º Igual.

DICTAMEN DE COMISION

Artículo 4º — Modifícase, a partir del 1º de enero de 1962 la ley 12.143, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, en la siguiente forma:

1º Agrégase al artículo 8º, como inciso f), el siguiente:

f) Los gastos directos de venta que incidan sobre las enajenaciones

Artículo 11. — Quedan eximidas de impuesto:

- a) Las ventas en el mercado interno de las siguientes mercaderías de producción nacional:

Aceites comestibles.
Afrecho y afrechillo.
Agua lavandina.
Alcohol desnaturalizado para combustible
y alcohol puro destinado a ser desnaturalizado para combustible.
Alpargatas.
Arena.
Arroz
Asta y machos de asta.
Aves.
Azúcar de caña y de remolacha.
Azul para la ropa.
Cal.
Canto rodado.
Carnes frescas.
Caseína.
Cepillos para piso.
Cerdas sucias y lavadas.
Cereales y oleaginosos.
Crema.
Cueros secos y salados.
Chorizos frescos, salames, salamines, mortadelas y salchichas.
Dulces de batata, de membrillo y de leche.
Escobas y trapos para piso.
Factura de panadería.
Fideos.
Ganado.
Grasas comestibles de origen animal.
Harinas de trigo, maíz y centeno.
Hielo común.
Hortalizas, legumbres y frutas frescas.
Huevos.
Jabones.
Ladrillos y bloques premoldeados de hormigón.
Lanas sucias.
Leche condensada, en polvo y deshidratada.

que los industriales efectúen al menudeo y al público consumidor, en la forma y condiciones que fije la reglamentación.

2º Inclúyese en el artículo 11, como inciso j), el siguiente:

- Leche fresca o pasterizada.
Leña, carbón vegetal, carbonilla y tierra de carbón vegetal.
Maíz pisado.
Manteca.
Manutención preparada para animales.
Miel de abejas.
Pan, galleta común y productos similares de panadería.
Plumas sucias, limpias, clasificadas y/o mezcladas.
Polvos limpiadores a base de materias saponificadas.
Productos de las explotaciones mineras, ya se trate de sustancias minerales en su estado natural, en bruto o molidas y los concentrados.
Productos de granja elaborados dentro de un régimen de trabajo familiar y, en general, los productos de la ganadería, de la agricultura y forestales en tanto no hayan sufrido elaboración o tratamiento no indispensable para su conservación en estado natural o acondicionamiento.
Productos frescos de la pesca.
Queso.
Sal fina y sal gruesa.
Sebos simplemente derretidos o pisados.
Semillas y bulbos.
Soda en sifón o en botella.
Sueros y vacunas.
Tabacos, cigarros y cigarrillos.
Tallarines, raviolos, cappelletti y demás pastas frescas.
Té.
Vinos genuinos.
Yerba mate.
- b) Las ventas de carbón mineral y especialidades medicinas: nacionales o importadas;
c) Las ventas efectuadas por entidades de beneficio público que no persiguen fines lucrativos, reconocidas como tales por la Dirección;
d) Las ventas de libros, diarios, periódicos y revistas;
e) Las ventas de acciones, títulos, divisas, valores, estampillas y billetes de lotería;
f) El suministro de servicios públicos de gas, electricidad y similares y las ventas de es-

DISPOSICION VIGENTE

(Texto ordenado en 1960 modificado por ley 15.798)

- tos mismos productos a empresas que presten tales servicios;
- g) Las ventas de los pequeños productores y artesanos, en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo;
 - h) Las ventas de papel destinado a la impresión de libros, diarios, periódicos y revistas;
 - i) La construcción de buques o aviones y sus instalaciones por los astilleros, fábricas o talleres del Estado o particulares, cuando se trate de unidades destinadas a la defensa nacional, transporte comercial o formación de personal aeronavegante.

DISPOSICION VIGENTE
(Texto ordenado en 1956)

Artículo 14. — Cuando corresponda la pena de multa por infracciones contempladas en los artículos 12 y 13, la sanción se graduará, según el caso, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 45 de la ley 11.683, texto ordenado en 1956.

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 5º — A partir del 1º de enero de 1962 las ventas de productos importados tendrán el mismo tratamiento fiscal que las ventas de productos similares nacionales, a los fines de la aplicación del impuesto establecido por la ley 12.143, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, tanto en lo relativo a las tasas aplicables como en cuanto al régimen de exenciones; quedando derogada toda disposición que importe un tratamiento discriminatorio en razón del origen de los productos.

IMPUESTOS INTERNOS**PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO**

Artículo 6º — Modifícase la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1956 y sus modificaciones, a partir del 1º de enero de 1962, en la siguiente forma:

DICTAMEN DE COMISION

- j) Las ventas de maquinaria agrícola.
- 3º Agrégase el siguiente artículo:

Artículo ... — Las ventas de productos importados tendrán el mismo tratamiento fiscal que las ventas de productos similares nacionales, tanto en lo relativo a las tasas aplicables como en cuanto al régimen de exención; quedando derogada toda disposición que importe un tratamiento discriminatorio en razón del origen de los productos.

DICTAMEN DE COMISION

Art. 5º — Modifícase la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1956 y sus modificaciones, en la siguiente forma:

1º Agrégase en el artículo 14 a continuación del primer párrafo, los siguientes:

Así mismo, cuando se trate de reincidencia en infracciones a las disposiciones del artículo 30 de esta ley y la mercadería sea de procedencia extranjera, podrá la Dirección General Impositiva disponer complementariamente de la multa,

Artículo 31. — Los cigarros y cigarritos de fabricación nacional pagarán el impuesto que a continuación se establece:

- 1º Los cigarros pagarán por cada gramo o fracción excedente de medio gramo de peso, y sin limitación de precio de venta:
 - a) Los elaborados con tabaco de producción nacional y paraguaya, puros o en mezclas, que además podrán contener hasta un veinte por ciento (20 %) de otros tabacos importados que no sean habanos o similares y cuyo peso neto por millar no exceda de cinco (5) kilogramos, \$ 0,004;
 - b) Los de igual clase cuyo peso neto por millar exceda de cinco (5) kilogramos, \$ 0,005;
 - c) Los elaborados con tabacos de producción brasileña, puros o en mezclas con tabacos nacionales o paraguayos, pudiendo admitirse en las mezclas hasta un cuarenta por ciento (40 %) de otros tabacos y cuyo peso neto por millar no exceda de cinco (5) kilogramos, \$ 0,008;

1º Sustitúyese el artículo 31 por el siguiente:

Artículo 31. — Los cigarros y cigarritos, así como los tabacos que se expendan para ser consumidos en hoja, despalillados, picados, en hebra, pulverizados (rapé), en cuerda, en tabletas y despuntes, pagarán un impuesto de hasta el cincuenta por ciento (50 %) sobre el precio de venta al consumidor, incluso impuesto.

El Poder Ejecutivo queda facultado para graduar el gravamen de acuerdo con las distintas categorías de precios que se establezcan.

la clausura por el término de hasta cinco (5) días de los locales en que se encuentren las mercaderías en infracción.

A tal efecto, cuando los productos o sus envolturas, etiquetas o envases tengan marcas, leyendas o atestaciones de las que resulte su origen extranjero, no se admitirá prueba en contrario en cuanto a ese origen.

Para hacer efectiva la clausura dispuesta, podrá la Dirección General Impositiva requerir por medio del director general o demás funcionarios autorizados expresamente por el mismo, el auxilio de la fuerza pública, el que deberá ser acordado sin demora. En su defecto, el funcionario o empleado policial responsable de la negativa u omisión incurrirá en la pena establecida por el Código Penal.

2º Sustitúyese el artículo 31 por el siguiente:

Artículo 31. — Los cigarros y cigarritos, así como los tabacos que se expendan para ser consumidos en hoja, despalillados, picados en hebra, pulverizados (rapé), en cuerda, en tabletas y despuntes, tributarán un impuesto que graduará el Poder Ejecutivo en función de la calidad y/o peso de los productos. Este impuesto en ningún caso podrá ser superior al 30 % del precio de venta del fabricante o importador.

- d) Los de igual clase cuyo peso neto por millar exceda de cinco (5) kilogramos, \$ 0,01;
- e) Los elaborados con más del treinta por ciento (30 %) de tabacos habanos o similares, o más del cuarenta por ciento (40 %) de otras variedades no especificadas en este inciso cuyo peso neto por millar no exceda de cinco (5) kilogramos, \$ 0,016;
- f) Los de igual clase cuyo peso neto por millar exceda de cinco (5) kilogramos, \$ 0,02;
- g) Los elaborados con tabaco nacional, puro o mezcla hasta con un cincuenta por ciento (50 %) de tabacos paraguayos, pagarán el impuesto establecido por el inciso 2º para los cigarros tipo «Toscano» y los «cigarrillos» y se expendrán en las condiciones y forma que reglamente el Poder Ejecutivo.

Los cigarros de los apartados a) y b) llevarán un anillo-vitola con la atestación Clase C, los de los apartados c) y d) con la atestación Clase B y los de los apartados e) y f) con la atestación Clase A.

El peso neto por millar de los cigarros a que se refiere este inciso deberá exceder de los dos (2) kilogramos;

- 2º Los cigarros tipo «toscano» y los «cigarrillos» elaborados con interior de hojas (tripa), hojas y picaduras o hebras de tabaco y capa de hojas de tabaco, tributarán un impuesto del veintiocho por ciento (28 %) sobre el precio de venta al consumidor y serán expedidos en las condiciones y forma que reglamente el Poder Ejecutivo.
- 3º Los cigarrillos de «chala» cuyo peso neto por millar esté comprendido entre 1.260 y 2.000 gramos, abonarán el impuesto interno a razón de \$ 0,02 por cada diez cigarrillos o fracción, cualquiera sea su precio de venta. La elaboración casera de esta clase de cigarrillos solamente será permi-

tida en las zonas productoras de tabacos, en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo.

Artículo 32.— Los cigarros y «cigarritos» de procedencia extranjera pagarán por cada gramo o fracción de medio gramo de peso neto y sin limitación de precio de venta, los siguientes impuestos:

- a) Los elaborados con tabaco «habano» y de otras procedencias no especificadas en este artículo, cualquiera sea el país en que han sido elaborados:

Aquellos cuyo peso neto por millar no exceda de 4 kilogramos, \$ 0,045;

Aquellos cuyo peso exceda de 4 kilogramos por millar, \$ 0,055;

- b) Los elaborados con tabacos argentinos, brasileños y paraguayos puros o en mezclas que no contengan tabacos habanos ni más de un veinte por ciento (20 %) de tabacos de otras procedencias:

Aquellos cuyo peso neto por millar no exceda de 4 kilogramos, \$ 0,01;

Aquellos cuyo peso neto por millar exceda de 4 kilogramos y hasta 7 kilogramos, \$ 0,015.

Aquellos cuyo peso neto por millar exceda de 7 kilogramos y hasta 10 kilogramos, \$ 0,02.

Aquellos cuyo peso neto por millar exceda de 10 kilogramos, \$ 0,025.

Los cigarros italianos «Toscanos», los tipo «Toscano», «Cavour», «Brisagos», de «La Paja» y similares tributarán los impuestos según su precio de venta y de acuerdo con la escala establecida en el artículo 31, que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo mediante una tabla de aforos.

Artículo 33.— Los tabacos que se expendan para ser consumidos en hoja, despallados, picados, en hebra, pulverizados (rapé), en cuerda, en tabletas y despuntes tributarán, sin limitación de precio de venta, los impuestos que a continuación se establecen:

2º Deróganse los artículos 32, 33 y 34.

3º Igual.

Derogado.

- 1º Los de fabricación nacional, en hojas, despalillados, picados o hebras, por kilogramo:

m\$ñ.

- | | |
|--|------|
| a) Los elaborados con más del treinta por ciento (30 %) de tabaco habano | 13.— |
| b) Los elaborados con tabacos importados de otras procedencias . | 6.— |
| c) Los elaborados con tabacos nacionales o paraguayos, admitiéndose en sus mezclas hasta un veinte por ciento (20 %) de tabacos importados que no sean habanos | 2,40 |
| d) Los tabacos en cuerda, tabletas, pulverizados (rapé) y los despuntes de cigarros | 2,40 |

Los tabacos del apartado a) llevarán en el envase de expendio la atestación «Clase A»; los del apartado b); la atestación «Clase B», y los del apartado c) la atestación «Clase C».

- 2º Los tabacos a que se refiere el inciso anterior, que se importen acondicionados en envases de expendio al consumidor y cualquiera sea su procedencia, pagarán por cada cincuenta (50) gramos o fracción de peso neto, a razón de \$ 16 (dieciséis pesos) el kilogramo.

Artículo 34. — Autorízase al Poder Ejecutivo para aumentar las tasas fijadas en los artículos 31, inciso 1º, 32 y 33, hasta el límite máximo de \$ 0,32 (treinta y dos centavos) por cada gramo en los dos primeros y de \$ 60 (sesenta pesos) por kilogramo en el último; así como para rebajar al 20 % (veinte por ciento) el impuesto establecido en el artículo 31, inciso 2º de esta ley.

Derogado.

Artículo 107. — Los hilados de seda, natural o artificial, o fibras sintéticas similares, de producción nacional o importados, abonarán en concepto de impuesto interno la tasa del 10 % (diez por ciento).

- 4º Sustitúyense los artículos 107 y 108 por los siguientes:

Artículo 107. — Los hilados de seda de producción nacional o importados, abonarán en concepto de impuesto interno la tasa del diez por ciento (10 %).

Los tejidos importados y los artículos confeccionados de importación que contengan seda natural, artificial o fibras sintéticas similares, en una proporción de 40 % (cuarenta por ciento) o más, tributarán un impuesto del 15 % (quince por ciento).

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

3º El Poder Ejecutivo podrá incorporar al régimen del título I de la ley algunos de los gravámenes que actualmente figuran en el título II, y viceversa, transformando, en su caso, las tasas específicas en tasas ad valorem, las que en ningún caso podrán exceder del veinte por ciento (20 %) del precio de venta.

4º Los productos importados gravados por la ley, tendrán el mismo tratamiento fiscal que los productos similares nacionales, tanto en lo relativo a las tasas aplicables como en cuanto al régimen de exenciones: quedando derogada toda disposición que importe un tratamiento discriminatorio en razón del origen de los productos.

Artículo 66. — Las compañías de seguros consideradas argentinas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de la ley 12.988 (texto ordenado en 1953), pagarán un impuesto de ocho y medio por ciento (8½ %) sobre las primas de seguros que celebren, exceptuándose las de seguros sobre la vida, que pagarán un impuesto del dos y medio por ciento (2½ %) sobre dichas primas y las de seguros agrícolas, que no pagarán ninguno.

DICTAMEN DE COMISION

Los tejidos de producción nacional o importados y los artículos confeccionados que contengan seda natural en una proporción de cuarenta por ciento (40 %) o más, tributarán un impuesto del quince por ciento (15 %).

5º Igual.

6º Igual.

7º Las disposiciones precedentes entrarán en vigor a partir del 1º de enero de 1962.

8º Sustitúyese el artículo 66, por el siguiente:

Artículo 66. — Las entidades aseguradoras legalmente establecidas o constituidas en el país pagarán un impuesto del 10 % (diez por ciento) sobre las primas de seguros que contraten, excepto los seguros sobre riesgos personales, accidentes del trabajo y responsabilidad civil por daños a personas, que pagarán un impuesto del 4 %. Los contratos de seguros de exportación pagarán el 9 % y los de importación el 8½ % sobre las primas. Los seguros de vida, y de accidentes personales, individuales o colectivos, estarán exentos, así como también los seguros contra riesgos que afecten la agricultura y la ganadería.

9º La modificación dispuesta por el apartado anterior entrará en vigencia dentro del régimen y los términos de la ley 14.390 a partir del momento en que todas las provincias adhieran a dicha modificación, derogando los impuestos locales de sellos sobre todas las operaciones de seguros y reaseguros y obligándose a no establecerlos en lo sucesivo. En la misma oportunidad quedará derogado el impuesto de sellos nacional sobre dichas operaciones con el mismo alcance.

10. Agrégase como capítulo IX del título II lo siguiente:

Artículo 113. — Los productos que a continuación se enumeran, de fabricación nacional o extranjera, pagarán en concepto de impuestos internos las siguientes tasas:

- a) Las bebidas gasificadas no alcanzadas específicamente por otros impuestos internos, diez por ciento (10 %);
- b) Los refrescos en general, quince por ciento (15 %);
- c) Los jarabes, extractos o concentrados aptos para la preparación de bebidas sin alcohol, quince por ciento (15 %).

Los fabricantes de las bebidas de los incisos a) y b) tendrán derecho a computar como pago a cuenta del impuesto correspondiente el quince por ciento del importe de la compra de los jarabes, extractos o concentrados sujetos al impuesto del inciso c) utilizados como materia prima para la elaboración de aquéllas. Están exentos de este gravamen los jarabes que se expendan como especialidades medicinales o veterinarias o que se utilicen en preparaciones de ese carácter y las aguas minerales o gaseosas.

IMPUESTO DE SELLOS

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 7º — Modifícase la ley de sellos, texto ordenado en 1961, en la forma que se indica a continuación:

1º Modifícase el artículo 1º, en la siguiente forma:

- a) Reemplázase en el inciso a) la expresión «civiles o comerciales, por «civiles, comerciales o laborales;»
- b) Sustitúyese el inciso b) por el siguiente:
b) Las actuaciones judiciales;

2º Sustitúyese el artículo 3º por el siguiente:

Artículo 3º — El impuesto de sellos se abonará:

- a) Habilitando con estampillas fiscales los instrumentos extendidos en papel simple;
- b) Mediante el uso autorizado de máquinas timbradoras;
- c) Mediante depósito bancario, con o sin declaración jurada, en las condiciones que determinará la reglamentación.

DICTAMEN DE COMISION

Artículo 6º — Igual.

1º Igual.

2º Igual.

Artículo 1º — Estarán sujetos al pago del impuesto de sellos, en la forma y condiciones que determina la presente ley, cuando ellos versen sobre asuntos o negocios sometidos, por razón del lugar o la naturaleza del acto, a la jurisdicción nacional:

- a) Los instrumentos públicos o privados por medio de los cuales se formalicen actos, contratos u obligaciones civiles o comerciales;
- b) Los escritos presentados ante las autoridades públicas y las actuaciones que ellos originen;
- c) Las operaciones especialmente gravadas en esta ley.

Artículo 3º — El impuesto de sellos se abonará:

- a) Extendiendo los instrumentos en el papel sellado que corresponda;
- b) Habilitando con estampillas fiscales los instrumentos extendidos en papel simple o en sellado de menor valor;
- c) Por medio de timbrado especial efectuado por la impresión oficial, en formularios u otros papeles;
- d) Mediante el uso autorizado de máquinas timbradoras;
- e) Por declaración jurada.

El Poder Ejecutivo reglamentará los casos, condiciones, formalidades y términos en que deberá hacerse efectivo el impuesto para cada una de las formas de pago establecidas precedentemente.

Facúltase a la Dirección General Impositiva a aplicar para este impuesto, total o parcialmente, las formas de pago establecidas en la ley 11.683, como así también para conceder prórrogas conforme a lo previsto en dicho texto legal.

Artículo 5º — Los contratos o promesas de contratos en los cuales se establezca que es necesario el otorgamiento de escritura pública para su validez, abonarán el impuesto que establece el artículo 51, inciso f), sin perjuicio del sello que se pagare al otorgarse la escritura.

Artículo 6º — Será considerado contrato por correspondencia sujeto al pago del impuesto de sellos en el acto de su perfeccionamiento, la carta que por su solo texto, sin necesidad de otro documento, revista los caracteres exteriores de un título jurídico, con el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones en ella consignadas, considerándose como tal aquella en la cual al aceptarse una propuesta se transcriba ésta o sus enunciaciones y elementos esenciales; así como las propuestas, duplicados de propuestas o presupuestos firmados por el aceptante.

Las demás cartas u otros documentos que sin reunir las condiciones arriba expresadas se refieran a obligaciones o actos preexistentes o a crearse, abonarán el impuesto en el momento de ser presentadas en juicio. En estos casos no se pagará más que un solo impuesto por todas las cartas que se refieran a la misma obligación.

Artículo 7º — Para la determinación del valor imponible se calcularán como enteros las fracciones de cien pesos moneda nacional (m\$.n. 100). Toda fracción de impuesto inferior a cinco centavos moneda nacional (m\$.n. 0,05) se completará hasta ese importe.

Artículo 12. — La foja de papel sellado de actuación, contendrá veinticinco (25) líneas de quince (15) centímetros de dimensión en cada plana.

Sólo podrá escribirse en el papel sellado dentro de los márgenes y sobre las líneas marcadas en él, salvo las firmas y las anotaciones de inscripciones y otras análogas posteriores al acto, que podrán extenderse en el margen.

Podrán extenderse en su formato habitual, sin aumento de impuesto, los contratos de transporte, los documentos aduaneros, las pólizas de seguro y los demás instrumentos que el Poder Ejecutivo expresamente autorice.

3º Derógase el artículo 5º.

4º Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 6º por el siguiente:

Las demás cartas u otros documentos que sin reunir las condiciones arriba expresadas se refieran a obligaciones o actos preexistentes o a crearse, abonarán el impuesto en el momento de ser presentadas en juicio o al ser elevadas a escritura pública por las partes. En estos casos no se pagará más que un solo impuesto por todas las cartas que se refieran a la misma obligación.

5º Sustitúyese en el artículo 7º la expresión «cinco centavos moneda nacional (m\$.n. 0,05)», por «un peso moneda nacional (m\$.n. 1)».

6º Derógase el artículo 12.

3º Igual.

4º Igual

5º Igual.

6º Igual.

Artículo 13. — Cuando los instrumentos sean extendidos en varios ejemplares de un mismo tenor, se pagará en uno de ellos el sellado. Los demás estarán sujetos al impuesto que establece el artículo 51, incisos a) y d), debiendo dejarse constancia en cada uno de ellos del sello pagado en el original. A solicitud de parte, estos últimos podrán ser visados por la repartición del ramo, la cual certificará al margen de los mismos el número, año y valor de los sellos y estampillas empleados en el original.

Artículo 14. — Pagarán impuesto proporcional de: Seis por mil (6‰):

- a) Los contratos de compraventa de cosas muebles, semovientes, títulos, acciones, debentures y valores fiduciarios en general; con excepción de las operaciones previstas en el artículo 32;
- b) Las cesiones de derecho;
- c) Las transacciones de acciones litigiosas;
- d) Los contratos de permuta que no versen sobre inmuebles;
- e) Los contratos de transmisión de la propiedad de embarcaciones;
- f) Los contratos de hipoteca naval y aérea, sus prórrogas y ampliaciones;
- g) Los contratos de transferencia de negocios;
- h) Los vales, billetes y pagarés;
- i) Las cuentas o facturas con el conforme del deudor;
- j) Los reconocimientos de deuda;
- k) Los contratos de emisión de debentures sin garantía o con garantía flotante;
- l) Las letras de cambio, giros y órdenes de pago que no tengan fijado en esta ley otro tratamiento fiscal;
- m) Los contratos de locación o sublocación de cosas, de derechos, de servicios y de obra;
- n) Los contratos de renta;

7º Sustitúyese el artículo 13, por el siguiente:

Artículo 13. — Cuando los instrumentos sean extendidos en varios ejemplares de un mismo tenor, se pagará en uno de ellos el impuesto. En los demás ejemplares deberá dejarse constancia de lo pagado en el original. A solicitud de parte, los demás ejemplares podrán ser visados por la repartición del ramo, la cual certificará al margen de los mismos el impuesto pagado en el original.

8º Modifícase el artículo 14, en la siguiente forma:

a) Sustitúyese el inciso j) por el siguiente:

j) Los contratos de mutuo y los reconocimientos de deuda cualquiera sea su origen;

b) Sustitúyese el inciso l) por el siguiente:

l) Las letras de cambio, giros y órdenes de pago. Los pagaderos a su presentación o hasta cinco días vista sólo abonarán este impuesto cuando no se aceptaren, pagaren o protestaren dentro de un mes de la fecha de su otorgamiento;

7º Igual.

8º Igual.

- o) Las pólizas de fletamento;
- p) Los contratos de sociedad y sus prórrogas;
- q) Los contratos de suministro de energía y en general todos los que se caractericen por ser de ejecución sucesiva;
- r) Las operaciones que se refieran a la adquisición, modificación o transferencia de derechos sobre sepulcros y terrenos en los cementerios;
- s) Las fianzas u otras obligaciones accesorias, como así mismo la constitución de prendas, y en general, los instrumentos en que se consigne la obligación del otorgante de dar sumas de dinero cuando no estén gravados por esta ley con un impuesto especial.

Artículo 15.— En las permutas se calculará el impuesto sobre la mitad de la suma de los valores que se permuten.

En la transferencia de fondos de comercio el impuesto se calculará sobre el precio neto de la operación, con prescindencia de la naturaleza y ubicación de los bienes que lo integran.

Artículo 20. — Cuando el valor de los actos sujetos a impuesto proporcional sea indeterminado, las partes estimarán dicho valor en el mismo instrumento; la estimación se fundará en el rendimiento de convenios y prestaciones similares anteriores, si las hubiere, o en los valores inferibles de negocio, inversiones, erogaciones, etcétera, vinculados al contrato, y, en general, en todo ele-

c) Agrégase como inciso t) el siguiente:

t) Los contratos que estipulan la constitución de derechos reales que no deban por la ley ser hechos en escritura pública;

d) Agrégase como inciso u) el siguiente:

u) Las cesiones y transferencias de boletos y promesas de compraventa de bienes inmuebles.

9º Agrégase como tercer párrafo del artículo 15 el siguiente:

En las cesiones y transferencias de boletos y promesas de compraventa de bienes inmuebles el impuesto se calculará sobre el importe bruto que se obtenga por la cesión o transferencia.

10. Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 20, por el siguiente:

Suprimido.

Suprimido.

9º Igual.

mento de juicio de significación a este fin, existente en la fecha de celebración del acto.

Cuando se fije como precio el corriente en fecha futura se pagará el impuesto con arreglo al precio de plaza en la fecha del otorgamiento. A estos efectos las dependencias técnicas del Estado y entidades autónomas asesorarán a la dirección cuando lo solicite.

Cuando por carecerse de estos antecedentes no pudiera practicarse una estimación razonable del valor económico atribuible al acto de valor indeterminado, se satisfará el impuesto del artículo 51, incisos p), r) o s), según corresponda.

La Dirección General Impositiva podrá impugnar la estimación efectuada por las partes, practicándola de oficio sobre la base de los mismos elementos de juicio señalados en este artículo.

En caso de duda sobre la estimación del valor del contrato, el contribuyente podrá consultar a la Dirección General Impositiva de acuerdo con el artículo 97 de esta ley.

Artículo 21. — El impuesto a los contratos de sociedad se calculará sobre el capital social, sea cual fuere la naturaleza de los bienes que concurran a formarlo y el lugar donde se encuentren.

Las modificaciones del contrato que no importen cambio de la razón social, no pagarán nuevo impuesto aunque se incorporen nuevos socios.

Las ampliaciones de capital lo pagarán solamente sobre el importe del aumento.

Las sociedades existentes en las provincias o en países extranjeros, sólo pagarán el impuesto cuando, con el fin de establecer en jurisdicción nacional sucursal o agencia de sus negocios, inscriban sus contratos en el Registro Público de Comercio.

En estos casos el impuesto será liquidado sobre el capital asignado a dichas sucursales o agencias en el contrato o en otros acuerdos o resoluciones posteriores.

Cuando por carecerse de estos antecedentes no pudiera practicarse una estimación razonable del valor económico atribuible al acto de valor indeterminado se satisfará el impuesto de \$ 150 (ciento cincuenta pesos) moneda nacional por foja, considerándose como tal cada cincuenta (50) líneas de quince (15) centímetros de dimensión.

11. Intercálase en el artículo 21, a continuación del tercer párrafo, el siguiente:

10. Igual.

La instrumentación de las prórrogas dará lugar al pago del impuesto aun cuando hayan sido previstas en un contrato anterior y ellas deban producirse por el solo silencio de las partes.

Artículo 22. — Cuando en los casos a que se refiere el artículo precedente no se asigne capital, se determinará el impuesto correspondiente en la forma indicada en los artículos 20 ó 51, incisos r) o s), según el caso.

Artículo 24. — Cuando para la formación de las sociedades anónimas se adopte la forma de constitución provisional, el impuesto se pagará en el acto de la constitución definitiva, debiendo abonarse por el acto de la constitución provisional el gravamen del artículo 51, inciso o).

Artículo 25. — La transformación de una sociedad en otra de tipo jurídico distinto, cuando haya sido prevista en la ley o en el contrato o los estatutos de la sociedad primitiva, pagará únicamente el sellado previsto en el artículo 51, inciso e).

Quando la transformación no haya sido prevista o, habiéndolo sido, al realizarla se aumente el capital, se prorrogue la duración de la sociedad o se sustituyan los socios, se pagará el impuesto que corresponda a la nueva sociedad.

Artículo 26. — Pagarán el quince por mil (15 o/oo) sobre el monto de la operación, las escrituras públicas de compraventa, de permuta, de emisión de «debentures» con garantía especial o de cualquier otro contrato por el cual se transfiera el dominio de bienes inmuebles o se constituya o prorrogue un derecho real sobre inmuebles, cualesquiera sean la forma y plazos establecidos.

Satisfarán el mismo impuesto las transferencias de inmuebles realizadas por imperio de la ley, sin otorgamiento de escritura pública.

En los casos de compraventa voluntaria o forzosa o de permuta, el impuesto estará a cargo de cada una de las partes, por mitades.

El impuesto establecido en este artículo se abonará aun cuando en el contrato se reconozcan hipotecas preexistentes descontadas del precio.

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

12. Sustitúyese en el artículo 22 la expresión «en los artículos 20 ó 51 incisos r) o s), según el caso», por la siguiente: «en el artículo 20».

13. Derógase en el artículo 24 la siguiente expresión final: «Debiendo abonarse por el acto de la constitución provisional el gravamen del artículo 51 inciso o)».

14. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 25 por el siguiente:

Artículo 25. — La transformación de una sociedad en otra de tipo jurídico distinto, cuando haya sido prevista en la ley, contrato o estatutos constitutivos de la sociedad, está exenta de impuesto de sellos.

15. Sustitúyese el artículo 26 por el siguiente:

Artículo 26. — Pagarán un gravamen del tres por ciento (3 %) sobre el monto de la operación, las escrituras públicas de compraventa, de permuta o de cualquier otro contrato por el cual se transfiera el dominio de bienes inmuebles, cualesquiera sean la forma y plazos establecidos.

Satisfarán el mismo impuesto las transferencias de inmuebles realizadas por imperio de la ley sin otorgamiento de escritura pública.

En los casos de compraventa voluntaria o forzosa el impuesto estará a cargo del vendedor y en los de permuta a cargo de cada una de las partes, por mitades.

El impuesto establecido en este artículo se abonará aun cuando en el contrato se reconozcan hipotecas preexistentes descontadas del precio.

En las permutas de inmuebles se aplicará la norma del artículo 15.

DICTAMEN DE COMISION

11. Igual.

12. Igual.

13. Igual.

Suprimido.

En las permutas de inmuebles se aplicará la norma del artículo 15.

En las escrituras de ampliación de hipotecas constituidas a favor de instituciones oficiales, el impuesto se pagará sobre el monto de la ampliación, aun en el caso de que con motivo de la unificación realizada quede prorrogado el plazo de la obligación originaria.

Artículo 27. — Cuando en la escritura no se fije precio o por la naturaleza del contrato no corresponda fijarlo, o cuando el precio fijado sea menor, se tomará la valuación fiscal como base para el pago del impuesto, exceptuándose de esta regla la constitución de los derechos reales de usufructo, servidumbre, uso, habitación y anticresis, que pagarán el impuesto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51, inciso n).

Se pagará sobre el precio real de venta, aun cuando fuere menor que el de valuación, cuando el mismo haya sido obtenido en remate judicial o en remate realizado por el Banco Hipotecario Nacional.

Artículo 30. — Cuando los inmuebles estén todos ubicados en jurisdicción provincial, se pagará solamente el sellado de \$ 30 (treinta pesos).

Artículo 31. — Los títulos informativos de propiedad pagarán al dictarse el auto de aprobación judicial el 4 % (cuatro por ciento) de la valuación fiscal.

Artículo 34. — La utilización de créditos en descubierto, los depósitos monetarios y en general todo crédito o débito en cuenta no documentado originado en una entrega o recepción de dinero, que devenguen interés, estarán gravados con el 8 % (ocho por mil) anual.

El impuesto se liquidará en proporción al tiempo de utilización o depósito de los fondos y se calculará sobre la base de los numerales establecidos para la liquidación de los intereses y en el

Pagarán el quince por mil (15 o/oo) sobre el monto de la operación, las escrituras públicas de emisión de «debentures» con garantía especial o de cualquier otro contrato por el cual se constituya o prorrogue un derecho real sobre inmuebles, cualesquiera sean la forma y plazos establecidos.

En las escrituras de ampliación de hipotecas constituidas a favor de instituciones oficiales, el impuesto se pagará sobre el monto de la ampliación, aun en el caso de que con motivo de la unificación realizada quede prorrogado el plazo de la obligación originaria.

16. Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 27 la expresión final «el impuesto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51, inciso n)», por la siguiente: «el impuesto fijo de \$ 150 (ciento cincuenta pesos) por foja previsto en el párrafo tercero del artículo 20».

14. Igual.

17. Sustitúyese en el artículo 30 la expresión \$ 30 (treinta pesos) por la siguiente: «\$ 150 (ciento cincuenta pesos)».

15. Igual.

18. Sustitúyese en el artículo 31 la expresión «4 % (cuatro por ciento)» por la siguiente: «6 % (seis por ciento)».

16. Igual.

19. Suprímese en el artículo 34, a continuación de la expresión «todo crédito o débito» la expresión «no documentado».

17. Igual.

momento en que éstos se debiten, acrediten o abonen.

En los casos de cuentas con saldos alternativamente deudores y acreedores, el gravamen deberá liquidarse en forma independiente sobre los numerales respectivos.

Artículo 36. — Quedan exentos del impuesto establecido en este capítulo:

- a) Los créditos bancarios en descubierto por un plazo no mayor de 2 (dos) días, producidos por cheques firmados por comisionistas de bolsa que oficialmente lo acrediten;
- b) Los créditos bancarios en descubierto con caución de títulos públicos concedidos a comisionistas de bolsa;
- c) Los adelantos entre bancos, con o sin caución;
- d) Los créditos en moneda legal concedidos por los bancos o corresponsales del exterior;
- e) Los depósitos bancarios, en caja de ahorro, plazo fijo, cuentas personales y cuentas corrientes, cualquiera sea la modalidad adoptada para la liquidación y pago de los intereses;
- f) Los depósitos en cajas de ahorro o en cuentas personales hechos por los asociados en entidades cooperativas o mutualistas;
- g) Las sumas que las empresas acrediten a sus empleados en concepto de depósitos o préstamos, por los saldos individuales que no sobrepasen de \$ 100.000 (cien mil pesos).

Artículo 41. — Las pólizas flotantes pagarán un impuesto de \$ 5 (cinco pesos) y cada una de sus aplicaciones o certificados de embarque abonará el impuesto que corresponda conforme a los artículos anteriores.

20. Suprímese en el artículo 36 inciso e) la coma existente después de la palabra „bancarios, y agréganse como incisos h) e i) los siguientes:

- h) Las operaciones documentadas en instrumentos sujetos al impuesto del artículo 14, incisos h) y j);
- i) Las operaciones concertadas en jurisdicción provincial con los bancos de la ley 12.156 y complementarias.

21. Sustitúyese el artículo 41, por el siguiente:

Artículo 41. — Cada una de las aplicaciones o certificados de embarque de pólizas flotantes abonará el impuesto que corresponda conforme a los artículos anteriores.

18. Igual.

19. Igual.

Artículo 42.—Las pólizas de reaseguros referentes a riesgos que hayan abonado el impuesto, no abonarán nuevo impuesto.

Los contratos preliminares de reaseguros de carácter general, celebrados entre aseguradores, en los que se estipulen las bases y condiciones para la cesión de una parte de la responsabilidad, pagarán un impuesto de \$ 15 (quince pesos) por foja.

Artículo 45.—Los certificados provisionales de seguros sólo abonarán el sellado de \$ 5 (cinco pesos), si dentro del término de noventa (90) días se emite la póliza definitiva con efecto retroactivo; en caso contrario, dichos certificados pagarán el impuesto dentro del plazo reglamentario, a contar desde el vencimiento de aquel término.

Artículo 47.—Están exentos de sellado los seguros contra riesgos que afecten a la agricultura o a la ganadería, mientras los productos asegurados no salgan de poder del productor, y los que cubran riesgos sobre bienes situados en el extranjero o destinados al país (seguros de importación).

Así mismo, están exentos los contratos u operaciones referentes a los seguros de vida individuales o colectivos y de accidentes personales y los títulos de ahorro y capitalización.

Artículo 48.—Corresponde impuesto fijo de:
\$ 0,10 (diez centavos):

a) A los cheques que no circulen fuera de la plaza de su emisión y los librados por los bancos a la orden de un tercero y a cargo de sí mismos;

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

22. Sustitúyese el artículo 42 por el siguiente:

Artículo 42.—Las pólizas de reaseguros referentes a riesgos que hayan abonado el impuesto no abonarán nuevo impuesto.

23. Derógase el artículo 45.

24. Sustitúyese el artículo 47, por el siguiente:

Artículo 47.—Quedan exentos del impuesto establecido en este capítulo:

- a) Los seguros contra riesgos que afecten a la agricultura o a la ganadería, mientras los productos asegurados no salgan de poder del productor;
- b) Los que cubran riesgos sobre bienes situados en el extranjero o destinados al país (seguros de importación);
- c) Los contratos u operaciones referentes a los seguros de vida individuales o colectivos y de accidentes personales;
- d) Los títulos de ahorro y capitalización;
- e) Las pólizas flotantes;
- f) Los contratos preliminares de reaseguros de carácter general, celebrados entre aseguradores, en los que se estipulen las bases y condiciones para la cesión de una parte de la responsabilidad;
- g) Los certificados provisionales de seguros cuando la póliza definitiva se emita con efecto retroactivo, dentro de los noventa (90) días.

25. Sustitúyese el artículo 48, por el siguiente:

Artículo 48.—Los cheques que se libren contra cuentas radicadas en jurisdicción nacional y los librados por los bancos a la orden de un tercero y a cargo de sí mismos pagarán diez centavos moneda nacional (\$ 0,10).

DICTAMEN DE COMISION

20. Igual.

21. Igual.

22. Igual.

23. Igual.

Artículo 48.—Los cheques que se libren contra cuentas radicadas en jurisdicción nacional y los librados por los bancos a la orden de un tercero y a cargo de sí mismos pagarán veinte centavos (\$ 0,20).

b) A los duplicados de notas de crédito;
\$ 0,50 (cincuenta centavos):

c) A las autorizaciones para retirar fondos de depósitos a plazo fijo, para endosar cheques con el objeto de depositarlos en cuenta corriente, o para librar cheques contra estas cuentas;

d) A los documentos denominados «trust receipt», por los cuales los destinatarios de las mercaderías retiran de los bancos los documentos de embarque al solo efecto de solicitar el análisis o revisión de la mercadería, siempre que por los mismos no se transfiera su dominio ni se contraiga obligación de pagar algún importe.

Artículo 49.— Los recibos de dinero, de cheques y giros, y, en general, cualquier constancia firmada que exteriorice la recepción de una suma de dinero consignada en instrumento privado, sus duplicados y demás ejemplares abonarán cada uno el siguiente impuesto:

De más de \$	500	hasta \$	1.000	\$	1
" " " "	1.000	" "	5.000	"	2
" " " "	5.000	" "	50.000	"	3
" " " "	50.000	" "	100.000	"	5
" " " "	100.000	" "		"	10

El impuesto a los recibos será satisfecho por sus otorgantes, siendo a cargo de los que recaben los duplicados y demás ejemplares el gravamen correspondiente a esos instrumentos.

Artículo 50.— Los giros internos pagaderos a su presentación o hasta cinco (5) días vista abonarán el impuesto con arreglo a la siguiente escala:

De más de \$	500	hasta \$	1.000	\$	1
" " " "	1.000	" "	5.000	"	2
" " " "	5.000	" "	50.000	"	3
" " " "	50.000	" "	100.000	"	5
" " " "	100.000	" "		"	10

Estarán sujetos a la misma imposición los cheques de plaza a plaza y todos los demás instrumentos que dispongan transferencias de fondos.

26. Sustitúyese el artículo 49, bajo el título Escrituras Públicas y Actuaciones Notariales, por el siguiente:

Artículo 49.— Corresponde impuesto fijo de:
\$ 6 (seis pesos):

a) A cada foja de los cuadernos de los protocolos de los escribanos de registro, sin perjuicio de abonar además el impuesto fijo o proporcional que corresponda al acto otorgado. Las fojas se computarán de acuerdo con el artículo 20.

\$ 150 (ciento cincuenta pesos):

a) A los poderes y sus sustituciones otorgados en escritura pública;

b) A los contradocumentos otorgados en escritura pública.

27. Deróganse los artículos 50 a 68.

24. Igual.

Artículo 49. — Corresponde impuesto fijo de ciento cincuenta pesos (\$ 150) a los poderes y sus sustituciones, y a los contradocumentos otorgados en escritura pública.

25. Igual.

Si los documentos pagaderos a su presentación hasta cinco (5) días vista no se aceptaren, pagaren o protestaren, dentro de un mes de la fecha de su otorgamiento, pagarán el impuesto prescrito por el artículo 14, inciso 1), deduciéndose en tal caso el gravamen tributado en virtud del presente artículo.

El impuesto de los documentos comprendidos en este artículo, cuando se concierten con los bancos de la ley 12.156, será pagado en su totalidad por quienes contraten con tales instituciones.

Artículo 51. — Corresponde impuesto fijo de:

Derogado

Cincuenta centavos (\$ 0,50):

- a) A las fojas posteriores a la primera y a cada una de las fojas de los demás ejemplares de los instrumentos gravados con impuesto menor de tres pesos (\$ 3);
- b) A los recibos de cosas muebles facilitadas en comodato o en depósito gratuito, cualquiera sea su valor y el plazo para restituirlas.

Un peso (\$ 1):

- c) A los documentos que se otorguen para acreditar la identidad de los cobradores o a las autorizaciones conferidas a los mismos para cobrar.

Tres pesos (\$ 3):

- d) A las fojas siguientes a la primera y a cada una de las fojas de las copias y demás ejemplares de los instrumentos gravados con impuesto no menor de tres pesos (\$ 3).

Cinco pesos (\$ 5):

- e) A los instrumentos de aclaratoria, confirmación o ratificación de actos anteriores que hayan pagado impuesto y a los de simple modificación parcial de las cláusulas pactadas en actos o contratos preexistentes, cuando:

- 1º No se aumente su valor, no se cambie su naturaleza o las partes intervinientes;

- 2º No se modifique la situación de terceros;
3º No se prorrogue o amplíe el plazo convenido.

Diez pesos (\$ 10):

- f) A los contratos o promesas de contratos de compraventa de cosas muebles o de transferencia de fondos de comercio y a las cesiones de los mismos, cuando se subordine su validez al otorgamiento posterior de escrituras públicas;
- g) A los contratos que estipulen la constitución de derechos reales —con excepción de los de compraventa de inmuebles— que, debiendo por la ley ser hechos en escritura pública, sean hechos por instrumentos privados;
- h) A los poderes y sus sustituciones;
- i) A las opciones que se concedan para la adquisición o venta de bienes o derechos de cualquier naturaleza, o para la realización ulterior de cualquier contrato, sin perjuicio del impuesto que corresponda al instrumento en que se formalice el acto a que se refiere la opción;
- j) A las declaraciones de dominio cuando se haya expresado en la escritura de compra que la adquisición se efectuó para la persona o entidad a favor de la cual ellas se formulen;
- k) A las divisiones de condominio;
- l) A los nombramientos de médicos y agentes por las compañías de seguros;
- m) A los boletos y promesas de compraventa de bienes inmuebles y a las cesiones y transferencias de tales boletos y promesas.

Treinta pesos (\$ 30):

- n) A cada foja de las escrituras de constitución o prórroga de los derechos reales de usufructo, servidumbre, uso, habitación y anticresis, cuando en las escrituras no se fije precio;
- o) A cada foja de los contratos de constitución provisoria de sociedades anónimas;

- p) A cada foja de los instrumentos que se gravan con impuesto proporcional, cuando su valor sea indeterminado y no sea posible efectuar la estimación a que se refiere el artículo 20;
- q) A cada foja de los contradocumentos referentes a bienes muebles o inmuebles.

Doscientos pesos (\$ 200):

- r) A los contratos de sociedad, cuando en ellos no se fije el monto del capital social y no sea posible efectuar la estimación a que se refiere el artículo 20.

Dos mil pesos (\$ 2.000):

- s) A la inscripción de sociedades extranjeras que establezcan sucursal o agencia en jurisdicción nacional, cuando éstas no tengan capital asignado y no sea posible efectuar la estimación a que se refiere el artículo 20.

Artículo 52. — Corresponde impuesto fijo de:

Derogado.

Tres pesos (\$ 3):

- a) A cada foja de los cuadernos de los protocolos de los escribanos de registro, sin perjuicio de abonar además el impuesto fijo o proporcional que corresponda al acto otorgado;
- b) A cada foja de los testimonios de escrituras públicas, actuaciones o certificados expedidos por los escribanos de registro.

Artículo 53. — Corresponde impuesto fijo de:

Derogado.

Cinco pesos (\$ 5):

- a) A cada foja de demanda, petición, diligencia, escrito o comunicación que se interponga, dirija o presente al Congreso, a las curias eclesíásticas, al Poder Ejecutivo y a las reparticiones administrativas del Estado y a cada foja de las actuaciones que con tal motivo se originen;
- b) A los certificados que expidan las reparticiones nacionales y a las legalizaciones de actos o documentos de las autoridades públicas;

c) A los certificados y testimonios de documentos archivados en las oficinas nacionales;

d) A cada foja siguiente de la primera con impuesto no menor de cinco pesos (\$ 5).
Diez pesos (\$ 10):

e) A los pedidos de reconsideración o apelación de resoluciones administrativas;

f) A las peticiones de mensuras de tierras sujetas a la jurisdicción nacional que se presenten al Poder Ejecutivo por cada cincuenta (50) kilómetros cuadrados de extensión, considerándose enteras las fracciones de esa superficie.

Veinte pesos (\$ 20):

g) A los pedidos de reconsideración de resoluciones ministeriales o del Poder Ejecutivo.

Cien pesos (\$ 100):

h) A las solicitudes que se presenten al Congreso directamente o por intermedio del Poder Ejecutivo, pidiendo exoneraciones o privilegios;

i) A los títulos de concesiones de tierras nacionales u otros que importen merced o privilegio, con excepción de las tierras acordadas a colonos, que pagarán el cinco por mil (5%) sobre el valor fijado por la autoridad concedente;

j) A las conceciones para la explotación de bosques nacionales;

k) A las solicitudes de permiso para aceptar condecoraciones otorgadas por gobiernos extranjeros.

Quinientos pesos (\$ 500):

l) A las solicitudes que se presenten al Congreso, directamente o por intermedio del Poder Ejecutivo, para la compra de tierras fiscales o donación de las mismas para colonizar o pidiendo privilegio.

Dos mil pesos (\$ 2.000):

- m) A las solicitudes de concesión para explotar líneas ferroviarias, puertos, canales u otras vías de comunicación, que se presenten a los poderes públicos.

Artículo 54.—Salvo disposiciones expresas en contrario, los sellos establecidos en los artículos siguientes se abonarán sobre la primera foja de un solo ejemplar de cada documento, y las fojas que siguen se repondrán con el sellado que corresponda, de acuerdo con lo establecido por el artículo 51, incisos a) y d), debiendo extenderse las copias en papel simple.

Artículo 55.—Las tasas de sellado indicadas a continuación para la navegación y comercio de cabotaje no afectan las franquicias establecidas al respecto por la ley 10.606, las que quedan en vigor.

Artículo 56.—Los manifiestos de entrada de buques procedentes de puertos que no sean de cabotaje pagarán:

- a) En el puerto de su primera entrada:

	Sin privi- legio \$	Con privi- legio \$
Hasta 50 toneladas de registro	40	60
De más de 50 hasta 100 toneladas de registro	80	120
De más de 100 hasta 500 toneladas de registro	180	240
De más de 500 hasta 1.000 toneladas de registro	300	400
De más de 1.000 toneladas de registro	460	600

- b) Por los buques en lastre se pagará la mitad de lo establecido precedentemente. Los que conduzcan carga en tránsito para el exterior y sin carga para puertos de la República serán considerados en lastre a los efectos de este impuesto;

Derogado.

Derogado.

Derogado.

- c) En el segundo y sucesivos puertos. los buques con o sin privilegio. cargados o en lastre, pagarán quince pesos (\$ 15).

Artículo 57. — Los manifiestos de entrada de buques que hagan navegación o comercio de cabotaje, cargados o en lastre, pagarán en su primera y sucesivas entradas:

	Sin privi- legio \$	Con privi- legio \$
Hasta 10 toneladas de registro	1.50	6.—
De más de 10 toneladas ...	3.—	6.—

Artículo 58. — Las solicitudes de apertura y cierre de registro de buques pagarán:

- a) Para puertos que no sean de cabotaje:

	m\$n.
Hasta 50 toneladas de registro	15.—
De más de 50 hasta 100 toneladas	30.—
De más de 100 hasta 500 toneladas	60.—
De más de 500 hasta 1.000 toneladas	100.—
De más de 1.000 toneladas	150.—

Este impuesto será de aplicación en el primer puerto donde el buque tome carga. En los demás regirá la tarifa que se fije para el cabotaje;

- b) Los buques de cabotaje pagarán por el mismo concepto en cada puerto en que tomen carga:

	m\$n.
Hasta 10 toneladas de registro	1.50
De más de 10 toneladas	3.—

Artículo 59. — Las guías de referencia para buques que se despachen a puertos que no sean de cabotaje, pagarán los impuestos establecidos en la escala del inciso a) del artículo anterior.

Derogado.

Derogado.

Derogado.

Artículo 60. — Los documentos requeridos para las operaciones de carácter aduanero que se expresan a continuación pagarán:

- 1º Certificados de depósito de los papeles de navegación:

m\$n

- a) Buques de cabotaje 1.50
b) Buques de ultramar 15.—

- 2º Manifiesto de rancho, cualquiera sea el número de fojas:

- a) Buques de cabotaje 1.50
b) Buques de ultramar 6.—

- 3º Solicitudes de alije, relaciones juradas, de carga y de tránsito de los buques que se despachen para puertos que no sean de cabotaje 6.—

- 4º Transbordos, reenbarques y permanencia:

- a) Para el exterior sobre dos ejemplares, cada uno 15.—
b) Para el interior sobre dos ejemplares, cada uno 3.—

- 5º Guías de tránsito sobre dos ejemplares, cada uno 3.—

6º

- a) Permisos y guías de embarque sobre dos ejemplares, cada uno 3.—
b) Boletín de embarque 3.—
c) Los permisos de registro que los patrones de embarcaciones de cabotaje, no mayores de cinco (5) toneladas de registro, soliciten a las Aduanas o Resguardos para el transporte de mercancías nacionales o nacionalizadas a un puerto vecino de naciones limítrofes .. 1.50

- 7º Permisos de desembarque de frutos para depósito 6.—

- 8º Conocimiento del exterior y boletas de muestras y encomiendas en general y conocimientos de efectos exportados 6.—

Derogado.

	m\$n.
9º Los endosos de conocimientos a que se refiere el artículo 340 de las ordenanzas, salvo que se hagan al solo efecto del despacho aduanero	15.—
10.	
a) Transferencias de mercaderías en depósito sobre dos ejemplares, cada uno	15.—
b) Transferencias de exportación ..	3.—
11.	
a) Copias de depósitos sobre dos ejemplares, cada uno	6.—
b) Renovaciones de copias de depósito	6.—
12.	
a) Manifiesto de despacho directo	18.—
b) Manifiesto de depósito	18.—
13. Notas de toma de contenido	3.—
14. Solicitudes de análisis (extracción de muestras, cualquiera sea el número de fojas)	6.—
15. Permisos de trasiego y rehínche ..	6.—
16. Las pólizas de muestras y encomiendas y las pólizas para el despacho de importación de piezas postales:	
a) Con valor no mayor de o\$s. 100	3.—
b) De más de o\$s. 100	15.—
17. Las garantías que se otorguen a favor de las Aduanas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1046 de las ordenanzas	3.—

Art. 61. — Las solicitudes de inscripción o de reinscripción en el respectivo registro de firmas, de los importadores, exportadores, despachantes de aduana, agentes marítimos o industriales y las de los dependientes que los representen, se formularán en un sellado de diez pesos moneda nacional (m\$n. 10).

Derogado.

Art. 62. — Los certificados de arqueos pagarán un peso con cincuenta centavos moneda nacional

Derogado.

DISPOSICION VIGENTE
(Texto ordenado en 1961)

(m\$.n. 1.50) por cada diez toneladas que el buque mida de capacidad bruta, computándose como enteros las fracciones de decenas.

Art. 63. — Las cartas de sanidad para embarcaciones, pagarán:

m\$.n.

- a) Hasta de cinco toneladas de registro 1.50
- b) Cuando excedan de cinco toneladas 6.—

Artículo 64. — Los pasavantes que expidan las prefecturas o subprefecturas marítimas, pagarán \$ 1,50 (un peso con cincuenta centavos).

Los permisos de sobordo para buques de ultramar, \$ 6.— (seis pesos).

Artículo 65. — Los certificados anuales de seguridad de máquinas pagarán:

\$ m/n.

- a) Para embarcaciones que tengan desde 20 hasta 50 caballos de fuerza .. 20.—
- b) Para embarcaciones que posean mayor fuerza 40.—

Artículo 66. — Los roles de tripulantes que despachen las prefecturas o subprefecturas marítimas, pagarán:

\$ m/n.

- a) Para buques de cabotaje 1,50
- b) Para buques de ultramar 6.—

Artículo 67. — Los contratos entre patrones y marineros de los buques mercantes, pagarán \$ 1,50 (un peso con cincuenta centavos).

Artículo 68. — Todos los otros documentos de presentación obligatoria ante las autoridades aduaneras y portuarias no previstos expresamente en los artículos anteriores se extenderán en papel simple, salvo los que estén gravados como actuación administrativa común.

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

Derogado.

Derogado.

Derogado.

Derogado.

Derogado

Derogad

DICTAMEN DE COMISION

Artículo 69. — Ante los jueces nacionales de primera instancia de paz y los del trabajo de la Capital Federal el sellado de actuación será de \$ 4 (cuatro pesos) por foja, cuando el valor del juicio exceda de \$ 1.000 (un mil pesos) o se trate de juicio cuyo valor sea indeterminado.

Ante los jueces de paz del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el sellado de actuación será de \$ 3 (tres pesos) por foja, cuando el valor del juicio exceda de \$ 1.000 (un mil pesos) o se trate de juicios cuyo valor sea indeterminado.

Artículo 70. — En los juicios de desalojo se tendrá como valor del juicio, a los efectos del artículo anterior, el importe de dos (2) meses de alquiler.

Artículo 71. — Ante la Cámara Nacional de Apelaciones de Paz y la del Trabajo de la Ca-

28. Sustitúyese el artículo 69, por el siguiente:

cien ante el Poder Judicial de la Nación y tribunales arbitrales, cuando el valor del juicio exceda de \$ 1.000 (un mil pesos) o se trate de juicio cuyo valor sea indeterminado abonarán en concepto de reposición de fojas un impuesto del veinticinco por ciento (25 %) de las tasas que establece el artículo 82, debiendo ser como mínimo de \$ 200 (doscientos pesos) y como máximo de \$ 5.000 (cinco mil pesos).

El pago será único hasta la terminación de la actuación en todas las instancias, salvo cuando por ampliación posterior, acumulación de acciones o reconvención, se aumente el valor cuestionado, en cuyo caso se pagará o se completará el impuesto hasta el importe que corresponda.

En las actuaciones no sujetas al pago de impuesto de justicia el gravamen a satisfacer por reposición de fojas será de \$ 200 (doscientos pesos).

En los juicios ejecutivos y de apremio se pagará la mitad del impuesto fijado en los párrafos primero y tercero.

29. Sustitúyese el artículo 70, por el siguiente:

Artículo 70. — Ante los jueces nacionales de primera instancia de paz, los del trabajo cuando el valor del juicio no exceda el límite de competencia de la justicia de paz, de la Capital Federal y ante los jueces de paz del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el impuesto de actuación será de \$ 100 (cien pesos).

Ante los jueces y tribunales del trabajo el impuesto se pagará con posterioridad a la sentencia definitiva y ante los demás jueces y tribunales en la misma oportunidad que en cada caso establece el artículo 86.

30. Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:

Artículo 71. — El impuesto de actuación será considerado como parte de las costas del juicio.

26. Igual.

27. Igual.

28. Igual.

pital Federal, el sellado de actuación será de \$ 7 (siete pesos) por foja cuando el valor del juicio exceda de \$ 1.000 (un mil pesos) o se trate de juicios cuyo valor sea indeterminado.

Artículo 72. — Ante los jueces nacionales de primera instancia de la Capital Federal en lo civil y comercial federal, en lo criminal y correccional federal, en lo contencioso-administrativo, en lo civil, en lo comercial, en lo criminal de instrucción, en lo criminal de sentencia, en lo correccional, del trabajo, cuando el valor del juicio exceda el límite de competencia de la justicia de paz, en lo comercial de registro y los jueces federales de primera instancia con asiento en provincias, el sellado de actuación será de siete pesos moneda nacional (\$ 7) por foja.

Cuando debido al fuero de atracción que ejercen los juicios universales, o por tratarse de sucesiones o de asuntos que interesen al derecho de familia, deba conocer la justicia de primera instancia en juicios que por su monto hubieran debido corresponder al conocimiento de la justicia de paz, se actuará en el sellado que fija el párrafo 1º del artículo 69.

Artículo 73. — Ante los jueces federales de primera instancia del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el sellado de actuación será el establecido en el artículo 69 (primer párrafo), cuando el valor del juicio exceda de mil pesos moneda nacional (\$ 1.000) y hasta dos mil pesos moneda nacional (\$ 2.000), o se trate de juicios cuyo valor sea indeterminado, y el establecido en el artículo 72 cuando exceda de dos mil pesos moneda nacional (\$ 2.000).

Artículo 74. — Ante las cámaras nacionales de apelaciones de la Capital Federal en lo civil, en lo comercial, en lo criminal y correccional, del trabajo cuando el valor del juicio exceda el li-

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

cio y soportado en definitiva por las partes en la misma proporción en que dichas costas deben ser satisfechas.

En los expedientes judiciales o arbitrales en que una de las partes se halle eximida del impuesto que establece esta ley, la parte contraria que resulte vencida con imposición de costas, deberá reponer el total del impuesto de actuación.

En las tercerías será de aplicación lo dispuesto en el artículo 83.

31. — Deróganse los artículos 72 a 79.

Derogado.

Derogado.

DICTAMEN DE COMISION

29. Igual

mite de competencia de la justicia de paz, en lo federal y contencioso-administrativo, las cámaras federales de apelaciones, con asiento en provincias y en el territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y los tribunales arbitrales, el sellado de actuación será de once pesos moneda nacional (§ 11) por foja.

Artículo 75. — Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el sellado de actuación será:

a) En los asuntos de jurisdicción originaria:

1º El que fija el artículo 69 (párrafo primero) cuando el valor del juicio exceda de mil pesos moneda nacional (§ 1.000) y hasta dos mil pesos moneda nacional (§ 2.000).

2º Siete pesos moneda nacional (§ 7) por foja cuando exceda de dos mil pesos moneda nacional (§ 2.000) o sea indeterminado;

b) En los asuntos en que intervenga por apelación ordinaria o extraordinaria, de catorce pesos moneda nacional (§ 14).

Artículo 76. — En todas las actuaciones judiciales, con excepción de las que tramiten ante la justicia de paz y del trabajo, cuando el valor del juicio no exceda el límite de competencia de aquella, los abogados y procuradores pagarán dos pesos moneda nacional (§ 2) y sesenta centavos moneda nacional (§ 0.60), respectivamente, por cada escrito. Los demás profesionales o peritos que intervengan pagarán dos pesos moneda nacional (§ 2) por cada escrito, informe, pericia, testimonio o instrumento que presenten.

En la justicia de paz y del trabajo, cuando el valor del juicio no exceda el límite de competencia de aquella, se abonará la mitad de estos gravámenes. Cuando los profesionales o peritos actúen por derecho propio no pagarán impuesto.

Artículo 77. — Se considerarán actuaciones sujetas a impuestos: las peticiones, escritos, actas o diligencias producidos en los expedientes judiciales o arbitrales y las notas, oficios, exhortos o comunicaciones dirigidos a terceros por los tribu-

Derogado.

Derogado.

Derogado.

nales judiciales o arbitrales con motivo de los expedientes que ante ellos tramiten y las actuaciones que originen su diligenciamiento.

Todo cargo puesto por funcionario autorizado en escritos judiciales que se presenten fuera de horas de oficina se repondrá con un sello de veinte pesos moneda nacional (\$ 20).

Artículo 78. — Serán repuestas con el sellado de actuación que corresponda, según el valor del juicio, todas las piezas que con cualquier motivo sean agregadas a un expediente judicial o arbitral, salvo los instrumentos públicos o privados que hayan pagado el impuesto de sellos nacional, provincial o municipal correspondiente. los que estén expresamente exceptuados del mismo y los que debiendo haberlo pagado hayan infringido las presentes disposiciones, en cuyo último caso se procederá en la forma establecida en el artículo 120 y siguientes.

En los expedientes judiciales o arbitrales en que una de las partes se halle eximida del impuesto que establece esta ley, la parte contraria que resulte vencida, con imposición de costas, deberá reponer el total del sellado de actuación, incluso las fojas en que actuó o que utilizó la parte exenta.

Artículo 79. — Los magistrados y funcionarios judiciales, los árbitros y arbitradores, los tutores, los curadores, los inventariadores, los síndicos y liquidadores de concursos, convocatorias de acreedores y quiebras y los partidores, podrán actuar en papel simple, con cargo de reposición por quien corresponda.

Artículo 80. — Los autos que ordenan reposición de sellado de actuación deberán ser cumplidos dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal de la parte obligada a efectuar la reposición o de su representante. Transcurrido ese término, se aplicará de oficio la multa que establece el artículo 101 de la cual será también responsable el procurador que represente a la parte infractora.

Derogado.

Derogado.

32. Sustitúyese el último párrafo del artículo 80 por los siguientes:

30. Igual.

En estos casos se seguirá el procedimiento establecido por los artículos 124 a 126.

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

DICTAMEN DE COMISION

Cuando el presunto infractor sea la parte actora o todas las partes intervinientes, el juicio quedará paralizado hasta el pago o afianzamiento de la multa e impuesto que corresponda.

Cuando el presunto infractor sea la parte demandada y la parte actora aparezca prima facie exenta de responsabilidad, el juicio seguirá su curso formándose incidente por separado con la sola intervención del representante fiscal y del presunto infractor.

Cuando corresponda paralizar las actuaciones, ambas partes o cualesquiera de ellas podrán obtener que el juicio siga su curso, depositando a la orden del juzgado, en el Banco de la Nación Argentina, a las resultas de la sentencia que se dicte sobre la presunta infracción, el importe del impuesto y multa reclamados por el representante fiscal.

Artículo 86. — El impuesto de justicia será abonado por quien haya iniciado las actuaciones respectivas en las oportunidades siguientes:

- a) En los casos previstos en los incisos a), b), c), g), h), i) y k) del artículo 82, en el acto de iniciación de las actuaciones respectivas. Cuando la determinación del monto del asunto dependa de diligencias previas, éstas deberán ser decretadas de oficio por el juez o tribunal respectivo, quien fijará para su diligenciamiento un plazo prudencial, vencido el cual se paralizará el procedimiento y el impuesto será pagado dentro del quinto día del cumplimiento de las mismas;
- b) En los casos previstos en los incisos d) y j) del artículo 82, simultáneamente con el pago del impuesto a la transmisión gratuita o al solicitar, en su caso, la exención de este último impuesto;
- c) En los casos previstos en el inciso e) del artículo 82, al nacerse cualquier pago o distribución de fondos provenientes de la venta de bienes del concurso o liquidación;
- d) En el caso previsto en el inciso f) del artículo 82, al notificarse el auto de homologación del concordato;
- e) En los juicios por separación de bienes, cuando se promueva la liquidación de la sociedad conyugal o se la instrumente por acuerdo de partes;

33. Agrégase en el artículo 86, en el inciso a), a continuación de la cita del inciso k), la cita del inciso q).

31 Igual.

- f) En las peticiones de herencias, al determinarse el valor de la parte correspondiente al peticionante.

Artículo 87. — El impuesto de justicia se abonará por medio de papel sellado del valor correspondiente, que se agregará al respectivo expediente.

Artículo 91. — Estarán exentos del impuesto de sellos:

1º La Nación, las provincias, las municipalidades, las dependencias administrativas nacionales, provinciales o municipales, las comisiones de fomento oficialmente reconocidas y las reparticiones autárquicas.

No se encuentran comprendidos en esta exención los organismos o empresas del Estado que ejerzan actos de industria y/o comercio como entidades de derecho privado, salvo el caso de la prestación de servicios públicos o de la realización de operaciones o contratos vinculados con la defensa nacional;

2º Los bancos oficiales nacionales, provinciales y municipales, y el ex Instituto Argentino de Promoción del Intercambio;

3º Las asociaciones y entidades civiles de asistencia social, caridad, beneficencia, educación e instrucción gratuita, científicas, literarias, artísticas, gremiales, culturales y protectoras de animales, siempre que sus réditos y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios.

Se excluye de la exención establecida en el párrafo anterior, a aquellas entidades organizadas jurídicamente como sociedades anónimas u otra forma comercial y las que obtienen sus recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares;

4º Las personas que actúen con carta de pobreza expedida por autoridad competente nacional o provincial.

34. Sustitúyese el artículo 87, por el siguiente:

Artículo 87. — De toda presunta infracción al impuesto de justicia se dará vista al representante del fisco a que se refiere el artículo 121.

35. Modifícase el artículo 91 en la siguiente forma:

32. Igual.

33. Igual.

- a) Suprímese en el inciso tercero la palabra „gratuita, e intercálase la palabra „religiosas, antes de „educación e instrucción.

- 5º Las gestiones y actuaciones de los empleados públicos y de los militares, relativas al cobro de sus sueldos y pedidos de licencia.
- 6º Los recibos que otorguen las personas asistidas por las asociaciones de beneficencia.
- 7º Las peticiones a los poderes públicos en el ejercicio de un derecho político.
- 8º Las comunicaciones obligatorias dirigidas al gobierno y/o sus dependencias, a efectos de contribuir a la percepción de los impuestos en general y todo instrumento otorgado a su favor para documentar o afianzar el pago de impuestos, derechos, contribuciones y aportes jubilatorios, recargos de cambio y todo otro similar.
- 9º Las comunicaciones obligatorias que a las empresas concesionarias de servicios públicos les sean exigidas por las autoridades administrativas, cuando se refieran al servicio concedido.
10. Las comunicaciones administrativas que en cumplimiento de la ley respectiva deban hacer los patrones y aseguradores sobre indemnizaciones por accidentes de trabajo.
11. Los certificados de fumigación de barcos o exención de ese requisito.
12. Los certificados de domicilio, de buena conducta y salud.
13. Las presentaciones de interés general que se dirijan a las oficinas públicas.
14. Los instrumentos públicos o privados, extendidos por razón del lugar, en el sello provincial correspondiente cuando sean presentados ocasional o incidentalmente ante alguna autoridad nacional.
15. Las gestiones judiciales del Banco Nacional en liquidación.
16. La protocolización o agregación de documentos que hayan pagado el impuesto.

- b) Sustitúyese en el inciso 7º la expresión «poderes públicos» por «poder judicial».
- c) Sustitúyense los incisos 5º, 6º, 9º y 10 por los siguientes:
 - 5º Los instrumentos y operaciones a título gratuito, o cuyo valor no exceda de \$ 25.000 (veinticinco mil pesos), salvo los previstos en los incisos h), i) j), l) y s) del artículo 14, que lo será hasta \$ 500 (quinientos pesos).
 - 6º El arzobispado de Buenos Aires.
 - 9º Las transferencias postales o telegráficas y los giros vendidos por instituciones bancarias pagaderos a su presentación o hasta cinco (5) días vista aunque no se aceptaren, pagaren o protestaren dentro de un mes de la fecha de su otorgamiento.
 10. Los instrumentos en que se documenten la transferencia de bienes muebles e inmuebles en los casos de aporte de capital a sociedades o de disolución y liquidación de las mismas.
- d) Deróganse los incisos 11 a 13, 17, 18, 20, 23, 26, 27, 31 a 38, 41, 46 a 48 y 50.

Derogado.

Derogado.

Derogado.

- | | |
|---|-----------|
| 17. Los instrumentos que extinguen contratos u obligaciones, que al constituirse hayan pagado el impuesto correspondiente, cuando de ellos no resulte una nueva obligación. | Derogado. |
| 18. Las cartas de pago, cancelaciones o liberaciones de gravámenes y las reinscripciones de hipoteca. | Derogado. |
| 19. Las letras que se otorguen a favor del Banco Nacional en liquidación, por deudas garantizadas con hipoteca. | |
| 20. Las negociaciones de letras de tesorería emitidas por el Gobierno Nacional. | Derogado. |
| 21. Las guías de campaña y sus endosos; | |
| 22. Los endosos que se efectúen en documentos comerciales y en los warrants y certificados de depósito de mercaderías. | |
| 23. Los actos de constitución de asociaciones religiosas, culturales y de beneficencia y las gestiones para el cobro de subvenciones acordadas por el Estado. | Derogado. |
| 24. Los contratos de suscripción de acciones y los actos que formalicen la disolución y liquidación de sociedad. | |
| 25. Las fianzas que se otorguen a favor de los empleados públicos o particulares, de los escribanos públicos y de los despachantes de aduana, en garantía del buen desempeño de sus funciones. | |
| 26. Los escritos y peticiones presentados a la Municipalidad de la Capital Federal y las actuaciones que ellos originen. | Derogado. |
| 27. Las gestiones ante el Gobierno y reparticiones públicas por cobro o devolución de sumas menores de trescientos pesos moneda nacional (m\$n. 300). no pudiendo separarse o desdoblarse las que obedezcan a la misma causa. | Derogado. |
| 28. Los escritos y actuaciones producidos en cualquier jurisdicción para la defensa en juicio criminal, sin perjuicio del cargo de reposición en caso de condena. | |
| 29. Los contratos por correspondencia de comerciantes minoristas relativos exclusivamente a la venta al contado o a plazo no mayor de treinta (30) días, de las mercaderías con las cuales ellos negocian; | |

- pero en caso de ser presentados en juicio se aplicará lo dispuesto en el segundo apartado del artículo 39.
30. Las boletas que entreguen los martilleros a los compradores de cosas muebles y semovientes en remate público y las cuentas de venta o liquidaciones formuladas por martilleros, consignatarios y comisionistas.
31. Las autorizaciones a terceros para comprar mercaderías con carnets de crédito otorgados por las casas de comercio y las autorizaciones para cobrar sueldos de obreros y empleados.
32. Los recibos que expidan los escribanos de registro por las sumas que se les entreguen para pagar los impuestos a que están sujetos los actos que deban pasar ante ellos y los recibos expedidos por los despachantes de aduana por las sumas que perciban para pagar los impuestos fiscales.
33. Los recibos otorgados por los beneficiarios de las indemnizaciones parciales o totales de seguros sobre accidentes de trabajo.
34. Los recibos que no sean instrumentos de pago, las órdenes de entrega de dinero o de mercaderías y los comprobantes internos de contabilidad que otorguen empleados, obreros, oficinas o dependencias de una misma empresa o casa comercial, incluyendo los recibos de reintegro de gastos efectuados o a efectuarse por cuenta del empleador.
35. Los recibos u otros instrumentos que se utilicen para extraer fondos de las cuentas de depósitos a plazo fijo o de caja de ahorro y las autorizaciones para retirar fondos de estas últimas.
36. Los recibos de fondos que se perciban en virtud de operaciones de cambio, giros o transferencias que hayan pagado el impuesto correspondiente.
37. Las copias de las cédulas de notificaciones administrativas o judiciales que se dejen al notificado.

Derogado.

Derogado.

Derogado.

Derogado.

Derogado.

Derogado.

Derogado.

38. La documentación aduanera originada por la importación de libros, cuando entren al país por vía postal.
39. Las actuaciones judiciales seguidas ante tribunales provinciales, que por cualquier causa deban ser traídas a la jurisdicción nacional.
40. Los instrumentos y operaciones cuyo valor no exceda de quinientos pesos moneda nacional (m\$. 500).
41. Los actos gravados por la ley de impuesto a la transmisión gratuita de bienes.
42. Las operaciones sobre semovientes gravadas por la ley 11.747.
43. Los recibos de títulos, acciones y valores mobiliarios en general, entregados para su custodia y administración.
44. Los demás casos contemplados por leyes especiales que no estén expresamente derogados por esta ley.
45. Las sociedades cooperativas constituidas conforme a la ley 11.388 e inscriptas como tales en la Secretaría de Comercio, así como los actos que se celebren para su constitución, registro, reconocimiento y disolución.
46. A partir del 7 de mayo de 1953, las gestiones y actuaciones promovidas por alumnos de institutos oficiales y adscriptos, vinculados con sus estudios.
47. Las diligencias de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado, las aclaraciones y modificaciones a que dé lugar su trámite ulterior y la cancelación de las inscripciones practicadas.
48. Los escritos y actuaciones que en cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias presenten y tramiten los patronos y asociaciones patronales ante las cajas nacionales de previsión, a partir de la fecha sanción de la ley 14.236.
49. Los gobiernos extranjeros en los contratos y operaciones que suscriban con el gobierno nacional, siempre que medie reciprocidad de trato.
50. Las letras que deber firmar los responsables de conformidad con los artículos

Derogado.

Derogado.

Derogado.

Derogado.

Derogado.

Derogado.

4º y 5º de la ley de impuestos internos (texto ordenado en 1956).

51. Los contratos e instrumentos que documenten operaciones de cambio sobre o desde el exterior.

Artículo 96. — Ninguna de las exenciones establecidas por esta ley alcanza al sello que deben llevar las fojas de los cuadernos de los protocolos de los escribanos, ni a las de los testimonios de escrituras públicas otorgados por los escribanos de registro.

Artículo 98. — Las oficinas y reparticiones de la administración pública gestionarán la reposición de los sellos de todos los asuntos que ante ellas tramiten, a cuyo efecto, deberán intimar a los responsables, con indicación de la cantidad adeudada, la reposición dentro del quinto día, bajo apercibimiento de aplicarse la multa correspondiente. Vencido el trámite indicado sin haberse repuesto el sello, se dará intervención a la dirección del impuesto a los efectos de su cobro y de la aplicación de multa, si correspondiese.

Artículo 103. — Los instrumentos detallados en el artículo 49 de esta ley, sin el impuesto correspondiente, estarán sujetos a las siguientes multas:

De m\$.n. 10 los gravados con m\$.n. 1	
" " 20 " " " " 2	
" " 30 " " " " 3	
" " 50 " " " " 5 y 10	

En el caso de pago parcial del impuesto, la multa se reducirá en proporción al mismo:

De estas penalidades serán solidariamente responsables todos los infractores en la misma extensión que establece el primer párrafo del artículo anterior.

Artículo 124. — Cuando el presunto infractor sea la parte actora o todas las partes intervinientes, el juicio quedará paralizado hasta el pago o afianzamiento de la multa e impuesto que corresponda.

Artículo 125. — Cuando el presunto infractor sea la parte demandada y la parte actora aparezca prima facie exenta de responsabilidad, el juicio seguirá su curso formándose incidente por

36. Derógase en el artículo 96 la expresión final «ni a las de los testimonios de escrituras públicas otorgados por los escribanos de registro».

37. Deróganse los artículos 98, 124 a 126 y 137.

Derogado.

Derogado.

34. Derógase el artículo 96.

35. Deróganse los artículos 98, 103, 124 a 126 y 137.

Derogado

DISPOSICION VIGENTE
(Texto ordenado en 1961)

separado con la sola intervención del representante fiscal y del presunto infractor.

Artículo 126. — Cuando corresponda paralizar las actuaciones, ambas partes o cualquier de ellas podrán obtener que el juicio siga su curso, depositando a la orden del juzgado, en el Banco de la Nación Argentina, a las resultas de la sentencia que se dicte sobre la presunta infracción, el importe del impuesto y multa reclamados por el representante fiscal.

Artículo 137. — Cuando los sellos de reposición de actos notariales de cualquier naturaleza queden inutilizados por no haberse otorgado la escritura proyectada, podrán ser canjeados hasta los dos (dos) años de la fecha de su expedición, siempre que tal hecho se haga constar en ellos por nota especial sellada y firmada por el escribano que efectuó el pago o su reemplazante legal en el registro.

Nuevo.

Nuevo.

Vigencia de la reforma.

DISPOSICION VIGENTE
LEY 14.385, art. 14, modificada por decreto ley 8.718/57

Artículo 14. — La compra y sucesivas transferencias a título oneroso de automóviles, camiones, camionetas, jeeps, motocicletas y motonetas, estarán sujetas durante 15 (quince) años, en todo el territorio del país, a un impuesto, a cargo del adquirente, de \$ 200 (doscientos pesos) a \$ 20.000

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

Derogado.

Derogado.

38. Las disposiciones de la ley de sellos, texto ordenado en 1961, relativas al ingreso del gravamen en papel sellado se entenderán referidas a las otras formas de ingreso previstas en esta ley, conforme lo establezca la reglamentación.

39. Aclárase que los instrumentos, actos y operaciones cuyos gravámenes se deroguen por la presente ley quedan exentos de impuesto de sellos.

40. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a partir del 1º de enero de 1962. Las actuaciones judiciales en curso a esa fecha se registrarán por la legislación anterior.

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 8º — Créase, a partir del 1º de enero de 1962, un adicional del 50 % (cincuenta por ciento), con destino a rentas generales, al impuesto establecido por el artículo 14 de la ley 14.385 y sus modificaciones, exclusivamente sobre la compra y sucesivas transferencias de automotores usados.

DICTAMEN DE COMISION

36. Igual.

37. Aclárase que los instrumentos, actos y operaciones cuyos gravámenes se deroguen por este artículo quedan exentos de impuesto de sellos.

38. Igual.

SANCION DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS

Suprimido.

(veinte mil pesos) por unidad, cuyo producido ingresará al fondo creado por el artículo 13 de la presente ley.

El Poder Ejecutivo graduará el impuesto dentro de los límites establecidos en función de las distintas categorías que a tal efecto determine la reglamentación.

Exceptúanse del presente impuesto las compras o transferencias de automotores destinados al transporte colectivo o individual de pasajeros.

Igualmente estarán exentas las compras de vehículos adquiridos para su reventa por personas o entidades que hagan de la compra-venta de automotores el objeto habitual de su actividad, siempre que cumplan los requisitos y condiciones que determine la Dirección General Impositiva.

Escala del impuesto: s/decreto 22.275/54, modificado por decretos 10.382/58 y 6.124/61:

Artículo 1º — El impuesto establecido por el artículo 14 de la ley 14.385 a la compra y sucesivas transferencias a título oneroso de automotores, comprendida la importación directa efectuada por los usuarios, se aplicarán en la forma que se indica a continuación:

- a) Los automóviles y camiones cuyos modelos fueren del año en que se efectúa su compra, transferencia o importación por el usuario, o del inmediato siguiente, pagarán el gravamen que corresponda a la categoría en que estén comprendidos, con arreglo a la siguiente escala:

Automóviles

Categoría	Peso kg.	Impuesto básico m\$.n.	Impuesto adicional m\$.n.	Total del impuesto m\$.n.
Primera	2.001 y más	3.200	16.800	20.000
Segunda	1.501 a 2.000	2.560	13.440	16.000
Tercera	1.151 a 1.500	1.920	10.080	12.000
Cuarta	hasta 1.150	1.280	6.720	8.000

Camiones

Categoría	Peso incluida carga kg.	Impuesto basico m\$.n.	Impuesto adicional m\$.n.	Total del impuesto m\$.n.
Primera	20.001 y más	3.200	16.800	20.000
Segunda	16.001 a 20.000	2.720	14.280	17.000
Tercera	12.001 a 16.000	2.240	11.760	14.000
Cuarta	8.001 a 12.000	1.760	9.240	11.000
Quinta	4.001 a 8.000	1.280	6.720	8.000
Sexta	hasta 4.000	960	5.040	6.000

En los casos de operaciones realizadas con automóviles o camiones de modelos anteriores al año de la compra, transferencia o importación, el impuesto se rebajará en un importe equivalente al que resulte de deducir el cinco por ciento (5 %) del monto del impuesto adicional aplicable según la categoría, por cada año de antigüedad del modelo.

b) Las motocicletas y motonetas pagarán un impuesto fijo de \$ 1.600 (mil seiscientos pesos) y \$ 800 (ochocientos pesos) por operación, respectivamente, cualquiera fuese el modelo y demás características de la unidad comprada, transferida o importada.

A los efectos del impuesto, las rurales, y jeeps, quedan equiparados a automóviles y las camionetas y furgones a camiones.

DISPOSICION VIGENTE
Decreto ley 6.264/58, modificatorio del artículo 5º
del decreto ley 7.101/56

Art. 5º — Con el fin de establecer y determinar el contralor del sistema estatuido por este decreto ley, se constituirá una comisión permanente con sede en la ciudad de Ushuaia, integrada por un representante de cada uno de los siguientes organismos: territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Ministerio de Marina —Base Región Naval Prefectura Nacional Marítima—, Ministerio de Hacienda de la Nación, Banco de la Nación Argentina, Dirección Nacional de Aduanas, Cámara de Comercio e Industria del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Art. 7º — Agrégase al artículo 5º del decreto ley 7.101/56, modificado por el artículo 1º del decreto ley 6.264/58, como párrafo segundo, el siguiente:

DISPOSICION VIGENTE
Decreto ley 6.264/58 modificatorio del artículo 5º
del decreto ley 7.101/56

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

DICTAMEN DE COMISION

La Comisión Permanente a los fines de su cometido podrá requerir a los importadores, comerciantes o revendedores de mercaderías introducidas al amparo de las franquicias de este decreto ley todos los informes, declaraciones y elementos de juicio que estime pertinentes así como la exhibición de los libros, papeles y demás documentos comerciales que hagan al caso, y aquéllos quedan obligados a proporcionárselos o a exhibírselos, según corresponda. Todo aquel que incurra en falsedad en las informaciones que proporcione a la Comisión o se niegue a suministrarlas o que impida o entorpezca la acción de la misma, será penado con una multa de hasta cien mil pesos (\$ 100.000), previa información sumaria resuelta por el organismo, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponderle en el ámbito de cada gravamen en que haya incurrido en infracción.

DISPOSICION VIGENTE
(Texto ordenado en 1955, modificado por ley 14.789)

Artículo 3º — Las entidades reconocidas por el Poder Ejecutivo, así como las autorizadas para establecer en el país sucursal o agencia de sus operaciones y las inscritas conforme a la ley 8.867, pagarán en concepto de derecho anual de inspección una cuota fija de \$ 3.000 (tres mil pesos) más un adicional de \$ 300 (trescientos pesos) por cada millón o fracción de millón del capital suscrito que arroje el balance general correspondiente al ejercicio cerrado en el año inmediato anterior.

Las sucursales o agencias de compañías extranjeras que no tengan capital asignado pagarán únicamente la cuota fija de \$ 3.000 (tres mil pesos) anuales.

Las sociedades anónimas en liquidación abonarán por el mismo concepto la suma de \$ 1.500 (mil quinientos pesos) anuales.

A los efectos de lo dispuesto por el artículo 4º, el adicional se calculará en función del capital suscrito en el acto constitutivo de la entidad.

Artículo 9º — Aumentase, a partir del 1º de enero de 1962, en un cien por ciento (100 %) las tasas y el derecho máximo establecidos por la ley de derecho de inspección de sociedades anónimas, texto ordenado en 1955, modificado por la ley 14.789.

Art. 8º — Igual.

Fijase en \$ 20.000 (veinte mil pesos) el importe máximo a abonar por la aplicación de las disposiciones precedentes.

La falta de pago en término de los derechos fijados en este artículo dará lugar a la aplicación de los recargos establecidos en la ley 11.683.

DISPOSICION VIGENTE
Ley de Aduana (Texto ordenado en 1956 y sus modificaciones)

Art. 16. — En los casos de transgresión simultánea a las leyes de aduana y a las comunes a que se refiere el artículo 1.060 de la ley 810 y en los de contrabando definido por el artículo 187 de esta ley, la autoridad del sumario sustanciará administrativamente las transgresiones, aplicando las disposiciones que correspondan a la infracción o contrabando, debiendo pasar los antecedentes a la justicia para que resuelva sobre el delito común o pena privativa de la libertad que corresponda por el contrabando.

Art. 20. — Cuando cualquier otra autoridad, independiente de la aduana, aprehendiese un contrabando o tuviese conocimiento de una infracción a las leyes o reglamentos de aduana, deberá poner el hecho en conocimiento del Administrador a los efectos de la sustanciación de causa, procediendo a remitir a la policía o prefectura las personas que hubiese detenido, las que quedarán a disposición del funcionario aduanero, a los efectos de tomarles declaración indagatoria.

Art. 9º — Modifícase la ley de aduana, texto ordenado en 1956 y sus modificaciones, en la siguiente forma:

1º Sustitúyese la ley de aduana, texto ordenado en 1956 y sus modificaciones, en la siguiente forma:

Artículo 16. — En los casos de transgresión simultánea a las leyes de aduana y a las comunes a que se refiere el artículo 1.060 de las ordenanzas de aduana y en los casos de contrabando definido por el artículo 187 de la presente ley, la autoridad aduanera sustanciará el sumario administrativo a los fines fiscales, debiendo dentro de las 24 horas de tener conocimiento del hecho, comunicarlo a la autoridad policial competente a fin de que ésta con la intervención judicial que corresponda, instruya el sumario de prevención correspondiente.

2º Sustitúyese el artículo 20 por el siguiente:

Artículo 20. — Cuando cualquier otra autoridad independiente de la aduana aprehendiere un contrabando o tuviese conocimiento de una infracción a las leyes o reglamentos de aduana deberá poner el hecho en conocimiento del administrador a los efectos de la sustanciación del sumario fiscal.

Pondrá así mismo a disposición de la autoridad aduanera, los efectos del contrabando.

Art. 21. — Es facultad privativa del Administrador o del funcionario que lo reemplace, tomar medidas que signifiquen disponer de las mercaderías o efectos en general afectados a sumarios; como así de la libertad o detención de las personas acusadas de contrabando y adoptar disposiciones que importen correcciones disciplinarias sobre firmas o personas registradas en la aduana para operar ante la misma. Tales facultades no podrán ser delegadas en oficina o funcionario alguno.

La detención a que se refiere este artículo no podrá prolongarse más de 48 horas, debiendo, dentro de ese término, la autoridad administrativa poner al prevenido a disposición de la justicia, acompañando copia de lo actuado hasta ese momento.

Artículo 198. — Todo despachante, consignatario, depositario, vendedor o cualquiera otra persona que por cualquier título tenga en su poder con fines de comercio o industrialización mercaderías extranjeras, está obligado a probar ante la autoridad aduanera, cuando a juicio de ésta hubiere motivo de creer que se ha pretendido evadir los impuestos o requisitos de importación, la legitimidad de la introducción de las mercaderías.

A los efectos de dicha comprobación sólo harán fe los documentos expedidos por la autoridad aduanera o el cumplimiento estricto de las normas que el Poder Ejecutivo dicte con el objeto de determinar la lícita procedencia de las mercaderías extranjeras que se encuentren en plaza, a cuyo efecto podrá exigir declaraciones juradas de

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 10. — Agrégase al artículo 198 de la ley de aduana, texto ordenado en 1956 y sus modificaciones, los siguientes párrafos finales:

SANCION DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS

Si el caso fuere de aprehensión de un contrabando deberá, además, comunicarlo a la autoridad policial competente para que instruya el respectivo sumario de prevención, remitiéndole simultáneamente las personas que se hubieran detenido; los efectos aprehendidos serán enviados a la autoridad aduanera que corresponda.

3º Sustitúyese el artículo 21 por el siguiente:

Artículo 21. — Es facultad privativa del administrador o del funcionario que lo reemplace, tomar medidas que signifiquen disponer de las mercaderías o efectos en general afectados a sumarios y adoptar disposiciones que importen correcciones disciplinarias sobre firmas y personas registradas en la aduana para operar ante la misma. Tales facultades no podrán ser delegadas en oficina o funcionario alguno.

5º Agréganse al artículo 1º8, los siguientes párrafos finales:

existencias, marcación de mercaderías, contabilización en libros especiales, o todo otro medio o sistema que concurra a asegurar que las mercaderías que se comercien en plaza han ingresado legalmente al país.

Si las personas mencionadas en el párrafo primero no pudieran comprobar la legítima introducción de las mercaderías en su poder, sufrirán el comiso de las mismas conforme a lo prescrito en el artículo 196, sin perjuicio de una multa accesoria que oscilará entre tres a diez veces el valor de los efectos, debiendo ser sometidos a la justicia nacional a los efectos previstos en el artículo 188.

La infracción a las normas que dicte el Poder Ejecutivo como consecuencia de la autorización contenida en el párrafo segundo será castigada con multa de quinientos a un millón de pesos, siendo autoridad de aplicación la aduana o receptoría en cuya jurisdicción se haya consumado la infracción.

Lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo no será aplicable a las mercaderías de origen extranjero sujetas al pago de impuesto interno que se hallen en plaza, en lugares destinados a su comercialización, sin el estampillado fiscal respectivo. En estos supuestos, se presume de derecho que tales mercaderías no han tributado los gravámenes a la importación y no se instruirá sumario, disponiéndose de inmediato su comiso y la aplicación de las penas indicadas en este artículo, sin perjuicio de la que pudiera imponerse posteriormente por contrabando. Facúltase al Poder Ejecutivo para aumentar en estos casos hasta el cien por ciento (100 %) el importe de la participación que corresponda a los denunciantes y aprehensores y a integrar un fondo especial con el producido de la recaudación aduanera, destinado a pagar, dentro de los quince días siguientes al secuestro de la mercadería, el importe de la adjudicación. Facúltase igualmente al Poder Ejecutivo para determinar el importe sobre el cual se liquidará la participación a denunciantes y aprehensores y para disponer la comercialización de las mercaderías secuestradas por intermedio de los industriales del ramo y/o de sus cámaras representativas.

Igual.

IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL GRAVAMEN A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES

DISPOSICION VIGENTE
(Texto ordenado en 1960)

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

DICTAMEN DE COMISION

Artículo 11. — Prorrógase por el término de diez (10) años el impuesto establecido en el título I de la ley de impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes: (texto ordenado en 1960) con las modificaciones que se establecen seguidamente:

1º Sustitúyese el artículo 1º, por el siguiente:

Artículo 1º — Establécese con carácter transitorio, durante el término de diez (10) años, un gravamen sustitutivo del impuesto a la transmisión gratuita de bienes que se aplicará en todo el territorio de la Nación a las sociedades de capital, con arreglo a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 1º — Establécese con carácter transitorio un gravamen sustitutivo del impuesto a la transmisión gratuita de bienes que se aplicará en todo el territorio de la Nación a los capitales resultantes de los balances anuales que cierran hasta el 31 de diciembre de 1971, con arreglo a las disposiciones del presente título. La reglamentación fijará el procedimiento a seguir para los casos en que no se efectúen balances anuales.

2º Sustitúyese el artículo 2º, por el siguiente:

Artículo 2º — A los fines de este gravamen se consideran sociedades de capital, las que revisten tal carácter a los efectos del pago del impuesto a los réditos con excepción de las asociaciones civiles aludidas en el inciso c) del artículo 54 de la ley 11.682, texto ordenado en 1960.

Artículo 2º. — Están sujetas al impuesto de este título:

- a) Las sociedades de capital que revistan tal carácter a los efectos del pago del impuesto a los réditos, con exclusión de las asociaciones civiles aludidas en el inciso c) del artículo 54 de la ley 11.682, texto ordenado en 1960;
- b) Las empresas unipersonales y las sociedades de personas que revistan tal carácter a los efectos del pago del impuesto a los réditos, matriculadas como comerciantes en las condiciones establecidas por el Código de Comercio.

Las sociedades de economía mixta tributarán el impuesto en proporción al capital perteneciente a los accionistas privados.

Art. 10. — Igual.

1º Igual.

Artículo 1º — Establécese con carácter transitorio un gravamen sustitutivo del impuesto a la transmisión gratuita de bienes que se aplicará en todo el territorio de la Nación a los capitales resultantes de los balances anuales que cierran hasta el 30 de diciembre de 1971, con arreglo a las disposiciones del presente título. La reglamentación fijará el procedimiento a seguir para los casos en que no se efectúen balances anuales.

2º Igual.

Igual.

Igual.

- b) Las empresas unipersonales y las sociedades de personas que revistan tal carácter a los efectos del impuesto a los réditos, matriculadas como comerciantes en las condiciones establecidas por el Código de Comercio.

Igual.

DISPOSICION VIGENTE
(Texto ordenado en 1960)

Artículo 3º — El impuesto de la presente ley se determinará aplicando la tasa del uno por ciento (1 %) sobre el capital y reservas de las entidades alcanzadas por la misma.

A tal efecto se entiende por capital y reservas la diferencia entre el activo y el pasivo —excluido las inversiones en acciones de otras empresas y en bienes situados con carácter permanente en el exterior— ajustados conforme a las normas que rigen el impuesto a los beneficios extraordinarios y en la forma que establezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 4º — Las sociedades constituidas en el país deducirán del capital calculado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, el importe de los dividendos que distribuyan, en efectivo o en especie —excepto acciones liberadas— dentro de los cinco (5) meses del cierre del ejercicio.

Excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, la Dirección General Impositiva admitirá dicha deducción aun cuando la distribución se efectúe con posterioridad al vencimiento del plazo indicado.

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

Las sociedades anónimas en formación están sujetas al gravamen desde la fecha y en las condiciones que establezca la reglamentación.

3º Sustitúyese en el segundo apartado del artículo tercero la locución «excluido las inversiones en acciones de otras empresas y en bienes situados con carácter permanente en el exterior, por «excluido las inversiones en acciones o en participaciones en otras empresas sujetas al gravamen de esta ley y en bienes situados con carácter permanente en el exterior».

4º Sustitúyese el artículo 4º, por el siguiente:

Artículo 4º — Del capital que se determine conforme a las normas anteriores, se deducirán los siguientes conceptos:

- a) Honorarios del directorio y síndico en las sociedades de capital;
- b) Habilitaciones y gratificaciones que se paguen o pongan a disposición dentro de los cinco (5) meses o tres (3) meses de cerrado el ejercicio, según se trate de sociedades de capital o de los demás responsables de esta ley;

Excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, la Dirección General Impositiva admitirá dicha deducción aun cuando la distribución se efectúe con posterioridad al vencimiento del plazo indicado;

- c) El impuesto a los réditos del ejercicio, las sociedades anónimas y de economía mixta, Las firmas unipersonales y sociedades en comandita por acciones o de personas, un porcentaje a fijar por el Poder Ejecutivo, aplicado sobre las utilidades ajustadas de acuerdo con las normas de la ley 11.682.
- d) El impuesto a los beneficios extraordinarios del ejercicio.

DICTAMEN DE COMISION

Igual.

3º Igual.

4º Igual.

Artículo 5º — Las sociedades de economía mixta tributarán el impuesto en proporción al capital perteneciente a los accionistas privados, y las sociedades en comandita por acciones, en proporción al capital accionario.

Las sociedades que emitan acciones nominativas podrán solicitar —dentro del plazo que fije el decreto reglamentario— que se las excluya del pago del impuesto de la presente ley en la proporción del capital representado por tales acciones, a cuyo efecto deberán ajustarse a los requisitos que establezca el Poder Ejecutivo. En este supuesto no será de aplicación la norma contenida en el artículo 15 (1) de la ley 11.287, texto ordenado en 1959.

Artículo 6º — Este impuesto gravará los capitales resultantes de los diez balances anuales que se cierren a partir del 31 de diciembre de 1951. La reglamentación fijará el procedimiento a seguir para los casos en que no se efectúen balances anuales.

Si al vencimiento del término fijado en el párrafo anterior no se prorrogare la vigencia de esta ley, deberá computarse el valor de las inversiones en acciones para la determinación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, considerando como pago a cuenta de éste, la parte proporcional del presente gravamen que hubiese sido ingresado por la sociedad.

Artículo 9º — Las provincias quedarán obligadas a:

1º Derogar los gravámenes locales, cualquiera sea su característica y denominación, que inciden directamente sobre la materia imponible a que se refiere esta ley, con prohibición de implantarlos en lo sucesivo.

2º Modificar el régimen de los impuestos locales a la transmisión gratuita de bienes a efectos de excluir a las inversiones en acciones en la determinación del haber sucesorio.

5º Derógase el artículo 5º.

6º Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:

Artículo 6º — El pago del gravamen tiene carácter de definitivo, aunque a su vencimiento no se prorrogue la vigencia de esta ley.

7º Sustitúyese el artículo 9º, por el siguiente:

Artículo 9º — Las provincias que adhieran al régimen de este título se obligan a:

1º Derogar los gravámenes locales, cualquiera sea su característica y denominación, que inciden directamente sobre la materia imponible a que se refiere este título, con prohibición de implantarlos en lo sucesivo.

2º Modificar el régimen de los impuestos locales a la transmisión gratuita de bienes a efectos de excluir la materia imponible a que se refiere este título en la determinación del haber sucesorio.

5º Igual.

6º Igual.

7º Igual.

Igual.

Igual.

Igual.

(1) Art. 14 del texto ordenado en 1961.

TÍTULO II

Personas físicas

Artículo 12. — Las personas físicas podrán optar por abonar un impuesto anual, en sustitución del impuesto local a la transmisión gratuita de bienes por causa de muerte, establecido por la ley 11.287, en las condiciones que establecen los artículos siguientes de este título.

DISPOSICION VIGENTE
(Texto ordenado en 1961)

Artículo 9º — El impuesto sucesorio se liquidará en el caso de inmuebles sobre una valuación especial que practicará la Dirección General Inmobiliaria.

Cuando por cualquier causa se hiciere tasación judicial de los inmuebles, operación que siempre podrá solicitarse, por los interesados, el impuesto

8º Las modificaciones del presente artículo serán de aplicación para los ejercicios que se cierren a partir del 31 de diciembre de 1961, inclusive.

Artículo 12. — Modificase el título II de la ley del impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes (texto ordenado en 1960) en la siguiente forma:

1º Sustitúyese el artículo 12, por el siguiente:

Artículo 12. — Las personas físicas, por la parte de sus patrimonios no sujeta al régimen del título I, podrán optar por abonar un impuesto anual, en sustitución del impuesto local a la transmisión gratuita de bienes por causa de muerte establecido por la ley 11.287, en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes de este título.

IMPUESTO A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES. — LEY 11.287

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 13. — Sustitúyese el artículo 14 de la ley 11.287 (texto ordenado en 1961) por el siguiente:

8º El gravamen que se crea por este artículo, en cuanto alcanza a las empresas unipersonales y sociedades de personas, se aplicará exclusivamente en la Capital Federal y en las provincias que adhieran a esta reforma.

En caso de adhesión parcial, deberán excluirse en la determinación del capital los bienes radicados económicamente en las provincias no adheridas, en la forma que determinará la reglamentación.

9º Igual.

Art. 11. — Igual.

Art. 12. — Modificase la ley 11.287 (t. o. en 1961) en la siguiente forma:

1º Sustitúyese el primer párrafo del artículo 9º por el siguiente:

En el caso de inmuebles, el impuesto se liquidará sobre la valuación que se determine en la forma que disponga la Dirección General Impositiva.

se liquidará por el valor que ésta les haya atribuido, siempre que fuere superior a la valuación especial a que se refiere el párrafo anterior.

Si entre los bienes inmuebles sujetos al pago del impuesto hubiese alguno gravado con hipoteca, la liquidación se hará sobre el valor de la tasación.

En los muebles, el impuesto se liquidará por el valor de la tasación.

Artículo 14. — A partir del 31 de diciembre de 1951, para determinar el monto imponible sujeto al impuesto a la transmisión gratuita de bienes no se computará el valor de las inversiones en acciones emitidas por entidades alcanzadas por el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes aplicable a las sociedades de capital. A ese efecto se considerará como fecha de la transmisión la del fallecimiento del causante o la de celebración del acto que la exteriorice, si se tratare de transmisión entre vivos.

Tampoco se computarán tales inversiones en el caso de que el fallecimiento del accionista o socio hubiere ocurrido antes del 31 de diciembre de 1951, pero en el transcurso de un ejercicio alcanzado por el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes.

Art. 25. — La Dirección General Impositiva está obligada a evacuar las consultas que se le dirijan sobre la aplicación de esta ley, y a solicitud de parte interesada, deberá determinar, previo estudio de los autos o antecedentes respectivos, el monto del impuesto que corresponda abonar en el caso que se le someta.

Artículo 14. — Para determinar el monto imponible sujeto a este impuesto no se computará:

- a) El valor de las inversiones en acciones emitidas por entidades alcanzadas por la ley de impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes (texto ordenado en 1960);
- b) A partir del 31 de diciembre de 1961, el valor de las inversiones en acciones nominativas y los importes que pertenezcan al dueño o socios en empresas unipersonales y sociedades de personas alcanzadas por el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes;
- c) Los montos cubiertos por el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes para las personas físicas.

A los efectos precedentes se considerará como fecha de la transmisión la del fallecimiento del causante o la de celebración del acto que la exteriorice, si se tratare de transmisión entre vivos.

Tampoco se computarán las inversiones en los casos de que el fallecimiento del accionista o socio hubiere ocurrido antes del 31 de diciembre de 1961, pero en el transcurso de un ejercicio alcanzado por el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes.

2º Sustitúyese el artículo 14, por el siguiente:
Igual.

3º Derógase el art. 25.

Actividades lucrativas

Art. 13. — A partir del 1º de enero de 1962, la aplicación, percepción y fiscalización del impuesto municipal a las acti-

vidades lucrativas estará a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

A tal efecto facúltase a la Dirección General Impositiva —actualmente a cargo de dicho gravamen— para convenir con el ente municipal la forma y condiciones en que se procederá a concretar la correspondiente transferencia.

Las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, y las del reglamento de dicha ley que se refieren al impuesto a las actividades lucrativas, continuarán siendo de aplicación mientras la Municipalidad de Buenos Aires no dicte nuevas normas al respecto. Esta disposición será igualmente de aplicación a las actuaciones en trámite al 1º de enero de 1962 que, en virtud del convenio a que se refiere este artículo, puedan transitoria o definitivamente, seguir a cargo de la Dirección General Impositiva.

El intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires tendrá las mismas facultades que la ley 11.683 (t. o. en 1960) otorga a la Dirección General Impositiva, para entender en las cuestiones vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización del impuesto municipal a las actividades lucrativas, que se susciten con los contribuyentes y demás responsables por los años en que dicho gravamen se rigió por los preceptos de esa ley.

Art. 14. — Modifícase el segundo párrafo del artículo 5º de la ley 12.704, en la siguiente forma:

Los recargos que establece el Concejo Deliberante por atraso en el pago de los gravámenes municipales, no podrán exceder del cien por ciento de los mismos.

Art. 15. — Modifícase la ley 13.487 en la siguiente forma:

1º Agrégase al artículo 1º, inciso 3º, como segundo párrafo, el siguiente:

Artículo 1º —

3º El impuesto al ejercicio de cualquier comercio industria profesión, oficio, negocio o actividad lucrativa habitual en la Capi-

tal Federal, excluida toda actividad que se ejerza por cuenta ajena, bajo una relación de dependencia.

Artículo 5º — La municipalidad tendrá facultades para reglamentar la determinación, verificación, fiscalización y percepción de los impuestos y demás gravámenes que establece la presente ley. Cuando a tales efectos los contribuyentes y demás responsables deban presentar declaraciones juradas sobre hechos imponibles y no diesen cumplimiento a ello, o a juicio de la municipalidad sus declaraciones no fuesen aceptables, oído el contribuyente, podrá ésta hacer estimaciones de oficio de la obligación impositiva, sobre bases ciertas o presuntas. Los infractores de las reglamentaciones que la municipalidad dicte en virtud de las facultades acordadas por este artículo serán pasibles de multas de \$ 25 a \$ 2.000 moneda nacional.

Artículo 6º — Los contribuyentes y demás responsables que hayan evadido total o parcialmente las obligaciones impositivas, serán pasibles de multas de hasta cinco veces el impuesto o contribución, que serán graduadas en cada caso por la municipalidad, de acuerdo con la gravedad del hecho.

En los casos de actividades de intermediación en que existan precios de venta al intermediario y precios de venta al público fijados unilateralmente por el fabricante, el impuesto no excederá de la alícuota básica que se fije con carácter general.

2º Sustitúyese el último párrafo del artículo 5º por el siguiente:

Los infractores de las reglamentaciones que la Municipalidad dicte en virtud de las facultades acordadas por este artículo serán pasibles de multas de \$ 100 a \$ 10.000, sin perjuicio de los recargos que pudieran corresponder por aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5º de la ley 12.704.

3º Sustitúyese el artículo 6º por el siguiente:

Artículo 6º — Los contribuyentes y demás responsables que hayan evadido total o parcialmente las obligaciones impositivas, serán pasibles de multas de hasta cinco veces el impuesto o contribución evadidos.

Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de multas de una hasta diez veces el impuesto defraudado o que se haya pretendido defraudar, sin perjuicio de la responsabilidad criminal por delitos comunes, los contribuyentes, responsables y terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra que tenga por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial de los tributos.

Con igual pena serán reprimidos los agentes de retención que mantengan en su poder impuestos retenidos después de haber vencido los plazos en que debieron hacerlos ingresar.

DISPOSICION VIGENTE
(Texto ordenado en 1961)

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

DICTAMEN DE COMISION

Las multas fijadas por el artículo anterior y por el presente serán graduadas por la municipalidad de acuerdo con las circunstancias y gravedad de los hechos.

Contribución territorial e inmobiliaria

Art. 16. — Cancelanse las deudas por contribución territorial y contribución inmobiliaria, sus recargos, intereses y multas correspondientes a ejercicios anteriores a 1959.

Condónanse los recargos, intereses y multas por mora en el pago de la contribución inmobiliaria de los años 1952 a 1960, ambos años inclusive, a condición de que los responsables ingresen el gravamen adeudado antes del 1º de mayo de 1962. Los cobradores fiscales percibirán como única retribución el diez por ciento (10 %) del impuesto que tuvieren en gestión de cobro y que se ingrese con motivo de esta disposición.

DICTAMEN DE COMISION

Art. 17. — Modifícase la ley de impuesto para aprendizaje (texto ordenado en 1959), en la siguiente forma:

1º Sustitúyese en el artículo 1º la denominación de «impuesto para aprendizaje», por la de «impuesto para educación técnica», y la mención «Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional», por la de «Consejo Nacional de Educación Técnica».

2º Modifícase el artículo 2º en la siguiente forma:

a) Reemplázase la expresión «de aprendizaje» por «de educación técnica».

DISPOSICION VIGENTE
(Texto ordenado en 1959)

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 1º — Establécese en todo el territorio de la Nación un impuesto denominado «para aprendizaje», del diez por mil (10‰), que se aplicará sobre el total de los sueldos, salarios y remuneraciones en general por servicios prestados, pagados al personal ocupado en los establecimientos industriales, y sin tener en cuenta la clase de trabajo que aquél realiza.

También estarán sujetas a este gravamen las empresas de cualquier otra índole que utilicen mano de obra para cuya capacitación existan o se creen escuelas o cursos sostenidos por la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, a partir de la fecha y en la forma que establezca la reglamentación.

Artículo 2º — Este impuesto podrá ser reducido al dos por mil (2‰), cuando los contribuyentes tengan organizados cursos de aprendizaje para menores de dieciocho (18) años, propios o en colaboración con otros responsables o que contribuyan al sostenimiento de escuelas o cursos de dicha índole organizados por asociaciones o cáma-

ras gremiales, siempre que tales cursos y escuelas estén aprobados por la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, todo ello de acuerdo con las normas establecidas en los decretos 14.538/44 y 6.648/45 ratificados por ley 12.921 y las que especifique la reglamentación.

Artículo 3º — El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, podrá reducir hasta el cincuenta por ciento (50 %) el impuesto del diez por mil (10 ‰) y en la misma proporción el del dos por mil (2 ‰) establecidos en esta ley, reducción que sólo podrá hacerse en oportunidad de la elevación del presupuesto de la misma al estudiarse el presupuesto general de la Nación y siempre que el total que se calcule recaudar sea suficiente para cubrir los gastos totales de los servicios creados por los decretos 14.538/44 y 6.648/45, ratificados por ley 12.921, y de los que se agreguen en adelante.

Artículo 4º — Se considerará establecimientos industriales a todos aquellos lugares (fábricas, talleres, usinas, etcétera) donde habitualmente y por medio de procesos o procedimientos de cualquier naturaleza se transformen o manufacturen mercaderías o productos cuya forma, aspecto, consistencia, índole o aplicación sea distinta de las de aquellas que sirvieron de materia prima, mercadería o elementos básicos.

Participan de igual carácter, aquellas secciones o partes que existen como accesorias de una explotación, comercial o no, donde se realicen o ejecuten actividades señaladas en el párrafo anterior, sin que ello se altere por el destino que el responsable vaya a dar a la mercadería o producto obtenido.

b) Sustitúyese el texto final de este artículo, a continuación de „asociaciones o cámaras gremiales“, por el siguiente: „siempre que tales cursos o escuelas estén aprobados por el Consejo Nacional de Educación Técnica“.

3º Derógase el artículo 3º.

4º Agrégase al artículo 4º, el siguiente párrafo:

A los efectos de esta ley se calificarán también como establecimientos industriales aquellos en los que se efectúen trabajos de construcción, transformación, adaptación o reparación de cualquier clase de materiales o elementos elaborados o semielaborados. *

DISPOSICIÓN VIGENTE
(Texto ordenado en 1956)

DISPOSICION VIGENTE
Ley 15.273

Artículo 19. — Modificase el decreto ley 21.680/56, en la forma que se indica a continuación:

1º — Créase un adicional de 0.5 % al impuesto establecido por dicho decreto ley cuyo producido se destinará a financiar el plan de caminos de fomento agrícola, en las condiciones establecidas por el decreto ley 9.875/56.

La autoridad de aplicación depositará diariamente los importes recaudados a la orden de la Dirección Nacional de Vialidad.

2º — Agrégase al inciso a) del artículo 16 de dicho decreto ley lo siguiente:

Mientras permanezca en vigencia el sistema de unificación de impuestos a la exportación, la Dirección Nacional de Aduanas depositará diariamente en el Banco de la Nación Argentina, a la orden del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la parte del impuesto unificado que corresponda a dicho Instituto, con arreglo al presente decreto ley.

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

DICTAMEN DE COMISION

5º Agrégase el siguiente artículo:

Artículo .. — La Dirección General Impositiva transferirá a la cuenta „Fondo para Educación Técnica, orden Consejo Nacional de Educación Técnica, el producido del impuesto establecido por la presente ley hasta cubrir el presupuesto de dicho organismo. Todo excedente ingresará a Rentas Generales.

DICTAMEN DE COMISION

Art. 18. — Elévase al uno por ciento (1 %) el adicional establecido por el artículo 19 de la ley 15.273.

Art. 19 — Facúltase al Poder Ejecutivo para instituir un impuesto de hasta un cinco por ciento (5 %) sobre el precio básico a las rifas o sorteos de carácter privado que se autoricen en las condiciones que establezca la reglamentación.

ANTECEDENTES

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1961.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley de reformas al régimen impositivo.

No se trata con la presente reforma de innovar en forma sustancial el actual sistema impositivo de la Nación, sino que más bien se inspira en el propósito de adaptar el sistema fiscal argentino a las circunstancias y necesidades del país.

En la mayoría de los casos se trata de cambios meramente formales o la supresión de disposiciones anacrónicas, carentes ya de sentido; en otros, se trata de simplificar la percepción de los gravámenes en la seguridad de que las modificaciones propuestas redundarán en beneficio del fisco y del contribuyente al propio tiempo; y por fin, con las reformas proyectadas espera el Poder Ejecutivo poder lograr los recursos estimados en el presupuesto de la Nación sometido ya a la consideración de vuestra honorabilidad.

Algunas de las reformas llevan también el propósito de que las cargas fiscales se generalicen y pueda ser superada la evasión, lo que permitirá en un futuro próximo encarar medidas de desgravación y de reestructuración impositiva. Para ello cuenta el Poder Ejecutivo con la sanción por parte de vuestra honorabilidad del adjunto proyecto de ley, así como también con la acción enérgica y decidida en que se hallan empeñadas las autoridades encargadas de la cobranza impositiva.

Con lo antedicho se expresa sintéticamente el sentido de la reforma proyectada, la que no significará, en caso de sancionarse, un aumento de la presión tributaria en su conjunto, ya que algunos aumentos de pequeña significación se encuentran más que compensados con disminuciones o supresiones, no obstante lo cual el Poder Ejecutivo cuenta con lograr una mayor recaudación, en vista de que la aplicación más sencilla y ordenada de los tributos dará lugar sin duda a mayores ingresos.

Entre las modificaciones más importantes que contiene el proyecto, y que se mencionan sucintamente a continuación, pueden citarse: la derogación del impuesto a las ganancias eventuales; la unificación de la base imponible de los impuestos a los beneficios extraordinarios y sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes; la reestructuración de este último tributo, comprendiendo en su ámbito a las sociedades de personas y empresas unipersonales; la supresión de las tasas fijas del gravamen de sellos, del impuesto a los recibos, del sellado de actuación administrativa y judicial, del impuesto a los giros internos y de otros gravámenes con características propias organizados dentro del impuesto de sellos; la creación de un nuevo sistema de represión del contrabando de productos que pagan impuesto interno y el perfeccionamiento de las normas legales de procedimiento para hacer más eficaz el sistema, reprimir la evasión y asegurar el correcto ingreso de los tributos.

La supresión del impuesto a las ganancias eventuales es una medida sin lugar a duda de trascendencia y que merece una explicación especial. Este

impuesto, creado en 1946, sufrió, a través del tiempo, modificaciones en su estructura y en su tasa, resultando insuperables, en algunos casos, los problemas planteados por la evasión fiscal. El grueso de la recaudación teórica está constituido por los beneficios obtenidos en la transferencia de inmuebles, en el mayor valor asignado a bienes aportados a sociedades, en la cesión de cuotas sociales y en la transferencia de ciertos derechos. Algunos de estos beneficios pueden asimilarse a otros ya gravados con el impuesto a los réditos, y los restantes están sujetos, además, a distintos gravámenes específicos; por lo que un elemental principio de racionalización impone la conveniencia de suprimir este tributo, trasladando la imposición al ámbito del impuesto a los réditos, en unos casos, y aumentando proporcionalmente, en otros, los impuestos que ya gravan tales operaciones. Se logrará así simplificar notoriamente el régimen fiscal mediante la eliminación de un impuesto hasta ahora considerado básico y se evitará la evasión trasladando la carga hacia rubros de más fácil fiscalización. Desde luego, quedarán fuera del ámbito del impuesto beneficios menores que hoy es prácticamente imposible —por las dificultades de control— someter a imposición.

La unificación de la base imponible de los impuestos a los beneficios extraordinarios y sustitutivos del gravamen a la transmisión gratuita de bienes tiene también en mira la simplificación de los regímenes de ambos gravámenes. Actualmente el impuesto a los beneficios extraordinarios se aplica en función del capital dinámico afectado a la explotación, mientras que el impuesto sustitutivo tiene en cuenta el capital estático a una fecha dada. Como la liquidación de ambos tributos arranca del balance impositivo del impuesto a los réditos, los ajustes necesarios en uno y otro caso son de diferente naturaleza y complican innecesariamente tanto la actividad del contribuyente como la del propio fisco encargado de la fiscalización. Sacrificando principios teóricos en aras de la simplicidad, el proyecto fija normas objetivas, comunes a ambos tributos, para la determinación del capital computable. Al propio tiempo, en otro orden de ideas, el proyecto excluye del ámbito del impuesto a los beneficios extraordinarios a los auxiliares del comercio, atendiendo a las peculiares características de estas actividades, en que el factor personal tiene indudable preponderancia sobre el capital afectado a ellas; y reúne en un único balance impositivo los resultados de distintas explotaciones de una misma empresa.

La reestructuración del impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes tiene por objeto completar la legislación vigente extendiendo las disposiciones de la respectiva ley a sociedades actualmente exentas del mismo. Como este gravamen significará en esencia un seguro contra el alto costo por todo concepto de las transmisiones gratuitas, especialmente por causa de muerte, su generalización a tipos de empresas no comprendidas hasta hoy, con seguridad que ha de ser bien recibida por los contribuyentes en general.

Las modificaciones que el proyecto contiene en el régimen del impuesto de sellos tienden a eliminar por una parte disposiciones anacrónicas, caídas en desuso, y además a suprimir el uso del papel sellado como forma de pago del impuesto y derogar o adecuar impuestos improductivos que traban notoriamente las actividades, entorpeciendo los trámites administrativos y judiciales. La eliminación del uso del papel sellado como medio de pago del impuesto de

sellos evitará el gasto representado por la impresión, venta y control de estos valores, y permitirá utilizar otros medios de ingreso más modernos y económicos, como el depósito bancario.

La derogación de los impuestos a los giros internos, a los recibos de dinero, a las actuaciones administrativas y a numerosos actos e instrumentos gravados actualmente con tasas fijas, así como el reemplazo del sellado de actuación judicial por un aumento del impuesto de justicia, significará un alivio notable para el comercio, la industria y los profesionales, no tanto por la incidencia de estos gravámenes como por las molestias que ocasiona su ingreso.

El aumento del impuesto a las transferencias de inmuebles se justifica, pues esta mayor imposición tiende a compensar la derogación del impuesto a las ganancias eventuales, en cuanto grava las mismas operaciones.

El proyecto introduce una innovación trascendente al crear un instrumento que se estima adecuado en la represión del contrabando. Uno de los problemas fundamentales con que tropieza actualmente la actividad fiscal es la inercia o la apatía de los que, de una manera u otra, llegan al conocimiento del delito. Y esa inercia o apatía tiene su explicación en el hecho de que la participación que la ley reconoce a denunciantes y aprehensores es, en general, ilusoria, por la demora de largos años en que generalmente se incurrir en la tramitación de los sumarios. El proyecto, superando esos problemas, presume de derecho que no han pagado los gravámenes de importación las mercaderías de origen extranjero sujetas a impuesto interno que se pongan a la venta en plaza sin el estampillado fiscal respectivo. En estos casos no se instruirá sumarios, y el denunciante cobrará su participación, a los quince días, de un fondo especial que se habilitará al efecto. Las mercaderías objeto de comiso serán comercializadas —en plaza o en el exterior— por los industriales del ramo, directamente afectados por el contrabando. Este sistema se podrá aplicar en otra etapa a las demás mercaderías extranjeras cuya individualización se haga obligatoria a su paso por las aduanas, si la experiencia así lo aconseja.

El acuerdo del Gatt y el Tratado de Montevideo obligan a revisar el régimen impositivo para suprimir todo tratamiento diferencial basado en el origen de los productos; y así lo dispone el proyecto en lo relativo a los impuestos a las ventas e internos.

Finalmente, las modificaciones más importantes que se intentan a la ley de procedimiento para la aplicación de los impuestos a cargo de la Dirección General Impositiva, son las siguientes: se unifica el procedimiento para la determinación de oficio, tanto en los casos de renta cierta como presunta; se innova en materia de recargos y multas, eliminando la multa por omisión de impuestos y aplicando recargos automáticos que podrán ser dejados total o parcialmente sin efecto cuando la omisión no tenga por mira la evasión fiscal. Se mantiene, además, la multa por fraude fiscal, con la variante de que será de una a diez veces el impuesto, en lugar de tres a diez veces. En los casos de fraude fiscal se introduce la novedad de que en estos casos cede el secreto fiscal asegurado por la ley, ya que el proyecto impone la publicación por los medios de difusión corrientes del nombre de los defraudadores y del importe defraudado, no tanto para agregar una sanción moral a la sanción pecuniaria, como para desalentar a otros infractores potenciales.

Otros aspectos de la reforma sometida a vuestra consideración se explican por sí mismos y se hallan todos inspirados en las razones que se han expresado. Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO FRONDISI.

Roberto T. Alemann. — Jorge Wehbe.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Procedimiento

Artículo 1º — Modificase la ley 11.683 (texto ordenado en 1960, y sus modificaciones) en la siguiente forma:

- 1º Inclúyese en el tercer párrafo del artículo 8º, entre las facultades del director general, la de dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: inscripción de agentes de retención y forma de documentar la deuda fiscal por parte de los contribuyentes.
- 2º Sustitúyese el párrafo 5º del artículo 14 por el siguiente:

La Dirección sólo quedará obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio:

- a) Cuando se trate de cambio a un domicilio real o legal, si la notificación de dicho cambio ha sido hecha por el contribuyente en la forma y condiciones que ella establezca;
- b) Cuando se trate de cambio a un domicilio especial, en el caso de que el cambio haya sido expresamente aceptado por ella.

- 3º Sustitúyese el artículo 23 por el siguiente:

Artículo 23. — Al ejercer las facultades de verificación la dirección procederá a emplazar al contribuyente para que en el término de 15 días presente declaraciones juradas o, si las hubiera presentado, ratifique o rectifique su contenido, aportando en ambos casos los libros, registros y comprobantes de los datos denunciados.

Si las conclusiones de la fiscalización llevada a cabo no concordaren con las resultantes del emplazamiento previsto en el párrafo anterior, corresponderá que la Dirección proceda a determinar de oficio la obligación impositiva, sea en forma directa por el conocimiento cierto de la materia imponible, sea mediante estimación si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquélla.

Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los impuestos no constituyen determinación administrativa de aquéllos, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos (artículos 10 y 11 de esta ley).

- 4º Sustitúyese el artículo 24 por el siguiente:

Artículo 24. — El procedimiento de determinación de oficio se iniciará con una vista al contribuyente de las impugnaciones o cargos que se formulen, para que en el término de quince (15) días, que podrá ser prorrogado

formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho.

Evacuada la vista o transcurrido el término señalado, se dictará resolución fundada que determine el impuesto e intime su pago dentro del plazo de quince (15) días.

La contestación a la vista previa y los recursos que se interpongan ante la Dirección General Impositiva deberán ser presentados por escrito en los lugares que al efecto habilite la misma.

El decreto reglamentario establecerá en forma expresa los requisitos que, a los fines de su validez, deberán reunir los escritos que presenten los contribuyentes o responsables.

No será necesario dictar resolución determinando de oficio la obligación impositiva si antes de ese acto prestase el contribuyente su conformidad con la liquidación que hubiese practicado la Dirección, la que surtirá entonces los mismos efectos que una declaración jurada.

5º Sustitúyese el artículo 26 por el siguiente:

Artículo 26. — Si la determinación de oficio resultare inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente, bajo pena de las sanciones de esta ley.

La determinación del juez administrativo del impuesto, en forma cierta o presuntiva, una vez firme, sólo podrá ser modificada en contra del contribuyente en los siguientes casos:

- a) Cuando en la resolución respectiva se hubiese dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación de oficio practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la fiscalización, en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados expresamente en la determinación anterior;
- b) Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior (cifras de ingresos, egresos, valores de inversión y otros).

6º Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:

Artículo 28. — Podrá la Dirección exigir, dentro del período fiscal en curso, el ingreso de importes a cuenta del impuesto que se deba abonar al término de aquél. Estos anticipos podrán ser fijados proporcionalmente a la fracción transcurrida del período fiscal y sobre la base del impuesto correspondiente al período inmediato anterior o bien en base a otros índices, tales como rentas, capitales, ventas, importe de suministros o inversiones.

7º Sustitúyese el artículo 33 por el siguiente:

Artículo 33. — Los responsables determinarán, al efectuar los pagos o los ingresos a cuenta, a qué deudas deberán imputarse. Cuando así no lo hicieren y las circunstancias especiales del caso no permitieren establecer la deuda

a que se refieren, la Dirección determinará a cuál de las obligaciones no prescritas deberán imputarse los pagos o ingresos.

En los casos de prórrogas por obligaciones que abarquen más de un ejercicio, los ingresos, en la parte que correspondan a impuestos, se imputarán a la deuda más antigua.

8º Sustitúyese el artículo 42, por el siguiente:

Artículo 42. — Sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43 y 45, la falta total o parcial de pago a su vencimiento de los impuestos, anticipos o ingresos a cuenta hace surgir, sin necesidad de interpelación alguna, la obligación de abonar juntamente con aquéllos un recargo del 3 % mensual calculado sobre el monto del gravamen adeudado.

La obligación de abonar los recargos subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la Dirección al recibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de prescripción para el cobro de ésta.

El director general podrá, con carácter general y cuando medien circunstancias excepcionales debidamente justificadas, remitir en todo o en parte la obligación de abonar los recargos. Así mismo, en los casos de ajustes practicados por la Dirección, podrá reducir o aun dejar de exigir los mencionados recargos, si a juicio del juez administrativo la omisión de impuesto deba atribuirse a error excusable en la aplicación al caso de las normas impositivas en que incurra quien debe por esta ley pagar el impuesto por cuenta propia o ajena.

Las precedentes disposiciones serán de aplicación para todos los gravámenes no prescritos al tiempo de exigirse el pago de los recargos.

9º Elévanse las multas mínima y máxima previstas por el artículo 43 a \$ 1.000 y \$ 100.000, respectivamente.

10. Derógase el artículo 44.

11. Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:

Artículo 45. — Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de multas de uno hasta diez veces el impuesto en que se defraudó al Fisco o se haya pretendido defraudarlo, sin perjuicio de la responsabilidad criminal por delitos comunes, los contribuyentes, responsables y terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra que tenga por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial de los tributos.

Con igual pena serán reprimidos los agentes de retención que mantengan en su poder impuestos retenidos, después de haber vencido los plazos en que debieron efectuar los respectivos ingresos.

En los casos de multas firmes aplicadas de conformidad con lo dispuesto en este artículo, la Dirección General Impositiva dispondrá la publicación periódica, por los medios de divulgación que estime adecuados, del nombre, domicilio y actividad de cada infractor y del importe de la sanción impuesta.

12. Agréganse al artículo 46, como incisos g) y h), los siguientes:

- g) La omisión, por parte de los responsables de presentar sus declaraciones juradas e ingresar el gravamen adeudado, cuando de las características del caso, tales como: la naturaleza o volumen de las operaciones realizadas, la cuantía de los beneficios obtenidos o la personalidad del infractor, resulte que el mismo no podía ignorar su calidad de contribuyente o responsable y la existencia de las obligaciones emergentes de tal condición;
- h) La omisión total o parcial de la obligación de actuar como agente de retención, cuando esa omisión provoque un evidente perjuicio fiscal y concurren las circunstancias agravantes a que alude el inciso anterior.

13. Sustitúyese el artículo 47, por el siguiente:

Artículo 47. — En los casos del artículo 45, cuando la multa a aplicar resultara inferior a \$ 1.000 (mil pesos), la Dirección General Impositiva queda facultada para imponer pena al responsable.

En los supuestos del artículo 43, el juez administrativo podrá eximir de sanción al responsable cuando a su juicio la infracción no revistiera gravedad.

14. Sustitúyese el artículo 48, por el siguiente:

Artículo 48. — Las multas aplicadas deberán ser satisfechas por los responsables dentro de los 15 (quince) días de notificadas, salvo que se hubiera optado por interponer contra las mismas las acciones o recursos que autorizan los artículos 71, 75 y 85.

15. Sustitúyese el artículo 49, por el siguiente:

Artículo 49. — Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los impuestos, recargos, intereses y multas ejecutorias, los importes respectivos devengarán un interés punitivo del 3 % (tres por ciento) mensual, que se computará desde la fecha de la interposición de la demanda.

16. Sustitúyese el párrafo primero del artículo 51, por el siguiente:

No están sujetos a los recargos establecidos por el artículo 42 ni a las multas previstas en los artículos 43 y 45: las sucesiones indivisas, el cónyuge cuyos réditos propios percibe o de que disponga en su totalidad el otro, los incapaces, los penados a que se refiere el artículo 12 del Código Penal, los concursados civilmente y los quebrados.

17. Sustitúyese el artículo 62, por el siguiente:

Artículo 62. — Se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales:

- 1) Desde la fecha de intimación administrativa de pago de impuestos determinados, cierta o presuntivamente, con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado. Cuando mediare recurso de apelación ante el tribunal fiscal, la suspensión, hasta el importe del impuesto liquidado, se prolongará hasta 60 (sesen-

ta) días después de notificada la sentencia del mismo que declare su incompetencia, o determine el impuesto, o apruebe la liquidación practicada en su consecuencia.

- 2) Desde la fecha de la resolución condenatoria por la que se aplique multa, con respecto a la acción penal. Si la multa fuere recurrida ante el tribunal fiscal, el término de la suspensión se contará desde la fecha de la resolución recurrida hasta sesenta (60) días después de notificada la sentencia del mismo.

18. Elévase de diez (10) a quince (15) días el plazo establecido en el artículo 67.

19. Sustitúyese el artículo 73, por el siguiente:

Artículo 73. — Sustanciado el recurso, el juez administrativo dictará resolución dentro del término de sesenta (60) días y la notificará al interesado, con todos sus fundamentos, en la forma dispuesta por el artículo 99 de esta ley.

20. Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 74, por el siguiente:

La reclamación del contribuyente por repetición de impuestos facultará a la dirección, cuando estuvieren prescritas las acciones y poderes fiscales, para verificar la materia imponible por el período fiscal a que aquélla se refiere y dado el caso para determinar y exigir el impuesto que resulta adeudarse, hasta anular el saldo por el que prosperase el recurso.

21. Agrégase al artículo 91, el siguiente párrafo:

La sentencia será apelable cuando el monto por el que prosperen las excepciones sea superior a \$ 4.000 (cuatro mil pesos).

22. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 99, por los siguientes:

Artículo 99. — Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etcétera, serán practicadas en cualesquiera de las siguientes formas:

- a) Por carta certificada con aviso especial de retorno, a cuyo efecto se convendrá con el correo la forma de hacerlo con la mayor urgencia y seguridad.

El aviso de retorno servirá de suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del contribuyente aunque aparezca suscrito por un tercero;

- b) Personalmente por medio de un empleado de la Dirección General, quien dejará constancia en acta de la diligencia practicada y el lugar, día y hora en que se efectuó, exigiendo la firma del interesado. Si éste no supiere o no pudiere firmar podrá hacerlo, a su ruego, un testigo.

Si el destinatario no estuviere o se negare a firmar dejará igualmente constancia de ello en acta. En días subsiguientes, no feriados, concurrirán al domicilio del interesado dos funcionarios de la dirección para notificarlo. Si tampoco fuere hallado

dejarán la resolución o carta que deban entregar en sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare en el mismo, haciendo que la persona que la reciba suscriba el acta.

Si no hubiere persona dispuesta a recibir la notificación o si el responsable se negare nuevamente a firmar, procederán a fijar en la puerta de su domicilio y en sobre cerrado el instrumento de que se hace mención en el párrafo que antecede.

Las actas labradas por los empleados notificadores harán fe mientras no se demuestre su falsedad.

23. Sustitúyese el quinto párrafo del artículo 100, por el siguiente:

El secreto establecido en el presente artículo no regirá:

- a) En cuanto concierne a las publicaciones dispuestas por la parte final del artículo 45;
- b) Para el supuesto de que por desconocerse el domicilio del responsable, sea necesario recurrir a la notificación por edictos;
- c) Para los organismos recaudadores provinciales y municipales, siempre que las informaciones que éstos soliciten estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones.

24. Sustitúyese el artículo 109, por el siguiente:

Artículo 109. — Establécese un embargo preventivo a favor de la Nación Argentina, sin perjuicio de las inembargabilidades legales vigentes, sobre todos los bienes y derechos, ya sean reales o personales, de cualquier contribuyente o responsable que, siendo deudor de impuestos firmes, sus accesorios o multas, también firmes, no cumpliera la intimación administrativa de pago. El embargo se prolongará hasta que sea satisfecho el crédito fiscal o prescriba la acción para obtener su cobro, o en su caso se conceda la prórroga prevista por el artículo 39.

Para que el embargo surta efectos contra terceros, éstos deberán ser notificados en la forma y condiciones que determine la reglamentación.

Si mediante la notificación del embargo a uno o más terceros quedare asegurado el cobro del crédito fiscal, la Dirección General procederá en un término no mayor de diez (10) días a liberar de la traba los restantes bienes del deudor, comunicándole tal medida. Igual temperamento deberá adoptarse si el responsable afianzare su deuda con garantía real o personal suficiente.

Sin perjuicio de ello, cuando no estuviera determinado el impuesto ni aplicada la multa, podrá la dirección solicitar ante el juez competente embargo preventivo por el término de noventa (90) días, por la cantidad que presumiblemente adeudaren los contribuyentes y responsables, y los jueces deberán decretarlo en el término de 24 horas. bajo la responsa-

bilidad del fisco. Este embargo podrá ser sustituido por garantía real o personal suficiente.

Si el contribuyente interpusiera contra la resolución que determine el impuesto o aplique la multa, alguno de los recursos previstos en esta ley, el embargo podrá ser prorrogado, en las condiciones del párrafo anterior, hasta treinta (30) días después de la fecha en que, agotada la instancia, quede firme el impuesto o la multa, en que será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

25. Sustitúyese el último párrafo del artículo 110 por el siguiente:

La aplicación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes se regirá por la presente ley, con las limitaciones que establezca la reglamentación.

26. Sustitúyese en el último párrafo del artículo 136 la expresión «hasta en un cincuenta por ciento (50 %), por la siguiente: «hasta en un ciento por ciento (100 %)».

27. Elévase a treinta (30) días el plazo establecido en la primera parte del artículo 164.

28. Agrégase el siguiente artículo:

Artículo .. — La Dirección General Impositiva acordará con los bancos el procedimiento para que éstos devuelvan a sus clientes todos los cheques librados a la orden de la Dirección General Impositiva una vez cancelados y satisfechos los requisitos de orden interno de acuerdo con las prácticas bancarias.

29. Agrégase la siguiente disposición transitoria:

Artículo .. — En los casos de intimidaciones notificadas y multas aplicadas que no estuvieran firmes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, serán de aplicación las normas de recargos y multas contenidas en la legislación anterior.

Con relación a los sobrepagos a los combustibles vencidos y no satisfechos con anterioridad a la promulgación de la presente ley, se aplicarán los recargos que establece el artículo 42 de la misma, en sustitución de los intereses punitivos que establecía el artículo 8º del decreto 7.926/51 a menos que ya se hubiera requerido el pago de estos últimos con respecto a esos sobrepagos.

Impuesto a los réditos

Art. 2º — Modifícase a partir del 1º de enero de 1962 la ley del impuesto a los réditos, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, en la forma que se indica a continuación:

- 1º Sustitúyese el inciso c) del artículo 43, por el siguiente:

c) Los ingresos que en forma de uno o más pagos se perciban por la transferencia temporaria o definitiva de derechos, aun cuando no se efectúen habitualmente esta clase de operaciones.

2º — Agréganse como incisos h) e i) del artículo 43, los siguientes:

- h) El mayor valor asignado a bienes aportados a sociedades, cualquiera sea su forma jurídica, cuando no exista conjunto económico entre la sociedad y el aportante;
- i) La cesión a título oneroso de cuotas sociales.

3º Suprímese en el segundo párrafo del artículo 57 la siguiente expresión: «o el de ganancias eventuales, según fuese la naturaleza de los bienes».

4º Agrégase al artículo 62, como inciso p), el siguiente:

- p) La contribución dispuesta por la ley 14.155.

5º Suprímase del primer párrafo del artículo 76 el término «sólo».

Impuesto a las ganancias eventuales

Art. 3º — Derógase a partir del 1º de enero de 1962 la ley de impuesto a las ganancias eventuales, texto ordenado en 1960.

Impuesto a los beneficios extraordinarios

Art. 4º — Modifícase la ley de impuesto a los beneficios extraordinarios, texto ordenado en 1960, en la siguiente forma:

1º Modifícase el artículo 1º, en la siguiente forma:

- a) Exclúyese del segundo párrafo la expresión: «o explotaciones».
- b) Sustitúyese el tercer párrafo, por el siguiente:

Quedan exentos los réditos extraordinarios que provengan de la actividad de comisionistas, corredores, rematadores, viajeros de comercio, despachantes de aduana y demás agentes auxiliares del comercio.

2º Modifícase el artículo 4º, en la siguiente forma:

- a) Sustitúyese el primer párrafo por el siguiente:

Artículo 4º — El capital y reservas libres computables estarán dados por la diferencia existente al final de cada ejercicio entre el activo y pasivo ajustados conforme a la ley del impuesto a los réditos y en la forma que establezca la reglamentación, no admitiéndose las revaluaciones o asignaciones de valores a los bienes del negocio, salvo los casos en que el revalúo sea computable para dicha ley. Cuando el capital así determinado no sea representativo del utilizado en el curso del ejercicio, en virtud de variaciones de importancia producidas en los tres (3) últimos meses del mismo, la dirección o los responsables podrán ajustar el capital computable, proporcionando dichas variaciones en función al tiempo.

- b) Suprímase del cuarto apartado la locución «en función al tiempo de su inversión».

3º Las modificaciones que se establecen por el presente artículo serán de aplicación a los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 1961, inclusive.

Impuesto a las ventas

Art. 5º — A partir del 1º de enero de 1962 las ventas de productos importados tendrán el mismo tratamiento fiscal que las ventas de productos similares nacionales, a los fines de la aplicación del impuesto establecido por la ley 12.148, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, tanto en lo relativo a las tasas aplicables como en cuanto al régimen de exenciones, quedando derogada toda disposición que importe un tratamiento discriminatorio en razón del origen de los productos.

Impuestos internos

Art. 6º — Modifícase la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1956 y sus modificaciones, a partir del 1º de enero de 1962, en la siguiente forma:

1º Sustitúyese el artículo 31 por el siguiente:

Artículo 31. — Los cigarros y cigarrillos, así como los tabacos que se expendan para ser consumidos en hoja, despalillados, picados, en hebra, pulverizados (rapé), en cuerda, en tabletas y despuntes, pagarán un impuesto de hasta el cincuenta por ciento (50 %) sobre el precio de venta al consumidor, incluso impuesto.

El Poder Ejecutivo queda facultado para graduar el gravamen de acuerdo con las distintas categorías de precios que se establezcan.

2º Deróganse los artículos 32, 33 y 34.

3º El Poder Ejecutivo podrá incorporar al régimen del Título I de la ley algunos de los gravámenes que actualmente figuran en el Título II, y viceversa transformando, en su caso, las tasas específicas en tasas ad-valorem, las que en ningún caso podrán exceder del veinte por ciento (20 %) del precio de venta.

4º Los productos importados gravados por la ley, tendrán el mismo tratamiento fiscal que los productos similares nacionales, tanto en lo relativo a las tasas aplicables como en cuanto al régimen de exenciones; quedando derogada toda disposición que importe un tratamiento discriminatorio en razón del origen de los productos.

Impuesto de sellos

Art. 7º — Modifícase la ley de sellos, texto ordenado en 1961, en la forma que se indica a continuación:

1º Modifícase el artículo 1º, en la siguiente forma:

- a) Reemplázase en el inciso a) la expresión «civiles o comerciales» por «civiles, comerciales o laborales»;
- b) Sustitúyese el inciso b) por el siguiente:
- b) Las actuaciones judiciales.

2º Sustitúyese el artículo 3º por el siguiente:

Artículo 3º — El impuesto de sellos se abonará:

- a) Habilitando con estampillas fiscales los instrumentos extendidos en papel simple;
- b) Mediante el uso autorizado de máquinas timbradoras;
- c) Mediante depósito bancario, con o sin declaración jurada, en las condiciones que determinará la reglamentación.

3º Deróguese el artículo 5º.

4º Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 6º por el siguiente:

Las demás cartas u otros documentos que sin reunir las condiciones arriba expresadas se refieran a obligaciones o actos preexistentes o a crearse, abonarán el impuesto en el momento de ser presentadas en juicio o al ser elevadas a escritura pública por las partes. En estos casos no se pagará más que un solo impuesto por todas las cartas que se refieran a la misma obligación.

5º Sustitúyese en el artículo 7º la expresión «cinco centavos moneda nacional (\$ 0,05)» por «un peso moneda nacional (\$ 1)».

6º Derógase el artículo 12.

7º Sustitúyese el artículo 13, por el siguiente:

Artículo 13. — Cuando los instrumentos sean extendidos en varios ejemplares de un mismo tenor, se pagará en uno de ellos el impuesto. En los demás ejemplares deberá dejarse constancia de lo pagado en el original. A solicitud de parte los demás ejemplares podrán ser visados por la repartición del ramo, la cual certificará al margen de los mismos el impuesto pagado en el original.

8º Modifícase el artículo 14 en la siguiente forma:

a) Sustitúyese el inciso j) por el siguiente:

j) Los contratos de mutuo y los reconocimientos de deuda cualquiera sea su origen;

b) Sustitúyese el inciso l) por el siguiente:

l) Las letras de cambio, giros y órdenes de pago. Los pagaderos a su presentación o hasta cinco días vista sólo abonarán este impuesto cuando no se aceptaren, pagaren o protestaren dentro de un mes de la fecha de su otorgamiento;

c) Agrégase como inciso t) el siguiente:

t) Los contratos que estipulan la constitución de derechos reales que no deban por la ley ser hechos en escritura pública;

d) Agrégase como inciso u) el siguiente:

u) Las cesiones y transferencias de boletas y promesas de compraventa de bienes inmuebles.

9º Agrégase como tercer párrafo del artículo 15 el siguiente:

En las cesiones y transferencias de boletas y promesas de compraventa de bienes inmuebles el impuesto se calculará sobre el importe bruto que se obtenga por la cesión o transferencia.

10. Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 20 por el siguiente:

Cuando por carecerse de estos antecedentes no pudiera practicarse una estimación razonable del valor económico atribuible al acto de valor indeterminado se satisfará el impuesto de \$ 150 (ciento cincuenta pesos) por foja, considerándose como tal cada 50 (cincuenta) líneas de 15 (quince) centímetros de dimensión.

11. Intercálase en el artículo 21, a continuación del tercer párrafo, el siguiente:

La instrumentación de las prórrogas dará lugar al pago del impuesto aun cuando hayan sido previstas en un contrato anterior y ellas deban producirse por el solo silencio de las partes.

12. Sustitúyese en el artículo 22 la expresión «en los artículos 20 ó 51, incisos r) o s)» según el caso, por la siguiente: «en el artículo 20».

13. Derógase en el artículo 24 la siguiente expresión final: «Debiendo abonarse por el acto de la constitución provisional el gravamen del artículo 51, inciso o)».

14. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 25 por el siguiente:

Artículo 25. — La transformación de una sociedad en otra de tipo jurídico distinto, cuando haya sido prevista en la ley, contrato o estatutos constitutivos de la sociedad, está exenta de impuestos de sellos.

15. Sustitúyese el artículo 26 por el siguiente:

Artículo 26. — Pagarán un gravamen del 3 % (tres por ciento) sobre el monto de la operación, las escrituras públicas de compraventa, de permuta o de cualquier otro contrato por el cual se transfiera el dominio de bienes inmuebles, cualesquiera sean la forma y plazos establecidos.

Satisfarán el mismo impuesto las transferencias de inmuebles realizadas por imperio de la ley sin otorgamiento de escritura pública.

En los casos de compraventa voluntaria o forzosa el impuesto estará a cargo del vendedor y en los de permuta a cargo de cada una de las partes, por mitades.

El impuesto establecido en este artículo se abonará aun cuando en el contrato se reconozcan hipotecas preexistentes descontadas del precio.

En las permutas de inmuebles se aplicará la norma del artículo 15.

Pagarán el 15 % (quince por mil) sobre el monto de la operación, las escrituras públicas de emisión de debentures con garantía especial o de cualquier otro contrato por el cual se constituya o prorrogue un derecho real sobre

inmuebles, cualesquiera sean la forma y plazos establecidos.

En las escrituras de ampliación de hipotecas constituidas a favor de instituciones oficiales, el impuesto se pagará sobre el monto de la ampliación, aun en el caso de que con motivo de la unificación realizada quede prorrogado el plazo de la obligación originaria.

16. Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 27 la expresión final «el impuesto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51, inciso n)», por la siguiente: «el impuesto fijo de \$ 150 (ciento cincuenta pesos) por foja previsto en el párrafo tercero del artículo 20».
17. Sustitúyese en el artículo 30 la expresión «\$ 30 (treinta pesos)», por la siguiente: «\$ 150 (ciento cincuenta pesos)».
18. Sustitúyese en el artículo 31 la expresión «4 % (cuatro por ciento)», por la siguiente: «6 % (seis por ciento)».
19. Suprímese en el artículo 34, a continuación de la expresión «todo crédito o débito», la expresión «no documentado».
20. Suprímese en el artículo 36, inciso e), la coma existente después de la palabra «bancarios», y agréganse como incisos h) e i) los siguientes:

h) Las operaciones documentadas en instrumentos sujetos al impuesto del artículo 14, incisos h) y j);

i) Las operaciones concertadas en jurisdicción provincial con los bancos de la ley 12.156 y complementarias.

21. Sustitúyese el artículo 41 por el siguiente:

Artículo 41. — Cada una de las aplicaciones o certificados de embarque de pólizas flotantes abonará el impuesto que corresponda conforme a los artículos anteriores.

22. Sustitúyese el artículo 42 por el siguiente:

Artículo 42. — Las pólizas de reaseguros referentes a riesgos que hayan abonado el impuesto no abonarán nuevo impuesto.

23. Derógase el artículo 45.

24. Sustitúyese el artículo 47 por el siguiente:

Artículo 47. — Quedan exentos del impuesto establecido en este capítulo:

- a) Los seguros contra riesgos que afecten a la agricultura o a la ganadería, mientras los productos asegurados no salgan de poder del productor;
- b) Los que cubran riesgos sobre bienes situados en el extranjero o destinados al país (seguros de importación);
- c) Los contratos u operaciones referentes a los seguros de vida individuales o colectivos y de accidentes personales;
- d) Los títulos de ahorro y capitalización;
- e) Las pólizas flotantes;
- f) Los contratos preliminares de reaseguros de carácter general, celebrados entre aseguradores, en los que se estipulen las bases y condiciones para la cesión de una parte de la responsabilidad;

- g) Los certificados provisionales de seguros cuando la póliza definitiva se emita con efecto retroactivo, dentro de los 90 (noventa) días.

25. Sustitúyese el artículo 48, por el siguiente:

Artículo 48. — Los cheques que se libren contra cuentas radicadas en jurisdicción nacional y los librados por los bancos a la orden de un tercero y a cargo de sí mismos pagarán \$ 0,10 (diez centavos).

26. Sustitúyese el artículo 49, bajo el título Escrituras Públicas y Actuaciones Notariales, por el siguiente:

Artículo 49. — Corresponde impuesto fijo de:

Seis pesos moneda nacional (\$ 6):

- a) A cada foja de los cuadernos de los protocolos de los escribanos de registro, sin perjuicio de abonar, además, el impuesto fijo o proporcional que corresponda al acto otorgado. Las fojas se computarán de acuerdo con el artículo 20.

Ciento cincuenta pesos moneda nacional (\$ 150):

- a) A los poderes y sus sustituciones otorgadas en escritura pública;
- b) A los contradocumentos otorgados en escritura pública.

27. Deróganse los artículos 50 a 68.

28. Sustitúyese el artículo 69, por el siguiente:

Artículo 69. — Las actuaciones que se inicien ante el Poder Judicial de la Nación y tribunales arbitrales, cuando el valor del juicio exceda de \$ 1.000 (mil pesos) o se trate de juicio cuyo valor sea indeterminado, abonarán en concepto de reposición de fojas un impuesto del 25 % (veinticinco por ciento) de las tasas que establece el artículo 82, debiendo ser como mínimo de \$ 200 (doscientos pesos) y como máximo de \$ 5.000 (cinco mil pesos).

El pago será único hasta la terminación de la actuación en todas las instancias, salvo cuando por ampliación posterior, acumulación de acciones o reconvencción, se aumente el valor cuestionado, en cuyo caso se pagará o se completará el impuesto hasta el importe que corresponda.

En las actuaciones no sujetas al pago de impuesto de justicia el gravamen a satisfacer por reposición de fojas será de \$ 200 (doscientos pesos).

En los juicios ejecutivos y de apremio se pagará la mitad del impuesto fijado en los párrafos primero y tercero.

29. Sustitúyese el artículo 70, por el siguiente:

Artículo 70. — Ante los jueces nacionales de primera instancia de paz, los del trabajo cuando el valor del juicio no exceda el límite de competencia de la justicia de paz, de la Capital Federal y ante los jueces de paz del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, el impuesto de actuación será de \$ 100 (cien pesos).

Ante los jueces y tribunales del trabajo el impuesto se pagará con posterioridad a la sentencia definitiva y ante los demás jueces y tribunales en la misma oportunidad que en cada caso establece el artículo 86.

30. Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:

Artículo 71. — El impuesto de actuación será considerado como parte de las costas del juicio y soportado en definitiva por las partes en la misma proporción en que dichas costas deben ser satisfechas.

En los expedientes judiciales o arbitrales en que una de las partes se halle eximida del impuesto que establece esta ley, la parte contraria que resulte vencida con imposición de costas, deberá reponer el total del impuesto de actuación.

En las tercerías será de aplicación lo dispuesto en el artículo 83.

31. Deróganse los artículos 72 a 79.

32. Sustitúyese el último párrafo del artículo 80 por los siguientes:

Cuando el presunto infractor sea la parte actora o todas las partes intervinientes, el juicio quedará paralizado hasta el pago o afianzamiento de la multa e impuesto que corresponda.

Cuando el presunto infractor sea la parte demandada y la parte actora aparezca prima facie exenta de responsabilidad, el juicio seguirá su curso formándose incidente por separado con la sola intervención del representante fiscal y del presunto infractor.

Cuando corresponda paralizar las actuaciones, ambas partes o cualquiera de ellas podrán obtener que el juicio siga su curso, depositando a la orden del juzgado, en el Banco de la Nación Argentina, a las resultas de la sentencia que se dicte sobre la presunta infracción, el importe del impuesto y multa reclamados por el representante fiscal.

33. Agréguese en el artículo 86, en el inciso a), a continuación de la cita del inciso k), la cita del inciso q).

34. Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

Artículo 37. — De toda presunta infracción al impuesto de justicia se dará vista al representante del fisco a que se refiere el artículo 121.

35. Modifícase el artículo 91 en la siguiente forma:

a) Suprímese en el inciso tercero la palabra «gratuita», e intercálase la palabra «religiosas», antes de «educación e instrucción».

b) Sustitúyese en el inciso 7º la expresión «poderes públicos», por «Poder Judicial».

c) Sustitúyense los incisos 5º, 6º, 9º y 10 por los siguientes:

5º Los instrumentos y operaciones a título gratuito, o cuyo valor no exceda de \$ 25.000 (veinticinco mil pesos), salvo los previstos en los incisos h), i), j), l) y s)

del artículo 14, que lo será hasta \$ 500 (quinientos pesos).

6º El arzobispado de Buenos Aires.

9º Las transferencias postales o telegráficas y los giros vendidos por instituciones bancarias pagaderos a su presentación o hasta 5 (cinco) días vista aunque no se aceptaren, pagaren o protestaren dentro de un mes de la fecha de su otorgamiento.

10. Los instrumentos en que se documente la transferencia de bienes muebles o inmuebles en los casos de aporte de capital a sociedades o de disolución y liquidación de las mismas.

d) Deróganse los incisos 11 a 13, 17, 18, 20, 23, 26, 27, 31 a 38, 41, 46 a 48 y 50.

36. Derógase en el artículo 96 la expresión final «ni a las de los testimonios de escrituras públicas otorgados por los escribanos de registro».

37. Deróganse los artículos 98, 124 a 126 y 137.

38. Las disposiciones de la ley de sellos, texto ordenado en 1961, relativas al ingreso del gravamen en papel sellado se entenderán referidas a las otras formas de ingreso previstas en esta ley, conforme lo establezca la reglamentación.

39. Aclárase que los instrumentos, actos y operaciones cuyos gravámenes se deroguen por la presente ley quedan exentos de impuesto de sellos.

40. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a partir del 1º de enero de 1962. Las actuaciones judiciales en curso a esa fecha se regirán por la legislación anterior.

Impuesto adicional a la compra y transferencia de automotores usados

Art. 8º — Créase, a partir del 1º de enero de 1962, un adicional del 50 % (cincuenta por ciento) con destino a rentas generales, al impuesto establecido por el artículo 14 de la ley 14.385 y sus modificaciones, exclusivamente sobre la compra y sucesivas transferencias de automotores usados.

Tasas de autorización e inspección de sociedades anónimas

Art. 9º — Auméntase, a partir del 1º de enero de 1962, en un 100 % (ciento por ciento) las tasas y el derecho máximo establecidos por la ley de derechos de inspección de sociedades anónimas, texto ordenado en 1955, modificado por la ley 14.789.

Gravámenes a la importación

Art. 10. — Agréganse al artículo 198 de la ley de aduana, texto ordenado en 1956 y sus modificaciones, los siguientes párrafos finales:

Lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo no será aplicable a las mercaderías de origen extranjero sujetas al pago de impuesto interno que se hallen en plaza, en lugares destinados a su comercialización, sin el estampillado fiscal respectivo. En estos supuestos, se presume de derecho que tales mercaderías no han tributado los gravámenes a la importación y no se instruirá

sumario, disponiéndose de inmediato su comiso y la aplicación de las penas indicadas en este artículo, sin perjuicio de la que pudiera imponerse posteriormente por contrabando. Facúltase al Poder Ejecutivo para aumentar en estos casos hasta el 100 % (ciento por ciento) el importe de la participación que corresponda a los denunciantes y aprehensores y a integrar un fondo especial con el producido de la recaudación aduanera, destinado a pagar, dentro de los 15 (quince) días siguientes al secuestro de la mercadería, el importe de la adjudicación. Facúltase igualmente al Poder Ejecutivo para determinar el importe sobre el cual se liquidará la participación a denunciantes y aprehensores y para disponer la comercialización de las mercaderías secuestradas, por intermedio de los industriales del ramo y/o de sus cámaras representativas.

Impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes

Art. 11. — Prorrógase por el término de 10 (diez) años el impuesto establecido en el título I de la ley de impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes (texto ordenado en 1960) con las modificaciones que se establecen seguidamente:

1º Sustitúyese el artículo 1º por el siguiente:

Artículo 1º — Establécese con carácter transitorio un gravamen sustitutivo del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que se aplicará en todo el territorio de la Nación a los capitales resultantes de los balances anuales que cierran hasta el 31 de diciembre de 1971, con arreglo a las disposiciones del presente título. La reglamentación fijará el procedimiento a seguir para los casos en que no se efectúen balances anuales.

2º Sustitúyese el artículo 2º por el siguiente:

Art. 2º — Están sujetas al impuesto de este título:

- a) Las sociedades de capital que revistan tal carácter a los efectos del pago del impuesto a los réditos, con exclusión de las asociaciones civiles aludidas en el inciso c) del artículo 54 de la ley 11.682, texto ordenado en 1960;
- b) Las empresas unipersonales y las sociedades de personas que revistan tal carácter a los efectos del pago del impuesto a los réditos, matriculadas como comerciantes en las condiciones establecidas por el Código de Comercio.

Las sociedades de economía mixta tributarán el impuesto en proporción al capital perteneciente a los accionistas privados.

Las sociedades anónimas en formación están sujetas al gravamen desde la fecha y en las condiciones que establezca la reglamentación.

3º Sustitúyese en el segundo apartado del artículo tercero la locución «excluido las inversiones en acciones de otras empresas y en bienes situados con carácter permanente en el exterior», por «excluido las inversiones en acciones

o en participaciones en otras empresas sujetas al gravamen de esta ley y en bienes situados con carácter permanente en el exterior».

4º Sustitúyese el artículo 4º, por el siguiente:

Artículo 4º — Del capital que se determine conforme a las normas anteriores, se deducirán los siguientes conceptos:

- a) Honorarios del directorio y síndico en las sociedades de capital;
- b) Habilitaciones y gratificaciones, que se paguen o pongan a disposición dentro de los cinco (5) meses o tres (3) meses de cerrado el ejercicio, según se trate de sociedades de capital o de los demás responsables de esta ley.

Excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, la Dirección General Impositiva admitirá dicha deducción aun cuando la distribución se efectúe con posterioridad al vencimiento del plazo indicado;

- c) El impuesto a los réditos del ejercicio, las sociedades anónimas y de economía mixta. Las firas unipersonales y sociedades en comandita por acciones o de personas, un porcentaje a fijar por el Poder Ejecutivo, aplicado sobre las utilidades ajustadas de acuerdo a las normas de la ley 11.682.
- d) El impuesto a los beneficios extraordinarios del ejercicio.

5º Derógase el artículo 5º.

6º Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:

Artículo 6º — El pago del gravamen tiene carácter de definitivo, aunque a su vencimiento no se prorrogue la vigencia de esta ley.

7º Sustitúyese el artículo 9º, por el siguiente:

Artículo 9º — Las provincias que adhieran al régimen de este título, se obligan a:

- 1º Derogar los gravámenes locales, cualquiera sea su característica y denominación, que inciden directamente sobre la materia imponible a que se refiere este título, con prohibición de implantarlos en lo sucesivo.
- 2º Modificar el régimen de los impuestos locales a la transmisión gratuita de bienes a efectos de excluir la materia imponible a que se refiere este título en la determinación del haber sucesorio.

8º Las modificaciones del presente artículo, serán de aplicación para los ejercicios que se cierran a partir del 31 de diciembre de 1961, inclusive.

Art. 12. — Modifícase el título II de la ley del impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes (texto ordenado en 1960), en la siguiente forma:

1º Sustitúyese el artículo 12, por el siguiente:

Artículo 12. — Las personas físicas, por la parte de sus patrimonios no sujeta al régimen del título I, podrán optar por abonar un impuesto anual, en sustitución del impuesto local a la transmisión gratuita de bienes por causa

de muerte establecido por la ley 11.287, en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes de este título.

Impuesto a la transmisión gratuita de bienes

Art. 13. — Sustitúyese el artículo 14 de la ley 11.287 (texto ordenado en 1961), por el siguiente:

Artículo 14. — Para determinar el monto imponible sujeto a este impuesto no se computará:

- a) El valor de las inversiones en acciones emitidas por entidades alcanzadas por la ley de impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes (texto ordenado en 1960);
- b) A partir del 31 de diciembre de 1961, el valor de las inversiones en acciones nominativas y los importes que pertenezcan al dueño o socios en empresas unipersonales y sociedades de personas alcanzadas por el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes;
- c) Los montos cubiertos por el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes para las personas físicas.

A los efectos precedentes se considerará como fecha de la transmisión, la del fallecimiento del causante o la de celebración del acto que la exteriorice, si se tratare de transmisión entre vivos.

Tampoco se computarán las inversiones en los casos de que el fallecimiento del accionista o socio hubiere ocurrido antes del 31 de diciembre de 1961, pero en el transcurso de un ejercicio alcanzado por el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes.

Art. 14. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Roberto T. Alemann. — Jorge Wehbe.

(Anexo (2) al orden del día número 1.108½)

Honorable Cámara:

En el término previsto en el artículo 87 del reglamento del honorable cuerpo presento las observaciones que tengo que formular al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (en mayoría) impreso en el orden del día 1.108 ½ y que se especifican a continuación:

Procedimiento

Artículo 19 — Numeral 25. Suprimir la edición de la palabra «por sorteo» que se propicia introducir en el texto del artículo 122.

Impuesto a los réditos

Art. 29 — Intercalar entre el numeral 1 y 2, la siguiente modificación a los artículos 20 y 21 sobre *renta no imponible y cargas de familia*.

Artículo 20. — Las personas de existencia visible residentes en la República ten-

drán derecho a deducir de sus réditos, en concepto de renta no imponible, la suma de treinta mil pesos (\$ 30.000) anuales.

Dicho mínimo no imponible se elevará en doce mil pesos (\$ 12.000) anuales para los contribuyentes que tengan cargas de familia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes residentes en el país que obtengan réditos comprendidos en el artículo 60 superiores a ciento diez mil pesos (\$ 110.000) tendrán derecho a una deducción adicional igual al excedente de dicha suma hasta un máximo de doscientos mil pesos (\$ 200.000) anuales.

Artículo 21. — Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus réditos las siguientes sumas en concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican residan en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a ciento diez mil pesos (\$ 110.000), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

- a) Doce mil pesos (\$ 12.000) anuales por cónyuge;
- b) Siete mil pesos (\$ 7.000) anuales por cada descendiente en línea recta varón (hijo, nieto, bisnieto) e hijastro, menor de edad o incapacitado para el trabajo; por cada descendiente en línea recta mujer (hija, nieta, bisnieta) e hijastra; por cada ascendiente (padre, abuelo, bisabuelo); por cada hermano varón menor de edad o incapacitado para el trabajo y hermana cualquiera sea su edad; por el suegro o la suegra; y por cada yerno menor de edad o incapacitado para el trabajo, y nuera cualquiera sea su edad.

Cuando las cargas de familia a que se refiere el inciso b) de este artículo excedan de dos, se admitirá una deducción adicional de dos mil quinientos pesos (\$ 2.500) anuales por cada una. Sin perjuicio de esta deducción, los contribuyentes que tuvieran a su cargo más de tres hijos, podrán deducir la cantidad de cuatro mil pesos (\$ 4.000) anuales por cada hijo que exceda ese número.

La deducción por cargas de familia sólo podrá efectuarla el o los parientes más cercanos que tengan réditos imposables.

Impuesto a las ventas

Art. 39 — Incluir en el artículo 11, inciso a), como mercadería de producción nacional eximida del gravamen, los *jugos puros naturales y concentrados de frutas cítricas*.

Impuestos internos

Art. 4º Numeral 10. — Sustituir el dictamen de la comisión por lo siguiente:

Agrégase como capítulo IX del título II, lo siguiente:

Artículo 113. — Los productos que a continuación se enumeran, de fabricación nacional o extranjera, pagarán en concepto de impuestos internos las siguientes tasas:

- a) Las bebidas gasificadas, no alcanzadas específicamente por otros impuestos, que no estén elaboradas a base de jugos o zumos de frutas o sus extractos naturales, diez por ciento (10 %);
- b) Los refrescos en general, quince por ciento (15 %);
- c) Los jarabes, extractos o concentrados no derivados de la fruta aptos para la preparación de las bebidas sin alcohol, quince por ciento (15 %).

El último párrafo del artículo igual al del dictamen de la comisión.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Estimo que la facultad acordada en el artículo 122 de la ley 11.683 (texto ordenado) de procedimiento para la aplicación y percepción de impuestos, para que el presidente del Tribunal Fiscal designe, de acuerdo con el reglamento del procedimiento, los miembros que con él constituirán el tribunal para celebrar las audiencias de vista de la causa o los acuerdos para dictar sentencia, debe mantenerse. En consecuencia, propicio que se elimine del artículo 1º, numeral 25 del dictamen de la comisión, la modificación que se propicia de establecer el procedimiento del sorteo para la integración del tribunal.

A primera vista parece más aceptable el método del sorteo para la integración del tribunal, pero la verdad es que cuando se sancionó la institución del Tribunal Fiscal se consagraron las más modernas normas de derecho procesal, orientadas a establecer que, salvo lo fundamental, sean los propios miembros del tribunal quienes, como cuerpo, dicten las reglas de procedimientos a aplicarse.

La atribución que se retira al presidente del tribunal, rompe en alguna medida la armonía de la ley, toda vez que la facultad de designar los vocales que intervendrán en las causas guarda correspondencia con el novedoso sistema de integrar el cuerpo con miembros que poseen el título de doctores en ciencias económicas, por ejemplo, a quienes se le podrán así atribuir preferentemente funciones de vocales instructores en aquellas causas que, por la naturaleza de los problemas a dilucidar, son los naturalmente llamados a actuar. Por el sistema del sorteo que se propicia se deja librada al azar una decisión que hace a la mejor y más eficaz distribución del trabajo y al acierto con que se deben decidir las causas.

Impuesto a los réditos

Considero que si nos abocamos a la reforma de las leyes impositivas no podemos omitir considerar mo-

dificaciones a los artículos 20 y 21 de la ley 11.682 (texto ordenado), de impuesto a los réditos, en la parte que versa sobre la renta no imponible y cargas de familia.

Es un asunto que no ha sido examinado en la comisión en ocasión del dictamen en estudio.

Estimo que deben elevarse los índices incluidos en dichos artículos en consonancia con la elevación del costo de la existencia y de los aumentos de sueldos y salarios operados en los últimos tiempos.

Las escalas propuestas pretenden conciliar lo anteriormente expuesto con la necesidad de no sustraer al fisco los recursos necesarios para atender, sin déficit, la ejecución del presupuesto de la Nación recientemente sancionado por el Honorable Congreso.

Impuesto a las ventas

Se propicia modificar el artículo 4º del dictamen de la comisión, propiciando incluir en la enumeración del artículo 11, inciso a), de mercaderías de producción nacional eximidas del gravamen a las ventas, a los jugos puros naturales y concentrados de frutas cítricas.

Estimo que son productos que deben gozar de esta exención, para lo cual no debe tomarse en cuenta sino el criterio sustentado para no gravar al arroz, los aceites comestibles, la lavandina, los fideos, jabones, la soda en sifón o botella, los vinos genuinos, la yerba mate y muchos otros artículos de iguales características.

Considero que debemos estimular la producción de los jugos puros naturales y concentrados de frutas cítricas, cuyo alto valor nutritivo derivado de su riqueza vitamínica es innecesario destacar. En mi exposición oral en el recinto ampliaré con otras consideraciones los fundamentos que dejo señalados aquí.

Impuestos internos

Con el mismo criterio que sustento para propiciar la exención del impuesto a las ventas para los jugos puros naturales y concentrados de frutas, me opongo y auspicio una nueva redacción para el artículo 113 de la ley de impuestos internos, que excluye del gravamen que se crea para las bebidas gasificadas las que se elaboren a base de jugos o zumos de frutas o sus extractos naturales, así como también los jarabes, extractos o concentrados derivados de la fruta aptos para la preparación de las bebidas sin alcohol.

Se considera que un 30 % de la producción citrícola del país no llega a los consumidores por falta de industrialización de la misma. Para alentar el proceso industrial debemos desgravar y no gravar los jugos puros naturales o concentrados de frutas y las bebidas que se elaboren en base a los mismos. Por supuesto que no están comprendidas en este criterio las bebidas carbonatadas, pues éstas contienen muy reducida cantidad de jugo —cuando no son artificiales— y gran cantidad de agua, anhídrido carbónico y azúcar, y no representan una solución para fomentar una mayor producción frutícola.

Por estas razones, y las que daré en el recinto en oportunidad de considerarse el dictamen contenido en el orden del día 1.108 ½, dejo fundadas mis observaciones al mismo en los términos del artículo 87 del reglamento de la Cámara.

Jorge W. Ferreira.

Sr. Presidente (Breyter). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. García Veiga. — La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha realizado un exhaustivo estudio del proyecto de ley sobre reformas al régimen impositivo vigente, propugnado por el Poder Ejecutivo, y ha producido el dictamen que se halla a consideración de la Honorable Cámara, acerca de cuyos aspectos más salientes me referiré sucintamente.

Las modificaciones incluidas en el proyecto configuran, en su conjunto, una manifestación positiva de la preocupación que evidencia el gobierno en el sentido de ir mejorando, a medida que las circunstancias lo permiten, la estructura de nuestro sistema tributario, a cuyo efecto se eliminan impuestos innecesarios o se los sustituye por otros más adecuados, lo que permitirá racionalizar y simplificar la aplicación y percepción de impuestos.

El ejemplo más destacable en este sentido es la reforma del actual régimen de impuesto de sellos, mediante la cual se suprimen las tasas fijas, el impuesto a los recibos y giros internos, el sellado de actuación administrativa y judicial, etcétera.

Puede señalarse así mismo, entre las principales modificaciones, las que se introducen al impuesto a los beneficios extraordinarios para unificar su base imponible con el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, la inclusión en el régimen de este último tributo de las sociedades de personas y empresas unipersonales, y el perfeccionamiento de las normas legales para la aplicación, percepción y fiscalización de impuestos.

Todas estas medidas significarán en la práctica una mayor simplicidad en la determinación y percepción de los respectivos gravámenes, con beneficios mutuos para el contribuyente y el fisco, ya que se da un paso más hacia la solución de uno de los problemas más serios de nuestro sistema impositivo, cual es la complejidad de sus diversos tributos. Es sabido que en materia tributaria, las disposiciones legales complicadas o la excesiva tecnificación de las liquidaciones son factores adversos para el logro de los objetivos que con ellos se persiguen. Por el contrario, la simplificación predispone mejor al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones y facilita, a la vez, la labor de los órganos recaudadores.

Completando este cuadro de innovaciones, puede hacerse referencia también a las reformas que se proyectan en los impuestos a las ventas e internos, tendientes a adecuarlos a los términos de acuerdos internacionales suscritos recientemente por el país. Así mismo, hay nuevas normas que regirán en materia de procedimiento y represión del contrabando, con el propósito evidente de agilizar la tarea de las reparticiones encargadas de reprimir la evasión fiscal.

En síntesis, puede afirmarse que estamos frente a un proyecto de modificaciones impositivas cuya aprobación no provocará una mayor carga tributaria, puesto que sólo hay un traslado de imposiciones dentro del régimen fiscal. La mayor racionalización de las imposiciones, unida a una campaña fiscalizadora eficaz contra la evasión y el fraude fiscal, asegurará en definitiva una mayor recaudación, lo cual, a su vez, es previsible que na de crear condiciones económicas más favorables para encarar, en otra etapa, desgravaciones que, aun justas, hoy no es posible conceder.

En este sentido, debe reconocerse que el gobierno hace los mayores esfuerzos, ya que, pese a las necesidades cada vez más crecientes del presupuesto, no recurre al arbitrio simple de crear nuevos gravámenes, sino que concentra toda su acción en dotar a los organismos de recaudación de los medios e instrumentos legales indispensables para cumplir el objetivo fundamental e. esta materia, es decir, evitar y reprimir la evasión y el fraude al fisco, a fin de que la generalidad de la tributación no sea un simple enunciado teórico, sino que se cumpla en realidad, como única y verdadera posibilidad de encarar luego la reforma sustancial que, no hay duda, está resultando necesario introducir en nuestro sistema tributario.

Sr. Prece. — Si me permite el señor diputado...

Como la Cámara está considerando las reformas a las leyes impositivas, hago indicación de que se invite a concurrir al recinto al señor secretario de Hacienda, doctor Wehbe.

Sr. Presidente (Breyter). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Breyter). — Como hay asentimiento, se invitará al señor secretario de Hacienda para que asista a la reunión que celebra la Honorable Cámara.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. García Veiga. — Para que pueda cumplirse el objetivo a que me estaba refiriendo, es necesario que el Congreso apruebe el presente proyecto de ley, que si bien es cierto acentúa la severidad de algunas normas —y por ello ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores que imputan al gobierno un extremado rigorismo fiscal—, son medidas que han sido precedidas por sanciones legislativas referentes a condonaciones, regularización de patrimonios no declarados, revaluación de activos y otras, que han dado a los responsables la oportunidad para normalizar sus relaciones con el fisco.

Efectuado este comentario de carácter general sobre la reforma, pasaré seguidamente a considerar en particular los distintos artículos que en el dictamen se estructuran. Comenzaré, como es lógico, por el artículo 1º del pro-

yecto, que introduce modificaciones de importancia a la ley 11.683, de procedimientos para la aplicación y percepción de impuestos.

Punto 19. La norma que se incluye en el tercer párrafo del artículo 8º tiende a dar mayor respaldo legal a un sistema ya utilizado por la Dirección General Impositiva, mediante el cual se documentan con pagarés las cuotas de prórroga otorgadas a los contribuyentes o responsables para el pago de sus deudas fiscales, confiándose su cobro a los bancos de la Capital Federal. Idéntico fin legal se persigue respecto a la inscripción de agentes de retención.

Punto 29. La sustitución del párrafo 5º del artículo 14 permitirá al organismo fiscal tomar los recaudos necesarios a efectos de evitar los inconvenientes que se originan en la notificación de la determinación de oficio o intimaciones de pago por deudas fiscales.

Hasta la fecha el cambio de domicilio de los responsables ha sido comunicado en forma maliciosa por no serle obligatorio cumplir ningún requisito legal.

Puntos 39 y 49. Sustancialmente la modificación propuesta pretende unificar el procedimiento de la determinación de oficio tanto en el caso de renta cierta como en el de la presunta. Así se establece el emplazamiento previo en ambos casos para evitar los problemas emergentes de los distintos procedimientos, permitiendo a los responsables en ambas situaciones la posibilidad de concretar su real obligación fiscal. Se acuerda la vista de los cargos efectuados también para el caso de la determinación presunta, por entenderse que es más razonable para estos casos que exclusivamente para la renta cierta, según estaba dispuesto. Así mismo se incluyen en el punto 49, en sus dos últimos párrafos, las condiciones a que deberán sujetarse los escritos y recursos que presenten los contribuyentes, ello en virtud de que la experiencia ha demostrado la falta de normas legales a este aspecto, que ha permitido por parte de los contribuyentes o asesores que no ajusten su actuación a las normas que la ética impone, maniobras que han causado ingentes perjuicios no sólo de orden fiscal, sino de orden moral en lo que hace al personal de la repartición.

Esta medida, que acordará seriedad a las presentaciones que efectúen los contribuyentes, aparte de no originar a los mismos dificultades insalvables, dado que por el contrario acelerará la tramitación de las actuaciones, no es de ninguna manera novedosa, ya que se basa en las disposiciones que establece al respecto el decreto 14.361/60, referido al tribunal fiscal.

Punto 59. La nueva redacción del artículo 26 trata de aclarar su contenido y propicia la posibilidad de que la Dirección General Impositiva modifique sus propias resoluciones cuando en ellas en forma expresa ha dejado constancia de la limitación de la fiscalización efectuada. Ello permitirá la verificación de gran número

de contribuyentes sin necesidad de proceder al análisis exhaustivo de cada fuente de renta que a los mismos corresponda.

Punto 69. Mediante la modificación del actual artículo 28 se faculta a la Dirección General Impositiva a tomar otros índices para fijar los anticipos, los que establecidos sobre bases razonables servirán como medio de asegurar la localización de contribuyentes que actualmente escapan al control fiscal.

Punto 79. En el caso de prórrogas que comprendan más de un período fiscal, se presenta frecuentemente el problema de cómo deben imputarse los respectivos pagos; es decir, si deben aplicarse a la deuda más gravosa proporcionalmente, o usando otros procedimientos, con los que no siempre se llega a un acuerdo de partes. Para solucionar ese inconveniente se ha considerado prudente que la misma ley aclare en forma taxativa cuál es el sistema de imputación a seguir.

Punto 89. Se modifica sustancialmente el régimen de recargos instituido por el artículo 42, reemplazándose la escala actual, que del 5 por ciento llega hasta el máximo del 250 por ciento, para deudas con una antigüedad mayor de cinco años, con un recargo del 3 por ciento mensual calculado sobre el monto del gravamen adeudado y a contar de la fecha en que éste debía abonarse, con la aclaración de que ello será sin perjuicio de las sanciones que establecen los artículos 43 y 45.

Se estima que la acumulación de multas y recargos no implica la aplicación de las sanciones por un mismo hecho, en razón de que los segundos tienen carácter resarcitorio y son de naturaleza civil, de modo que no configuran una penalidad. Considerada la situación desde el punto de vista económico, cabe señalar que simultáneamente con la acumulación en determinadas circunstancias de multas y recargos se propicia la reducción del límite mínimo que fija el artículo 45 para la graduación de la pena, con lo que el nuevo sistema no ha de resultar para el responsable más gravoso que el régimen actual, ya que el juzgador podrá, en el momento de emitir su fallo, tener en cuenta los recargos ya ingresados.

Por otra parte, al facultarse al juez administrativo a reducir o no exigir los recargos, queda asegurada la equidad de la norma en el caso de errores excusables.

Punto 99. Se propone la elevación de los montos mínimo y máximo de las multas fijadas por el artículo 43 para adecuarlos a cifras más representativas, con lo que se acuerda a la Dirección General Impositiva un medio adecuado para compeler a los contribuyentes remisos a cumplir con sus obligaciones fiscales.

Punto 10. Se prevé la derogación del artículo 44 en razón de que al establecerse por el artículo 43 la procedencia de los recargos —ya se trate de declaraciones juradas primitivas o

de re-tilificaciones—, no se estima lógico agregar a ello la aplicación de multas en el caso de infracciones no dolosas. Lo equitativo de la r-tilida propuesta ha de resultar claro si se tiene en cuenta que no es más grave la actitud del responsable que por negligencia ha presentado declaraciones juradas inexactas y eludido parcialmente el pago del impuesto, que la de aquel que, también por negligencia, ha dejado de formular sus declaraciones y evadido totalmente el ingreso del gravamen. Resulta lógico, pues, adoptar el mismo temperamento en ambos casos. A eso cabe agregar que la sustitución del juzgamiento de las infracciones moderadas no dolosas y la consiguiente aplicación de multas con un recargo de carácter automático eliminaría en el 70 por ciento los procedimientos que a la fecha se inician para establecer la existencia de transgresiones materiales no dolosas, con la consiguiente economía de tareas.

Punto 11. Por el mismo motivo —procedencia de los recargos— se considera conveniente disminuir el límite mínimo a un tanto, toda vez que ello, agregado a los recargos, automáticamente lo eleva a un promedio de no menos de dos tantos en una fiscalización de cinco años.

También se establece la obligación, a cargo de la Dirección General Impositiva, de publicar en todos los casos la nómina de los infractores y multas aplicadas. La medida aparece plenamente justificada si se tiene en cuenta que sólo alcanza a las defraudaciones, y resulta claro que la situación de quienes han violado deliberadamente la ley para obtener una ventaja ilícita a expensas del erario no debe estar amparado por el secreto que establece el artículo 79. Resulta claro también que estas publicaciones han de contribuir eficazmente a deslindar a otros posibles infractores.

Punto 12. Con el temperamento propiciado se tiende a remediar una situación que dentro del juego de las normas represivas vigentes aparece injusta. En efecto, el responsable que deliberadamente falsea sus declaraciones aunque haya oblado en término la mayor parte del tributo adeudado es reprimido con las severas sanciones que el artículo 45 consagra; en cambio, el contribuyente que en virtud de la cuantía de sus beneficios, la clase y volumen de sus negocios no podía ignorar cuáles eran las obligaciones que la ley fiscal le impone y omite deliberadamente presentar sus declaraciones juradas a fin de eludir totalmente el pago del impuesto sólo se hace pasible de un recargo.

Así mismo se incluye como susceptible de ser penado el agente de retención que no actúe como tal o lo haga sólo parcialmente no obstante no ignorar sus obligaciones. Independientemente de ello, la posibilidad de reprimir severamente a quienes han omitido formular la denuncia de su situación ante la ley fiscal al ingresar el gravamen ha de decidirlo en muchos casos a suscribirse a la dirección y colocarse al amparo de la presentación espontánea.

Punto 13. Se funda en que una multa inferior a mil pesos no llena en la práctica su función ejemplificadora e intimidatoria. La aplicación de sanciones de tan escasa cuantía en casos numerosos sólo significaría, entonces, un innecesario recargo de tareas para la administración.

Punto 14. Con la modificación propuesta se ha buscado unificar las fechas a partir de las cuales la dirección puede iniciar el cobro compulsivo de los impuestos y de las multas fijadas. Se pretende con ello evitar tanto al contribuyente como a la dirección las dificultades emergentes de plazos distintos, máxime cuando ambas determinaciones —impuestos y multas— surgen de una misma resolución.

Punto 15. En virtud de la modificación que se propicia por el artículo 42, en cuanto al por ciento de los recargos, se considera que los intereses punitivos por cobros compulsivos no deben ser inferiores al tres por ciento mensual.

Punto 16. Por considerarlo conveniente se incluyen los recargos del artículo 42 dentro de las disposiciones de este artículo, eliminándose las exenciones que consagra el mismo para las sociedades en liquidación, por cuanto se interpreta que resulta injustificada la impunidad de que gozan actualmente las sociedades que entran en liquidación por cese de negocios, por muerte de uno de sus socios que figura en el rubro social, por haber perdido la personería jurídica en el caso de sociedad anónima, etcétera, pero sin que haya disminuido su patrimonio.

Punto 17. La norma actual establece que la suspensión se prolongará hasta 60 días después de la sentencia del Tribunal Fiscal o de la resolución que apruebe la liquidación sin tener en cuenta que dicha notificación puede demorarse y que también se opera en el caso de que el Tribunal Fiscal declare su incompetencia.

—Ocupa su asiento en el recinto el señor secretario de Estado de Hacienda, doctor Jorge Wehbe.

Sr. García Veiga. — Con esta modificación en lo sucesivo en vez de contarse los 60 días a partir de las fechas aludidas, dicho término comenzará a correr desde la fecha de la respectiva notificación, por cuanto legalmente éste es el momento en que el contribuyente toma conocimiento de la resolución recaída.

Por último, se considera indispensable unificar las causales de suspensión de prescripciones, ya se trate de impuestos o de multas. Eso en virtud de las disposiciones del artículo 70 que establecen la simultaneidad de su determinación. Con ello se pretende evitar un tratamiento distinto a las determinaciones de una misma resolución, facilitando así tanto la posición de los contribuyentes como a la dirección.

Punto 18. Se considera oportuno notificar los términos entre el plazo para contestar la vista

y el emplazamiento previo a la determinación del impuesto en forma cierta o presuntiva (artículos 23 y 24) y el de alegar defensa por la infracción cometida.

Punto 19. Se sustituye la mención de los directores por la del juez administrativo, en razón de la descentralización de funciones que se están llevando a cabo en el organismo fiscalizador y se establece que la notificación de que trata dicho artículo se efectuará de acuerdo con las normas del artículo 99.

Punto 20. Se precisa el alcance de la facultad acordada a la dirección para verificar la materia imponible en los recursos de repetición cuando ya ha prescrito la facultad normal de la determinación del gravamen, aclarando que lo es al solo efecto de no devolver suma alguna en tanto exista impuesto no ingresado por otro concepto.

Se entiende que ésta fue la real intención del Poder Ejecutivo al dictar el decreto 8.718/57, ya que la disposición legal existente en ese momento facultaba a la dirección para determinar y exigir el impuesto que resultara adeudarse en toda su medida, determinando que como consecuencia del ejercicio de un derecho legal por el contribuyente o responsable se transforme en una verdadera sanción en virtud de la complejidad de las leyes tributarias. En la ley actual la demora de la dirección en resolver el recurso de repetición se ha resuelto acordando la facultad al contribuyente de recurrir al Tribunal Fiscal o ante la justicia nacional si el fisco no se expidiera en el término de tres meses.

Se ha considerado necesario extender esa facultad a los recursos de reconsideración de repetición contra la dirección, dado que el silencio de ésta dejaba inerte al contribuyente para hacer valer sus derechos.

Punto 21. La ley 12.265 privó al fisco de acción para apelar la sentencia recaída en los juicios de apremio. Si se tiene en cuenta que dicha sentencia hace cosa juzgada a los efectos expresamente contemplados en ella, se advierte fácilmente que en el caso de un error judicial de primera instancia el Estado queda muchas veces sin posibilidad de hacer valer sus derechos para obtener el cobro de sumas de impuestos indispensables para llenar sus fines, ya que ni siquiera puede intentar una reparación por la vía del juicio ordinario. Ello conduce, evidentemente, a la conclusión de que concederle nuevamente el derecho de apelar significaría restituir una garantía indispensable.

Sr. Adrogué. — ¿Me permite una aclaración, señor diputado?

Sr. García Veiga. — Sí, señor diputado.

Sr. Adrogué. — El discurso del señor diputado está aplicado exclusivamente a lo particular; pero tal vez sea útil que sigamos el procedimiento que ha iniciado, para no tener que volver después a hacer algunas observaciones en el debate en particular.

La disposición que se agrega al artículo 91 acuerda el derecho de apelar exclusivamente al fisco, pero yo creo que debería permitirse apelar también al contribuyente.

El punto 21, al que acaba de referirse el señor diputado, expresa: «La sentencia será apelable cuando el monto por el que prosperen las excepciones sea superior a cuatro mil pesos.» Vale decir que se refiere al caso en que el contribuyente haya opuesto excepciones y obtenido éxito. En este caso sí se permite la apelación. Pero en el caso inverso, esto es cuando la excepción se ha opuesto y el contribuyente ha fracasado en su pretensión, no se le acuerda el recurso de apelación. Esto último es lo que creo injusto, y estimo necesario reestablecer el equilibrio en este orden de situaciones.

Por estos motivos propondría que simplemente se dijese que la sentencia será apelable cuando el monto cuestionado sea superior a cuatro mil pesos. Me parece que es poco equitativo otorgar la apelación sólo al fisco. Mediante la supresión de las palabras «por el que prosperen las excepciones» se concederá la apelación a ambas partes cuando se trate de sumas superiores a cuatro mil pesos.

Sr. García Veiga. — Me parece que la acotación del señor diputado Adrogué tiene un fondo lógico. Dejaremos la consideración del tema para el debate en particular.

Por otro lado, como los señores diputados saben, los proyectos de estas leyes impositivas son elaborados en sus bases esenciales por el Poder Ejecutivo. Por ello, en la discusión en particular será conveniente requerir la opinión del representante del Poder Ejecutivo, para conocer cuál ha sido el criterio que ha guiado la redacción de este punto.

En el estudio que en la comisión hemos hecho del proyecto no hemos reparado en este aspecto que con toda lógica señala el señor diputado.

Sr. Secretario de Hacienda. — En realidad, en esta disposición se trata de la apelación en los juicios de apremio, porque el contribuyente para los montos superiores a quinientos pesos tiene abierto el recurso ante la justicia ordinaria. Es decir que en estos casos el contribuyente no está privado de la apelación. Para el fisco hay cosa juzgada en estos juicios; no así para el contribuyente.

De todos modos, será conveniente tener en cuenta la observación del señor diputado.

Sr. Presidente (Breyer). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado García Veiga.

Sr. García Veiga. — En el punto 22, a través de las nuevas normas que se introducen en el artículo 99, se trata de solucionar los problemas derivados de la notificación, de las citaciones y de las intimaciones de pago. Para ello se aclara que toda notificación efectuada por el correo en el domicilio del contribuyente es válida cualquiera sea la persona que la haya recibido, y se fija así mismo con toda preci-

sión, el trámite que deberán seguir los funcionarios notificadores, de tal modo que queden garantizados los derechos del fisco y del contribuyente.

Sr. Adrogué. — Si el señor diputado me permite, quiero hacer una aclaración con respecto a este punto.

Sr. García Veiga. — Sí, señor diputado.

Sr. Adrogué. — Haciéndome eco de algunas críticas que han sido objeto de publicidad, y tal como lo podemos comprobar todos los que tenemos alguna experiencia en la materia, quiero señalar que en los procedimientos de notificaciones a terceros, como es el caso contemplado en el inciso a), o cuando intervienen testigos, supuesto previsto en el inciso b), generalmente se presenta la imposibilidad de establecer si es exacto o no que ha intervenido el tercero que recibe la notificación o el testigo que firma a ruego.

Esta situación creo que se solucionaría agregando a la disposición legal una cláusula relativa a la necesaria identificación del tercero, haciendo que cuando el empleado de la Dirección General Impositiva levante el acta, recoja en ella los datos pertinentes para identificar a ese tercero.

Comprendo que se presuma la autenticidad del acta, y de que haya sido perfectamente levantada; pero, tal como lo propone el dictamen coloca al interesado en la imposibilidad de probar algo negativo, como es que esa persona que firma no existe.

Por eso propondría que se agregara una frase en la que se haga referencia a un testigo debidamente identificado. Así pondríamos al contribuyente en condiciones de ejercer su defensa si realmente no hubiera recibido la notificación, como puede llegar a suceder no sólo en esta materia, sino en la relativa a la vida tribunalaria y judicial.

Dejo sometida esta inquietud a la comisión, por si cree conveniente acogerla, acordando así mayores garantías al contribuyente. En lo demás me parece adecuada la fórmula que se propone.

Sr. García Veiga. — Yo estoy haciendo un informe general sobre los aspectos particulares de esta ley. Los detalles, como el que acota el señor diputado en este caso, me parece conveniente tratarlos en la discusión en particular para fijar normas esclarecedoras como la que persigue el señor diputado.

Sr. Adrogué. — ¿El señor diputado prefiere, entonces, que no efectuemos más pedidos de aclaración?

Me he adelantado a colocarme en el terreno en que se ubica el señor diputado, que está haciendo un informe general, con mención precisa de disposiciones legales.

Sr. García Veiga. — Es exacto.

Sr. Adrogué. — Me parece constructivo el sistema de declaraciones en estos momentos, por-

que si no el debate se prolongará en los días que restan del período de sesiones extraordinarias al reeditar en particular las aclaraciones y observaciones que ahora podemos ir adelantando.

Sr. García Veiga. — Son muy atinadas las palabras del señor diputado, pero quiero significar que el informe que estoy dando a la Cámara es de orden general; y si bien es cierto que estoy particularizando distintos puntos del proyecto, lo hago precisamente para fijar la idea del Poder Ejecutivo y de la comisión a los fines de solicitar la aprobación de esta iniciativa. Como es de práctica en esta Cámara, en el debate en particular surgirán nuevos detalles aclaratorios sobre este proyecto.

En síntesis, señor diputado Adrogué, estoy dando una idea general del criterio sostenido por la mayoría de la comisión.

Sr. Adrogué. — Entonces, me voy a abstener de pedir otras aclaraciones, salvo en algunos puntos muy fundamentales.

Sr. García Veiga. — No me molesta la interrupción del señor diputado. Por el contrario, le agradezco su contribución, porque conozco la versación del señor diputado en esta materia. Por ello no puedo dejar de reconocer cuanto contribuya a esclarecer más este problema, en el que todos tenemos interés en dar una solución que sea lo mejor posible, ya que ésta es una ley que gravita en la vida privada y pública del país.

Prosigo, señor presidente.

En el punto 23 se agregan en el artículo 100 otras excepciones a las normas fiscales; son ellas las referentes a la publicación de la nómina de infractores —artículo 45— y a la notificación por edictos en el supuesto de no conocerse el domicilio del responsable.

En el punto 24 se ha considerado conveniente, por razones que se relacionan con la uniformidad del procedimiento aplicable a los gravámenes que recauda la Dirección General Impositiva, incluir entre las disposiciones de la ley 11.683 el impuesto a la transmisión gratuita de bienes.

En el punto 25 se salva una omisión del artículo 122.

Sr. Ferreira. — ¿Me permite, señor diputado?

Sr. García Veiga. — Sí, señor diputado.

Sr. Ferreira. — Creo haberle escuchado que el punto 25 trata de suplir una omisión del artículo 122. Tengo entendido que no es así. Por eso quisiera conocer los fundamentos de la comisión para hacer esa corrección.

Sr. Prece. — La comisión va a mantener el dictamen tal cual está. Este asunto se refiere a la integración del Tribunal Fiscal para celebrar las audiencias de vista de la causa.

Sr. Ferreira. — No dudo que la comisión podrá o no mantener su dictamen, pero lo que entiendo es que no se trata de suplir una omisión, sino que es una modificación.

Sr. Prece. — Sí, señor diputado, es una modificación que consideraremos en particular.

Sr. Ferreira. — Perfectamente.

Sr. García Veiga. — Prosigo, señor presidente. El punto 26 aclara el texto del artículo 123.

Por el punto 27 está claro que la sustitución propiciada sólo se propone ajustar la redacción del artículo a su real significado. En razón de la modificación propiciada por el artículo 42, reduciendo el porcentaje de recargo, se considera indispensable, para que la sanción dispuesta por el artículo que se comenta produzca el efecto perseguido, aumentar el mismo hasta el ciento por ciento.

Punto 28. La práctica ha demostrado la necesidad de ampliar los plazos que acuerdan los artículos que se modifican, a fin de hacer realidad la posibilidad de recurrir a los fallos del tribunal fiscal.

El punto 29 pretende facilitar la acción de la Dirección General Impositiva en el ejercicio de la apelación ante el tribunal fiscal, haciendo innecesaria la autorización del subsecretario de Hacienda cuando la misma ha sido concedida ya para una cuestión estrictamente análoga.

Punto 30. El artículo propugnado elimina un impedimento contenido en el Código de Comercio que para el caso de que se trata no llena ninguna finalidad práctica, permitiendo que los cheques devueltos sirvan a los contribuyentes de prueba para acreditar los pagos efectuados, relevando a la dirección de la ingente tarea que implica el otorgamiento de numerosos recibos.

Punto 31. La norma proyectada se aparta, por razones de orden práctico y en homenaje a la celeridad del procedimiento, de lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal, eliminando la posibilidad de largas y complicadas discusiones acerca de cuál resulta la ley más benigna frente a la situación planteada en cada caso particular.

La disposición referente al sobreprecio de los combustibles es similar a la que aparece en la ley 11.683, texto ordenado en 1947, al incorporarse al régimen de recargos. Se pretende con ella facilitar la determinación de la sanción civil, unificándola en recargos, en lugar de intereses y recargos. Se estima que la mayor sanción que significaría el porcentaje de recargos en relación a la tasa de interés se encontraría compensada con la inclusión de la presentación espontánea que la dirección considera debe tenerse en cuenta en el momento de dictarse el correspondiente decreto reglamentario.

Las disposiciones sobre impuesto a los réditos no sufren mayores modificaciones. La contribución dispuesta por la ley 14.155 a cargo de los productores ganaderos se agrega con carácter de deducción en el artículo 62, medida que ha sido solicitada reiteradamente por los interesados.

La supresión del término «sólo» del primer párrafo del artículo 76 queda justificada en

razón de que la propia ley admite otras deducciones, como ser honorarios médicos, porcentaje, de revalúo de activos, viáticos, etcétera.

Con la modificación del impuesto a los beneficios extraordinarios se encaran soluciones prácticas a diversos problemas de interpretación que han demandado hasta el presente una atención excesiva en relación a su relativo significado. Persigue ese propósito la supresión del término «explotaciones» del segundo párrafo del artículo 19, quedando así la empresa como único sujeto del impuesto, aun cuando la misma desarrolle varias explotaciones a la vez.

Se declaran exentos de este gravamen los réditos que provengan de la actividad de comisionistas, corredores, rematadores, viajantes de comercio, despachantes de aduana y demás agentes auxiliares del comercio. Esta norma satisface una vieja aspiración de los interesados, que en parte debe considerarse justificada por tratarse de actividades en las que prevalece el factor personal en la obtención de los beneficios de la actividad desarrollada. Por otra parte, se evitan los múltiples problemas a que da lugar la determinación del capital aplicado, siendo en conclusión pequeña la recaudación por este concepto.

Las modificaciones introducidas al artículo 19 y al párrafo cuarto del artículo 49 son de carácter eminentemente técnico y tienden a simplificar la determinación del gravamen. Para ello se unifica la base imponible de este gravamen con la del impuesto sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes, partiendo en ambos casos del capital computable al final del ejercicio, conforme a las normas del impuesto a los réditos. En el sistema vigente, para el impuesto a los beneficios extraordinarios se parte del capital al principio del ejercicio y luego se procede a su ajuste teniendo en cuenta su variación dinámica durante el transcurso del mismo, mientras que para el impuesto sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes se considera el capital estático al final del ejercicio. La unificación del procedimiento proyectada elimina complicaciones innecesarias para el contribuyente y el fisco, lográndose así mayor celeridad en la labor de ambos.

Para el impuesto a las ventas, el despacho trae el agregado de un nuevo artículo, por el cual se declara que a partir del 19 de enero de 1962 las ventas de productos importados tendrán el mismo tratamiento fiscal que las ventas de productos similares de origen nacional. Esta modificación responde a la necesidad de adecuar las disposiciones existentes a los compromisos contraídos al ingresar nuestro país en el GAT y al firmar el Tratado de Montevideo. Además, se exime a la venta de máquinas agrícolas en todos los renglones, y se incluyen entre las deducciones para la determinación del impuesto los gastos directos de la venta de los industriales cuando éstas se hacen directamente al menudeo.

El régimen de sanciones aplicado en materia de impuestos internos cuando se trata de mercaderías de origen extranjero requiere para ser eficaz no estar supeditado a trámites administrativos que lo demoran. Por otra parte este régimen de excepción, que sólo alcanza a aquellos responsables incurso en infracciones aduaneras, justifica de por sí el trámite expeditivo que se implanta.

El acuerdo del GATT, el Tratado de Montevideo y una mayor justicia tributaria obligan a graduar el impuesto que deben abonar los cigarros y cigarrillos, así como los tabacos que se expendan para ser consumidos en distintas formas, de acuerdo con la calidad y el peso de los productos, que se estima son índices suficientemente representativos para establecer las bases impositivas. Para posibilitar un mayor ordenamiento de la norma tributaria y permitir al fisco seguir el desarrollo cambiante de la evolución industrial o comercial resulta indispensable acordar al Poder Ejecutivo la autorización legal que informa el proyecto comentado.

Finalmente, se incorpora un nuevo capítulo a la ley respectiva, gravando el rubro de bebidas no alcanzadas específicamente por otros impuestos internos, como son las bebidas gasificadas, los refrescos en general, los jarabes, extractos o concentrados aptos para la preparación de bebidas sin alcohol, que se estima pueden absorber fácilmente el impuesto.

Como lo señala el Poder Ejecutivo en el mensaje respectivo, las reformas que se introducen al régimen del impuesto de sellos buscan fundamentalmente eliminar, por una parte, disposiciones anacrónicas, caídas en desuso, y además suprimir el uso del papel sellado como forma de pago del impuesto, así como derogar o adecuar impuestos improductivos que traban notoriamente las actividades, entorpeciendo los trámites administrativos y judiciales. Con la eliminación del uso del papel sellado se evita el gasto que representa su impresión, la venta y el control de estos valores, permitiendo el empleo de medios más modernos y económicos para el ingreso del impuesto, como es el depósito bancario.

Se suprimen así mismo los impuestos a los giros internos, a los recibos de dinero, a las actuaciones administrativas y a numerosos actos e instrumentos gravados actualmente con tasas fijas, reemplazándose el sello de actuación judicial por un aumento del impuesto de justicia. En lo sucesivo, cuando el valor del juicio exceda de los 1.000 pesos o sea indeterminado, las actuaciones abonarán, en concepto de reposición de fojas, un impuesto del 25 por ciento de las tasas que establece el artículo 82 de la ley de sellos, fijándose como mínimo la suma de 200 pesos y como máximo 5.000 pesos. El sistema permitirá utilizar también como forma de pago la declaración jurada y el depósito bancario.

Las modificaciones aludidas precedentemente significan, sin duda alguna, un notable alivio para el comercio, la industria y los profesionales, no tanto por la incidencia de estos gravámenes cuanto por las molestias que se evitan con el cambio de régimen. Todas las demás modificaciones se introducen por la necesidad de ajustar determinadas disposiciones a los cambios que se efectúan en la ley o para adecuar tasas y disposiciones de conformidad con la nueva estructura legal.

El proyecto prevé, en su artículo 89, un aumento del ciento por ciento de las tasas fijadas por la ley de derechos de inspección de sociedades anónimas, con el objeto de que los ingresos que se logren por el concepto señalado respondan en mayor medida al costo efectivo relacionado con la autorización y funcionamiento de tales sociedades.

Por el artículo 99 se incorpora una nueva norma como agregado al artículo 198 de la ley de aduanas que sienta la presunción de derecho de que no han pagado los gravámenes de importación las mercaderías de origen extranjero sujetas a impuestos internos que se hallen en plaza para su venta sin el estampillado respectivo, disponiéndose el comiso inmediato de las mismas, sin sumario previo. Por esa disposición se faculta así mismo al Poder Ejecutivo para aumentar hasta el 100 por ciento la participación de los denunciantes en la multa, fijándose un trámite sencillo y rápido para su percepción. Como es lógico deducir, estas medidas tratan de crear mayores medios legales para reprimir el contrabando y lograr por el camino más directo la colaboración de la población, a fin de crear un clima de desaliento para este perjudicial tipo de evasión fiscal.

El proyecto contiene también reformas de importancia para el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, prorrogándose su vigencia por el término de diez años. Los textos de los artículos 19 y 39 se adecuan a los nuevos alcances del gravamen, que son fijados por las modificaciones introducidas por el artículo 29, incluyéndose en el régimen del impuesto a las empresas unipersonales y a las sociedades de personas matriculadas como comerciantes, haciendo posible, de esa manera, que una mayor cantidad de contribuyentes puedan asegurarse la transferencia de sus bienes, exentos del gravamen a la transmisión gratuita de bienes.

En virtud de dichas modificaciones, se sustituye el contenido del artículo 49 y se incorporan a la ley normas que actualmente se encuentran en el decreto reglamentario. Así mismo, se deroga el artículo 59, para quedar también alcanzadas por el impuesto las acciones nominativas. Por otra parte, se sustituye, por el punto 8, el carácter imperativo de la adhesión de las provincias, quedando reservada a las mismas la facultad de realizar tal manifestación. En razón del nuevo régimen pro-

yectado para el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, se modifica el artículo 14 de la ley 11.287, texto ordenado en 1961.

Como consecuencia de la reciente sanción del Honorable Concejo Deliberante, por la cual la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 1º de enero de 1962, se hace cargo de la aplicación, percepción y fiscalización del gravamen a las actividades lucrativas, el despacho contiene una disposición que establece las condiciones en que se procederá a la transferencia de tales tareas.

El despacho contiene también una disposición por la que se cancelan las deudas por contribución territorial y contribución inmobiliaria, sus recargos, intereses y multas, correspondientes a ejercicios anteriores a 1952. El monto de la deuda a cancelar alcanza aproximadamente a 15 millones de pesos, repartidos entre una cantidad numerosa de contribuyentes, ya que las deudas, en la mayoría de los casos, no alcanzan a superar los cien pesos. Estimamos que es una medida acertada, toda vez que los gastos administrativos y de gestión judicial soportados por el fisco sobrepasan la suma a cobrar.

Sobre esta materia también se ofrece una condonación en materia de recargos, multas e intereses por mora en el pago de la contribución inmobiliaria de los años 1953 a 1960 inclusive, a condición de que se ingresen las sumas adeudadas antes del 1º de mayo de 1962. Esta ventaja para los responsables ha de servir para acelerar el proceso de cancelación de deudas aún pendientes de pago, sin provocar mayores erogaciones administrativas, máxime teniendo en cuenta que al presente se ha dispuesto la disolución de la Dirección General Inmobiliaria.

En virtud de la nueva estructuración de la enseñanza técnica en nuestro país, dispuesta por la ley 15.240...

Sr. Marini. — ¿Me permite el señor diputado?

Sr. García Veiga. — Sí, señor diputado.

Sr. Marini. — Quiero preguntar al señor diputado, que se refirió al caso del gravamen a las actividades lucrativas — imposición que realiza la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires —, si el artículo 15, punto 1º, que dice «Agregase al artículo 1º, inciso 3º, como segundo párrafo el siguiente: "En los casos de actividades de intermediación en que existan precios de venta al intermediario y precios de venta al público fijados unilateralmente por el fabricante, el impuesto no excederá de la alícuota básica que se fije con carácter general"», se mantiene en el despacho.

Sr. Prece. — ¿Me permite el señor diputado García Veiga?

Sr. García Veiga. — Sí, señor diputado.

Sr. Prece. — Aclaro al señor diputado Marini que la comisión ha considerado con atención ese problema, y que, por las razones que daremos

en la discusión en particular, vamos a retirar el agregado.

Sr. Marini. — Yo hacía la pregunta, nada más.

Sr. Prece. — Le anticipo la información.

Sr. Marini. — Muchas gracias, señor diputado.

Sr. Presidente (Breyter). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado García Veiga.

Sr. García Veiga. — Decía que en virtud de la nueva estructuración de la enseñanza técnica dispuesta por la ley 15.240, se modifica la denominación del actual impuesto para aprendizaje por el de impuesto para educación técnica.

Para mantener la estabilidad de los ingresos se deroga la facultad del Poder Ejecutivo para disminuir la tasa del gravamen, con lo que, por otra parte, se ajusta la norma a la realidad, ya que nunca en la práctica se hizo uso de la atribución prevista.

El creciente desarrollo de la industria requiere contar con personal especializado en todas sus ramas. En estas condiciones no se justifica que los trabajos de reparación de cualquier clase de materiales o elementos elaborados o semielaborados y los de construcción continúen al margen de la imposición, en particular si se tiene en cuenta la importancia y creciente complejidad de la actividad.

Así mismo se aclara, a fin de evitar dudas, que la adaptación de materiales o elementos hace participar también del carácter de establecimiento industrial a los fines impositivos.

Para compensar en cierta medida la merma de recaudación que con respecto al adicional establecido por el artículo 19 de la ley 15.233 se produce a través de la política de desgravación de las exportaciones que sigue el Poder Ejecutivo, se eleva la tasa de este adicional del 0,5 al 1 por ciento. Esto está referido al plan de caminos de fomento agrícola.

Igualmente hay algunas modificaciones con respecto del impuesto a las rifas y sorteos. Se faculta en este caso al Poder Ejecutivo a establecer el gravamen hasta la medida de un 5 por ciento sobre el precio básico de las rifas y sorteos de carácter privado, que se justifica plenamente teniendo en cuenta el auge que ha tomado este tipo de operaciones.

Señor presidente: por las consideraciones precedentes, y con la convicción de que el proyecto del Poder Ejecutivo, con las modificaciones que introdujo la comisión, constituye un cuerpo orgánico adecuado para el cumplimiento del objetivo que se ha prefijado el gobierno en materia de política fiscal, señalados sucintamente en la primera parte de este informe, es que solicitamos el voto favorable de la Honorable Cámara al dictamen que se encuentra a su consideración.

Sr. Presidente (Breyter). — Tiene la palabra el señor diputado Marini.

Sr. Marini. — Señor presidente: yo creo que difícilmente ninguno de los asuntos tratados desde que ocupo una banca en esta Cámara

ha tenido un trámite más accidentado que éste que se refiere a la reforma de la ley impositiva. Ese trámite accidentado es lo único que puede justificar que yo me vea en la obligación de hacer el informe en nombre de mi sector.

Necesito dar esta explicación porque no es usual que un presidente de bloque desempeñe el papel de informante, pero las circunstancias de que esta ley debió tratarse inmediatamente después de sancionarse el presupuesto, en cuya consideración intervinieron otros señores diputados de mi sector, determinó, por una razón de división de trabajo, que yo tomase a mi cargo la labor de informar el dictamen que ahora estamos tratando.

Pero la ley no se consideró en esa oportunidad y su tratamiento se ha venido difiriendo hasta este momento. De ahí, entonces, que deba cumplir ahora con aquella obligación.

He dicho que esta ley ha tenido un trámite muy accidentado. La verdad es que las reformas, en definitiva, fueron haciéndose una forma usada por la labor infatigable del señor presidente de la Comisión de Presupuesto, que ha ido mechando y modificando el mensaje del Poder Ejecutivo, presumiblemente con consultas previas al titular de Hacienda; pero de todas maneras, de lo que fue el mensaje del Poder Ejecutivo a esto que estamos considerando hoy media una diferencia fundamental, por ejemplo, en cuanto al asunto vinculado a la supresión de las ganancias eventuales, a la cuestión del embargo y a algunas otras cosas que ya no están en el despacho de la comisión.

Entiendo que entrar en una materia como esta que hace a la ley impositiva, necesariamente implica tener que formular algunas consideraciones de tipo polémico en materia de política económica, donde indudablemente caben las distintas valoraciones, los distintos juicios y los distintos puntos de vista. La propia índole de la materia impositiva traduce, o por lo menos debe traducir, una política fiscal, y citándolo a Henri Laufenburger, que participó en las Jornadas Internacionales de Derecho Fiscal, celebradas en Buenos Aires en octubre de 1960, podría repetir lo que este reputado y destacado profesor de derecho fiscal de la universidad de París afirma en el último capítulo de su conocida obra *Finanzas comparadas*, que las finanzas públicas han perdido su carácter de neutralidad y han sido puestas en todas partes al servicio de la política económica y social.

En ese mismo capítulo de conclusiones, luego de algunos análisis de la función del presupuesto y de los gastos públicos, agrega que los impuestos han sido preconizados como instrumento para igualar las oscilaciones cíclicas, disminución progresiva en el período de baja para estimular la actividad, y aumento en períodos de prosperidad para frenar el impacto.

Dejo así anotada esta observación con relación a un aspecto al que me he de referir más

adelante. Por eso es necesario establecer cuál es la circunstancia coyuntural por que está atravesando la Nación para ver de qué manera nosotros podemos hacer una buena política fiscal. De modo que para abordar correctamente esos aspectos no se nos podrá exigir que eludamos puntos fundamentales del problema de la política económica, para reducirnos al análisis prolijo de los preceptos, tal como lo hizo el miembro informante de la mayoría, diputado García Veiga. Nosotros hemos asumido una posición que reiteramos en todos los debates realizados en esta Cámara, posición que puede ser equivocada, pero que es sincera, clara y precisa. Cada vez que hemos tocado el aspecto económico, cuando vino aquí el equipo que presidía el ingeniero Alsogaray, cuando hemos examinado los distintos presupuestos, hemos fijado esa posición que seguiremos esgrimiendo, creyendo que a través de ese pensamiento están las líneas más claras y precisas para atender las circunstancias del momento que atraviesa la economía del país.

Recuerdo que en el debate económico de 1959 yo apunté una reflexión que, honestamente, no era mía, pero que era la primera vez que se hacía frente al cambio producido en la conducción económica del país. Yo tomaba esos conceptos de viejos economistas y retomaba justamente el pensamiento formulado en el país por el ex ministro de Hacienda, doctor Pinedo. Yo citaba su pensamiento, porque Pinedo era un hombre vinculado a muchos integrantes del equipo económico de entonces. Yo veía en aquel elenco ministerial al secretario de Hacienda, doctor Klein, al secretario de Agricultura, doctor Malaccorto, y a otras personas que habían integrado como asesores el equipo del doctor Pinedo, y no podía entender cómo ellos no consultaban aspectos que el doctor Pinedo como ministro había hecho resaltar como de una importancia fundamental. Pinedo señalaba en 1940 que no había que atender demasiado preferentemente los aspectos financieros, porque éstos podían tener serias repercusiones no sólo en perjuicio del desarrollo y de la expansión económica del país, sino por ser causa de contracción y subconsumo.

Yo notaba que en todos los aspectos el plan esbozado por el gobierno acentuaba su preocupación fundamental en lo financiero con perjuicio, según se fue demostrando después por los hechos, de las posibilidades efectivas de la expansión económica. Sobre este punto muchos expertos financistas han afirmado, y yo comparto ese pensamiento, que la política monetaria y fiscal podrá paliar o agravar el desequilibrio, pero no evitarlo, porque tiene causas más hondas fincadas bajo la superficie financiera.

El gobierno se mueve en un plano de política financiera. Su preocupación fundamental estriba en la estabilidad monetaria y en la supresión del déficit fiscal. Esto puede responder a un propósito sincero de equilibrar las finanzas del

país, pero manejándose en esa superficie el gobierno se olvida que en el subsuelo de los aspectos financieros radican las causas más profundas que la conmueven, que son las causas económicas, a las que hay que atender preferentemente. Este fue nuestro punto de vista entonces, y sigue siéndolo ahora.

En la historia económica del mundo hay ejemplos claros que pueden ser citados como aval de nuestro aserto. Portugal es un país que ha practicado con la mejor ortodoxia los principios señalados por todos los economistas y financistas que hablan de la necesidad de la estabilidad monetaria y de la supresión del déficit fiscal como un factor de equilibrio que posibilite la expansión económica.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, doctor Rodolfo Ricardo Carrera.

Sr. Marini.— Portugal no ha conocido el déficit fiscal, su política monetaria es estricta, los sistemas de comercio exterior son irreprochables y no hay mecanismos que perturben legalmente la distribución espontánea de la renta. Hago estas afirmaciones sobre la base de lo que manifiesta Aníbal Pinto, un economista chileno, en un trabajo que tengo sobre mi banca: *El trimestre económico*. Sin embargo, acota, estas circunstancias tan propicias no han sido óbice para que continúe figurando como el país más atrasado de Europa, económica y socialmente. Vale decir que el secreto no reside esencialmente en este tipo de política; esto no significa que la política de la estabilidad monetaria y del déficit fiscal deba ser abandonada, pero no es la panacea para resolver el problema.

Como contrafigura de lo que estoy afirmando está el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el caso del Japón, cuyo desarrollo económico se hizo sobre la base de serios desequilibrios.

Sin embargo, apuntando más a la expansión económica puede hacerse ese desarrollo y luego producirse el equilibrio de la manera cómo nosotros muchas veces queremos y cómo muchos economistas piensan que debe realmente hacerse, es decir, cargar el acento en la expansión económica para que la mayor producción, el mayor ingreso bruto nacional, el mayor bienestar que produce la expansión económica, sean factores posibles para luego permitir el equilibrio. Porque el equilibrio producido de otra manera, con dependencia exclusiva de la estabilidad monetaria y de la supresión del déficit fiscal, puede ser que se verifique, pero en un punto tan bajo que realmente significaría la estrechez, la necesidad y la penuria económica, como premio a un pueblo que lo dio todo en aras de cumplir uno de estos planes económicos.

Indudablemente, tengo que explicar por qué razón nosotros hemos firmado el despacho en

disidencia. Muchos sectores del país se lo explican a priori con aquella acusación sistemática —valga el término porque lo voy a repetir— de la «oposición sistemática» que realizamos los radicales del pueblo. Sin embargo, esta vez estamos acompañados por importantes sectores de la opinión del país.

Tengo aquí una declaración efectuada por el comité permanente de impuestos del Centro de Graduados en Ciencias Económicas, cuya inserción voy a solicitar en el Diario de Sesiones (1). Voy a omitir desde luego la lectura de los considerandos y me limitaré a leer la primera declaración de la parte dispositiva que dice así:

«1º— Que considera inoportuna la sanción del proyecto de reforma impositiva sometido al Congreso de la Nación tal como está concebido, debiendo limitarse a las modificaciones estrictamente formuladas y a las que tiendan a la simplificación de la percepción de los gravámenes.

»2º— Que auspicia y ofrece su colaboración para un estudio y reestructuración integral del régimen tributario nacional con intervención de todos los organismos científicos y técnicos —oficiales y privados— competentes en la materia.»

Entre los firmantes figuran distinguidos economistas como el doctor Enrique J. Reig, profesionales de destacada actuación en materia impositiva y el doctor Ernesto Malaccorto, que integró el equipo económico cuando éste era presidido por el ingeniero Alvaro Alsogaray.

También se han manifestado en contra de esta reforma las cátedras de finanzas públicas y de teoría y técnica impositiva de la Facultad de Ciencias Económicas, en una declaración emitida en Buenos Aires el 9 de noviembre de 1961, que firman los doctores Federico J. Herschel, profesor asociado de finanzas públicas, Dino Jarach, profesor asociado de finanzas públicas, Enrique Jorge Reig, profesor titular de teoría y técnica impositiva, Nicolás J. Scotti, profesor asociado de teoría y técnica impositiva. Aquí se hacen una serie de planteos dirigidos a establecer que el estudio de esta materia debe hacerse de la manera más intensiva, y que no se debe improvisar ni emparchar la ley impositiva. Pido su inserción en el Diario de Sesiones (2).

En el mismo sentido se han pronunciado la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio. La Cámara Argentina de Comercio, en una nota cuya inserción en el Diario de Sesiones solicito, expresa que como en oportunidades anteriores el país se encuentra frente a otro proyecto de reformas impositivas que sólo tienden a introducir modificaciones parciales al sistema vigente, sin encarar, de acuerdo con las necesidades económicas del mo-

(1) Véase el texto de la inserción en el Apéndice, página 6393.

(2) Véase el texto de la inserción en el Apéndice, página 6393 y siguientes.

mento, la reestructuración total del sistema. En esta nota se hace la crítica de las distintas reformas proyectadas, y se señala que con reformas parciales, que tienen por objeto aumentar la recaudación y montar un mecanismo fiscal impropio, sólo se logrará la retracción del contribuyente, la agudización de la resistencia al fisco y, finalmente, la pérdida de la posibilidad de mejores recaudaciones (1).

La Unión Industrial Argentina, en nota cuya inserción en el Diario de Sesiones también solicito, expresa que en los últimos años se ha convertido en una persistente modalidad de nuestra política fiscal el introducir continuas modificaciones a las leyes impositivas, quitándoles con ello la estabilidad necesaria a fin de permitir a las fuerzas económicas del país adoptar con certidumbre las previsiones indispensables para el normal desarrollo de sus actividades y tener una seguridad sobre la medida en que gravitarán las cargas tributarias en sus negocios y la repercusión en su gestión. A continuación hace la crítica de cada una de las reformas proyectadas (2).

Como se advierte claramente a través de estas opiniones, nuestra oposición en este caso no puede ser reputada caprichosa. Responde a un sentimiento general que nosotros percibimos, puesto que indudablemente la cuestión impositiva está preocupando muchísimo a la población en estos últimos tiempos. Se otorga al tema toda la importancia que realmente tiene, y aun en conferencias internacionales se insiste en la necesidad de proceder a la reestructuración impositiva para agilizar los sistemas tributarios, de manera de facilitar el entendimiento por parte del contribuyente, lo que sirve en buena medida para disminuir la evasión impositiva, ya que a veces se elude la carga fiscal por ignorancia o error. Además se ha comprendido que mediante una adecuada política fiscal es posible ir resolviendo los problemas que atañen al desarrollo económico de los países.

Con respecto a la consideración que en el orden internacional recibe la materia tributaria quiero recordar que en la reunión del Consejo Económico y Social celebrada en Punta del Este se votó una resolución vinculada con el tema impositivo. En esa resolución se habla de los planes tendientes a realizar los principios establecidos en la carta de Punta del Este. Se manifiesta que los países latinoamericanos deben formular programas de desarrollo a largo plazo; que esos planes deben contener esfuerzos destinados a mejorar los recursos humanos, perfeccionar y expandir la enseñanza técnica y la adecuada remuneración del trabajo; establecer sistemas eficientes para las relaciones del trabajo; aumentar la capacidad científica y la eficiencia de la administración pública. Además,

se deben prever planes para utilizar con mayor eficacia los recursos naturales, robustecer a la base agrícola, extendiendo los beneficios de la tierra en forma cada vez mayor a quienes la trabajan, y asegurar a los países con población indígena la integración al proceso de la vida moderna.

El análisis de cada uno de estos puntos daría lugar a internarse en largas disquisiciones, que voy a ahorrar. Pero deseo señalar que el comentario se refiere concretamente a la materia impositiva: «Para la concreción de estos fines se deberán adoptar medidas tendientes a mejorar los siguientes aspectos: créditos, asistencia técnica, mecanización agrícola, salud y educación, cooperativas y asociaciones campesinas. Debe preverse también la movilización de los recursos financieros mediante la reforma de los sistemas tributarios, incluyendo impuestos adecuados y equitativos sobre ingresos elevados y a los bienes raíces, así como la aplicación estricta de medidas para mejorar la recaudación fiscal. El programa de desarrollo debería comprender la adaptación del presupuesto a las necesidades del crecimiento económico.»

Es necesario a esta altura que nos ocupemos un poco más a fondo de estos aspectos. Cuando se realizaron las Jornadas Internacionales de Derecho Fiscal se tuvo el mérito, que yo atribuyo a los preocupados en el país por la materia impositiva, de hacer posible que llegaran a nuestra tierra distinguidos financistas y economistas de renombre mundial, que dialogaron e intercambiaron opiniones con los expertos argentinos, que los hay, con un alto nivel de capacidad.

Quiero anotar que en esta materia de imposiciones y tributaciones se ha evidenciado una mejora en el país. En el camino que estamos haciendo para evitar la evasión impositiva se están adoptando medidas eficientes y eficaces, y ello resulta un poco del intercambio de opiniones y del análisis y estudio de las prácticas que se adoptan en otros países. Así, no ha sido en balde, ni vana, ni inútil la visita que hiciera nuestro interventor en la Dirección General Impositiva, señor Rapaport, a los Estados Unidos de América porque se advierten ya las consecuencias prácticas de medidas que se aplicaron posteriormente en la Argentina.

En ocasión de realizarse las mencionadas Jornadas Internacionales de Derecho Fiscal, donde hablaron eminentes economistas como Cosciani, Massoin, Allorio, Due y otros más, se expusieron ideas que contribuyen positivamente para manejarse y moverse mejor en este terreno de la política fiscal.

La política fiscal no puede ser caprichosa, ni tampoco puede ser cualquier política. Ni siquiera puede aplicarse la política fiscal de un país muy adelantado en materia industrial, de un gran desarrollo económico, a un país en vías de desarrollo. Y ésta es una circunstancia que debe tenerse presente.

(1) Véase la inserción en el Apéndice, página 6396 y siguientes.

(2) Véase la inserción en el Apéndice, página 6400.

Por eso anotaré aquí aquello que dijo Massoin en las Jornadas Internacionales de Derecho Fiscal. Pero previamente quiero hacer la salvedad de que no tengo los prejuicios que tienen algunos señores diputados y algunos economistas y hombres públicos argentinos con respecto a si somos o no un país subdesarrollado. La verdad es que nosotros, de cualquier manera, somos un país en vías de desarrollo, y las circunstancias vinculadas a nuestra política fiscal deben tener las características que atañen a los países que no están muy muy adelantados industrialmente.

Decía Massoin que los objetivos de la política económica y financiera son tres para un país en vías de desarrollo: primero, el que apunta al desarrollo económico; segundo, a la regularización de la coyuntura; y tercero, a la justicia social.

Los países industrializados se desarrollan al ritmo del 3 al 4 por ciento por año; los países insuficientemente desarrollados deben progresar al ritmo del 5 al 7 por ciento por año. Este es un dato que conviene tener en cuenta.

Pero el punto más importante, a mi juicio, es el segundo, que se refiere a la regularización de la coyuntura. Los países industrializados sufren por la inestabilidad de la coyuntura en el volumen de su empleo y también en su balanza de pagos. Pero los países insuficientemente desarrollados, cuya economía se basa en la producción y exportación de materias básicas, son llevados de golpe, por la inestabilidad de los mercados, desde la euforia de la inflación a la profundidad de la deflación.

El mundo moderno no acepta ya las consecuencias de una deflación, sea ella social, política, monetaria o económica. La política económica ha de dedicarse a solucionar esta inestable coyuntura. Y este es un problema indudablemente serio, señores diputados.

Es verdad que los pueblos de hoy, los pueblos de este momento histórico no soportan ya los problemas de la coyuntura referida a las situaciones cíclicas, porque una situación de inflación desenfrenada importa una expropiación o —como dice algún economista— un impuesto al hombre que trabaja. La pérdida del valor adquisitivo de su salario y de sus entradas es una contribución que, sin proponérselo, debe dar al fisco o a un tercero. Y ya no puede soportarse eso por las tensiones sociales que provocan las desigualdades, dado que el que tiene bienes raíces u otra clase de bienes, no soporta la inflación de la misma manera porque los bienes que posee se valorizan a través de la devaluación y, entonces, no paga ese impuesto. El impuesto lo pagan exclusivamente los sectores de ingresos fijos.

Por lo expresado declaro desde ya que soy partidario del mantenimiento del impuesto a las ganancias eventuales, no solamente por esta razón sino porque creo que las ganancias de ca-

pital deben ser gravadas por muchas razones que dan distinguidos economistas.

Entendemos también que debe cuidarse mucho el tercer aspecto, que se refiere a la justicia social, porque la distribución de los ingresos y de los recursos debe atenderse mucho más en los países insuficientemente desarrollados, dada su indudable gravitación sobre la tranquilidad social.

El efecto de demostración de que hablan los economistas es mucho más visible en los tiempos en que vivimos; porque actúa como un impulso y un estímulo para consumir cada vez más, y cuando ello no se logra, se transforma en una causa de desorden. Señala alguien que en la época feudal había orden y había también mucha gente que vivía en las más miserables condiciones. Pero en la época feudal el efecto de demostración no existía. Al hombre que nada posee, el adelanto moderno le ha permitido darse cuenta, a través de las comunicaciones y de los progresos de la técnica, de que hay un mundo distinto a aquel en que se encuentra situado, todo lo cual obra como un estímulo para alcanzar ese mismo estado. Cuando no lo logra brota su resistencia y su indignación, y surgen las tensiones sociales que toda política estatal o fiscal debe tratar de evitar, propiciando un reparto equitativo de la riqueza y de los ingresos, de tal manera que el pueblo se sienta protegido en su trabajo, con retribuciones adecuadas.

He de abreviar mi exposición en lo que se relaciona con los aspectos cuantitativo y cualitativo de los impuestos, porque esto, indudablemente, llevaría mucho tiempo. Sin embargo, hay una observación que conviene dejar señalada. Es la que se refiere a que ante coyunturas de auge, el volumen de los gastos públicos deberá ser reducido y en cambio el impuesto aumentado para formar excesos de tesorería que serán usados para el reembolso de la deuda exterior. En coyunturas bajas el volumen de los gastos públicos deberá aumentar y el impuesto reducirse para dejar lugar eventualmente a un déficit que será financiado por los recursos preconstituidos o por el crédito expansionista.

Esta acción desemboca en los distintos criterios que existen en esta materia. En la política del New Deal, aplicada en los Estados Unidos, no interesaba el déficit fiscal; lo que interesaba era producir la expansión económica, aumentar los bienes, incrementar la producción, porque entonces, a través del mayor movimiento general, se lograrían mayores impuestos y, consecuentemente, se produciría el equilibrio fiscal y la disminución del déficit.

En cuanto a los aspectos cualitativos de los impuestos y su evolución histórica, los países insuficientemente desarrollados se sitúan en el centro de este proceso, señalaba Massoin. Su sistema fiscal se basa principalmente en el impuesto a las importaciones, a las exportaciones y al consumo, pero con ciertos elementos de

impuestos a la renta y al capital. ¿Cuáles son las exigencias de una economía insuficientemente desarrollada?, se preguntaba este autor. Desarrollar la producción y la exportación por una parte y estimular el ahorro y la inversión por la otra. De esto se desprende que se debe desgravar la exportación e imponer la importación y el consumo de bienes que tengan carácter suntuario, para reservar la mayor cantidad de medios de pago disponibles a la importación de bienes de inversión.

Este aspecto es muy actual. Desgraciadamente nuestros recursos se sustentan en gran parte en impuestos indirectos, y dentro de éstos han cobrado una jerarquía extraordinaria los recargos y retenciones a las exportaciones e importaciones. Por este concepto el fisco nacional percibe más de treinta mil millones de pesos. Sin embargo, es evidente que en cuanto a las retenciones por las importaciones se crean situaciones realmente difíciles para nuestros productores agropecuarios. Si bien es cierto que se ha iniciado una política de desgravación, yo creo necesario que esa política sea acentuada hasta lograr la desaparición de tales retenciones, a los fines de que los productores agropecuarios tengan el estímulo necesario. Creo que en la mente del Poder Ejecutivo, que en el pensamiento del señor secretario Webbe y del señor secretario de Agricultura está la supresión de estas retenciones, sobre todo en cuanto a las lanas y otros productos, para que puedan ser colocados sin desventaja en los mercados internacionales. Pero es menester actuar con rapidez y decisión.

Decía que era partidario del mantenimiento del impuesto a las ganancias eventuales. Celebro que esté presente el señor secretario de Hacienda porque así sabremos si su pensamiento concuerda con el de la mayoría de la comisión en cuanto al mantenimiento de este impuesto, esto es, en cuanto se reforma el criterio sustentado por el Poder Ejecutivo que bregaba por su supresión.

Mi pensamiento, vuelvo a repetir, se basa en la necesidad de gravar las ganancias de capital.

Sr. Secretario de Hacienda. — ¿Me permite una aclaración, señor diputado?

Sr. Marini. — Con mucho gusto.

Sr. Secretario de Hacienda. — En realidad, la supresión propuesta por el Poder Ejecutivo de ninguna manera dejaba sin gravar las ganancias de capital, sino que lo hacía de otras maneras. Por ejemplo, la cesión de cuotas de sociedades comerciales caía bajo las disposiciones del impuesto a los réditos, pues se las consideraba como renta. Vale decir que no había una desgravación, sino, por el contrario, había un aumento de la tasa. Por otro lado, en cuanto a las diferencias en materia de inmuebles, que es el rubro más importante, pues ahí se registra la mayor tributación, el impuesto a las ganancias eventuales era reemplazado por un aumento en el impuesto de sellos.

De ninguna manera el Poder Ejecutivo consideró que debían desgravarse las ganancias de capital. No está en su ánimo hacerlo pues en momentos de gran dificultad como el actual no se justifica ni resulta equitativo desgravar determinado tipo de ganancia, cuando los sectores de menor capacidad contributiva deben dar todo su esfuerzo y su sacrificio para resolver las dificultades presentes.

Precisamente, algunas de las críticas que se han hecho al proyecto son maliciosas puesto que, simulando propugnar el mantenimiento del impuesto, se han querido evitar algunos aspectos de la reforma que, sin lugar a dudas, aumentaban el gravamen sobre determinados tipos o sectores de ganancias de capital.

Sr. Marini. — De todas maneras, es evidente que las críticas que se han hecho al proyecto del Poder Ejecutivo tienen fundamentos serios. Por ejemplo, la duplicación del impuesto a la escrituración de los bienes, del uno y medio al tres por ciento, podría constituir una injusticia, porque podía haber o no una ganancia eventual. Si hubiera una ganancia eventual, se podría pensar que el contribuyente quedaba favorecido, porque sustituía el cinco por ciento del impuesto a las ganancias eventuales por el uno y medio por ciento de aumento del impuesto de sellos. Pero cuando no había ganancia eventual, la verdad es que las personas que estaban obligadas a vender su inmueble, en lugar de tributar el uno y medio por ciento tenían que tributar el tres por ciento.

Es decir que mantener el impuesto a las ganancias eventuales responde más bien a un criterio de orden, porque la reforma podría ocasionar muchas confusiones. Justamente, el criterio de que tributan como réditos originaría interpretaciones de distinto tipo, que nunca serán suficientemente aclaradas.

Quiero señalar que, de acuerdo con la opinión de los expertos, constituyen ganancias de capital todos los incrementos en el valor de realización del patrimonio poseído, excepto las utilidades provenientes de la compraventa de bienes como actividad lucrativa. Si una fracción de tierra, edificios, equipos de capital, títulos, acciones, pueden venderse a precios superiores a las sumas pagadas originariamente por ellos, se ha realizado una ganancia de capital, que cae dentro de la categoría de réditos, ya sea que se defina como consumo más incremento de patrimonio o como flujo de riqueza, salvo que sea una verdadera manifestación de los aumentos de precios. Si una persona compra tierra en cincuenta mil pesos y la vende en cien mil, la ganancia se halla disponible para el consumo o para incrementar el patrimonio, en igual forma que si hubiera recibido los cincuenta mil pesos como utilidades de un negocio. Hay un ejemplo magnífico por su claridad traído por Luigi Einaudi, ex presidente de Italia, cuando señala que si el propietario de la isla de Manhattan hubiera dormido cien años y se hubiera desper-

tado ahora, se hubiera encontrado con que sin realizar ningún esfuerzo, dado que estuvo dormido todo ese tiempo, se encuentra con su capital ampliado en forma colosal.

Lo cierto es que, quien ha comprado algo en 50 mil pesos y, por ejemplo, lo vende en 100 mil, se encuentra con 50 mil pesos más, que los puede ahorrar o consumir, del mismo modo que quien ha ganado esa suma con su trabajo. Pero esa ganancia no resulta la consecuencia de ningún esfuerzo, y nos encontramos con que si fuera el resultado de algún esfuerzo del trabajo estaría alcanzada por el impuesto a los réditos. No consideramos justo que se les otorgue un tratamiento distinto.

Sr. Secretario de Hacienda.— Quizás debería modificarse el criterio de la ley, y en lugar de tomar como criterio prevalente, ya que no es total, el de la fuente, adoptar el criterio del rédito ingreso, considerando rédito a todos los ingresos, provengan como fruto de capital, como señalaba Fisher, o ganancias de capital, que son las que considera nuestra ley de impuesto a las ganancias eventuales.

La ley de impuesto a las ganancias eventuales trae una definición negativa, pues están sujetas a ese impuesto todas las ganancias no alcanzadas por el impuesto a los réditos, aunque la misma ley de réditos trae algunas excepciones al criterio del rédito fuente.

El Poder Ejecutivo ha sostenido que la presente no es una reforma a fondo o total del sistema tributario, habiendo considerado que no es ésta la oportunidad para hacerla. Quizás en el momento en que pueda hacerse, modifiquemos el criterio para la definición de las rentas y englobemos a todos los ingresos, ya provengan de lo que nosotros llamamos ganancias de capital, o de meros réditos, según la teoría de la fuente, sostenida por Fisher.

Sr. Marini.— Vamos a ponernos de acuerdo sobre un punto: el rédito es la ganancia que se obtiene en un período anual, mientras que no puede establecerse que la ganancia de capital sea anual o periódica.

Sr. Secretario de Hacienda.— Aunque la recaudación sea anual, hay sistemas que involucren los ingresos totales, todos los incrementos patrimoniales, periódicos o no, y haya o no fuente permanente. El criterio de nuestra ley de réditos es que debe haber una fuente permanente. Si la fuente desaparece —por ejemplo, si el inmueble se vende—, entonces desaparece la fuente, y la ganancia no cae dentro del impuesto a los réditos, sino en el impuesto a las ganancias eventuales.

Repito que también hay sistemas que toman el incremento patrimonial como rédito, como hecho imponible. En definitiva, es una cuestión de sistema, de doctrina.

Pienso que tal vez debamos modificar el criterio fundamental que inspira nuestra ley de réditos. La prueba es que no ha sido del todo acertado, ya que ha habido necesidad de crear

otro impuesto, que alcanza a las ganancias eventuales, como suplemento que tiende a corregir las deficiencias y cubrir los campos que el primero no llena. En un buen sistema, lo mejor sería modificar la ley de impuesto a los réditos de forma tal que englobara todos los incrementos patrimoniales.

Sr. Marini.— Con la sinceridad que lo caracteriza en todas las intervenciones que ha tenido en la Honorable Cámara, el señor secretario de Hacienda, en su respuesta ha dado un argumento bien elocuente que demuestra la necesidad de lo que nosotros sostenemos —y con nosotros, mucha gente del país—, en el sentido de hacer un examen más reposado y completo de las circunstancias económicas actuales y de los sistemas tributarios aplicables, para establecer, en el momento oportuno, una reestructuración adecuada de las leyes impositivas.

Observe el señor secretario que en las previsiones presupuestarias se calcularon 4.000 millones de pesos provenientes de esta reforma impositiva. Yo creo que esos cuatro mil millones de pesos los tendrá con esta reforma o sin ella.

A través del propósito, que yo he elogiado, de combatir la evasión impositiva, creo que esos resultados se lograrán, y entre tanto nosotros deberíamos ocupar nuestro tiempo —me refiero a las personas expertas en la materia— estudiando todos los aspectos impositivos de suerte tal que al cabo de este año se pueda proponer una reforma clara y precisa que conformase con criterio de justicia todas las situaciones, y evitar la adopción, por apresuramiento, de un deficiente instrumento fiscal. Nuestra oposición en este caso tiene mucho fundamento, y aunque no haya estado en la mente del señor secretario de Hacienda adherir a esta tesis, están expuestos los distintos criterios que demuestran que no existe una idea muy fija y precisa sobre lo que más conviene hacer.

Sr. Secretario de Hacienda.— Yo reconozco la habilidad dialéctica del señor diputado.

Sr. Marini.— No he querido colocarlo en ninguna situación de desventaja.

Sr. Secretario de Hacienda.— No me coloca en ninguna situación inadecuada, pero quiero señalar que con el señor diputado tenemos una diferencia en cuanto a la oportunidad de la sanción de las reformas.

En el mensaje del Poder Ejecutivo se dice que ésta es una reforma circunstancial. Se promueven y proponen las reformas imprescindibles en este momento, sin que esto implique exponer una opinión en cuanto a la reforma de fondo que debe realizarse y en cuanto a la oportunidad de su aplicación.

Yo también pienso, como gran parte del país lo considera y como lo ha dicho el señor diputado, que debe promoverse una reforma de fondo. Con esto el Poder Ejecutivo en manera alguna ha pretendido impedir una discusión a fondo y una transformación total del régimen tributario argentino.

Por otra parte, el hecho de que el país en este momento esté en una situación especialísima de cambios estructurales sumamente profundos, aconseja no precipitarse, puesto que muchas de las modificaciones que pudieran hacerse ahora quizás tendrían que ser corregidas al poco tiempo por imperio de las circunstancias. El hecho de que se estén produciendo esta clase de cambios estructurales nos obliga a ser más cautos y a dedicar el tiempo necesario para un estudio meditado y profundo que sea definitivo, a fin de evitar los cambios constantes en la legislación impositiva que yo también considero que no son beneficiosos.

La estabilidad de las leyes impositivas tiene una estrecha relación con su rendimiento, y la recaudación está vinculada, entre otras cosas, con la estabilidad de las leyes. Esto es importante. Cuando decidamos discutir la reforma a fondo del sistema impositivo es necesario que lo hagamos en condiciones de poder sancionar una legislación que aspire a una permanencia adecuada.

Sr. Marini. — Sobre esos aspectos estamos de acuerdo, señor secretario.

Quiero aclarar que mi intervención estaba dirigida a señalar los fundamentos que definen nuestra disidencia. Con respecto a algunas reformas, más adelante la intervención de los señores diputados Suárez y Adrogué explicarán en qué medida podrán realizarse algunas, sobre todo en los aspectos procesales. Todo lo que pueda estar dirigido a agilizar el trámite de manera más clara y precisa, podrá contar con nuestra aprobación, pero ese aspecto quedará exclusivamente a cargo del señor diputado Adrogué.

El señor diputado Suárez se ocupará de otras formas de imposición con las que podamos estar de acuerdo y de algunas con las cuales no estamos de acuerdo.

Quiero entrar a considerar otro aspecto, dejando entonces todo esto de lado para no citar una opinión de Cosciani expuesta en las Jornadas de Derecho Fiscal. Me interesa abordar una de las reformas que yo considero importante y fundamental, y con la cual estoy en decidida oposición. Me refiero a la creación del impuesto sustitutivo a las sociedades de personas y empresas unipersonales que ejercitan el comercio. Es decir, que con el mismo criterio que hace un año se sancionó la ley creando el impuesto sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes para las sociedades anónimas, ahora se pretende imponer ese criterio a las sociedades de personas o empresas unipersonales que ejercen el comercio. La falla fundamental, la observación más seria que hago a esta modificación estriba en que viola el principio de la progresividad, que considero necesario en este tipo de impuesto.

Fatalmente, al aplicar la tasa del uno por ciento, entramos en el marco y en el sistema de la proporcionalidad, y creo que en esa materia se cobra un tributo muy justo a través de la transmisión hereditaria a quienes han acu-

mulado grandes fortunas y grandes patrimonios. Si atendemos aquel criterio de justicia social, de justicia en el reparto, no hay duda que quien debe tributar más es quien más tiene y con un sentido de progresividad, porque en definitiva la progresividad se aplica entonces en el momento de la muerte. El patrimonio pasa a los herederos, que desde luego lo ven disminuido; pero ese patrimonio no es el esfuerzo directo de su trabajo, sino el de sus ascendientes. Entre tanto, el Estado, cobrando impuestos crecidos a través de la tasa progresiva, puede destinar esos ingresos a actividades fundamentales como son la educación y la salud pública, que de otro modo no se podrían atender con eficacia, como ocurre en nuestro país.

Pero hay razones más poderosas todavía, y es que ese impuesto es típicamente provincial. Se podría decir que también ocurre lo mismo en el caso de las sociedades anónimas, sistema al que se llegó por la vía de las adhesiones y acuerdos con las provincias.

En la exposición que se hizo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se señaló que las recaudaciones por este concepto excederían a las que ahora se logran en concepto de transmisión gratuita, pero yo me resisto a creer que eso pueda ser cierto. De todas maneras hay un obstáculo para mí fundamental, que es el de evitar que el impuesto se pague con el sentido y la aplicación de las reglas progresivas que son para mí las más justas y que han sido defendidas en las Jornadas de Derecho Tributario por el eminente profesor Cosciani, que dedicó gran parte de su trabajo a esta cuestión. Decía Cosciani que podemos afirmar que toda la literatura financiera del siglo pasado se había preocupado de poner en evidencia los efectos económicos negativos del impuesto progresivo, y si había alguien que lo sostenía, partiendo de un punto de vista equitativo o basándose sobre algunos principios lógicos de la economía, como el de la utilidad marginal decreciente, había otros que continuaban insistiendo sobre el efecto deletéreo de este impuesto a los fines del incentivo a la producción, al ahorro y a la inversión.

Esta posición científica que viene a favorecer, quizás inconscientemente, a algunos intereses de las clases más acomodadas, permanece hoy en día más difundida en el planteo de una política tributaria racional en los países subdesarrollados; pero ahora parece que la presencia del impuesto personal y progresivo se impone por motivos particulares propios de estas economías en la misma forma que se impone en los países desarrollados.

Y sigue argumentando para establecer que ese impuesto debe aplicarse en esa forma aun en los países en vía de desarrollo.

La comprobación de la existencia de la concentración más marcada de la renta en países poco desarrollados —dice Cosciani— constituye

el punto fundamental en el planteo del problema de la función que el impuesto progresivo puede cumplir en estos países. Por eso, sin querer abundar mucho, porque estas posiciones están muy discutidas, creo que una impugnación sería y fundamental puede basarse con exclusividad en ese argumento.

Creo que no debemos apartarnos de los lineamientos generales que responden al concepto de que los impuestos de tipo personal deben tener carácter progresivo, tanto en el caso del impuesto a la renta, como en el del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Este es un criterio que yo sostengo para países como el nuestro, donde los impuestos personales no juegan el papel fundamental que juegan en otras economías. Sabemos que en nuestro país tal vez más del setenta por ciento de los impuestos que se recaudan son indirectos. En cambio, en Estados Unidos, como lo he podido establecer a través de una publicación de la Dirección Impositiva que constituye una buena contribución para los estudios de estos problemas, los impuestos directos representan una proporción sustancial, el 85 por ciento, de los recursos del Estado federal y sólo un 15 por ciento proviene de otro tipo de impuesto. Los impuestos estatales son de tal naturaleza que allí sí se cobra el impuesto a las ventas que no percibe el Estado federal.

De modo que tenemos que acentuar nuestra preocupación para que no se viole esta escala progresiva, tanto en el impuesto a la transmisión gratuita de bienes como en el impuesto a los réditos. Desde luego, las escalas deben ser adecuadas, porque los impuestos no pueden ser arbitrarios y, además, la posibilidad de pagarlos no es tan flexible como para que cualquier impuesto pueda ser tributado sin ninguna dificultad. Ese es un criterio de valores que corresponde a la política fiscal que un gobierno que se preocupa por los intereses de la nacionalidad debe aplicar con toda estrictez y justicia.

Podría ahondar más en estas cuestiones, pero extenderíamos demasiado este debate, que se realiza frente a una Cámara no muy poblada y con un tema que por lo general no despierta mayores entusiasmos. Todo lo que se refiere a las demás reformas de la ley impositiva será abordado, como dije hace un instante, por los señores diputados Suárez y Adrogué. Yo sólo he querido limitarme a señalar la inoportunidad de la reforma.

He traído a colación las reflexiones de comentaristas sobre el criterio que se tiene en otros países y la opinión de sectores nacionales que se sienten afectados por esta reforma. Desde luego, no comulgo ortodoxamente con todas esas opiniones, pero veo que ésta es una preocupación que excede el marco nacional. Así, en su último mensaje el presidente Kennedy, al fijar los objetivos de su política en el orden interno, trata de una cantidad de problemas muy simi-

lares a los de nuestro país. Expresa en el punto nueve que se debe terminar con la evasión de impuestos y retención de impuestos sobre dividendos e intereses. Se refirió también a la mejora permanente de los seguros por desocupación y a la necesidad de contar con poderes para lanzar una serie de obras públicas cuando comience un período de recesión, así como también para reducir temporariamente los impuestos a fin de combatir las bajas en el comercio. Y nosotros estamos pasando por un período de esa naturaleza. Es decir que allá se preocupan de reducir los impuestos y no de aumentarlos.

Hay puntos tan interesantes en este mensaje, señor secretario de Hacienda, que podrían servir de elementos coadyuvantes a aquella reciente y simpática polémica que tuvimos en el debate de presupuesto, cuando hablábamos de la necesidad de cuidar más la infraestructura humana que la infraestructura material. Fíjese cómo un presidente de una nación poderosa se preocupa de un gran programa de ayuda federal a los colegios médicos y dentales, un programa administrado por el Estado contra la parálisis infantil y otras enfermedades, reforzar las leyes sobre productos alimenticios y drogas, seguros de enfermedad para los ancianos bajo la seguridad social, un «ataque masivo» contra el analfabetismo adulto, ayuda federal para la educación superior, ayuda federal para construir escuelas públicas y pago de los maestros. Es decir, todo tendiendo a sustentar, fundamentar un poco más la salud y la educación del pueblo; cuidar la infraestructura humana, sin la cual todos los esfuerzos que pretendamos hacer serán inútiles. Nosotros tenemos que tratar que nuestra política fiscal apunte a esos objetivos; en primer término, desde luego, al desarrollo económico, cuidar mucho la regularización de la coyuntura, no descuidar, atender la justicia social; para que de este modo se pueda ir cumpliendo, según nuestros puntos de vista, la misión del Estado.

Sé que esta materia impositiva, económica y fiscal no es una materia que atraiga mucho —decía hace unos instantes— los entusiasmos, porque hay que ir al detalle, en la defensa de algunos intereses, pero que son los intereses del pueblo.

Hemos hablado de muchas cosas y nos hemos olvidado de la necesidad de desgravar al trabajo personal. Si el rédito es capacidad de consumo y capacidad de ahorro, es decir ingreso, nosotros sabemos que con el trabajo personal el hombre que realiza un esfuerzo no alcanza muchas veces a cubrir acabadamente su capacidad de consumo. Sin embargo, está tributando impuesto a los réditos, y sería muy fácil mostrar las estadísticas para establecer la importancia de las desgravaciones a valor de peso constante desde el año 1943 a este año que está transcurriendo, y sacar como conclusión que las desgravación en peso constante es mucho menor ahora que en 1943.

Estamos exigiendo entonces un tributo desproporcionado al hombre que trabaja, y si queremos estimularlo, como que desarrolla su esfuerzo importante con su cerebro y con su músculo, es menester que no tenga que tributar esta clase de impuestos. Por eso desde ya me declaro partidario del proyecto del señor diputado por la Capital, don Luis Conte, sobre desgravación de los réditos de cuarta categoría. Si por una razón de necesidad fiscal, ella no puede hacerse, esto no significa que nosotros no sigamos sosteniendo ese principio.

Hay quienes quieren resolver el problema de otra manera. El mismo señor diputado Conte y otros señores diputados han presentado proyectos en el sentido de aumentar los márgenes de desgravación. Cuando he intervenido en debates de esta naturaleza, también he sostenido —no he querido traer el recuerdo con la lectura de los diarios de sesiones— la necesidad de ampliar el marco de la desgravación. Y alguna vez, preocupado por este problema, he esbozado un proyecto, que yo llamo anteproyecto.

Si las necesidades fiscales son tan apremiantes que hacen imposible por ahora suprimir ese impuesto, creo que al hombre que trabaja hay que darle la posibilidad, a través de ese gravamen, de un ahorro que podríamos llamar forzoso.

Pienso que el hombre que debe tributar el impuesto de la cuarta categoría, el impuesto del trabajo personal, tiene derecho a ser reembolsado con títulos del Estado, por un valor del 50 por ciento de lo que tributa; títulos que no devengarían interés en los primeros cinco años, pero que luego irían devengándolo por una tasa muy módica, que podría ser del 2 ó 2,5 por ciento, rescatables y canjeables en períodos de cinco años. Es decir que al hombre que ha debido contribuir a los gastos del Estado con una parte importante de sus ingresos, sueldos u honorarios, se le debe dar, a través de estos títulos, una forma de ahorro, una forma de capitalización. Así, al cabo de un número de años —quince fijo en mi proyecto—, ese hombre que se ha visto obligado a pagar impuestos sobre su trabajo personal para atender a los gastos de la administración, debe ahorrar un pequeño capital. Esta sería una manera de retribuir en forma equitativa y justa el esfuerzo del hombre que trabaja.

Tengo en mi poder el proyecto a que hago mención, y pido su inserción en el Diario de Sesiones, para que quede como un antecedente (1). No me gustan las improvisaciones, pero entiendo que esta iniciativa debe quedar inserta en el Diario de Sesiones. Y para que resulte más claro a los señores diputados, voy a leer tan sólo el artículo 1º, que dice así: «Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir anualmente (hasta) con la denominación de «bo-

nos de Ahorro Social Argentino», títulos con las características y modalidades que se determinan en el artículo 4º.

El monto de cada emisión será equivalente al cincuenta por ciento del total que ingresaren anualmente a la Dirección General Impositiva en concepto de impuesto a los réditos los contribuyentes mencionados en el artículo 60 de la ley 11.682, texto ordenado 1960», es decir, los contribuyentes de la cuarta categoría. Y siguen después otras disposiciones que hacen al rescate, a la forma de los títulos, etcétera.

Es ésta una modesta contribución del diputado que habla, preocupado por resolver este candente problema. Pero entre tanto, cualquiera sea la suerte que corra la iniciativa, es imprescindible e impostergable que se atienda de una manera justa a los contribuyentes de la cuarta categoría.

Si no se aprueba esta iniciativa, necesariamente habrá que elevar en gran proporción el mínimo no imponible. En el supuesto de que no se eleve el mínimo no imponible y se siga aplicando el impuesto a la cuarta categoría, espero que con este proyecto —que oportunamente voy a presentar en forma reglamentaria a la Cámara— abordemos la posibilidad de tratar de resolver la situación del contribuyente que debe pagar ese impuesto, lo que se puede hacer mediante una compensación que importe una capitalización o un ahorro para su futuro.

Sr. Prece. — Me permito señalar al señor diputado que obra en la mesa de la Presidencia un agregado propuesto por nuestro bloque por el que se modifican los artículos 20 y 21 de la ley 11.682, que es a lo que se está refiriendo en este momento el señor diputado.

Sr. Marini. — ¿Qué dice ese agregado?

Sr. Prece. — Propicia el aumento de las rentas no imponibles.

Sr. Conte. — Es el proyecto que ha presentado el señor diputado Gómez Machado, elevando el mínimo no imponible al tope de 180.000 pesos. Y ésa es, precisamente, la iniciativa que yo presenté en 1960, como oportunamente lo señalaré.

Sr. Prece. — No es el mismo proyecto; es un proyecto que nuestro bloque ha hecho llegar a la mesa.

Sr. Conte. — Es un proyecto mimético...

Sr. Prece. — Se ha ampliado un proyecto.

Sr. Conte. — Es un proyecto mimético, digo, porque fija el mismo tope que yo había proyectado en 1960, y únicamente se trató de introducir una variación en lo que respecta a la escala. Pero, señor presidente, como dice el adagio italiano, *una cosa è morire e altra parlare di morte*.

Sr. Juárez Peñalva. — Puede haber una coincidencia.

Sr. Conte. — Sí, señor diputado; coincidencia en actitudes colectivas.

Sr. Juárez Peñalva. — No creo que sea copia.

Sr. Presidente (Carrera). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Marini.

(1) Véase el texto de la inserción en el Apéndice, página 6402.

Sr. Marini. — Presumía que la mayoría de la comisión sería sensible a este problema de la desgravación de los réditos del trabajo personal. Ya veremos en qué forma está redactada la modificación de la mayoría. Nosotros, por nuestra parte, sostendremos el criterio antes mencionado, en el sentido de desgravar totalmente los réditos de la cuarta categoría.

Si fuera necesario aportar otras razones para señalar la necesidad de mantenernos cautos en materia de reformas impositivas, yo tendría que recordar las palabras que pronunciara el presidente de la Nación en su último discurso.

En mi exposición deliberadamente he eludido hacer consideraciones sobre la real situación económica del país, porque el argumento me parece un tanto forzado cuando estamos debatiendo una reforma impositiva. Sin embargo, quiero decir que el déficit de nuestra balanza comercial me inquieta, principalmente en lo que atañe a los medios para resolver ese serio problema.

El señor secretario de Hacienda sabe que en la primera visita que hizo el ex ministro Alemann a la Comisión de Presupuesto, pintó un panorama de euforia y de color rosa sobre el desarrollo nacional. Recordará, así mismo, que cuando el ministro de Economía terminó su exposición, las observaciones que yo le dirigiera apuntaron principalmente a la situación que se está dando: nuestro país, a pesar de todas las declaraciones eufóricas y optimistas, no rompe algunos anillos de estrangulamiento; nuestras exportaciones siguen detenidas en una cifra que desde hace varios años oscila alrededor de los mil millones de dólares; mientras tanto, las importaciones van creciendo, de tal modo que en 1961 la balanza comercial ha arrojado un déficit que supera los 450 millones de dólares.

¿Cuáles serán las medidas que se van a adoptar? El señor secretario podrá contestar que ya se han adoptado algunas medidas y que se han puesto en movimiento, como en el caso de la duplicación de los recargos para algunas importaciones. Sin embargo, como ocurre en las economías de todos los países en vías de desarrollo, el problema no estriba exclusivamente en el crecimiento interno; hay una dependencia desgraciada, vital e inevitable del exterior, porque a medida que se expande la economía interna de un país, hasta por aquello de los famosos efectos de demostración de que hablan los economistas, crece la necesidad o la voluntad de consumir. Y eso trae la necesidad de una mayor producción e, inevitablemente, la de mayores importaciones. Y las importaciones no se compran con el desarrollo interno de un país, sino con el poder de compra en el exterior, es decir, con exportaciones, las cuales requieren mercados y productos que puedan exportarse, con entrada y aceptación en esos mercados.

— Así andamos, señor presidente. Comprendo la sinceridad de los esfuerzos que se realizan. Ni siquiera creo que mis palabras puedan tener

más fuerza que otras que se pronuncian en distinto sentido, pero el país está detenido, aunque se anuncie que la victoria está a la vista.

El presidente de la República, en una denuncia casi freudiana, después de dos años de aplicación de un plan económico y social de austeridad, después de haber tenido al señor ministro Alsogaray, con toda su sapiencia, presidiendo el equipo económico, después de haber cambiado otros dos ministros de Economía dice: podemos resumir esta enérgica política que hoy iniciamos diciendo que el Estado..., etcétera. Es decir que «hoy», o sea, el miércoles 17 de enero de 1962, se inicia una política que nosotros creíamos estaba en marcha desde el 29 de diciembre de 1958.

Sr. Juárez Peñalva. — Deseo preguntar al señor diputado con todo respeto si la referencia que hace de las palabras del presidente Frondizi, no se refieren al inicio de la política de racionalización administrativa.

Sr. Marini. — Señor diputado: todas esas políticas estaban enunciadas en el plan de austeridad, estabilización y desarrollo, de manera que me sorprende que el presidente de la República hable de iniciar ésta recién en enero de 1962.

Sr. Juárez Peñalva. — La política de racionalización administrativa sí, señor diputado.

Sr. Ferreira. — Para entender los planes de desarrollo y estabilización hay que comprender que los mismos tienen sucesivas etapas de realización. El problema de la racionalización administrativa, que supone traslación de mano de obra del sector oficial al sector privado, no se podía encarar en la primera etapa, cuando todavía no estaba en condiciones el sector privado para absorber los agentes sobrantes del sector oficial. Por eso, el presidente dice que hoy podemos iniciar la transferencia de mano de obra ocupada del sector oficial al sector privado, porque sabemos que no habrá desocupación. Ese es el sentido de la afirmación del presidente.

Sr. Marini. — Esa es una interpretación.

Sr. Ferreira. — Es una realidad.

Sr. Marini. — No; es una interpretación que hacen los señores diputados. ¿Por qué lo van a interpretar si el presidente no dice aquí lo que ustedes le quieren hacer decir? ¿Quién es el presidente? ¿El diputado Ferreira? ¿O el diputado Juárez Peñalva? Yo me atengo a las palabras del discurso presidencial.

Sr. Secretario de Hacienda. — Si me permite, señor diputado, deseo formular una aclaración.

Por sobre la discusión o el manejo de conceptos, quisiera dar el resultado de las últimas estadísticas en cuanto a actividad industrial y números índice. Ante la afirmación que hace el señor diputado de que el país está estancado, le quiero mostrar estos datos elocuentes que me han sido proporcionados en el día de hoy.

El nivel general, en volumen físico, de la producción industrial, en los diez primeros meses

del año 1961, con respecto a los diez primeros meses de 1960, ha subido en 11,4 por ciento.

Sr. Marini. — Yo le deseo más suerte al señor secretario que la que tuvo el ingeniero Alsogaray, que trajo informaciones que mostraban un aumento del 41 por ciento en la producción y después resultó que era un dato mañoso, porque era el resultado de la comparación de dos meses y en uno de los cuales, el de menor producción, había soportado una huelga.

Sr. Secretario de Hacienda. — Le puedo asegurar que éstos datos no son mañosos y, por otra parte, como he reiterado otras veces, la Dirección de Estadísticas está a disposición de todos los señores diputados para informarles sobre los métodos que aplica en su trabajo y los índices de que se vale.

La estadísticas revelan en casi todos los sectores un aumento importante, en algunos sumamente significativo, como en las industrias textiles, de alimentos y bebidas. Excluyo las industrias extractivas, que también presentan un índice muy importante, para que no se sospeche que el único motivo del aumento es el crecimiento de estas industrias. Pongo estos datos a disposición de los señores diputados y solicito la inserción de esta estadística en el Diario de Sesiones.

Con respecto a las últimas medidas adoptadas, declaro que algunas de las medidas referentes a las importaciones pueden ser adoptadas ahora y quizá no podían serlo antes. El país ha realizado un gran esfuerzo de importación de maquinarias y equipos, y en este momento puede establecerse que no se admiten más solicitudes de importación libre de recargos de nuevas líneas de producción. Y esto por varios motivos. Uno de ellos es que las importaciones han sido de tal magnitud que están, digamos así, atascando un poco a la economía argentina y demandando una cantidad de mano de obra que no existe. Es decir, que ya no se podría suministrar mano de obra suficiente para todas las industrias en renovación y expansión. Es, entonces, un momento adecuado para poner coto a las importaciones de este tipo, para suspenderlas momentáneamente hasta tanto el desarrollo de la economía argentina haya absorbido las importaciones que se han realizado. Estamos frente a un proceso congruente, con medidas que se justifican de acuerdo con la evolución de las circunstancias, y de ninguna manera frente a cambios inopinados o arbitrarios de política sin una justificación realmente profunda.

Sr. Suárez. — ¿Me permite una interrupción, señor secretario?

Sr. Secretario de Hacienda. — Sí, señor diputado.

Sr. Suárez. — Ya que se ha hablado de estadísticas, voy a mencionar algo que no concuerda con las expresiones del señor secretario vinculadas con la euforia económica. Tengo un dato de la Dirección de Estadística según el cual en

el año 1961 se han hecho 119.598 protestos de documentos; por valor de 3.668 millones de pesos, lo que demuestra que no ha podido evolucionar normalmente la economía del país.

Sr. Secretario de Hacienda. — No había querido alargar este debate y ex profeso dejé pasar de lado algunas consideraciones del señor diputado Marini, para no dejarnos llevar a un debate demasiado extenso.

El señor diputado Marini se ha referido recién a los instrumentos financieros, entre otras cosas a la importancia de la estabilidad monetaria, del equilibrio fiscal y de la política compensatoria. Lo ha hecho con gran seriedad y con argumentos que yo respeto, pero que no comparto. No los comparto por la sencilla razón de que la política compensatoria a que se ha referido el señor diputado Marini es algo que pudo hacer Alemania, con el ministro Schacht; que la pudo hacer Roosevelt con su New Deal —por consejo, entre otros, de lord Keynes, que tuvo una amplia discusión con el presidente norteamericano—, y que se puede hacer en general cuando hay factores productivos desocupados, pero no cuando todos los factores están en plena ocupación. Esta política en nuestro caso sólo provocaría una elevación tremenda en los precios, pero de ninguna manera provocaría creación adicional de riquezas. Cuando hay factores productivos desocupados se puede apelar a recursos crediticios para movilizarlos. Esta es la teoría de lord Keynes, que aplicó Schacht con mucho éxito en Alemania, pero que no se podría aplicar en nuestro caso.

Aquí, por el contrario, se produce una euforia excesiva, y el auge debe ser moderado. En esto están de acuerdo casi todos los economistas. No es bueno inflar el auge, porque se provocan reacciones inesperadas, que tienen un fondo psicológico y que provocan muchas perturbaciones. El fenómeno de los pagarés protestados a que ha hecho alusión el señor diputado es simplemente provocado por un reajuste del auge excesivo. No debemos olvidar que la economía del país se ha desarrollado bajo dos circunstancias excepcionales en el último cuarto de siglo: la guerra y la inflación. Ello ha motivado que los esfuerzos económicos de los empresarios no tuvieran suficiente profundidad y solidez, porque no estaban exigidos por la competencia, de modo que se desarrolló mucha actividad antieconómica que en este momento debe ser reajustada si no queremos condenar al país a costos demasiado elevados. Si lo hiciéramos, no podríamos competir en la zona de libre comercio y cada vez nos sería más difícil competir con los productos importados. Nos veríamos obligados, además, a elevar los recargos para su protección, y eso es imposible. Es imprescindible defender los costos.

Algunos sectores responsables reclaman airadamente una política inflatoria. Cuando se ha exigido al pueblo un sacrificio como el que viene haciendo, no es posible provocar una infla-

ción en beneficio de determinados sectores. Eso sería condenar al país a costos elevados y a una situación de la cual no podría salir después.

Esto explica a los señores diputados el porqué de los pagarés protestados y de las quiebras existentes y de las que puedan producirse en el futuro.

Todo esto, en cuanto significa un proceso de decantación, de selección de las empresas más aptas y de menores costos, no debe alarmarnos. Lo alarmante es lo otro: sacrificar el futuro nacional para salvar un sector antieconómico. Por eso, no creo que el dato suministrado por la Dirección de Estadísticas deba provocarnos excesiva preocupación.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Oscar López Serrot.

Sr. Presidente (López Serrot). — Continúa con la palabra el señor diputado Marini.

Sr. Suárez. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Marini. — Sí, señor diputado.

Sr. Suárez. — En su oportunidad contestaré con amplitud las manifestaciones del señor secretario. Ahora me limitaré a señalar que tengo otro enfoque sobre este problema de los protestos y, en general, sobre el proceso económico argentino.

Considero que una mala política en materia económica ha creado una serie de factores que han perturbado el ya convulsionado mercado interno. Tanto es así que esos protestos se deben en gran parte a que el crédito normal otorgado por las instituciones bancarias ha pasado a una banca usuraria paralela, que está recargando efectivamente los precios al cobrar intereses muy por encima de los corrientes o presumiblemente corrientes en el sistema bancario y también en el orden internacional.

No somos partidarios de un proceso de tipo inflacionario. De ninguna manera. Queremos traslaciones de medios y de recursos, pero sin emisión, ya sea por intermedio de desgravaciones impositivas, o incluso por algún tipo de legislación que prohíba el funcionamiento de esa banca paralela que evidentemente está perturbando el sistema bancario nacional.

Sr. Secretario de Hacienda. — Si me permite una aclaración...

Ese argumento ha sido usado con mucha frecuencia —no me refiero al señor diputado, cuya posición conozco— por sectores de intereses que promueven una devaluación.

Sr. Suárez. — Nosotros la combatimos.

Sr. Secretario de Hacienda. — De ninguna manera quiero siquiera insinuar que los señores diputados estén en esa corriente. Lo dejo expresamente aclarado. Pero quiero también establecer que hay un sector de intereses que la promueven.

Los señores diputados conocen la opinión del Poder Ejecutivo con respecto a las sociedades

financieras. Ya se ha dado un paso importante con la reglamentación dictada por el Banco Central. En eso no hay problema, pero tampoco se puede utilizar el otro argumento de la liquidez y falta de crédito, que no es cierto. Los créditos se han expandido. No obstante, parece que resultan insuficientes. ¿Por qué? Porque también aumentan las importaciones. En realidad, lo que ocurre es que hay demasiada liquidez en plaza, pues de lo contrario no habría habido posibilidad de comprar cincuenta millones de dólares, como ha ocurrido en estos días. En plaza hay liquidez, pero lo que ocurre es que se dedica a otras actividades que no son las más convenientes económicamente para el país. En tal situación, el Estado no puede estar suministrando, a través del crédito, un capital barato para actividades que conspiran contra los intereses de la Nación. Por eso mismo, se impone una restricción del crédito, para que ello no ocurra.

Sr. Suárez. — El problema deriva de no haberse manejado bien los efectivos mínimos, bases de la política bancaria, respecto de los cuales, a mi juicio, debió haberse tenido mayor flexibilidad para préstamos productivos como, por ejemplo, para el levantamiento de la cosecha.

Sr. Secretario de Hacienda. — En la Cámara se ha presentado un proyecto que adopta la factura conformada, que es un instrumento poderoso para la selección del crédito. Todos aceptamos en teoría el crédito selectivo, pero carecemos de instrumentos para hacerlo efectivo. Una de las formas para lograrlo es a través de la factura conformada, según el proyecto que, como digo, está a consideración del Honorable Congreso.

Sr. Adrogué. — Es objetable en su carácter obligatorio.

Sr. Secretario de Hacienda. — En particular podemos tener algunas discrepancias.

Sr. Larocca. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado Marini?

Sr. Marini. — Sí, señor diputado.

Sr. Larocca. — He oído decir que en materia industrial se ha registrado un aumento de más o menos un diez por ciento con respecto al año pasado.

Con respecto a la fabricación de bebidas gaseosas, que es una industria que se está desarrollando en nuestro país, he tratado de conseguir elementos de juicio para apreciar su evolución. He consultado varias oficinas. Me he encontrado con que la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos informa que desde el año 1954 no registra datos estadísticos relacionados con el rubro; que en la Secretaría de Industria no hay información de ninguna naturaleza, ni tampoco en la Dirección General Impositiva.

Quisiera saber en consecuencia, cómo ha hecho el Poder Ejecutivo para establecer ese incremento del 10 por ciento en la actividad industrial, cuando respecto de algún rubro, como el

que menciono, por más pequeño que resulte dentro del conjunto, no podemos obtener datos de ninguna naturaleza.

Sr. Marini. — Continúo, señor presidente.

Voy a convertirme, por un instante —es, desde luego, una presunción—, en fray Luis de León, y para retomar el hilo de mi discurso repetiré aquello de «como decíamos ayer», puesto que las interrupciones, desde luego muy ilustrativas, en las que han participado algunos diputados y el señor secretario de Hacienda, han llevado tanto tiempo que por un momento creí haber concluido mi exposición.

Estaba refiriéndome a las aseveraciones del presidente de la Nación, y quiero repetir lo que dijo con toda claridad, que «podemos resumir esta enérgica política que hoy iniciamos diciendo que el Estado somete sus gastos a las normas de estabilización y ordenamiento financiero dictadas para el país en general. En adelante, el Estado no será un privilegiado; se somete en el doble aspecto de su presupuesto interno de gastos y recursos y de su presupuesto de divisas para el comercio exterior. La norma es gastar más de lo que realmente interesa y no comprar afuera lo que el país produce».

Yo señalaba que esto parecía el comienzo de una política, después de casi cuatro años de estar, según nuestra creencia, por lo menos en cuanto a esos propósitos, en esa política. Podríamos agregar también que nos conmovió un poco la declaración que hizo el ex ministro de Hacienda, doctor Alemann, cuando retornó de su viaje al exterior. Manifestó a los periodistas que se iniciaba para 1962 un año del gobierno pobre y de iniciativa privada.

Muchas veces hay que tomar en cuenta el sentido que tienen las palabras. Ya que estamos hablando del ex ministro Alemann, hay que recordar los términos en que está redactada su renuncia, donde evidentemente él expresa que ha perdido su convicción de que el programa propuesto pueda desarrollarse. Aquí el señor secretario de Hacienda dice que sí; yo deseo que así sea.

Sr. Secretario de Hacienda. — Yo no he perdido la convicción y estoy acá.

Sr. Marini. — Hasta los diarios extranjeros, esos diarios que tienen la particularidad de elogiar la política de estabilidad monetaria que realiza el gobierno argentino, ya han perdido fuerza para seguir haciendo los elogios. Y así el tan mentado «Financial Time», que muchas veces elogiara al presidente Frondizi —y no sé si fue ése el diario o revista que otorgó el «Oscar» a Alsogaray en 1959 ó 1960 por haber salvado el valor del peso argentino—, dice ahora que se sigue expresando la voluntad de mantener el valor de nuestro peso, pero que cree que va a ser muy difícil lograrlo. Entre tanto seguimos con que la victoria está a la vista.

Hoy el presidente del Banco Central y el ministro de Economía han hablado del aumento del ingreso bruto en el año 1961 y del ingreso

per cápita a índices superiores a los que se estiman como satisfactorios en el Plan de Alianza para el Progreso; pero nosotros vemos que las perspectivas del país no son claras, porque sigue el drenaje de divisas y siguen disminuyendo las reservas del Banco Central. No olvidemos que muchos millones de dólares se emplean para mantener la ficticia paridad de 83 pesos el dólar. Tenemos necesariamente que ser cautos. No queremos ser agoreros y nada ganaríamos con la devaluación; ni siquiera tendría validez la satisfacción de haber adivinado y previsto lo que se iba a producir y luego se produjo. Lo importante y fundamental es que la economía del país marche de manera tal que realmente pueda aumentar el ingreso per cápita de cada uno de los habitantes de la Nación y puedan aumentar nuestras posibilidades de compra en el exterior.

Se dice que no hay desocupación, pero es que los ministros tienen su mirada puesta en la Capital Federal y sus alrededores, y no sé tampoco si esta afirmación es cierta. Si extendieran un poco más su mirada en el vasto ámbito del país encontrarían que hay desocupación y miseria, mucha miseria, en el interior del país. Yo he podido comprobarlo en mi último viaje a Formosa.

Recién, cuando leía un artículo de la revista «Veritas» sobre la necesidad de asimilar a los indígenas, pensaba en la triste situación de los aborígenes del Norte de mi patria. De todas maneras, señor presidente, hay distintos criterios. Yo tenía aquí anotado un comentario sobre el plan del New Deal para salvar la situación económica y dar ocupación, que implicaba desde luego muchos gastos deficitarios, pero tales gastos se justificaban con la teoría de que el déficit sería absorbido por la futura expansión económica del país. Y éste debe ser realmente el norte y la meta de todos los esfuerzos que se realizan, la expansión económica para mejorar, para acrecentar el standard de vida del pueblo.

Manuel de Torres, en su introducción a *La economía del bienestar*, del profesor Arturo Cecilio Pigou, discípulo predilecto de Alfredo Marshall en la cátedra de Cambridge, nos hace ver, entre las bondades de la obra comentada, el recuerdo constante de que el problema económico no es el único que el gobernante debe tener en cuenta, sino que la decisión última depende de otros puntos de vista tan importantes o quizás más que aquél.

Ubicarse con exactitud para abarcar en amplia y limpia perspectiva todos esos problemas, sobre todo los concernientes a la aplicación de una ordenada política social, es tarea principal del político, si quiere luchar con eficacia para vencer los obstáculos que se interponen entre sus aspiraciones y la realidad, obstáculos que se multiplican muchas veces hasta envolverlo por todas partes con su trama sutil e inaprehensible, desalentando esperanzas, quebrando ideales, para concluir en desaliento, pesimismo y fatiga.

De la ciencia puramente financiera debemos extraer los principios de validez general para la más correcta formulación de las conclusiones, pero nuestra valoración política nos debe acompañar a fin de apreciar la influencia de los impuestos y sus consecuencias sobre los sectores que los tributan. Y esto es lo que queremos que se haga en nuestro país, por eso nos oponemos en este momento a esta reforma.

Hagamos el esfuerzo de que la reforma impositiva cuide todos los aspectos de que hemos hablado para dar un instrumento serio, claro, preciso, que permita que la tributación se haga de manera conveniente y que ninguno de los sectores se sienta alcanzado por tributaciones de injusticia. Lo hemos dicho a nuestra manera. Repito que me parece que cada vez que hablamos de estos temas, hablamos de una cosa fatigosa e insoportable.

Alguna vez he repetido una frase de este maestro de la economía, Pigou, discípulo de Marshall, citado por Solano Peña Guzmán, que fuera diputado de esta bancada después del año 1946, cuando dice aquello de que: «La economía es el mercader entre las ciencias; que no tiene atractivo humano; no desmenuza el átomo ni pesa estrellas; no bate sus alas afanosamente en la tenue atmósfera de la alta filosofía; es gris, es plebeya; no tiene la libertad de los cielos, ni de los mares; está unida con sórdidas cadenas a la tierra.»

Tal vez ese mismo pensamiento que impulsaba a Pigou a hacer este tipo de declaraciones, habrá inspirado a Rostand, el poeta de *Cyrano de Bergerac*, citado por uno de estos financistas que vinieron a las jornadas de derecho tributario, celebradas en 1960 en la ciudad de Buenos Aires, creo que fue Masoin, cuando repitiendo aquello de Rostand decía: «Cuánto más bello es lo inútil que lo útil, porque lo inútil es lo único que permanece y que no se pierde; son los monumentos, las obras de arte, las grandes pinturas, es lo que queda para siempre; que no crea, con criterio de productividad, pero sí recrea al espíritu y por eso sobrevive.»

Entonces, pienso que nosotros no debemos dejar de contemplar estos aspectos que no se reducen a la alabanza de lo inútil; pero sin olvidar la necesidad de poner nuestros pies en la tierra para pisar firme, sin subvertir la jerarquía de valores y aun cuando caigamos en contradicción con Ortega y Gasset, que nos pide que nos empinemos sobre la tierra que pisamos. ¿Que nos empinemos para qué? Para vivir en el mundo de los bienes, de la cultura, mundo maravilloso que describiera el gran Anselmo de Fuebach, ese mundo que está entre el polvo del suelo y las estrellas del cielo, mundo de los bienes culturales donde juegan las valoraciones y la libertad, que es el atributo del hombre para crear, para preferir, para querer más una cosa que otra. Pero así y todo tenemos que hundir los pies en la tierra, a fin de emplear un poco de nuestra razón y de nuestra inteli-

gencia, para poner orden en esa anarquía de las leyes económicas. Estas leyes expresadas por distintos economistas pueden ser buenas o malas, pero, en definitiva, lo importante es que ellas en su aplicación práctica consigan que el hombre se libere, que el hombre viva en el ámbito espacial que le toca en suerte, de modo tal que no se sienta un resentido, un sumergido, un postergado, un abandonado, en una sociedad donde las minorías prevalecen y se benefician, donde las minorías lo absorben todo.

Todo lo que hagamos en esta materia, como en cualquier materia económica, debe tender a la justicia, pero no a la justicia entendida con aquel concepto romanista del *suum cuique tribuere*, ni tampoco con el concepto pedestre de las teorías comunistas de a cada cual según sus necesidades, sino a la justicia que permita el esfuerzo del trabajo con igualdad de posibilidades y de punto de partida, pero que también posibilite que los esfuerzos puedan rendir según la jerarquía, empeño y calidad del ser humano que se ponga en la tarea de trabajar y de crear.

Si todo esto lo logramos, habremos hecho una magnífica contribución a la República por encima de las teorías políticas y de las teorías económicas, con el propósito firme y decidido de levantar al hombre haciendo jugar todos los instrumentos de la intervención estatal como factor de equilibrio, no para proteger al poderoso, al que más tiene, sino al que menos tiene. Este será el modo de cimentar la paz social que todos anhelamos y que, si logramos alcanzarla, se cumplirá una gran obra para el futuro del país. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (López Serrot). — Tiene la palabra el señor diputado Aguinaga.

Sr. Aguinaga. — Los compromisos fiscales emergentes de la sanción de la ley de presupuesto nos reúnen ahora para considerar las reformas impositivas. Es éste el episodio necesario e indispensable para atender el incremento de los gastos públicos y cubrir ese déficit que obliga al uso del crédito para atender necesidades de la administración, porque gran parte de las inversiones de capital se atienden con los impuestos anuales.

Insisto en la gravedad de esta conclusión: el presupuesto debe atenderse con los impuestos y las inversiones con el uso del crédito. Hay que lograr el equilibrio entre los gastos corrientes de la administración y los ingresos fiscales de carácter permanente.

Dentro de esa buena doctrina estuvieron las palabras del señor presidente de la República el 19 de mayo de 1958, cuando dijo que no es admisible que el país siga financiando gastos comunes de consumo mediante la utilización de recursos crediticios que transfieren al futuro el sostenimiento de la administración actual. El crédito sólo debería ser empleado para la financiación de inversiones productivas o de aquellas obras que han de beneficiar por igual a las

próximas generaciones y que, en consecuencia, justifiquen las transferencias de las cargas.

Del incumplimiento en una gran medida de esa doctrina financiera en la práctica de estos casi cuatro años de gobierno resulta gran parte de las dificultades financieras que ahora padece el país y es la causa de los trastornos económicos y de los inconvenientes que todos comprobamos. Tan es así que el gobierno, al plantear ahora su plan de racionalización administrativa, se propone fundamentalmente trasladar gran parte de los recursos que absorben los gastos públicos a la actividad privada.

Aquí hemos dicho, al tratar la ley de presupuesto, el grave problema de la gravitación de los presupuestos nacionales, provinciales y municipales, y el señor ministro de Economía, cuya ausencia lamento, ha declarado con alarma que aquéllos insumen más del 30 por ciento del producto bruto nacional y que ello lesiona profundamente la economía.

Ahora se quiere hacer lo contrario de lo que se ha hecho casi durante cuatro años, pero durante este largo tiempo esa conducción ha herido profundamente la economía. En este momento se desea, creo que sinceramente, alentar la economía en base al sacrificio fiscal. Este cambio fundamental, para ser consecuente, debiera determinar al Poder Ejecutivo a retirar el proyecto de reformas y remitir una nueva ley de desgravación fiscal. Como eso no se hará, este año fiscal, por imperio de la ley impositiva reforzada por la reforma que estamos tratando, trasladará, por la voracidad fiscal, mayores recursos y mayores medios de pagos a las áreas fiscales, disminuyendo los medios de pago de la economía privada, limitando sus créditos y reduciendo la capacidad de compra de la población. Salvo, señor presidente, que se lancen nuevos recursos, se aumenten los medios de pago y se rompa con la costosa política de la llamada estabilización y se dé rienda suelta a la emisión definitivamente incontrolada.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Obras Públicas, ingeniero Isaac Breyter.

Sr. Aguinaga. — El señor presidente de la República, según sus palabras, se siente en deuda con el país al haber realizado una política de expansión de los gastos públicos; recordemos que esta ley, que mantiene y acentúa esta política, también tiene la paternidad del señor presidente de la República. Esta ley de impuestos procura acentuar la mejor percepción fiscal, evitar la evasión fiscal y por este medio y con nuevos impuestos aumentar las rentas públicas. Se había calculado que la aplicación de la ley impositiva traería un aumento en la recaudación de cerca de 4.000 millones de pesos. Es decir que la política anunciada por el Poder Ejecutivo de permitir mayores medios de pago a la actividad privada, disminuyendo la absorción de los medios de pago por el Estado, reciente, de estos días, no se adecua al propósito que el Poder Ejecutivo

tuvo al remitir este proyecto como creador de mayores ingresos fiscales arrancados precisamente de la actividad privada, ni al remitir el grueso presupuesto de 1962, que pesa sobre el país en una cifra que puede calcularse en más de 190.000 millones de pesos. He de volver sobre esta cuestión, pero quiero expresarla de comienzo porque constituye la principal observación a la ley, ya que esta reforma marca una nueva contradicción en la política gubernativa.

Cuando el Poder Ejecutivo anunció la remisión del proyecto que ahora tratamos, desde luego modificatorio de la ley impositiva vigente, entendimos que, aunque no coincidiéramos con algunas de sus disposiciones, era llegada la oportunidad urgente de entrar hondo en el régimen impositivo que padece el país.

Resulta claro que es necesario actualizar la ley sobre la base de acentuar los impuestos a las ganancias y las ventas, limitando cada vez más los impuestos sobre los consumos populares, liberando las cargas sobre el producto del trabajo personal y revisando el sistema de retenciones y recargos que crean situaciones absolutamente inadecuadas para el mejor desarrollo de la economía nacional.

Todo el régimen impositivo que grava al contribuyente directamente a través de los réditos que provienen del trabajo y a los indirectos que golpean sobre los consumos y los aduaneros, y los de la importación que indirectamente tanto gravitan sobre el costo de la vida del pueblo, son característicamente impuestos al consumo, porque tocan a los menos dotados y fundamentalmente son depresivos, impidiendo la liberación económica, porque obstaculizan la capitalización sobre la base del ahorro de la mayoría de la población.

La conducción económica se realiza así, especialmente, por el impuesto. La formación social se formula por el impuesto; la prosperidad o la ruina se alcanzan por el impuesto. Si el presupuesto es la ley más importante, lo es característicamente por lo que significa el cálculo de recursos que provienen de la ley impositiva, según como ella grava a la población contribuyente.

En esta materia la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad especialísima, de acuerdo con las previsiones constitucionales que por razones históricas le otorgan el poder de iniciativa.

Y aquí viene una crítica al proceso legislativo. Una ley de impuestos no puede tratarse en las últimas horas de un segundo período de sesiones extraordinarias, a escaso tiempo de su terminación, porque es limitado el tiempo de la Cámara y porque es más limitado aún el tiempo que el Senado de la Nación debe destinar para prestar aprobación a este importante proyecto que grava al pueblo del país. En una palabra, la sanción estaría deformada por la urgencia que determina la terminación del período legislativo.

Pero no se trata del simple cumplimiento de las formas parlamentarias. Esto atañe al régimen de gobierno, porque la legalidad del impuesto se basa en el estudio y la responsabilidad de los informes y de las votaciones de las Cámaras del Congreso.

Aun cuando las reformas que se proyectan no responden al alcance y contenido sustancial que el país necesita, será de todas maneras conveniente traer viejos conceptos conocidos, porque es necesario proteger la organización económica y social, asegurar el progreso y alentar la justicia y la equidad en cuanto a estas reformas parciales que se propician.

Hay que proteger al contribuyente en su derecho de propiedad, que alcanza bienes y trabajo, en cuanto los tributos representan limitación a ese derecho, porque el impuesto es una forma de sustracción del patrimonio privado para que el Estado pueda cumplir sus fines.

Recordemos que el impuesto fue un signo de servilismo y opresión, porque no nació de la ley sino del poder y la fuerza del señor absoluto, y su destino era dado sin consultar el interés del Estado o el de los habitantes del país.

Cuántas veces se habla de la deserción o del fraude de los contribuyentes, y cuántas veces ello es imputable a la decepción que provoca la utilización inadecuada de los recursos y al concepto generalizado de la inoperancia de los gastos públicos.

La Carta Magna dada en Inglaterra en 1215 establecía que el rey no podía fijar el tributo sin el consentimiento del Parlamento, refirmando el principio democrático a través del acta de 1626 y de las peticiones de 1628 y 1688.

En Francia, ya los Estados Generales reclamaron en 1355 la facultad de establecer impuestos, principio que pasa a formar parte de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y de la Constitución de 1791.

En la Argentina, desde el acta capitular del Cabildo de 1810 y de los precedentes constitucionales, se llega a la Constitución de 1853, con sus disposiciones expresas de los artículos 49 y 17, y de los incisos 1º y 2º del artículo 67, y la cláusula que tanta responsabilidad nos crea cuando dice en el artículo 44 que a la Cámara de Diputados corresponden exclusivamente las iniciativas de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.

La ley —esto es fundamental— debe fijar el sujeto del derecho, definir el hecho imponible, determinar todos los elementos de hecho y de derecho que lo integran, precisar el objeto y cuantía de la prestación, las fechas de vigencia de la obligación y todos aquellos elementos que hacen a la obligación tributaria.

Ahora no gravitan simplemente razones doctrinarias. El país ha adquirido compromisos internacionales de adecuación de su sistema impositivo, como resultado de la Conferencia de Montevideo, a través de la Alianza para el Progreso —como lo ha recordado el señor diputado

Marini— y también como resultado de su participación en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

Al tratarse el presupuesto nacional me referí a la ubicación argentina entre los demás países sobre la proporción de los impuestos al consumo en el cuadro general impositivo, e hice notar que ése es un resabio que debe modificarse en toda la América latina.

La Alianza para el Progreso necesita vigencia inmediata, y los países beneficiarios no deben incurrir en retardo para adecuarse a esa acción armónica y liberadora.

Alguna vez me he preguntado sobre el derecho de nuestros países para reclamar la ayuda exterior, si no se realizan los esfuerzos previos, y cómo el Tesoro de los Estados Unidos debe soportar pesadas cargas para realizar esa ayuda que, desde luego, también los resguarda en sus intereses, y me he preguntado también sobre cuál debe ser el ánimo del pueblo contribuyente de aquel país, donde las cargas impositivas son extraordinariamente gravosas para todos, especialmente para ciertos sectores considerablemente castigados, mientras no se realiza en los países directamente beneficiarios una adecuada imposición fiscal paralela a aquéllas, salvo las diferencias propias de distintas estructuras, de las posibilidades económicas y sociales y del estado de capitalización de cada uno de los países.

Tengo sobre mi banca un comentario del 15 de diciembre que se refiere a las restricciones que se registran en la Argentina y que producen dificultades en el manejo y en el desarrollo del comercio internacional. Nadie se explica aquí —dice ese comentario— las razones de la sorprendente actitud argentina que ha provocado toda clase de conjeturas; las más benévolas las atribuyen a maniobras para fortalecer la posición argentina en sus negociaciones; otras, a razones de política interna, como sería el caso que afecta al comercio con el Uruguay. A continuación se refiere este comentario a diferentes situaciones con respecto al Paraguay, Uruguay y Chile, en detrimento de las posibilidades de nuestro comercio y de los convenios que nuestro país tiene realizados con los países sudamericanos.

Voy a ahorrar a la Cámara la lectura de este comentario, porque advierto la extensión que este debate está tomando y por la necesidad de adecuar mi exposición a los términos reglamentarios.

Todo este problema necesita ser considerado con amplitud y con reformas de fondo que permitan revisar no sólo tarifas y montos impositivos o facultades administrativas para asegurar un mayor rendimiento fiscal, sino dando al país un sistema actual y equitativo, que permita el ahorro, en cuanto ésa es la mejor forma de promover la riqueza nacional.

El impuesto no puede servir para deformar la economía y desalentar las producciones tradicionales. Las exportaciones son la base del

equilibrio de la balanza comercial, y en nuestro país el 90 por ciento de las exportaciones corresponde a productos de la agricultura y la ganadería, es decir a productos del campo argentino, de ese campo que no tiene viviendas adecuadas, que carece de posibilidades de cultura, de energía eléctrica, que cada vez se encuentra más despoblado y que, sin embargo, continúa nutriendo la riqueza del país; de ese campo al que se lo disminuye con el concepto generalizado del colonialismo y de quienes creen en la industrialización de cualquier manera y a cualquier precio como el gran factor del futuro argentino. Así se llega a la situación de que para promover la industrialización, por una parte, y para crear recursos fiscales, por la otra, ese campo no puede trabajar con tractores, con técnica adecuada, porque el tractor nacional debe servir para crear una industria y para producir amplios recursos al Tesoro Nacional, y no para alentar al campo, a cuyos servicios está destinado el tractor como elemento insustituible de trabajo.

Hay que reconocer, desde luego, la labor de la Dirección Impositiva si se consideran las cifras de recaudación anual de los últimos años y la prevista en cerca de 20.000 millones de pesos para el año actual, que representa casi un 20 por ciento más de los ingresos del ejercicio anterior.

Sin embargo, la eficacia de la recaudación no expresa la bondad de la política impositiva. Los recargos y retenciones importarían en las previsiones de recaudación 20.000 millones, representando el 23 por ciento. Si a esto se agregan los aduaneros, se llegaría a los 34.000 millones, o sea el 28 por ciento del total, que también se aumenta en el afán de impedir y desalentar las importaciones, con las últimas medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo al fundamentar su plan de racionalización.

Esas cifras deben compararse con el impuesto a los réditos que produciría 25.000 millones, y los 20.000 millones provenientes de la aplicación del impuesto a las ventas.

¿Habrà que hacer acá el análisis de los impuestos, y retenciones y recargos? ¿Habrà que hacer la importante cuestión sobre la industrialización artificial y el abandono de las actividades económicas tradicionales? Desde luego que aceptamos una política de industrialización, pero vinculada a la eficiencia de la producción y no a una producción artificial que, por ejemplo, ha permitido la creación de veintiuna fábricas de automóviles que hacen fundamentalmente el armado de los mismos, los que resultan inaccesibles, inalcanzables por sus precios, que superan, como es natural, el de los vehículos extranjeros, eficientes y baratos.

Esta es una parte de los impuestos disimulados que también paga el pueblo argentino. Para que el país tenga más industrias, algunas industrias, algunas radicaciones provocadas artificialmente, se pagan precios exagerados, el doble o

el triple de los que pagan los países específicamente productores de esos artículos. Y eso, en realidad, son impuestos que deben agregarse a la carga que soporta el país, y que inciden sobre el producto bruto nacional en mucha mayor medida que la que ha provocado en su oportunidad la preocupación del señor ministro de Economía.

La ley impositiva se hace bajo el apremio de las necesidades fiscales. El producido del impuesto, a su vez, alienta la voracidad fiscal, sin considerar las necesidades de otra índole y las posibilidades de acrecentamiento de la economía. Y cuando el impuesto deprime y deforma, se buscan soluciones en radicaciones de capital, olvidando que una política fiscal adecuada puede ser creadora de la capitalización del país, esa capitalización interna, popular, que debe nutrir las cajas bancarias para asegurar un crédito suficiente a los productores, y que debe dirigirse a los fondos comunes de inversión, adquiriendo acciones en el campo industrial.

El gasto público exagerado absorbe una importante porción del producto bruto nacional. Incide sobre los costos de producción y sobre el consumo; absorbe recursos humanos y materiales que se restan a la actividad privada; impide la formación del ahorro nacional y, al aplicar los impuestos, en una gran medida, a inversiones de capital, hace gravoso el sistema impositivo que normalmente debe aplicarse a cumplir las necesidades presupuestarias de los gastos anuales, dejando las inversiones en obras públicas para ser realizadas con el uso del crédito a fin de que en ellas contribuyan las generaciones venideras que se beneficiarán con esas inversiones sin lesionar al esfuerzo presente, aspecto sobre el que he creído necesario insistir en razón de la gravedad que comporta la política de inversiones pagadas con los impuestos anuales que se sacan de la producción y del trabajo.

Si se quiere practicar una verdadera y sana política de promoción de la actividad privada, hay que liberar a la economía de los impuestos y gabelas para que sea ella —fundamentalmente la actividad privada— la que haga las inversiones de capital que la industria y la producción necesitan para su expansión. La expansión privada tiene prioridad sobre la estatal.

La actual política de gravación impositiva, por vía de un presupuesto cada vez más elevado y de inversiones estatales alimentadas por el impuesto, es una manera perfecta de hacer estatismo y planificación; aunque la palabra oficial diga expresiones alentadoras que sólo disimulan una realidad absolutamente distinta a los enunciados del gobierno.

El régimen impositivo debe ser un cuerpo técnico, científico, armónico, para servir al país y a su economía.

Formulados estos enunciados, debo referirme a grandes rasgos a las modificaciones traídas al recinto por el dictamen de la mayoría de la comisión.

Antes quiero referirme a la política crediticia, que pretende también orientar y dirigir la economía, que ha creado el tremendo gravamen que representa la usura, que debe reemplazar la insuficiencia del crédito ante los requerimientos financieros de la actividad privada. Ese es otro impuesto disimulado que trastorna moralmente al país al promover la intervención de las sociedades financieras que invitan e incitan públicamente, por avisos que aparecen en los diarios, a los usureros desaprensivos y antisociales. Todo esto encarece los consumos y es un nuevo impuesto característicamente antipopular.

El país soporta el impuesto de la usura, y esto es consecuencia de una fracasada política crediticia, planificadora y estatista que, como se aplica directamente basándose en la irrigación que el préstamo provoca directa, sustancial e inmediatamente sobre la fluidez de los negocios, salta sobre las palabras y los discursos que sostienen la libertad económica y cantan la libre iniciativa.

Si hubiera existido libertad en cuanto al interés de los préstamos bancarios, los bancos hubieran podido mantener abundantes depósitos en las cajas de ahorro o en las cuentas a plazo fijo, alentando e interesando a los ahorristas con intereses remunerativos. La limitación del interés de los préstamos no permitió elevar los intereses a los depositantes, y éstos ubicaron así su dinero en las usuras inmorales de las llamadas sociedades financieras.

Por otra parte, los bancos no prestan para los llamados consumos, para la compra de automóviles, mercaderías, radios, ropas o gastos de enfermedad, y todo el público consumidor compra mercadería recurriendo a las financiaciones de las llamadas sociedades financieras.

Y así ocurre que el público que los usa, porque nadie puede impedir el crecimiento de las necesidades — ¡desgraciado el hombre o el pueblo que no las aumenta y que no las defiende! —, soporta este impuesto clandestino, el tremendo impuesto de la usura, que es el producto de la fracasada política crediticia y de desaliento de los consumos populares. Aquí se necesita capital en giro, y lo que se consigue es atraer capitales con privilegios especiales, porque aquí vienen capitales protegidos para hacer negocios sin correr los riesgos propios de las empresas.

Este sistema de privilegios a las inversiones es también encarecimiento, y es al final el impuesto que se paga por la falta de confianza, confianza que es el atractivo verdadero del capital que tradicionalmente sirvió al país.

Advierto que he incurrido sobre temas colaterales, pero es necesario tener un concepto claro de todo cuanto con un nombre u otro se convierte en gravamen, llámese o no impuesto, pero que paga el pueblo y que gravita en definitiva sobre la economía familiar, de la empresa o del país.

Hay, desde luego, otros impuestos ocultos, disimulados: el costo de los transportes; la inefi-

cacia y la demora característica que deterioran la economía y que encarecen la producción, como lo hacen también las huelgas, que paralizan la actividad creadora y encarecen las mercaderías al provocar su carestía. Ahí están también las cargas sociales de las indemnizaciones por despido y los aportes de obreros y patronos a las cajas de previsión social.

Todo esto debe soportarlo el país de acuerdo con las estructuras económicas, la mentalidad popular deformada sustancialmente por la dictadura y las condiciones sociales que deben mejorarse, pero sobre la base del esfuerzo, porque la Argentina sobrellevará todo esto y todavía más si trabaja con afán, produciendo más y mejor, para atacar la inflación, que es el más grave, el más oneroso, el más deprimente, el más pernicioso de los impuestos.

Para el gobierno, la única manera de contener el impuesto inflación, que no figura en las leyes impositivas, pero que se produce cuando la rama que gasta del gobierno deja atrás a la rama que produce los impuestos, es vivir dentro del margen de sus ingresos.

Hay dos maneras para conseguirlo: elevando los impuestos para hacer frente a los gastos, como ha ocurrido hasta ahora, cuando el Poder Ejecutivo proyectó el presupuesto de 1962 y esta ley que debe nutrirlo, o disminuyendo los gastos para igualarlos con las entradas, llegando en último análisis a la desgravación impositiva para alentar la actividad privada, como lo enuncia la política de racionalización administrativa que sostiene el Poder Ejecutivo — oíga-se bien — a dos meses de la sanción de su ley de presupuesto y en este mismo instante en que votamos su ley de mayor gravación impositiva.

Voy a entrar brevemente al análisis en particular del proyecto, lo que haré con gran brevedad, en razón de que el miembro informante de la comisión lo ha hecho con un gran sentido de la responsabilidad y con una extensión muy adecuada a las cuestiones en debate.

En materia de procedimientos para la aplicación de impuestos, nadie puede negar su apoyo a medidas tendientes a impedir la evasión tributaria y a la adecuada fiscalización que corresponde realizar sobre los contribuyentes. Resultan también atendibles algunas facultades concedidas a la autoridad de aplicación, que puede redimir la obligación de recargos cuando medien circunstancias excepcionales y con carácter general. Ahí están las reformas a los artículos 8, 14, 23, 24, 26, 28, 33, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 62, 73, 74, 91, 99, 100, 110, 122, 123, 136 y 165.

Es también adecuada la sustitución de los recargos del artículo 42 por las más racionales disposiciones que lo unifican en el tres por ciento de interés mensual y la actualización de multas al valor de la moneda de hoy, así como las estipulaciones que permiten una mayor defensa del contribuyente, y cuando se re-

conocen medios adecuados de citación, notificación o intimidación.

El Poder Ejecutivo mantiene el artículo 45, que determina las sanciones a los que realicen maniobras que tengan por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial de los tributos. Eso comprende también a los agentes de retención que mantengan en su poder impuestos retenidos.

Se agrega una disposición que dice que en los casos de multas firmes la dirección dispondrá la publicación del nombre, domicilio y actividad del infractor y del importe de la sanción impuesta. Esta sanción, para los que ya han recibido la de multa, parece exagerada, aparte de que hay dos sanciones: la multa y la publicidad.

La comisión ha suprimido con buen criterio la disposición del artículo 109 que establecía un embargo preventivo sobre bienes y derechos del contribuyente.

Es de observar que mientras se aumentan los recargos del cincuenta al ciento por ciento, cuando ellos sean manifiestamente improcedentes se aumentan los plazos de quince a treinta días para interponer recursos, lo que indicaría dureza cuando se trata de recargos y lenidad cuando se trata del tiempo. Es una actitud eminentemente fiscal. ¡La plata para el fisco y el tiempo para el contribuyente!

Las modificaciones a la ley de réditos se refieren al artículo 19, inciso 9, estableciendo que no están sujetas al gravamen las utilidades provenientes de la venta de semillas de categoría original obtenidas por criaderos fiscalizados por la autoridad nacional competente mediante la aplicación de principios de genética vegetal. Es decir que hace extensivas a todas las clases de semillas los beneficios que comprendían sólo a las oleaginosas, a las forrajeras y al arroz.

Se agrega al inciso l) del artículo 62, como segundo párrafo, en materia de deducciones, el siguiente: «Si se tratare de asesoramiento de carácter exclusivamente técnico-industrial prestado a las exportaciones mineras, empresas de transporte, astilleros navales e industrias manufactureras o de transformación, se presumirá que el 50 por ciento de las sumas abonadas por tal concepto cubre gastos o costos del beneficiario del exterior, debiéndose practicar la retención sobre el excedente. En ningún caso el monto a considerar como costo o gasto podrá exceder de los límites que al efecto fije la reglamentación.»

Se agrega también al artículo 62, como inciso p), el siguiente: «La contribución dispuesta por la ley 14.155 sobre creación del Instituto Nacional de Carnes. Hay una supresión de una palabra en el artículo 76, y se agrega a la nómina que establece dicho artículo lo siguiente: «y los vocales del Tribunal de Cuentas de la Nación».

Las disposiciones modificatorias del mal llamado impuesto a las ganancias eventuales, por-

que no se trata de ganancias en manera económica, sino de una simple consecuencia del crecimiento aparente de valores provocado por la limitación del valor adquisitivo del dinero, no son aconsejadas por la comisión, y en lugar de suprimir el impuesto antieconómico lo deja vigente con el alcance que ahora tiene.

Esta hubiera sido la oportunidad de terminar con tal aberración, pero aquí juega el concepto fiscal. Es un ingreso que conviene y es necesario para cubrir recursos previstos; así va la carga antieconómica como un premio al Estado, que ha deteriorado el valor del dinero y ha hecho así la elevación del valor de inmuebles y de otros bienes en relación con la caída de la moneda, que debió resguardar. Esta es una consecuencia de la inflación, que produce recursos a su principal culpable.

Los impuestos a los beneficios extraordinarios se modifican en su artículo 49, incisos a) y b), y se deroga el último párrafo del inciso c), así como el artículo 89.

El impuesto a las ventas se modifica agregando un inciso f) al artículo 89 y eximiendo de impuesto a las ventas de máquinas agrícolas. Pregunto si la disposición comprende a los tractores, que es la gran máquina agrícola del campo argentino. Si se hiciera una política verdadera en favor de la tecnificación y mecanización del campo, debieran suprimirse todos los impuestos de importación de accesorios y de todo elemento para el armado de tractores, o llegar fundamentalmente a la liberación absoluta de todo impuesto a la importación de tractores que se fabriquen en el exterior, porque con ello se abaratarían y se posibilitaría su adquisición, con la consiguiente mejora en las condiciones de vida del obrero del campo y la intensificación de las áreas sembradas, que daría, a su vez, mayores posibilidades de exportación de productos agrícola-ganaderos, que, como se ha dicho, constituyen el 90 por ciento de las exportaciones. Sería, pues, una posibilidad de crear divisas que equilibren la balanza comercial, cuyo déficit llega a la cifra nunca igualada de 450 millones de dólares.

Todo esto debería ser un capítulo aparte, y aspecto fundamental cuando se discute el sistema impositivo. De otra manera, sólo será un grito en el vacío, una expresión solitaria frente a la política suicida que el gobierno sigue en materia de industrialización de automotores en general y de tractores en especial.

Al tratar las reformas sobre impuestos internos, se sustituye el artículo 31, que prevé un impuesto sobre cigarrillos y cigarrillos de fabricación nacional, estableciendo que no podrá exceder del 30 por ciento del precio de fabricante o importador, y se dejan sin efecto los artículos 32, 33 y 34, así como se sustituye el artículo 107 del texto ordenado en 1956, estableciendo un impuesto del 10 por ciento sobre hilados de seda

natural y del 15 por ciento a los tejidos que tengan una fijación del 40 por ciento o más.

Dejo intencionalmente varias proposiciones, que las reservo para formularlas en la discusión en particular, pero no puedo dejar de mencionar una modificación muy importante referida a la ley 14.390, de unificación y distribución de impuestos internos.

Las modificaciones relacionadas con los contratos de seguro y reaseguro entrarán en vigor dentro del régimen de la ley 14.390 a partir del momento en que todas las provincias adhieran a la modificación, derogando los impuestos locales de sellos sobre todas las operaciones de seguros y reaseguros, y obligándose a no establecerlos en lo sucesivo. En la misma oportunidad quedará derogado el impuesto de sellos nacional sobre dichas operaciones, con el mismo alcance.

Es decir que se sigue con el sistema de adhesiones al sistema impositivo que dicta la Nación, y se continúa con la distribución que realiza el Estado nacional de impuestos característicamente locales. Los señores diputados advertirán que ni aun las razones de comodidad y economía de la percepción evitarán el rozamiento legal y los poderes que adquiere el Estado nacional en sus relaciones de colector y distribuidor de impuestos de y a las provincias.

Hace muchos años, tantos que eran los primeros de mi acción legislativa provincial, tratábamos una ley impositiva, oportunidad en que me tocó hacer la defensa de los derechos provinciales. En aquel momento fui interrumpido diciéndose que ése era el canto del cisne del federalismo, porque el cisne canta antes de morir. Sigo creyendo que las luchas que el país padeció y las tareas organizativas de aquellos tiempos heroicos hacen necesario repetir siempre, en toda oportunidad, la defensa de las instituciones básicas. Tal es el sentido de mis palabras: las de ayer y las de ahora.

El impuesto de sellos trae innovaciones importantes. Deroga disposiciones anacrónicas, coloniales, y una muy larga enumeración de deberes y obligaciones, tan molestos para el público como antieconómicos para el fisco, a tal punto que no se explica cómo no se advirtieron sus graves inconvenientes, su irracionalidad e improductividad muchos antes de ahora.

Pero, como no se puede abundar en el elogio, aparece la sustitución del artículo 26, que lleva al doble, del 15 por ciento al 30 por ciento, las escrituras públicas de transferencias. Ese aumento se eleva del 30 por ciento al 150 por ciento en la modificación del artículo 30, y cuando llegamos al artículo 31 resulta que se aumentan del 4 por ciento al 6 por ciento sobre la valuación fiscal los títulos informativos de propiedad.

Se derogan los artículos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68, que establecen impuestos, entre otros, sobre giros, fojas de instrumentos, fojas de protocolos,

peticiones al Congreso, Curia Eclesiástica, Poder Ejecutivo, legalizaciones, reconsideraciones del Poder Ejecutivo sobre navegación, apertura y cierre de registro de buques, guías, etcétera.

Los artículos 69 y siguientes tienen disposiciones sobre sellado en el trámite judicial, y se derogan los artículos 72 al 79.

No sé cuál es la opinión de los colegios o asociaciones de abogados y procuradores, y de la Corte Suprema nacional, sobre esta materia, que pareciera facilitar el trámite y evitar inconvenientes de tipo burocrático y también fiscal.

El Poder Ejecutivo y la comisión coinciden en que el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes se prorrogue por el término de diez años, con algunas modificaciones, y, desde luego, usando el término preciso: con carácter transitorio y permanentes, y a fin de resguardar los reparos constitucionales que emergen del inciso 29 del artículo 67 de la Constitución Nacional, que autoriza al Congreso a imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan.

Pero el asunto no se limita a las sociedades de capital, sino que se produce un nuevo avance sobre el impuesto a la herencia que corresponde a las provincias, porque ése es el juego de la Constitución.

Ahora, el impuesto nacional que sustituye al impuesto legal y tradicionalmente provincial se extiende, avanza y comprende a las empresas unipersonales y a las sociedades de personas que revistan tal carácter, a los efectos del impuesto a los réditos, matriculados como comerciantes en las condiciones establecidas por el Código de Comercio.

Yo no deseo entrar a esta altura del debate a las normas sobre deducciones, porque quiero destacar sustancialmente el fondo de esta cuestión del impuesto sustitutivo.

La sustitución del artículo 99 determina las obligaciones de las provincias, y así dice: «Las provincias que adhieran al régimen de este título se obligan a: 1º Derogar los gravámenes locales, cualquiera sea su característica y denominación, que incidan directamente sobre la materia imponible a que se refiere este título, con prohibición de implantarlos en lo sucesivo.

»2º Modificar el régimen de los impuestos locales a la transmisión gratuita de bienes, a efectos de excluir la materia imponible a que se refiere este título en la determinación del haber sucesorio.»

Además se sustituye el artículo 12 por el siguiente: «Las personas físicas, por la parte de sus patrimonios no sujeta al régimen del título I, podrán optar por abonar un impuesto anual, en sustitución del impuesto local a la transmisión gratuita de bienes por causa de muerte establecido por la ley 11.287, en las condiciones

que se determinan en los artículos siguientes de este título.»

La comisión ha procurado solucionar esta cuestión al establecer en su dictamen: «El gravamen que se crea por este artículo, en cuanto alcanza a las empresas unipersonales y sociedades de personas, se aplicará exclusivamente en la Capital Federal y en las provincias que adhieran a esta reforma. En caso de adhesión parcial, deberán excluirse en la determinación del capital los bienes radicados económicamente en las provincias no adheridas, en la forma que determinará la reglamentación.» Es decir que el artículo reconoce el derecho de las provincias en cuanto sus disposiciones se aplicarán sólo en las que adhieran a esta reforma.

De todas maneras, el camino indicado es que las provincias modernicen su legislación sobre impuestos a la transmisión gratuita de bienes y que eviten los graves inconvenientes que provoca el pago del impuesto a la herencia, deteriorando el capital en forma sustancial, al asumir una obligación que debe cumplirse sin contar con recursos o previsiones adecuados.

El sistema conveniente es el que establece la ley que discutimos, pero realizado por las provincias sin declinar los derechos que la Constitución les acuerda.

El 1º de mayo de 1958 el señor presidente de la República dijo algunos conceptos sobre la situación del país, y yo debo recordarlos porque lo he prometido al iniciar esta exposición y debo hacerlo ya casi al final de mis palabras.

«El proceso inflacionario que se desarrolla desde las postrimerías de la última guerra no sólo no ha podido ser contenido sino que se encuentra notablemente agravado en la actualidad. Su primera consecuencia ha sido la elevación de los precios internos. En 1956 el costo de la vida aumentó en 13 por ciento, y en 1957 ese incremento fue del 25 por ciento. La experiencia ha demostrado una vez más que para detener el alza del costo de la vida es indispensable desarrollar una política económica y social tendiente a crear más riqueza y a distribuirla con arreglo a normas de equidad.

»No es reduciendo el consumo sino aumentando la producción como habremos de lograr el equilibrio y obtener una moneda de valor relativamente estable.

»El ahorro nacional deberá ser encauzado hacia la inversión productiva, evitando su transferencia al exterior o su aplicación a finalidades especulativas. El Estado adoptará todas las medidas que sean necesarias para que el Mercado de Valores vuelva a ser una importante fuente de recursos financieros para la expansión de las empresas nacionales.»

Y en un párrafo final decía: «La política fiscal, monetaria, crediticia y cambiaria deberá servir de estímulo a la producción útil a la colectividad, alentando a quien crea riqueza y desalentando al especulador y al ocioso que participa de aquélla sin contribuir a su forma-

ción. El actual desenvolvimiento de la economía argentina está indicando que esos objetivos no han sido todavía alcanzados, puesto que el préstamo a interés, la inversión inmobiliaria o la especulación proporcionan a sus titulares beneficios superiores a los que obtiene quien arriesga su capital y afecta su trabajo personal a la creación de bienes. Habrá que revisar el sistema impositivo argentino para que pueda desempeñar su función de promoción económica y de equilibrio social. Será necesario también proporcionar al productor los recursos crediticios que lo liberen de la sangría permanente de la usura, que desalienta la actividad creadora, ahuyenta la inversión, limita la producción y se traduce en una elevación artificial de costos y precios, con la consiguiente repercusión en los hogares humildes del país.»

Me veo en el deber de contestar a todo eso que la incidencia del gasto público es enorme en nuestro país. Ello es determinante de la inflación, ello impide el suficiente crecimiento de la riqueza, ello conduce a la limitación de los consumos y atenta contra la productividad.

La política fiscal no ha estimulado la economía y tampoco lo ha hecho la política cambiaria, crediticia y monetaria. La especulación reductiva más y atrae en mayor medida que las nobles inversiones de la producción.

El productor ha carecido del volumen suficiente de créditos, y nunca como ahora la usura es una industria confesada públicamente y de volúmenes siderales.

Se comprenderá que a través de estas últimas palabras entiendo que, a pesar de esos enunciados, el país no realizó una política consecuente. Así ocurre que en 1958 se gastaron 63 mil millones de pesos; en 1959, 107 mil; en 1960, 122 mil; en 1961, 174 mil; y para 1962 se prevé por sobre los 190 mil millones de pesos.

Así ocurre que las provincias han gastado en 1958, 18.700 millones de pesos; en 1959, 34 mil millones; en 1960, 54.900 millones; en 1961, 77.800 millones; y para 1962, se prevén 95 mil millones de pesos, cifra que será superada tan ampliamente como no cabe en la imaginación si se calcula que solamente Buenos Aires soportará 47 mil millones.

Si a las cifras que acabo de citar se agregan los presupuestos de Córdoba de 6 mil millones de pesos, y de Santa Fe, de 9 mil millones, estas provincias, junto con la de Buenos Aires, casi llegan a un gasto público provincial que supera los 62 mil millones de pesos.

Yo sé que estoy repitiendo conceptos de mi exposición al tratarse la ley de presupuesto, pero no puedo dejar de hacerlo para referirme a esta situación desconcertante que crean las llamadas medidas de racionalización administrativa que tocan sustancialmente al régimen de despidos, a la transferencia de escuelas primarias a las provincias, a la transferencia de funciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a la transferencia de servicios de Obras

Sanitarias de la Nación a las provincias; a la transferencia a la actividad privada de obras de dragado, regularización de riberas y construcciones portuarias; autorización a los acreedores de empresas ferroviarias a pagar compras de inmuebles mediante compensación de créditos; creación del Consejo Coordinador de las Obras Arquitectónicas y disolución de la Dirección Nacional de Arquitectura; prohibición absoluta de designar nuevos agentes, dejándose sin efectos las excepciones acordadas; supresión de la Dirección Nacional del Servicio de Empleo; dotación básica de todos los organismos civiles de la administración; creación de un sistema de iniciativas recompensadas, dirigidas a lograr la supresión de gastos y obtener mejoras en los servicios; normas de procedimiento y de concepto para el manejo de los créditos destinados a propaganda y publicidad; delegación en organismos del Estado de la ejecución y administración de la venta de inmuebles; sistema de venta de automotores; reestructuración de la Dirección Nacional de Bosques y venta de inmuebles de su pertenencia; transferencia a las provincias de tareas y funciones que actualmente se encuentran a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad y que puedan ser cumplidas por los organismos viales de aquéllas; supresión de todos los cuerpos médicos y organismos similares de todas las cajas nacionales de previsión, previa transferencia de sus elementos a la Dirección de Medicina Social; preparación del manual de organización del gobierno nacional; consulta previa a los servicios de organización y métodos en el equipamiento para la adquisición de inmuebles para oficinas, muebles, equipos, etcétera.

Esta nueva política expresa, como se reconoce especialmente, que el gobierno está en deuda en materia de ordenamiento y racionalización de los gastos públicos. En efecto, nos dice el señor presidente de la República: «de 1.012.053 agentes que tenía la Administración Nacional cuando asumimos el gobierno el 1º de mayo de 1958, resultarán eliminados más de 500.000 agentes, lo cual significará: 1º una economía en sueldos del orden de los cinco mil millones de pesos mensuales; 2º una economía de gastos indirectos (gastos de oficina) que ascenderá a unos 800 millones de pesos anuales; 3º una economía en edificios públicos que representará una liberación de inmuebles del orden de los 20 mil millones de pesos».

Se dan gruesas cifras. Sólo la reducción burocrática significará 60.000 millones de pesos en sueldos anuales, una economía de gastos indirectos de 800 millones, y una economía en edificios públicos de 20.000 millones de pesos. Estas cifras son demasiado importantes y el sistema, lo presumo, no dará los resultados previstos. Sin embargo, debe realizarse una política de desgravación impositiva sobre la base de estos enunciados del Poder Ejecutivo. De

manera que este proyecto, como he dicho, deberá volver al Poder Ejecutivo para que sea adecuado a los nuevos gastos en cuanto sean reducidos, según resulta de las palabras presidenciales.

Esta ley impositiva, por el contrario, es un imperativo de las erogaciones del presupuesto de 1962. Las medidas que ha fijado el Poder Ejecutivo aliviarían los gastos y permitirían la desgravación. Es necesario, en esas condiciones, encarar el problema que afecta a las rentas del trabajo personal afectadas originariamente en un tres por ciento frente al cinco por ciento con que se gravaban las rentas del capital. Diez años después se gravaron ambas rentas en un cinco por ciento, elevándose luego la cuota básica al nueve por ciento.

Quisiera recordar ahora —aunque nuñera querido leerlos— los argumentos finales del proyecto del señor presidente del bloque de la mayoría, doctor Gómez Machado, quien tantas veces ha orientado a su bloque y que debiera hacerlo ahora inclinando su voto en favor del proyecto modificatorio del impuesto a los réditos.

La Cámara habrá observado que me he manejado con las palabras del señor presidente de la República y del señor presidente del bloque de la mayoría, en el deseo de llamar la atención de los señores diputados, con esas palabras y con esa posición, sobre la importancia que tiene el voto que vamos a dar en esta sesión sobre la liberación impositiva del trabajo personal.

Para terminar, voy a traer muy concretamente la mención de algunas iniciativas de mi sector en esta materia, porque siempre la crítica se acredita demostrando capacidad e intención constructiva. En primer lugar mencionaré el proyecto sobre liberación de derechos de aduana y de recargos sobre introducción de libros, aparatos e instrumentos de trabajo para el desarrollo educativo científico o cultural de los ciegos.

También propiciamos la inclusión de la agricultura dentro de la 4ª categoría, junto con las actividades del pequeño comerciante y del pequeño industrial, ubicando a los agricultores dentro de las disposiciones liberadoras del inciso g), del artículo 60, de la ley de impuesto a los réditos, y proyectamos que el impuesto sobre sueldos y jornales se imputará a cada uno de los ejercicios en que deberán ser abonados por el empleador aun cuando se perciban acumulados en otros ejercicios.

Propiciamos luego la modificación del decreto 11.675/60 que autoriza la deducción de las sumas que se invierten en la construcción de viviendas, cualquiera fuere su número, eliminando el privilegio que sólo alcanza a los que edifiquen no menos de diez, para uso del personal y de sus familias.

Nos ocupamos en proyectos de declaración sobre la situación de los créditos para promover

la actividad vitivinícola, y en otro sobre la política crediticia que deforma la economía e impide la expansión tradicional, y presentamos un proyecto —el más importante— que crea el banco de consumos y que llamamos el banco familiar porque está destinado a la familia argentina, para cubrir sus necesidades y los apremios de la vida, atacando los males de lo que he llamado los impuestos clandestinos, que no nacen de la ley pero que son consecuencia de la política crediticia y de la de desaliento de los consumos populares.

Hemos planteado que toda exención impositiva sobre importación que se establezca en favor de la Nación o de alguna provincia, deberá extenderse a todas las demás para salvar el concepto de igualdad, cuando medien igualdad de condiciones y circunstancias defendiendo el derecho de las provincias, de todas, sin ninguna excepción.

Hemos expresado nuestra preocupación frente a un tema candente y que se vincula con las crecientes dificultades de la Tesorería, al propiciar que las jubilaciones y pensiones se abonen al mismo nivel que los sueldos de la administración, sin que puedan pagarse los sueldos del mes siguiente sin el cumplimiento total de las erogaciones jubilatorias.

Y, de acuerdo con la situación de los contribuyentes y del erario, propiciamos una ley de facilidades de pago de contribuciones, exonerando de multas y sanciones por falta de inscripción, denuncia o mora en el pago o falta de cumplimiento oportuno de las leyes impositivas con el agregado que esta ley no alcanzaría a actos de contrabando o de defraudación a las rentas del Estado.

He pretendido fijar la posición general y he incursionado en buena parte del articulado del proyecto enunciando rápidamente la tarea constructiva a través de numerosos proyectos.

Debo reconocer que la comisión ha realizado un verdadero esfuerzo mejorando varias de las cuestiones que habían provocado mayores observaciones; pero, de todas maneras, no se ha llegado a una coincidencia total. Lo realmente importante es que las reformas son insuficientes. En realidad, se dirigen a una mejor percepción de los impuestos, a evitar evasiones, a sancionar las infracciones, y tiene aspectos satisfactorios en cuanto a la eliminación de impuestos difíciles de cumplimentar, de controlar y, en definitiva, molestos y antieconómicos.

Lo fundamental es que esta ley grava la producción del trabajo argentino y que con ella se harán ingresar a las arcas fiscales más de 4.000 millones de pesos que necesita la actividad privada para su desarrollo auténtico y progresista.

Con el planteamiento que formulo exhorto a mis distinguidos colegas a que asumamos toda la responsabilidad, acentuándola de ser posible al tratarse los artículos que tienden a llevar

ingentes sumas en beneficio del erario nacional, porque ello ocurre en detrimento de la actividad privada, tan necesitada de recursos financieros.

En definitiva, el país sigue esperando la reforma sustancial, aquella que libere el trabajo personal, aliente la producción y favorezca las posibilidades del ahorro del pueblo y la capitalización del país en todos sus sectores.

Mientras la reforma no llega se darán solamente soluciones de tipo fiscal que procuran recursos, cada vez más recursos, para saciar el crecimiento alarmante de los gastos públicos. Y la pregunta surge tajante y acusadora: ¿hasta cuándo el interés fiscal será más importante que la situación económica y social del país? (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (López Serrot). — Tiene la palabra el señor diputado Ferreira.

Sr. Ferreira. — Señor presidente: voy a fundar las observaciones que por escrito he presentado a la Honorable Cámara en relación al orden del día 1.108½. Pero antes, y muy brevemente, quiero recoger algunas alusiones que se han hecho sobre los planes económicos y financieros del gobierno por parte de los señores diputados de la primera y segunda minoría. Y lo hago porque tengo la responsabilidad como legislador de la Nación de haber defendido en este recinto y fuera de él esos planes, y, en consecuencia, no podría dejar pasar en silencio, aunque más no sea con acotaciones muy breves, algunas afirmaciones que conceptúo equivocadas, formuladas en el recinto sobre este tema.

Se ha dicho que los planes económico-financieros del gobierno se orientan exclusivamente a resolver el problema financiero y no el económico.

Yo quiero decir que el programa gubernativo es un conjunto armónico de medidas, porque mal podríamos sustentar una política de desarrollo económico si paralelamente no sostuviéramos una política de estabilización financiera. Sería lo mismo, si descuidáramos este último aspecto, como entrar a construir un edificio sin los cimientos sólidos y necesarios que le den la debida sustentación. De allí que las dos proyecciones, las dos metas de esta política, el desarrollo y la estabilización, sean inseparables, porque nuestro propósito indeclinable es construir la grandeza del país sobre la base de una moneda sana, no de un signo monetario totalmente depreciado, con menguado poder adquisitivo. En suma, sostengo que los objetivos conforman una sola meta: desarrollo económico del país sustentado en una necesaria estabilización que lo preserve, lo fortifique y le sirva de punto de apoyo para su crecimiento progresivo.

Se ha traído, y mal, el ejemplo del Japón. Precisamente, no se puede invocar el caso del Japón para compararlo con el argentino, porque Japón desarrolló sus programas de estabilidad y desarrollo haciendo recaer exclusivamente

todo el peso, el tremendo cargo de la reconstrucción de la guerra sobre las espaldas de su pueblo. En cambio, nosotros hemos dicho que, si bien hacemos gravitar fundamentalmente el plan en el esfuerzo nacional, no queremos hacerlo tan penoso, y de allí que recurramos también a la asistencia financiera lograda de fuentes del ahorro extranjero para hacer más llevadero el esfuerzo de la expansión y de la estabilidad en que estamos empeñados. No hay, en consecuencia, enfoques unilaterales.

Quiero decir, también, respondiendo al señor miembro informante de la primera minoría, que cuando en Punta del Este, en la última reunión del CIES, en 1961, se habló de la necesidad de la reforma de los regímenes impositivos de las naciones americanas, se hacía atendiendo a que en algunas de ellas el sistema impositivo está asentado sobre bases que traducen evidentes privilegios, ya que tan sólo cincuenta familias concentran la mayor parte de la riqueza y son las que menos tributan impuestos. En cambio, el resto de la carga impositiva recaía sobre la parte menos pudiente de la población de esos países. De allí que como tesis general en la conferencia del CIES, en Montevideo, se sostuvo que ningún país podía pretender asistencia financiera —auxilio que saliera de las fuentes de ahorro de otro país— sin paralelamente hacer un esfuerzo importante para contribuir a su desarrollo y a la lucha contra el atraso, aportando sustancialmente recursos de su fuente nacional.

Esa es una de las ideas que orienta a la Alianza para el Progreso y que privó en la conferencia del CIES realizada el año anterior en la capital uruguaya.

No hay miseria en el país, como ha dicho el señor diputado Marini, quien refiere que al salir de los lindes de la Capital Federal encontró en Formosa atraso y miseria.

No quiero hacer un debate de este tema, bastante tangencial al que considera la Cámara, pero deseo formular unas preguntas: Si hay miseria en Formosa, ¿cómo es que el pueblo, en su mayoría, apoyó a la Unión Cívica Radical Intransigente y la hizo triunfar? ¿Acaso ese pueblo, que votó mayoritariamente a nuestro partido y a nuestro gobierno, estaba votando para seguir sumido en la miseria, estaba votando por estabilizarse en esa miseria que acaba de denunciar el señor diputado Marini que existe en Formosa? No, señor presidente.

Sr. Hernández Ramírez. — Ejemplos de miseria hay en todo el país.

Sr. Ferreira. — De ahí que el gobierno de la UCRI de esa provincia y nuestro partido recibieron el apoyo auspiciosamente mayoritario de la ciudadanía de Formosa, no ya para vencer a otras agrupaciones políticas, sino a coaliciones opositoras de otros partidos, y a todos los superó en una justa electoral limpia que reconoce todo el país.

Sr. Hernández Ramírez. —Y con la presión de las fuerzas al servicio del oficialismo.

Sr. Ferreira. — Esas son las excusas de los malos perdedores. El triunfo de la UCRI en Formosa es la respuesta de un pueblo que si bien en algunos de sus sectores puede haber padecido y soporta niveles de atraso, no lo atribuye a la gestión de nuestro gobierno, sino que, por el contrario, ve en esa gestión gubernativa la tabla de salvación, el rumbo cierto y la meta segura para liberarse precisamente de ese estado de insuficiente desarrollo.

Sr. Suárez. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Ferreira. — Sí, señor diputado.

Sr. Suárez. — Al señor diputado por Entre Ríos, que está haciendo una incursión en el tema político...

Sr. Ferreira. — El señor diputado Marini hizo una larga exposición, en la que también incurrió en el campo político.

Sr. Suárez. — ... le quiero manifestar que ésta no es una opinión exclusiva de nuestro partido. Un importante diario del país expresó en un editorial que el ejemplo de Formosa es alarmante por el hecho de haberse entronizado un sistema de corrupción electoral y de venalidad con respecto al electorado.

Sin hacer responsable, desde luego, al gobierno provincial de la Unión Cívica Radical Intransigente de que existan reducciones de indios, puedo afirmar que basta con pasar por esas reducciones —como sin duda lo habrá hecho el señor diputado— para advertir que existe allí un estado económico deplorable.

Por otra parte, son ampliamente conocidas las denuncias que sobre estas elecciones ha hecho la prensa independiente. Hace pocos días un importante diario de la Capital señalaba que sorpresivamente las balsas que cruzan el río que une a Formosa con la provincia de Corrientes se veían llenas de automotores sin patente que habían sido ocupados en esa justa electoral que tanto enorgullece al señor diputado.

Sr. Ferreira. — No voy a involucrar en este debate el problema político. Voy a ceñirme específicamente al tema en discusión. Simplemente he recogido alguna alusión del señor miembro informante de la primera minoría, alusión que yo replico porque no puedo dejar pasar en silencio, advirtiendo la forma en que el pueblo de Formosa ha dado su respuesta elocuente e intergiversable, a todo cuanto la oposición ha aseverado. Ahora, después de conocido el resultado adverso, la oposición ensaya la excusa de la presión y de supuestos fraudes en comicios custodiados por la Gendarmería Nacional.

También quiero aludir de paso a algunas expresiones del señor representante de los partidos de Centro, diputado Aguinaga, quien ha resumido sus críticas a esta iniciativa para reformar el régimen impositivo expresando que la misma dará por resultado la incrementación

de gravámenes a la producción y al trabajo argentinos.

Es cierto que por este proyecto se elevan algunos gravámenes, aunque otros desaparecen o se reducen. Pero quiero señalar que el dictamen —que yo no comparto en este aspecto— recoge precisamente una iniciativa del señor diputado Aguinaga y otros señores diputados por la que se establece un nuevo impuesto a una fuente genuina del trabajo y de la producción argentinos, cual es las bebidas sin alcohol elaboradas con zumos o jugos de frutas. De tal modo que así como el señor diputado Aguinaga reclama consecuencia en la política del gobierno, yo también tengo derecho a expresar que reclamamos consecuencia en la crítica. Si por un lado se formula la crítica de que este proyecto grava fuentes genuinas del trabajo y de la producción del país, también tenemos que dirigir esa misma crítica a la iniciativa que el señor diputado Aguinaga, juntamente con otros señores diputados de distintos sectores de esta Cámara, ha presentado para gravar una fuente genuina del trabajo y de la producción nacional como es la de los jugos de frutas y las bebidas elaboradas con ellos.

Sr. Aguinaga. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Ferreira. — Sí, señor diputado.

Sr. Aguinaga. — Recojo la observación del señor diputado por Entre Ríos y quiero aclararle que el proyecto que hemos presentado estableciendo una imposición sobre las bebidas no alcohólicas no comprende a las que se producen con los jugos de frutas, como resultará de la reforma que vamos a aceptar cuando se trate en particular el artículo pertinente. Con esto queda fijada la orientación de mi iniciativa.

Sr. Ferreira. — La iniciativa original del señor diputado gravaba expresamente las bebidas alcohólicas provenientes de los jugos y zumos de las frutas. La comisión la ha corregido en la forma que ya vamos a discutir, aunque conservando la intención originaria; pero ahora estamos hablando de la consecuencia o congruencia de la crítica del señor diputado.

Sr. Aguinaga. — El señor diputado me coloca en un pecado venial, pero yo quiero decir que los propios autores del proyecto han ubicado en esos términos la imposición proyectada; pero, ya que se plantea el caso, quiero aclararle al señor diputado que originariamente tuve el propósito de gravar las bebidas no alcohólicas, afectando el producido del impuesto a un fondo nacional para la construcción de viviendas, que considero es el gran problema del país. En esa oportunidad fui visitado por diputados de todos los sectores de la Cámara, que conocían esa posición mía, para que suscribiera el proyecto por el que se gravaban las bebidas sin alcohol. Debo expresar que con el propósito de coincidir con los integrantes de todos los sectores y de todos los partidos, me sedujo la coincidencia y firmé ese

proyecto sin hacer la cuestión fundamental sobre el aspecto que preocupa al señor diputado en cuanto a las bebidas que se elaboran con jugos de frutas.

Podría decir que esas frutas nunca han pagado impuesto ni han contribuido a la formación del tesoro nacional, y yo debo aclarar que pertenezco a una provincia cuya fruta principal, la uva, ha contribuido desde hace muchos años al enriquecimiento de las arcas públicas de la Nación.

Sr. Ferreira. — Ya vamos a hablar de ese problema.

Para cerrar esta incidencia, sólo quiero decir lo siguiente en abono de mis palabras: el inciso a) del artículo 113 del proyecto que suscribe el señor diputado Aguinaga dice «gravando con el 10 por ciento a las bebidas gasificadas y elaboradas a base de jugos y zumos de frutas». Vale decir, que la imputación que yo hacía surge de la lectura de la iniciativa del señor diputado. Pero no hago cuestión sobre este asunto.

Sr. Aguinaga. — He explicado el origen y el sentido de mi voto en ese proyecto.

Sr. Ferreira. — El hecho concreto es el que acabo de exponer, y repito que no hago cuestión sobre este asunto porque, simplemente, como introducción quería responder a algunas apreciaciones que se han vertido por la oposición en este debate.

Cuando se habla de racionalización administrativa creo que nadie podrá desconocer que el actual ha sido el gobierno que en toda la historia administrativa del país ha afrontado con más decisión, con más coraje y más a fondo ese problema y, sobre todo, la reducción del elenco burocrático.

El señor diputado Aguinaga citó palabras del presidente de la República en el sentido de que en sus planes de racionalización pensaba reducir el nivel burocrático que existía cuando asumió el gobierno, en el año 1958, en quinientas mil agentes. Vale decir que aquí no se trata de reducir lo que pudo nuestro gobierno aumentar sobre esos niveles, sino todo lo contrario: reducir el nivel de la ocupación burocrática de la administración nacional a un nivel mucho más bajo del que existía cuando nos hicimos cargo de la responsabilidad de la conducción de los asuntos públicos. Esto no puede ser objeto de crítica y menos usarse como argumento para intentar demostrar una supuesta mora o desidia. Repito, para dejar la réplica, que nunca gobierno alguno ha hecho en este aspecto lo que lleva ya realizado el nuestro.

Entrando al tema específico, quiero referirme a las observaciones que formulo al dictamen producido por la mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Efectivamente, como se dice en el mensaje del Poder Ejecutivo, éstas no son reformas de fondo, sino que simplemente llevan la intención de simplificar la per-

cepción de los gravámenes en algunos casos, lograr los recursos que son necesarios para financiar el presupuesto y, en algunos otros, modificar los mecanismos fiscales para evitar la evasión. Las innovaciones que sí son sustantivas se han introducido en el dictamen por vía de la iniciativa de la mayoría de la comisión, y se traducen en algunos puntos que yo voy a criticar con intención constructiva en el curso de mi exposición.

Tenemos conciencia de que el país debe encarar ya la modernización del aparato fiscal mediante la adopción de técnicas modernas para el manejo, control y organización de los instrumentos impositivos para lograr una mayor percepción y corregir fallas —que evidentemente existen y que las hemos advertido— en la estructura fiscal. Es necesario, incluso, perfeccionar el sistema de recaudación impositiva, porque de esa manera vamos a lograr mayor exactitud, que debemos todos desear, en el cómputo del ingreso nacional, que hoy se ve en alguna manera afectado por la evasión fiscal.

Es urgente también emprender una labor seria en materia de investigación y análisis sobre cuestiones impositivas. Esto debe hacerse no sólo en el ámbito oficial sino también en el ámbito privado, con el objeto de echar bases serias para formular una política impositiva. Queremos, en suma, hacer esta estructuración para lograr un ordenamiento impositivo coherente con el proceso de desarrollo nacional que se está operando en el país, a fin de impulsar ese proceso, fortalecer la capitalización nacional y asegurar un régimen de distribución justo de la riqueza, que es a lo que debe tender en última instancia el sistema impositivo.

Entrando en materia, debo decir que mi sentido esencial con el dictamen de la comisión se puede concretar en cuatro puntos principales. En primer lugar, juzgo inconveniente la reforma que se propone al régimen del tribunal fiscal; en segundo lugar, creo que se debe encarar —ya se ha anunciado por el miembro informante de la comisión que existe una iniciativa en ese sentido en la Secretaría de la Cámara— la elevación de los niveles actuales de la renta no imponible para las cargas de familia; en tercer lugar, estimo que es necesario desgravar en el impuesto a las ventas no sólo a los tractores sino también a los jugos puros naturales y concentrados de frutas cítricas; en cuarto lugar, considero sumamente inconveniente gravar las bebidas gasificadas elaborado en base a jugos o zumos de fruta o sus extractos naturales y los jarabes, extractos o concentrados derivados de frutas.

En cuanto al Tribunal Fiscal, en el artículo 1º del dictamen, numeral 25, se propone un cambio fundamental en el sistema actualmente aplicado para su integración, a los fines de la celebración de las audiencias de vista de la causa y los acuerdos para dictar sentencia. Cuando el señor miembro informante dijo que

esta innovación contenida en el dictamen obedecía al deseo de llenar una laguna u omisión de la ley, yo lo interrumpí, porque entiendo que esta iniciativa no va dirigida a corregir ninguna omisión del texto legal. Precisamente, como miembro informante de la ley 15.265, que instituyó el Tribunal Fiscal, puedo afirmar con cabal conocimiento que se estructuró el funcionamiento de este organismo y las facultades que se le daban al presidente intencionalmente como están reflejadas en la ley. No había allí ninguna omisión; no se dejó ni para la reglamentación una serie de atribuciones que expresamente se le dieron al presidente del Tribunal Fiscal por las razones que en aquel momento expresé.

De acuerdo con lo prescrito en la ley 15.265, por la que se creó el Tribunal Fiscal —hoy ordenadas sus disposiciones en el texto de la ley 11.683, de procedimiento para la aplicación y percepción de impuestos— el presidente del tribunal es el que designa, de conformidad con el reglamento de procedimiento, los miembros que integran el cuerpo para celebrar las audiencias de vista de la causa o los acuerdos para dictar sentencia. Ahora, en el dictamen de la comisión —lo que no figuraba en el proyecto primitivo del Poder Ejecutivo— se aconseja suprimir esa facultad y, en cambio, se propicia que la designación de los vocales para integrar ese cuerpo se haga por sorteo. No se trata en el caso de una enmienda insustancial, como puede parecer de un análisis superficial del problema. La modificación —lo afirmo— importa un cambio fundamental del sistema actualmente aplicado y rompe en buena medida la estructuración armónica que se ha dado al tribunal. ¿Por qué hago esta afirmación, señor presidente?

Diré, en primer lugar, que al crearse el Tribunal Fiscal se puso en un plano de igualdad a la Dirección General Impositiva, como gestora del interés fiscal del Estado en este caso, y a los contribuyentes, como titulares de derechos consagrados en la Constitución Nacional y las leyes que en su consecuencia se dictaren.

Fue nuestro propósito, y así lo expuse en la discusión de esta ley, hacer desaparecer esa aberración jurídica que consistía en mantener un sistema en el que los funcionarios fueran quienes decidieran en materia tributaria y a la vez quienes juzgaran sus propios actos cuando éstos resultaran cuestionados. A tal fin se estableció un organismo administrativo con funciones jurisdiccionales, dotado de atributos de independencia funcional tendientes a ejercer no sólo el control de legalidad de las decisiones de la administración fiscal activa, sino también el examen de los aspectos del proceso, incluso de los de hecho, y los poderes de decisión directa, sin mediar resolución de primera instancia en caso de resolver para dejar consumada finalmente la pretensión fiscal definitiva.

Las razones que inclinaron a la decisión de escoger tribunales administrativos y no judiciales fueron, cuando sancionamos la ley, las siguientes. Primero, los asuntos fiscales son de naturaleza especial y se conforman en función de los fenómenos de carácter socioeconómicos de la colectividad. Segundo, los funcionarios llamados a decidir en estas cuestiones deben ser no sólo versados en derecho, sino especialmente versados en materia tributaria y vinculados con los métodos contables, normas comerciales, industriales, cambiarias, bursátiles, de comercio exterior, etcétera. En tercer lugar, las normas que regulan el proceso no pueden ser rígidas, a nuestro juicio, en esta clase de tribunales, toda vez que siendo dinámica la materia impositiva, es indispensable adecuar a esa característica los preceptos procesales, a cuyo fin, en el proyecto que sancionamos, se le otorgaba al presidente del tribunal la facultad de fijar esas normas de procedimiento. Cuarto, necesidad de asegurar una instancia en la que el contribuyente pueda discutir la decisión de la Dirección General Impositiva sin el previo pago de lo que se le exige, lo que no podría hacerse ante la instancia judicial sin lesionar el principio de la ejecutoriedad de los actos administrativos.

En quinto término cabe señalar la necesidad de instituir un recurso de amparo contra las arbitrariedades del fisco; y en sexto lugar, la conveniencia de establecer un órgano jurisdiccional que actúe y decida antes de la determinación del crédito fiscal y de la obtención del título ejecutivo...

Sr. Prece. — Me parece que el señor diputado está mencionando puntos que no hacen al problema en sí...

Sr. Ferreira. — Si el señor diputado tiene la paciencia de escucharme, ya verá que lo que estoy expresando tiene relación con el punto que tratamos.

Sr. Marini. — Vamos a tener paciencia.

Sr. Prece. — Escucharemos al señor diputado con mucho interés.

Sr. Presidente (Breyter). — La Presidencia agradecerá del señor diputado quiera controlar el tiempo de que dispone.

Sr. Ferreira. — El Tribunal Fiscal está constituido por un presidente y cinco fiscales. El primero tiene que ser abogado, al igual que tres de los vocales, mientras que los otros dos deben ser graduados como doctores en ciencias económicas. Considerando que es requisito indispensable para el éxito del sistema la especialización e idoneidad de los integrantes del organismo en las disciplinas jurídico-económicas y especialmente fiscales, procuramos, al sancionar la ley, instituir en el ámbito administrativo una especie de «magistratura técnica», como se ha calificado a tribunales de esta naturaleza.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, doctor Rodolfo R. Carrera.

Sr. Ferreira. — Para asegurar las condiciones de idoneidad a que me refiero, la designación de los miembros, si bien la hace el Poder Ejecutivo a propuesta de la Secretaría de Hacienda, debe ser como consecuencia de un concurso de antecedentes a fin de que acrediten competencia en esas cuestiones.

La ley 15.265 se caracteriza por la amplitud de facultades que se acuerdan al presidente del tribunal, que ahora, en cierto aspecto, se quieren disminuir. El presidente tiene una efectiva autoridad sobre los restantes miembros, y ejerce además poderes reglamentarios. Ese fue el motivo inspirador de la ley, y en consonancia con esa inspiración es que sancionamos las facultades que ahora se cuestionan.

Entre las facultades atribuidas al presidente del Tribunal Fiscal pueden señalarse las siguientes: a) designa anualmente cuál de los vocales ha de sustituirlo en caso de ausencia, excusación e impedimento; b) acepta o rechaza la excusación de los miembros del cuerpo; c) designa, en caso de aceptación de la excusación de un miembro, al que ha de reemplazarlo; d) designa a los dos miembros que juntamente con él integrarán válidamente el tribunal para celebrar las audiencias de vista de la causa y los acuerdos para dictar sentencia, que es lo que se quiere reformar; e) decide, cuando lo juzga necesario, que una causa sea resuelta por el tribunal en pleno a fin de unificar jurisprudencia; f) tiene doble voto en caso de empate cuando el tribunal en pleno decide una causa para unificar jurisprudencia; g) designa a cualquiera de los miembros del tribunal como vocal instructor de la causa; h) dicta reglas de procedimiento que completen las disposiciones de la ley, a fin de dar al proceso mayor rapidez y eficacia. Estas reglas serán obligatorias para el tribunal y para las personas que actúen ante él desde su publicación en el Boletín Oficial, y podrán ser modificadas por el mismo presidente. Tales normas de procedimiento se refieren, por ejemplo, a la forma de celebrar las audiencias, practicar las notificaciones, y un sinnúmero más de detalles procesales.

El presidente propone al Poder Ejecutivo la designación de secretarios y personal del tribunal que prevé el presupuesto de gastos. También concede licencia, formula anualmente el proyecto de presupuesto de gastos, representa al personal y suscribe las comunicaciones. Todas estas facultades se las conferimos intencionalmente al presidente del Tribunal Fiscal porque queríamos crear un cuerpo distinto a lo que conocemos como organización tradicional en la justicia ordinaria, para dar flexibilidad al desenvolvimiento del tribunal y, sobre todo, con la intención de asegurar la especialización de los vocales en el conocimiento de las causas y principalmente asegurar la brevedad en el trámite de los expedientes que se sustancian ante sus estrados.

Una de las características más señaladas de la ley de creación de este tribunal es la que

admite la flexibilidad de la reglamentación del curso del proceso. Si bien se consagran en el artículo 124 de la ley las normas básicas procesales, se delega en el presidente del tribunal la facultad de completar la reglamentación con el objeto de que el proceso sea rápido y eficiente.

Es precisamente un autor conocido, Arthur T. Vanderbilt, en su tratado *La justicia emplazada a reformarse*, edición 1959, página 185, el que auspicia con su reconocida autoridad el moderno principio de derecho procesal que propone que los miembros del tribunal que aplican las normas adjetivas son los llamados a dictarlas, toda vez que son ellos quienes conocen las necesidades a que obedecen.

Adviertan los señores diputados la reforma sustancial que nosotros consagramos en esta legislación cuando le atribuimos al propio presidente del Tribunal Fiscal la facultad de dictar las normas procesales por las cuales se ha de regir el trámite de las causas.

Sr. Marini. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Ferreira. — Sí, señor diputado.

Sr. Marini. — La interrupción que hago al señor diputado referente a este aspecto procesal tiene también como objetivo práctico señalar que no estuve presente en el recinto en el momento que el señor diputado se refirió a algunos conceptos de mi exposición, realizada con un sentido objetivo, y sin propósito político. No quiero aprovechar esta circunstancia para responderle. Si el señor diputado insistiera en ese aspecto, entonces sí.

Sr. Ferreira. — Yo he dado por terminada la cuestión.

Sr. Marini. — Que quede constancia que mi silencio fue por ausencia.

Con respecto al aspecto procesal, no obstante la autoridad del autor de derecho procesal mencionado, creo que las normas procesales interesan tanto a las partes como a los jueces, porque las partes tienen una enorme responsabilidad a través de las normas procesales por aquello de las cargas y de las expectativas. Muchas veces una oportunidad procesal que se pierde puede importar alguna preclusión o la pérdida de un derecho. De manera que no tiene que ser tan cambiante el sistema procesal, porque si lo fuera lo podrían conocer los jueces pero no las partes, que podrían no tener la noticia necesaria. Yo no me entusiasmo tanto como el señor diputado defendiendo esa tesis.

Sr. Ferreira. — Acabo de decir, precisamente, que las normas procesales que se autorizan a dictar al presidente recién entran en vigencia cuando tienen la debida publicidad en el Boletín Oficial.

Por supuesto, es elemental que entraríamos en un ámbito en que no imperaría la justicia si las partes que actúan en un tribunal no tienen posibilidad de conocer las normas que

se hubieren dictado. Pero aquí no se da ese supuesto como lo acabo de demostrar.

Cuando aludí a las modernas normas de derecho procesal, quise decir que recién en nuestro país las estamos aplicando como un avance de la legislación en el ámbito fiscal. Un principio análogo al que citaba el autor al que me he referido, se ha establecido en el Internal Revenue Code de los Estados Unidos de Norteamérica (Código de la Renta Interna), que instituye la Tax Court (Corte de Impuestos) en el país del Norte. Nosotros seguimos la experiencia de otros países más avanzados en materia de técnica impositiva. Pero lo fundamental es que intencionadamente le hemos conferido al presidente del tribunal las atribuciones que he mencionado.

Yo deseo saber por qué si se mantiene en el artículo 118 la facultad del presidente de designar quién lo ha de sustituir en caso de ausencia, excusación e impedimento se le retira la facultad de designar los vocales que junto con él han de integrar el tribunal en las audiencias de vista de la causa y en los acuerdos para dictar sentencia. Si se le mantiene la facultad del artículo 121, de designar al miembro que ha de sustituir al que se le acepta la excusación, ¿por qué la comisión lo priva de la facultad de designar dos miembros para las audiencias de vista de la causa? Si se le respecta la facultad de designar vocal instructor de la causa —en el artículo 122, último párrafo— ¿por qué se le priva de la otra facultad por vía del dictamen?

Si se coincidiera en establecer la existencia de exceso de facultades, yo admitiría que se le restringieran todas aquellas que tienen una similitud con las que ahora se le suprimen; pero no es así. Entonces, ésta modificación aparece como una reforma incongruente, que viene a romper la armonía de deberes y facultades que articulamos cuando sancionamos la ley que instituyó el tribunal.

Sr. Adrogé. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Ferreira. — Sí, señor diputado.

Sr. Adrogé. — A mi juicio, a la comisión le asiste razón suficiente para proyectar como lo hace, porque no se trata del ejercicio de funciones de tipo procesal, llevadas simplemente al trámite del proceso tributario para darle agilidad, para darle la posibilidad de una decisión rápida y ajustada a las necesidades cambiantes. La designación de estos dos jueces del tribunal sirve para integrar el mismo y también para dictar sentencia en el caso, y ahí es donde yo ya no acompaño al señor diputado en la solución que propicia la ley tal cual está en vigencia.

Me hago cargo de la posibilidad, o mejor dicho, de la conveniencia de que la sala del tribunal aparezca necesariamente siempre integrada por lo menos por un contador o dos contadores y un abogado; un abogado habrá siempre por-

que el presidente lo es por exigencia legal, porque evidentemente el tribunal resuelve con tres miembros del total de seis. Tal vez buscando algún otro tipo de procedimiento se garantizaría la imparcialidad, es decir se crearía la idea en el contribuyente que va ser afectado por esa decisión jurisdiccional de que hay una imparcialidad total, desde luego dentro de las disposiciones legales. Se evita que en una causa, conocido quién es el contribuyente en litigio, aquellos que no son muy bien pensados de continuo puedan considerar que se está constituyendo un tribunal ad hoc para una determinada causa, tanto más cuando que los miembros no son recusables por expresa disposición legal.

Ese es el aspecto que realmente me lleva a considerar que hay conveniencia en la solución traída por la comisión, sin perjuicio de que reconozco como muy legítimas todas las disposiciones relativas a las facultades del presidente del tribunal fiscal, en orden a darle todo ese tipo de facilidades a que me refería al comienzo.

Sr. Ferreira. — Yo sé que la tesis que sustento no es compartida por muchos diputados, incluso por la mayoría de la comisión y por algún miembro del Poder Ejecutivo. Lo que me propongo es seguir defendiendo lo que defendí en oportunidad de informar el proyecto de creación del tribunal fiscal. A mi juicio no han variado las condiciones y los elementos de convicción como para introducir esta reforma. Comprendo que el argumento del señor diputado Adrogué es el que más me impresiona, el que aparentemente da mayor garantía de imparcialidad y seguridad en la composición del Tribunal.

Pero lo que quiero señalar es que aquí estamos examinando la organización de tribunales sobre la base de nuevas formas procesales de funcionamiento que rompen los clásicos moldes que los abogados estamos acostumbrados a ver en la estructuración de los tribunales de la justicia ordinaria. Hasta el momento no conozco objeciones serias que se hayan hecho a la organización que consagramos al sancionar la ley o que ésta haya dado lugar a algunas sospechas o se haya cometido alguna anormalidad a su amparo.

Además sostengo que los legisladores debemos otorgar a los magistrados nuestra cuota de confianza para que puedan manejar el tribunal dentro de un buen margen de libre convicción que no esté constreñido por limitaciones legales. De este modo acordamos no sólo mayor jerarquía sino mayor autoridad a los jueces.

Sr. Prece. — ¿Me permite una breve interrupción?

Sr. Ferreira. — Sí, señor diputado.

Sr. Prece. — El señor diputado ha fincado toda su exposición en la ejecutividad del organismo. Yo le pregunto si el sorteo conspira contra esa ejecutividad.

Si da garantías, no sólo para este tribunal, sino para cualquiera que pudiera crearse en lo futuro, ¿qué impedimentos encuentra a esta modificación?

Sr. Ferreira. — Ya le voy a contestar, señor diputado.

La verdad es que la facultad otorgada al presidente de designar los vocales para celebrar las audiencias de vista de la causa y los acuerdos para dictar sentencia y que ahora se aconseja suprimir guarda armonía con el avanzado sistema de integrar el cuerpo con miembros que posean el títulos de doctores en ciencias económicas, a quienes se les puede atribuir preferentemente las funciones de instrucción en aquellas causas en que, por la naturaleza del problema a decidir, se indique su conveniencia.

La especialización se presenta también en alguna forma dentro del tribunal si se recuerda que ante él se debe ventilar la aplicación de veinte impuestos distintos. También surge al considerar los asuntos que se someten al tribunal, y que, por ejemplo, pueden versar sobre determinación de lo que se conoce como conjunto económico en el impuesto a la renta, sobre diferencias de cambios provenientes de operaciones en moneda extranjera, sobre métodos en la valuación de inventarios, sobre actualización de precios estimativos, etcétera.

Son notorias las ventajas que reporta este sistema de asignarle al presidente del tribunal la facultad de designar los miembros para atribuirles determinadas causas en función de su especialización, porque ya ha dado resultados concretos traducidos en la brevedad que actualmente se observa en el trámite de la resolución de las causas sometidas a consideración del tribunal.

Por otra parte hay muchas cuestiones que son conexas entre sí por el tema, aunque correspondan a distintos contribuyentes, y el sistema de sorteo rompe la posibilidad de que esas causas conexas, que tengan afinidad con la especialización de determinado miembro del tribunal, puedan ser atribuidas a éste, como se hace ahora por vía de la designación del presidente.

Un ejemplo: cuando la Dirección General Impositiva estima de oficio o modifica las declaraciones de una sociedad de responsabilidad limitada ello se refleja en las declaraciones de sus integrantes, cuatro o cinco personas; otro tanto ocurre con la del impuesto a los beneficios extraordinarios y también con la del impuesto a las actividades lucrativas. Vemos así que se pueden interponer fácilmente ante el tribunal 7 u 8 recursos que tienen un nexo u origen común aunque sean distintas las personas. En vez de ser resueltas separadamente como ocurriría con el sistema del sorteo, con otras tantas instrucciones y secuelas de audiencias renovadas, mediante distintas sentencias, por el sistema actual que rige el funcionamiento y las facultades que se otorgan al presidente

del tribunal, pueden serles atribuidas a un miembro que esté encargado de decidir todas esas causas conexas. Con el sistema de sorteo que se propicia se rompe con esa posibilidad y sobre todo se conspira contra la celeridad en la resolución de las causas.

En suma, el procedimiento actual permite su atribución a un mismo vocal que adquiere un conocimiento profundo y total de los intereses y normas legales en juego, substanciándose todos los juicios por rápida acumulación de una sola instrucción mediante pocas audiencias y en una sola sentencia, con evidente economía procesal para el contribuyente, el fisco y el tribunal. Este sistema adoptado por la ley ha permitido en buena medida que las causas tramitadas hayan podido serlo, como lo revelan las estadísticas del propio tribunal, reduciendo a casi la mitad los términos legales para dictar sentencia que la propia ley le concede. Adviertan los señores diputados la importancia que tiene este sistema y estas facultades que se le otorgan al presidente del tribunal; los brevísimos plazos que la ley acuerda al tribunal para dictar sentencia se han reducido a la mitad por la propia idoneidad del procedimiento.

Por estas razones, que creo son convincentes, pido a la comisión que acceda a retirar la modificación que propicia a las facultades legales atribuidas al presidente del tribunal fiscal.

En materia de impuesto a los réditos no voy a extenderme. En las observaciones que tengo presentadas auspicio modificaciones a los artículos 20 y 21 de la ley respectiva. Propicio elevar la renta no imponible, fijada actualmente en 24.000 pesos anuales, a 30.000 pesos y aumentar de 8.000 a 12.000 pesos el mínimo en que se aumentarán esos 30.000 pesos cuando el contribuyente tenga cargas de familia.

Sin perjuicio de lo propiciado anteriormente, proyecto también que los contribuyentes residentes en el país que obtengan réditos comprendidos en el artículo 60 de la ley superiores a 30.000 pesos —y no ciento diez mil pesos como por error de copia figura en el texto de mis observaciones transcritas en el anexo (2) al orden del día N° 1.108 1/2— tendrán derecho a una deducción adicional igual al excedente de dicha suma y hasta un máximo de 200.000 pesos anuales. Cuando el contribuyente residente en el país no tenga entradas netas superiores a 36.000 pesos, y no a 110.000 que por error deslizado aparece en el citado Anexo (2), propongo se le autorice a deducir de sus réditos, en concepto de carga de familia 12.000 pesos por cónyuge (actualmente es 8.000) y 7.000 por cada descendiente en línea recta, ascendiente, etc.; la actual deducción es de 4.500 pesos. Finalmente, cuando las cargas de familia excedan de dos, la deducción adicional de 1.200 anuales se elevaría a 2.500, y para el caso de tres hijos la deducción sería de 4.000 en vez de 2.400 pesos, como se reconoce actualmente.

Como el señor presidente de la comisión ha anunciado que para suplir la omisión del dictamen ha depositado en Secretaría una iniciativa de nuestro bloque auspiciando reformas a los artículos 20 y 21 de la ley de réditos, elevando la renta no imponible, postergo toda consideración de este asunto para la discusión en particular.

La tercera proposición que he realizado consiste en una nueva exención al impuesto a las ventas. La comisión ha creído oportuno —y comparto ese criterio— establecer en la exención del impuesto a las ventas a las maquinarias agrícolas. Sostengo que debemos modificar el artículo 49 del dictamen e incluir en la enumeración del inciso a) del artículo 11 de la ley correspondiente, que se refiere a las mercaderías de producción nacional que están eximidas del gravamen sobre las ventas, a los «jugos puros naturales y concentrados de frutas cítricas». Podríamos suprimir «cítricas» sin particularizar, de modo que la exención alcance a todos los jugos de frutas. Sostengo que el criterio que sigue la ley vigente de no gravar con el impuesto a las ventas el arroz, los aceites comestibles, la lavandina, los fideos, el jabón, soda en sifón o en botella, los vinos genuinos, la yerba mate y muchos otros artículos de iguales características debe aplicarse también a los jugos puros naturales y concentrados de frutas. Las razones las daré en seguida como fundamento de la última proposición que formulo a la comisión.

Finalmente, entre las modificaciones a las leyes impositivas que propicia el dictamen figura una que no ha sido materia de la iniciativa del Poder Ejecutivo sino de la comisión, y que por su carácter regresivo motiva mi objeción fundamental. Se trata de modificaciones que se pretenden introducir en la ley de impuestos internos gravando las bebidas gasificadas, aun las elaboradas a base de jugos o zumos de frutas o sus extractos naturales y los jarabes, extractos o concentrados derivados de la fruta, sean cítricos, uva, ananá, manzana, etcétera.

Considero que este gravamen que se propicia es regresivo, por cuanto influiría perniciosamente sobre una industria que actualmente está en crisis, la cítrica, y que reclama desde hace tiempo aliento y facilidades y no trabas e impuestos.

Yo no hago un planteo local de mi provincia, me adelanto a aclararlo. Quince provincias producen cítricos, y si hablamos de productoras de frutas, creo que casi todas las provincias lo son.

La Mesopotamia (provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones); el Noroeste (Salta, Jujuy y Tucumán); el litoral (Buenos Aires, Santa Fe y el Delta); la región andina (Catamarca y La Rioja); la región central (Santiago del Estero, Córdoba y San Luis), el Chaco y Formosa en el Norte, integran las zonas productoras de frutas cítricas.

La naranja es la especie cítrica más difundida. Corrientes produce el 41,8 por ciento del total de la producción de citrus del país; le siguen Buenos Aires y el Delta, con el 12,2 por ciento; Salta, con el 9,7 por ciento; Tucumán, con el 9,6 por ciento; Misiones, con el 8,2 por ciento, y Entre Ríos, con el 7 por ciento.

Le sigue la mandarina, que es producida en el litoral, en un porcentaje del 21,2; el Noroeste produce el 12,3; Entre Ríos aporta el 57,4 por ciento del total; Santa Fe, el 10,2; Tucumán, el 7,8, y Corrientes el 4,6.

En la producción de limones, Tucumán aporta el 43,7 por ciento; Buenos Aires y el Delta, el 17 por ciento; Jujuy, el 10,6 por ciento; Salta, el 7 por ciento; Corrientes, el 5,8 por ciento; Entre Ríos, el 4,8 por ciento, y Misiones, el 3,9 por ciento.

La producción de pomelos representa en Salta el 32,7 por ciento de la del país; Buenos Aires y el Delta, el 22,4; Entre Ríos, el 15,9 por ciento; Corrientes, el 11,4 por ciento, y Jujuy, el 9,6 por ciento.

En los últimos tiempos ha aumentado la producción de esas cuatro especies cítricas en el país; no obstante, la industria de la citricultura está atravesando por una situación sumamente crítica.

La Argentina era considerada en Europa como un país que estaba en inmejorables condiciones de competencia internacional por su capacidad productora de fruta, a menor costo y mayor calidad. Eso era antes; actualmente la situación se ha invertido. En los últimos quince años los costos de producción, transporte y comercialización se han elevado en tal proporción que llega a cifras sorprendentes. El aumento de precio de venta al mayorista no ha aumentado al nivel de hacer productiva la actividad, a lo que debe unirse a la acción devastadora de las plagas y las trabas de una política económica intervencionista realizada en un tiempo durante el cual se opuso a la necesidad de importar maquinarias, fertilizantes y productos de terapéutica vegetal.

En suma, se considera que la única forma de salvar esta situación de crisis, es la apertura de un proceso de industrialización intensivo de la producción cítrica, toda vez que se estima que por diversos motivos un 30 por ciento de esa producción no llega al consumidor, sustrayéndose así del circuito económico.

Los productos cítricos pueden ser jugos naturales. Hago esta definición, porque es preciso que los legisladores tengamos conciencia exacta cuando dictemos las leyes impositivas, y sepamos definir qué consideramos jugo natural y qué entendemos por jarabe, porque mediante esta definición es como vamos a saber el ámbito de incidencia del impuesto que nosotros aprobemos aquí.

Por eso digo que los productos cítricos pueden ser jugos naturales, que son el zumo de fruta tal como se lo extrae, normal o con-

centrado, pero sin agregados, salvo pequeñas cantidades perfectamente establecidas de preservadores químicos. La fruta fresca se transforma, por medio del tratamiento continuo de centrifugación, termoe explosión celular, des-aereación, homogeneización y pasteurización relámpago, en un producto homogéneo que pasa a los concentrados y subsiguiente envasado, en tanto que la cáscara se destina a la extracción de los aceites esenciales.

Según un estudio técnico que sobre la industria del citrus ha realizado el señor Carlos J. Belfiore y que ha editado el Banco Industrial, se designa como jarabe el producto resultante de agregar al jugo natural —normal o concentrado— de fruta, diversas sustancias como azúcar, ácido cítrico, esencias, colorantes, etcétera, y que sirve para obtener a su vez la «naranja» o «limonada» mediante la adición de agua habitualmente gaseosa. Precisamente a esos jugos naturales normales o concentrados y a esos jarabes a que acabo de referirme, la comisión los grava con un impuesto del 10 y del 15 por ciento.

Fundamentalmente, la moderna industria cítrica se orienta hacia la producción del jugo puro natural. El autor a que acabo de referirme expresa que los esfuerzos se dirigen en el sentido de presentar los jugos naturales a la distancia o en épocas en que no se dispone de fruta, con los mismos caracteres organolépticos, físicos y químicos del zumo recién extraído. De allí la gran importancia que tiene la incrementación y el fomento de la industria de los productos cítricos. Al logro de ese resultado se han dirigido todos los esfuerzos y las mejoras introducidas en la tecnología de la concentración, para que al añadir agua se reconstituya exactamente el producto originario.

No admito la equiparación que hace un momento hacía el señor diputado Aguinaga entre las bebidas con alcohol y las bebidas sin alcohol provenientes de los jugos de fruta. No puedo admitir la asimilación en cuanto al significado que tienen estos productos, por cuanto es indiscutible que la fruta cítrica juega un papel muy importante en la dieta del hombre, en razón de que su valor nutritivo está basado en el contenido de vitamina A (ácido ascórbico) que posee.

Al examinar las facultades impositivas que queremos ejercer debemos tener en cuenta dos circunstancias. La primera es que la fruta cítrica y, por ende, los jugos puros naturales o concentrados derivados de ella constituyen un alimento de primera línea en la dieta del ser humano, y la segunda es que para alentar la producción de jugos debemos promover la industrialización de la fruta, con lo que paralelamente fortalecemos una industria nacional en crisis.

En consecuencia, una política coherente de gobierno debe orientarse a alentar y estimular

la industria del citrus y de las frutas en general, y no gravarla como se pretende.

El Poder Ejecutivo de la Nación ha comprendido cabalmente el problema al crear por decreto 3.199, del 31 de julio de 1958, la Comisión Nacional de Citricultura. En uno de los fundamentos del referido decreto se expresa «que es conveniente adoptar medidas que signifiquen un verdadero estímulo para la industrialización, a fin de lograr el aprovechamiento total de las cosechas y que los productos derivados de la fruta, sobre todo en forma de jugos, puedan representar un recurso económico de importancia, tal como ocurre en los países de citricultura más avanzada».

Esta comisión, creada por decreto del Poder Ejecutivo y presidida por el señor secretario de Agricultura y Ganadería, es la que propicia incluir los jugos puros naturales y concentrados de frutas cítricas en las exenciones del impuesto a las ventas, y esta comisión es también la que me ha hecho llegar sus observaciones a la iniciativa de la Comisión de Presupuesto.

Sr. Hernández Ramírez. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Ferreira. — Sí, señor diputado.

Sr. Hernández Ramírez. — Para abonar el pensamiento expuesto por el señor diputado por Entre Ríos voy a leer la parte final, nada más, de un decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, de fecha 16 de marzo de 1961, número 2.049, por el cual no solamente se desgrava una bebida que ha estado gravada hasta entonces y que tiene una proporción de alcohol, sino que en su parte resolutive establece: «Artículo 1º — Déjase en suspenso a partir del 1º de abril de 1961 la aplicación del impuesto a las operaciones de venta de cerveza en el mercado interno.» Esta medida fue adoptada por las mismas razones que ha dado el señor diputado, pero con respecto a la situación de la industria cervecera.

He querido hacer este aporte a la exposición que para ilustrar a la Cámara realiza el señor diputado por Entre Ríos en tan claras palabras.

Sr. Ferreira. — Todos recordamos el debate que tuvo lugar en este recinto con motivo de la consideración del despacho producido por la Comisión Especial del Azúcar, que demandó largas sesiones a esta Cámara. Quiero poner de manifiesto que muchas veces se pudo creer que el diputado que habla, al oponerse a ciertos aspectos de ese proyecto, adoptaba una posición contraria a los verdaderos intereses de la provincia de Tucumán, cuya economía sabemos reposa esencialmente en la producción de azúcar.

Sr. Larocca. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Ferreira. — La Presidencia me ha advertido que me resta poco del tiempo que dispongo para efectuar mi exposición, y sólo la tolerancia de los señores diputados me permite continuar. Pero de todas maneras le concedo al señor diputado la interrupción que me solicita.

Sr. Larocca. — A los efectos de establecer la exención del impuesto a las ventas para las bebidas gaseosas a base de frutas, es necesario fijarles un tenor. De otra manera sería muy fácil que cualquier fabricante, con un mínimo de jugo natural, estuviera en condiciones de acogerse a los beneficios de esta disposición.

De acuerdo a un cálculo aproximado hecho por técnicos en la materia, lo menos que puede contener de jugos naturales sería un 10 por ciento, y de concentrados, el 0,5 por ciento por cuanto el jugo natural al ser concentrado se reduce de 1 a 0,2. De manera que al propiciar esa modificación entiendo deberíamos fijar ese tenor para que se beneficien el público consumidor y el productor al mismo tiempo.

Sr. Ferreira. — Creo que el señor diputado no me ha escuchado bien o yo me he expresado mal.

Quando propicié la exención del impuesto a las ventas, me referí exclusivamente a los jugos puros naturales y concentrados de frutas. No me referí a las otras bebidas sin alcohol en cuanto al impuesto a las ventas, pero sí lo hice en cuanto a los impuestos internos.

Yo no establezco ninguna proporción como la que alude el señor diputado, y no lo hago no porque no haya estado en mi ánimo establecerla, sino porque he consultado con técnicos —transmito la referencia que ellos me han proporcionado— y me han dicho que no es posible establecer el porcentaje de jugo de frutas que compone una bebida gaseosa. Por esa razón me abstuve de establecer porcentajes.

Sr. Larocca. — Sin embargo, el Instituto Bromatológico de la Capital me ha informado que se puede identificar perfectamente si es jugo natural el que interviene en la composición de la bebida, así como la calidad y la cantidad. Pero yo hablaba de establecer cifras para evitar evasiones de este tipo.

Sr. Ferreira. — Advierto, señor diputado, que hay dos informes técnicos distintos. Desde ya confieso que mi inspiración original fue la de establecer un porcentaje. Al propiciar que no se graven las bebidas sin alcohol que tengan cierta proporción aceptable de jugo de fruta, de ninguna manera pretendo desgravar a otras bebidas que no tienen jugo de fruta. Por el contrario, todo va enderezado a incrementar la producción y utilización de los jugos, si bien no exclusivamente jugos puros. Esta es la intención, y si se puede establecer un porcentaje, será mejor.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Federico F. Monjardín.

Sr. Ferreira. — Retomando el hilo de mi exposición, debo decir que cuando nosotros defendemos la no gravación de la industria citrícola y de las bebidas sin alcohol en cuya composición entre en buena medida el citrus,

estamos defendiendo la importante industria citrícola de la provincia de Tucumán. Adviértase que la comisión que ha creado el Poder Ejecutivo adoptó, con fecha 4 de agosto de 1961, una resolución por la cual se solicitaba el otorgamiento de créditos especiales para la reimplantación y racionalización del proceso productivo de los montes cítricos de la provincia de Tucumán, con el objeto de lograr su recuperación en atención a la grave situación creada en esta rama productiva a causa de la enfermedad denominada «tristeza», a la que se agrega el quebranto económico ocasionado por altos costos de producción, bajo rendimiento y precios poco compensatorios de los productos.

Como se ve, somos coherentes en esta posición, y si queremos realmente llevar a la normalización económica a la provincia de Tucumán, por la vía de la proclamada diversificación de la producción, dado que es necesario sacarla del virtual monocultivo en que ahora se encuentra, no se pueden gravar las industrias como la del citrus u otra clase de frutas.

En mi provincia, comprendiendo la gravedad del problema, se ha encarado una acción intensiva para industrializar los frutos cítricos. Ya en el mes de agosto último comenzó a funcionar en Concordia un establecimiento particular productor de jugos cítricos y aceites esenciales, con una capacidad diaria de cien mil litros de jugo puro natural. También se halla en proceso de licitación y en inminente trance de adjudicarse, la construcción de una nueva planta de pertenencia de la Corporación Entrerriana de Citrus, sociedad de economía mixta, industrial, comercial y financiera, con 100 millones de pesos de capital que los accionistas podrán elevar a 500 millones. Se trata de una entidad en la que el 50 por ciento del capital lo suscribe el Estado y el 50 por ciento restante los particulares, y cuando éstos cubran ese límite la participación del Estado se irá reduciendo al 20 por ciento.

La comisión promotora de esta corporación ha aconsejado al Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos que la planta a instalarse en la proximidad de la ciudad de Concordia debe tener una capacidad de procesamiento equivalente a 500 toneladas de fruta al día, o sea unos 25.000 cajones, con una producción de jugos horaria de 10 toneladas, estimando conveniente comenzar a trabajar destinando la mitad de la producción de jugos, o sea 84 litros por minuto, a envasar como jugo simple o natural sin concentrar *single strength juice*, el que se elaboraría pasterizado y enlatado, y la otra mitad a concentrar, que se elaboraría, parte pasterizado y enlatado y el resto en bodegas con anhídrido sulfuroso, como conservador. En un futuro próximo, parte del jugo simple se destinaría a *chilled juice*, tipo de jugo que se conservaría a cero grado centígrado para ser consumido inmediatamente y se transportaría en camiones tanques con equipos de refrigeración.

Esta iniciativa del gobierno de mi provincia no puede ser desalentada con gravámenes como el que se propicia y motiva mis objeciones.

Para que no se crea que formulo un planteo localista, diré que en Bella Vista, provincia de Corrientes, se ha instalado otra planta industrializadora de fruta cítrica y en Misiones se está instalando, una similar en la localidad de Guaruá, a las que se agregarán otras parecidas en otros puntos del país. En Monte Caseros —aquí me hace recordar mi colega el diputado Solar— también se está instalando otra planta de jugos cítricos.

Como se advierte, se trata de una actividad productiva que está desarrollando grandes esfuerzos para salir del estado de crisis en que se encuentra sumida desde hace muchos años. Entonces, no frustremos o no detengamos ese impulso empresario con nuevas gabelas.

Está claro, en consecuencia, que el Congreso no puede sancionar un gravamen como el que propicia la comisión. Por el contrario, concordantemente con la intención del Poder Ejecutivo respecto a la incrementación de la actividad industrializadora de los citrus y el estado de crisis en que se encuentra la citricultura, aconseja, siguiendo un criterio coherente, dar facilidades y amplitud a esta industria para que pueda desenvolverse; otorgarle asistencia económica, en vez de gravarla impositivamente, para que pueda lograr un nivel aceptable y consolidar su desarrollo y expansión.

Considero que es un contrasentido que mientras la política seguida en otros países sea el fomento del consumo de las bebidas sin alcohol, en la Argentina, según parece a la luz de la disposición comentada, se esté en la política opuesta, es decir, la de no fomentar el consumo de las bebidas sin alcohol, y, sobre todo, las compuestas con jugos de frutas naturales o concentrados. Se pretende con esta iniciativa gravar a títulos que son esencialmente alimenticios, artículos que en otros países —verbigracia Estados Unidos y muchos de Europa— constituyen un producto de uso común por su valor alimenticio. En los Estados Unidos, junto a la botella de leche, el expendedor deja al consumidor la botella de jugo de frutas. Vale decir que hay una estrecha asimilación del carácter alimenticio de estos productos.

Pero yo quiero hacer esta otra reflexión: si no se aplica impuesto a la fruta natural, ¿por qué gravamos la «fruta líquida», que no otra cosa son los jugos puros? Para mí, esta iniciativa de la comisión representa un contrasentido económico, y yo abrigo la esperanza de que sus integrantes han de saber recapacitar a tiempo y retirarla.

Con el gravamen que se propicia se encarecería injustificadamente el producto, haciéndolo menos accesible al grueso de la población, se perturbaría el actual proceso de industrialización y se inferiría una grave lesión a la industria. Paralelamente, debe señalarse que la

sanción de este impuesto crearía un serio inconveniente a las fábricas, precisamente en un instante de enrarecimiento del dinero, en razón de que tendrían que adelantar gruesas sumas de capital para el pago del impuesto.

No quiero extender demasiado mi exposición. Voy a abreviar, pero no puedo dejar pasar esta ocasión sin mencionar la circunstancia de que en Alemania Occidental el consumo de jugo de manzana, por ejemplo —ya no aludo a los citrus—, ha ido desplazando en cierto modo al consumo de cerveza, a punto tal que actualmente se importa jugo no obstante la importante producción de manzanas que existe en Alemania y la importación de esta fruta procedente de Italia. Recojo del Boletín Informativo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República Oriental del Uruguay, edición del 7 de diciembre último, las siguientes referencias sobre el consumo de jugos de fruta en los Estados Unidos de América: en este país se consume más de 4.000 millones de litros de jugo de frutas y de vegetales cada año, o sea alrededor del 75 por ciento del abastecimiento total mundial, es decir 7 veces más que el consumo anterior de la última guerra.

Aproximadamente el 99 por ciento de las naranjas procesadas comercialmente en los Estados Unidos son utilizadas para la producción de jugos, y menos del uno por ciento para ser enlatadas en trozos.

No deseo prolongar mi intervención. Voy a concluir, pero antes de terminar debo advertir que una iniciativa similar a la que recoge la comisión fue presentada ya en el seno de esta Honorable Cámara.

En oportunidad de discutirse, en la sesión del 28 de enero de 1960, un proyecto de reformas a las leyes impositivas para dicho año, la Comisión de Presupuesto y Hacienda admitió retirar la modificación al artículo 84 de la ley de impuestos internos en cuanto aumentaba el gravamen a los vinos comunes, no comunes y champagne. En esa ocasión el distinguido colega Juri, de la provincia de Mendoza, propuso un nuevo artículo, que es el que ahora se recoge, en lo esencial, en el dictamen de la comisión y que es reproducción casi literal del proyecto presentado a la Cámara por los diputados Aguinaga, de la Federación de Partidos de Centro; Juri, de la Unión Cívica Radical Intransigente; Suárez, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, y Santoni, del Bloque Radical Nacional y Popular. Vale decir que en ese aspecto no se ha hecho cuestión de divisas políticas, sino que todos los diputados de la región de Cuyo han coincidido en propiciar el impuesto a los jugos de frutas.

En esa oportunidad, el presidente de la comisión apoyó el artículo nuevo propuesto por el diputado Juri, lo que determinó que el diputado Maluf dijera lo siguiente: «El hecho de que los fabricantes de bebidas gaseosas sin al-

cohol tengan ganancias fabulosas —ése era el argumento que se sostenía para sustentar la iniciativa— no significa que tengamos que gravar un producto que es consumido especialmente por los niños, mujeres y ancianos. Antes de gravar esas bebidas convendría controlar a los los fabricantes de alguna forma para que sus ganancias no sean excesivas.» (Diario de Sesiones del 26 de enero de 1960, página 6827.)

Por su parte, el representante de la Federación de Partidos de Centro, diputado Contte, dijo lo siguiente a propósito de esta cuestión, y lamento que no esté presente en el recinto el señor diputado Aguinaga, pues estoy recogiendo palabras de un colega de su sector: «Deseo señalar el voto de nuestro sector en contra de este apartado nuevo, por el cual se gravaría a las bebidas no alcohólicas. Nosotros entendemos que precisamente debe fomentarse el consumo de estas bebidas. Al mismo tiempo quiero dejar constancia de que hemos votado en contra de la desgravación indiscriminada de los alcoholes.»

Por su parte, el señor diputado de la Vega manifestó: «Nosotros también vamos a votar en contra de este apartado que se propone. Creo que conviene que la Cámara medite un momento sobre esta grave intromisión en la ley de un nuevo impuesto para un producto que, como se ha dicho aquí, es de consumo para los niños en general y que, de cierta manera, impide que se ingieran bebidas alcohólicas. Imponiendo un impuesto de este tipo no vamos a prestar ningún servicio a la población, pues se elevarán los precios de estos líquidos a la misma altura de las sustancias con alcohol.»

En aquella oportunidad, por su parte, el señor diputado Suárez dijo lo siguiente: «No se trata, señor presidente, de hacer un debate sobre la naranja versus la uva. Pero la realidad es que el vino no puede ser considerado elemento suntuario, dado que se lo ha calificado como artículo de primera necesidad. El noventa por ciento del vino que se consume en el país está destinado al consumo popular. Por eso considero que un impuesto como el que propone el señor diputado Juri resulta inadecuado por las circunstancias en que vive el país, pero de ninguna manera podemos considerar que signifique una injusticia. La verdad es que estos artículos son de carácter suntuario...»

Sr. Suárez. — Ratifico ampliamente lo dicho entonces...

Sr. Ferreira. — El voto en contra del señor diputado, en definitiva, se fundaba en que el país no aguantaba más impuestos.

Sr. Suárez. — ... porque el hecho de haber presentado un proyecto que grave a las bebidas sin alcohol obedece en este momento a distintas circunstancias. Confieso al señor diputado que alguno de los aspectos que ha tocado, sumado a los largos alegatos que en el bloque me ha formulado su comprovinciano, el señor diputado Larocca y el señor diputado Perette, me han

convencido respecto de muchos argumentos en relación con esa industria.

El ánimo del proyecto era distinto cuando fue presentado. Entendíamos que había que dotar al Estado de ingresos para poder hacer frente a la desgravación de la cuarta categoría. El proyecto, pues, tendía a crear un elemento más de percepción, a fin de compensar los ingresos de la cuarta categoría, que queremos derogar.

Quiero aclarar que lejos de entender que hay que poner trabas a la industrialización de los productos cítricos, estimo, por el contrario, que hay que ayudarla. Pero también entiendo, y debe tenerse perfectamente en cuenta, que en este momento el país está experimentando el avance de las bebidas sin alcohol —especialmente de Coca-Cola y Pepsi-Cola— que se ingieren masivamente. No nos oponemos y nos parece bien que el pueblo consuma lo que desee, pero como se trata de un producto de consumición masiva, puede ser un elemento importante para conseguir el dinero que necesitamos a fin de desgravar el trabajo personal. No hago con ello un problema de tipo regional.

Sr. Ferreira. — Yo solamente citaba la coincidencia.

Sr. Suárez. — El señor diputado comprenderá que el problema del capital va más allá de los problemas de carácter regional. Nosotros, como representantes del pueblo, queremos defender una forma de desgravación de la cuarta categoría, y nos parece que por la índole masiva en que se venden estos productos, cuyo noventa por ciento se compone de elementos extranjeros como en el caso de Coca-Cola y de la Pepsi-Cola, bebidas que se ingieren en proporciones superiores al producido de zumos naturales, y por la cantidad de extractos usados en ellas, que es mínimo comparado con el tonelaje de citrus que se vende en el mercado interno en forma de fruta fresca, es perfectamente aplicable el gravamen.

No obstante ello, vuelvo a decir que muchos de los argumentos, relacionados con el envasamiento de jugos, realizados por el señor diputado me han convencido, y considero que los jugos naturales no se deben gravar, con exclusión del caso de las bebidas gaseosas.

Sr. Heredia. — ¿El señor diputado Ferreira me permite una interrupción?

Sr. Ferreira. — Sí, señor diputado.

Sr. Heredia. — En aquella oportunidad, cuando se pretendió gravar las bebidas sin alcohol, se hizo el argumento de que el vino no se podía gravar más. La comisión tenía la intención de aumentar el gravamen en 20 centavos más por litro del que tenía ese producto, ya de por sí bastante gravado, y que es fuente de riqueza de la zona de Cuyo, y fue para compensar el cálculo que se había hecho, que se pretendió gravar las bebidas sin alcohol, por supuesto que en forma general y no con exclusión de las be-

bidas derivadas de los zumos cítricos, como propone en esta oportunidad el señor diputado por Entre Ríos. Este fue el argumento fundamental que se hizo en aquella oportunidad para gravar las bebidas sin alcohol.

Con estas palabras deseo dejar bien aclarada nuestra posición en aquella oportunidad, la que tendía a aliviar el grave déficit del presupuesto de la Nación, que creo ascendía a 27 mil millones de pesos, con cuyo gravamen se podría llegar a disminuir en 500 millones de pesos, cifra que se pretendía lograr con el aumento del gravamen en 20 centavos por litro de vino. Entonces se deseaba suplantar esa cantidad con el gravamen sobre esas bebidas.

Nosotros consumimos bebidas de las que ni siquiera conocemos su composición química, como el caso de la Coca-Cola, la que solamente tiene el gravamen común.

Sr. Ferreira. — Quiero decir que las objeciones que formulo se refieren al impuesto a los jugos puros de fruta o a aquellas bebidas en cuya composición entran sustancialmente los jugos de fruta. Mis observaciones no se extienden ni amparan a otra clase de bebidas que no reúnen estas condiciones en su composición.

Quiero terminar, señor presidente, después de citar las palabras del señor diputado Suárez, que en aquella oportunidad él votó en contra, porque consideraba que ya no existía más capacidad de gravación en el país. Parecería que hoy a cambiado de opinión y que el país puede soportar nuevas imposiciones, sobre todo en los ramos productivos.

Finalmente quiero citar las palabras del ex diputado Casella Piñero quien dijo: «Dejo constancia del voto de mi sector en contra del nuevo impuesto que se pretende aplicar —iniciativa parecida a la que consideramos hoy—, el que contribuirá a encarecer el costo de la vida...» (Diario de Sesiones citado, página 6828).

¿Cuál fue la suerte de la proposición del señor Juri? La primera votación arrojó un resultado de 62 votos por la negativa sobre un total de 105 votos. En una rectificación de la votación el resultado fue, sobre un total de 103 señores diputados, negativo de 64 votos. Señalo esto porque creo que la Cámara debe tener en cuenta aquella decisión, si bien este cuerpo tiene en este momento otra composición, para considerar la reproducción de un proyecto que ya fue desechado.

Ruego se me disculpe si tomo dos minutos más, pero deseo decir que si los argumentos que acabo de exponer no son suficientemente convincentes para que la comisión admita la observación que formulo, quiero llamar la atención sobre la situación que se crearía en esta rama de la industria nacional a la que se la intenta gravar impositivamente, cuando paralelamente el país, en función del Tratado de Montevideo que instituyó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, está otor-

gando tratamientos preferenciales en favor de los países asociados con relación a los jugos de frutas y bebidas sin alcohol.

Llamo la atención de la comisión porque por un lado estamos desgravando productos extranjeros y por otro gravando productos de la industria nacional. Saben los señores diputados que en uno de los protocolos del Tratado de Montevideo, suscrito el 28 de febrero de 1960, y ratificado por nuestro Parlamento por ley 15.378, se declaró que Bolivia y Paraguay se encuentran actualmente en situación de invocar a su favor tratamientos especiales previstos en el tratado para los países de menor desarrollo económico relativo dentro de la zona de libre comercio.

A mérito de este reconocimiento que se hace en ese protocolo y de acuerdo con una resolución de la conferencia de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que se reunió en Montevideo desde el 18 de septiembre de 1961, la Argentina estableció dos listas de productos a los cuales se les dará tratamiento preferencial cuando sean productos originarios del Paraguay. En la primera lista que estableció el país eliminó los derechos aduaneros y recargos cambiarios al Paraguay, respecto de los jugos de frutas (incluidos los mostos de uva) y de hortalizas y legumbres frescas sin fermentar, sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar. Por la segunda lista con la numeración 22.02 de acuerdo con la nomenclatura arancelaria de Bruselas, nuestro país acuerda tratamiento especial a las limonadas, aguas gaseosas aromatizadas (incluidas las aguas minerales tratadas de esta manera) y demás bebidas no alcohólicas, a las que se les suprime todo recargo y se les deja el tratamiento aduanero actual.

Llamo la atención de la comisión en el sentido de que si estamos por vía de los tratados internacionales, que nos llevan al establecimiento de una zona de libre comercio con vistas a un mercado común latinoamericano, procediendo a la desgravación parcial de muchos productos extranjeros, es un absurdo económico que dentro del país estemos gravando a esos mismos productos. Llamo seriamente la atención de la comisión y de los señores diputados sobre este problema.

En la lista nacional elaborada por la Argentina el jugo de ananá no lleva derechos aduaneros específicos ni ad valorem, ni recargos cambiarios. Si esto ocurre para los países de la zona del cono Sur de América latina, ¿cómo podemos gravar nosotros nuestros jugos?

Respecto de este asunto puede haber dos posiciones: la primera, incluir en la desgravación del impuesto a las ventas a los jugos puros naturales o concentrados de frutas y no gravarlos con el impuesto interno.

La segunda posición consistiría en adoptar la desgravación de los primeros y no imponer im-

puesto interno no sólo a los jugos puros naturales y concentrados sino también a las bebidas gasificadas que se elaboran a base de jugo de frutas en proporción aceptable. Me inclino por la solución más amplia, toda vez que entiendo que al gravar solamente las bebidas gasificadas no elaboradas con zumos o jugos de frutas naturales o concentradas, estamos de algún modo alentando la utilización de esos últimos no sólo como productos puros sino también como compuestos de las bebidas gasificadas que los utilizan en su preparación.

Llamo la atención a los señores diputados que no podemos gravar ni la fruta fresca ni la «líquida», como son los jugos. Debemos cuidarnos muy especialmente de no crear factores que a la larga puedan constituir la base de luchas regionales en el país. Creo felizmente superada la época en que la Junta Reguladora de Vinos ordenó extirpar los viñedos existentes en Concordia, en Entre Ríos, por vía de una política de protección a los bodegueros cuyanos. Estimo que ya ha sido superada esa época de la Junta Reguladora, que causó grave daño a mi provincia, cuando ordenó extirpar los viñedos de una de sus regiones más ricas e industriales.

Advirtamos que la industria del jugo de fruta natural o concentrado está principalmente en manos de los propios productores citrícolas, y si los fabricantes de bebidas gaseosas que utilizan estos jugos o zumos tienen grandes ganancias no es con esta clase de impuestos que vamos a disminuirlas, pues sabemos que las gabelas se trasladan a los precios y quien al final paga las consecuencias es el consumidor.

Señor presidente: dejo así fundada mis observaciones al dictamen de la mayoría de la comisión y aguardo confiado en que los señores diputados que han suscrito el dictamen sabrán corregirlo en lo pertinente, aceptando las objeciones que he formulado con la sola intención de perfeccionar el instrumento que daremos al país, y con el exclusivo propósito de que la Honorable Cámara dé una sanción que resguarde un ramo tan importante de nuestra actividad productiva como es la industria de los jugos de fruta, especialmente cítricos, alimento de primera línea en la dieta del ser humano. Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Monjardín).— Tiene la palabra el señor diputado Nougues.

Sr. Nougues.— Lamento que en este momento no se encuentre presente el señor secretario de Hacienda, quien en un momento dado afirmó que en el país no existe pobreza. Yo desearía que el señor secretario hubiera tenido que efectuar el viaje de Tucumán a esta Capital, y así habría podido presenciar un espectáculo verdaderamente dantesco por la pobreza de una provincia que hasta hace pocos años era ejemplo de capacidad y prosperidad.

También hubiera deseado la presencia del señor secretario de Hacienda para que respon-

diera a una serie de preguntas que considero fundamentales. Ante su ausencia deseo dejar documentada mi postura sobre determinadas informaciones dadas por la prensa de nuestra capital en cuanto a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo referentes al plan de racionalización.

A este efecto voy a leer un cuestionario al Poder Ejecutivo para que dé los detalles de los estudios realizados por los organismos oficiales para poner en ejecución el plan de racionalización. En segundo lugar, para saber cómo se han cumplido anteriores planes de racionalización de la administración pública formulados por CEPRA, de acuerdo con las disposiciones de la ley 14.794 y los decretos 9.718/59; 10.974/58; 10.115/59; 11.962/59; 14.869/59 y 14.013/60.

Sr. Heredia. — ¿Se trata de un proyecto de interpelación, señor presidente?

Sr. Nogués. — Así como al señor diputado le agradaría hacer una exposición tranquila para fijar su postura en una ley fundamental, yo le agradeceré que cualquier pregunta que quiera hacer la formule al final de mi exposición.

También es necesario saber si para la transferencia de organismos nacionales a las provincias han sido previamente consultados los gobiernos provinciales. Si la situación económica de las provincias les permitirá afrontar los gastos que le demandará la atención de los servicios transferidos. Si no se estima que al transferir organismos nacionales cuyo perfeccionamiento técnico y buen servicio se ha logrado en el transcurso de los años, se provocará su total desmembramiento y por consiguiente la falta absoluta de planificación adecuada e integral en el cumplimiento de los servicios y obras que debía realizar; si existen estadísticas y se han realizado consultas con los empleadores privados que aseguren la absorción del personal del Estado declarado en disponibilidad; cuál es la economía que se obtiene al desmembrar el Consejo Nacional de Educación y transferir las actuales escuelas primarias a las provincias, si el Estado nacional es quien continuará facilitando los fondos necesarios para su mantenimiento.

Hubiera deseado también que el señor secretario de Hacienda hubiera informado a esta Cámara cuáles son las medidas que ha adoptado el Poder Ejecutivo tendientes a combatir al contrabando, pues con el transcurso de los días sabemos que la percepción de los impuestos y de la renta nacional se encuentra lesionada por el excesivo contrabando y nosotros tenemos en nuestra ciudad Capital que hoy como nunca han proliferado los negocios establecidos exclusivamente para la venta de mercaderías de contrabando.

Sr. Presidente (Monjardín). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Nogués. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Monjardín). — Estoy escuchando al señor diputado con mucha atención; pero advierto —y me permito señalárselo— que se está apartando del tema en debate, o sea del proyecto sobre reformas al régimen impositivo.

Sr. Nogués. — Para tomar el camino debo empezar a machetear los yuyos, para caminar tranquilamente. Es lo que estoy haciendo.

Sr. Heredia. — Machetea los yuyos, pero viaja en avión. (Risas.)

Sr. Presidente (Monjardín). — De todas maneras, a pesar de la figura literaria que ha hecho el señor diputado Nogués, le ruego que se ciera al asunto en consideración.

Sr. Nogués. — Cuando el señor presidente llegue a la tranquilidad de su casa y empiece a leer la crónica de los debates que le ha tocado presidir tendrá oportunidad de comprobar que ha tenido un diputado preferido, el diputado Nogués, al que siempre ha querido llevar de la mano hacia donde se le ocurre. (Risas.)

Sr. Presidente (Monjardín). — No puede tolerar en silencio las palabras impertinentes, es decir, no pertinentes, que acaba de pronunciar el señor diputado.

Sr. Nogués. — Es una impertinencia pretender hacerme decir lo que no quiero decir.

Sr. Presidente (Monjardín). — El señor diputado pone al presidente en la incómoda situación de tener que recordarle a cada momento que se aparta del asunto en debate, con su hábito inveterado de querer aprovechar cualquier oportunidad para decir cualquier cosa. Reglamentariamente cada cosa tiene que decirse a su tiempo y la cortesía del señor diputado debe tener también un instante para el presidente.

Sr. Nogués. — Sí, señor presidente, y con sus muchos años y desde el cargo que inviste debe tener también la consideración debida con un menor de edad. (Risas.)

Sr. Presidente (Monjardín). — A confesión de parte, ruego de prueba.

Sr. Nogués. — Efectivamente, señor presidente, soy una criatura al lado de los años de experiencia que usted tiene.

Desde hace tiempo hablamos de la necesidad de recuperar el prestigio del Parlamento. Todos estamos interesados en que este prestigio sea real, que sea recuperado y se cimente. Se recuperará y se mantendrá ese prestigio cuando las leyes sancionadas por este Congreso sean cumplidas por el Poder Ejecutivo y, cuando en caso de no serlo, este Parlamento, velando por sus facultades, sepa llamarlo a la realidad para que cumpla con las leyes de la Nación.

Señor presidente: en el año 1886, por decreto 1804, dictado por aquel gran gobernante que se llamó Julio A. Roca, nació una institución

que hasta hace algunos años fue prestigio y orgullo de la Nación. Me refiero al Banco Hipotecario Nacional. En el día de hoy hemos sido sorprendidos con la información de que el Banco Hipotecario, institución que ha e pocos meses ha cumplido los setenta y cinco años de vida, sufrirá un total desmantelamiento, el remate de sus sucursales, dejando sin efecto las funciones que debe desempeñar como banco, para transferirlas a determinadas instituciones de crédito privados.

Nosotros, como integrantes del Parlamento... Señor presidente: puede reírse porque a usted no le produce dolor ni amargura ver a una institución del Estado desmemorada y arruinada...

Dr. Presidente (Monardín). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta el lunes a las 15.

—Se pasa a cuarto intermedio a las 21 y 30.

3

APENDICE

I

INSERCIONES

INSERCIONES SOLICITADAS POR EL SEÑOR DIPUTADO MARINI

1

8 de noviembre de 1961.

Visto el proyecto de reformas impositivas sometidas por el Poder Ejecutivo a consideración del Honorable Congreso de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que dicho proyecto no se limita a proponer cambios meramente formales o tendientes a simplificar la percepción en los gravámenes, sino que introduce modificaciones sustanciales en el régimen tributario nacional, como la derogación del impuesto a las ganancias eventuales, la extensión del ámbito de aplicación del impuesto sustitutivo, la gravación con el impuesto a los réditos de beneficios que carecen de los atributos propios del «rédito», la insistencia en la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo para fijar alícuotas impositivas, el incremento del impuesto de sellos local para compensar la reducción de los ingresos del impuesto federal a las ganancias eventuales, la sustitución de las multas aplicables previo sumario en el caso de omisión de impuestos por el cobro de recargos automáticos, el embargo preventivo de todos los bienes y derechos de los contribuyentes deudores de impuestos, accesorios y multas, etcétera.

Que existe conciencia formada en todo el país acerca de la falta de coherencia y equidad de nuestro sistema impositivo y de la necesidad de someterlo a una revisión integral para reestructurarlo sobre bases científicas a fin de dotarlo de razonabilidad, justicia y eficiencia.

Que las continuas reformas parciales de que ha sido objeto en los últimos años, a la que vendría a agregarse la que se halla actualmente a estudio del

Poder Legislativo, agravan sus notorias deficiencias y alejan cada vez más la posibilidad de lograr los objetivos indicados en el considerando anterior.

Por ello,

El Comité Permanente de Impuestos del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas

DECLARA:

1º — Que considera inoportuna la sanción del proyecto de reforma impositiva sometido al Congreso de la Nación tal como está concebido, debiendo limitarse tan sólo a las modificaciones estrictamente formales y a las que tienden a la simplificación de la percepción de los gravámenes.

2º — Que auspicia y ofrece su colaboración para un estudio y reestructuración integral del régimen tributario nacional con intervención de todos los organismos científicos y técnicos —oficiales y privados— competentes en la materia.

Doctor Julián B. de las Barreras, doctor Enrique García Vázquez, doctor Günter Glogauer, contador Alberto R. López, contador Alberto T. López, doctor Ernesto Malaccorto, doctor Isaac Rechter, doctor Enrique J. Reig, contador Jorge Rebizo.

2

Comentario sobre las reformas impositivas proyectadas por el Poder Ejecutivo

En el presente análisis nos referiremos a los principales aspectos de la reforma, que entendemos preceden los objetivos de simplificación tributaria enun-

ciados en el pertinente mensaje del Poder Ejecutivo, introduciendo factores desfavorables para la administración fiscal y de deterioro de la bondad teórica y eficacia práctica del régimen impositivo que hoy nos rige.

I. — Reformas a los impuestos sobre beneficios

(Réditos, ganancias eventuales, beneficios extraordinarios)

1. *Imposición a las ganancias eventuales.* — Este gravamen fue incorporado en nuestra legislación fiscal en 1946 como impuesto complementario del gravamen a los réditos, fundándose con acierto en que la capacidad contributiva de una persona «no puede ser medida exclusivamente por sus ingresos alcanzados por la ley del impuesto a los réditos sino que influyen decisivamente en ella las ganancias o beneficios de cualquier índole». Se cerraba así convenientemente el círculo de la imposición a los beneficios, de manera que aquellos no alcanzados por el impuesto a los réditos, lo estaban por el gravamen a las ganancias eventuales.

Hace apenas un año se redujo la alícuota de este tributo al 5 %, fundándose la reducción en la imposibilidad de lograr la percepción total del tributo, como consecuencia de su fácil evasión. En este segundo paso se postula ahora su eliminación, apoyada también en razones de administración, pues se concentúan insuperables, en algunos casos, los problemas planteados por la evasión fiscal.

No se ha reparado, sin embargo, en la relación que tiene la subsistencia de este impuesto (siempre que la tasa guarde adecuada relación con la del impuesto a los réditos) con la equidad global de la imposición a los beneficios y la eliminación de evasiones legales, que de otro modo se producirían en el impuesto a los réditos.

Sobre este particular, la literatura especializada ha analizado el problema, y la experiencia de numerosos países es ilustrativa (para citar la más importante mencionaremos: Due, John F. *Analists económico de los impuestos*, El Ateneo, Buenos Aires, 1961, pág. 164; Seltzer, Lawrence H. *The nature and tax treatment of capital gains and losses*, Nueva York, 1950; Surrey, Stanley S. *Definitional problems in capital gains taxation Tax revision compendium commettee on ways and means*, Washington, 1959; Tax Institute. *Panel discussion. Capital gains taxation*, Nueva York, 1946; Vickrey, William L. *Imposition des Plus-Values de Capital*, en «Revue de Science Financière», 1956).

Los principales males que traerá esta supresión pueden sintetizarse así:

- Lesión a la equidad, ya que ganancias eventuales que son expresión de capacidad contributiva —tanto como lo son los beneficios gravados con el impuesto a los réditos— quedarán al margen de toda imposición;
- Lesión, así mismo, a la equidad, por gravarse como si fueran rédito, o sea, con las tasas progresivas del año en que se producen, determinadas ganancias que se han generado a través de diversos años y que son típicas realizaciones de capital, tales como las relativas a mayores valores por aportaciones de bienes a sociedades o por cesión de derechos societarios o cuotas sociales, beneficios éstos que estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias eventuales y que se proyecta incluir en el ámbito del impuesto a los réditos;

c) Mayor interferencia de la imposición en la elección de la forma jurídica de las empresas, ya que se mantiene libre de todo impuesto la transferencia de acciones de sociedades de capital y se eleva la imposición a la transferencia de derechos societarios en otras sociedades;

d) Mantenimiento y creación de nuevas vías legales de evasión, sea mediante la realización de beneficios, acumulándolos en cuentas de reserva y transfiriendo las acciones de la respectiva empresa, como abultando los precios de las transferencias de inmuebles, y justificando con ello acrecentamientos patrimoniales obtenidos al margen de la imposición, a los réditos, o aún, justificándolos mediante la ocultación total de su existencia detrás de ganancias eventuales que se proyecta eximir de todo impuesto sobre beneficios;

e) Sustitución de un impuesto equitativo, como lo es el que grava las ganancias en la venta de inmuebles, con un impuesto de sellos sobre el importe de la transferencia —exista o no ganancia— establecido en el 3 % en el impuesto local de la Capital Federal y que, seguramente, se generalizará en seguida con distintas tasas y modalidades en las provincias;

f) Eliminación de la posibilidad, hoy existente en el impuesto a las ganancias eventuales, de reemplazo de la vivienda, sin pago del gravamen afectando el resultado al costo del nuevo bien.

En nuestra opinión, el perfeccionamiento del régimen impositivo hace aconsejable no la eliminación del impuesto a las ganancias eventuales, sino su integración en el sistema de los réditos, con oportunas medidas tendientes a contemplar el carácter no periódico de estas ganancias. Dentro de esta línea de acción, debería suprimirse la exención a las ganancias por la venta de valores mobiliarios y adoptar alguna medida concreta para hacer efectiva su imposición.

Finalmente, con relación a este tributo, deben acotarse las siguientes reflexiones:

- La objeción, antes válida en alguna medida, de que el impuesto a las ganancias eventuales gravaba beneficios ficticios o de inflación no puede hoy esgrimirse para impugnar este tributo, puesto que esta objeción ha sido superada con la revaluación de activos;
- La evasión del impuesto a las ganancias eventuales a través de la ocultación del precio real de la operación podrá reproducirse sin mayores dificultades y con igual éxito para evadir el impuesto de sellos.

2. *Impuesto a los réditos.* — De acuerdo con las consideraciones precedentes relativas al impuesto a las ganancias eventuales, las modificaciones proyectadas en el artículo 2º, puntos 1), 2) y 3) del proyecto, relacionadas con la supresión de aquel impuesto y ampliación del ámbito de la imposición a los réditos, deberían eliminarse.

Los propósitos de mejoramiento de la administración fiscal y lucha contra la evasión que inspira la reforma exigen, por el contrario, que se aborde la modificación de otras disposiciones de este estatuto tributario. En momentos en que existe una positiva reacción de la administración fiscal, y la recaudación de los gravámenes excede de continuo todas las previsiones, se está en inmejorable posición para estimular el mejor cumplimiento de los contribu-

yentes, aligerando, mediante el reajuste de las tasas, la pesada carga que hoy sufren los sectores de bajos y medianos recursos.

La revisión de las tasas tributarias debería contemplar, además, la más equitativa distribución de la presión tributaria entre las personas físicas y las sociedades de capital, medida ésta que posibilitaría volver al régimen de inclusión, sin excepciones, de los dividendos de acciones en la liquidación conjunta del impuesto a los réditos, restableciendo así la equidad en la progresividad de este gravamen.

La supresión del anonimato opcional y la consiguiente universalidad de la declaración patrimonial, que forma parte de la declaración del impuesto a los réditos, tendría además repercusión en el control fiscal. Si tal reforma coincidiera con la disminución de las tasas, no se afectaría sensiblemente la situación de los sectores interesados que con anterioridad auspiciaron el régimen hoy vigente, máxime si esta medida se acompañare con la eliminación del impuesto a los beneficios extraordinarios a que pasamos a referirnos.

3. *Impuesto a los beneficios extraordinarios.* — Reiteradamente, sectores profesionales calificados y la opinión pública han recabado la eliminación de este impuesto solamente justificado en periodos extraordinarios y, principalmente, como impuesto de guerra, pero cuyos efectos económicos contrarios al mejor aprovechamiento de inversiones de capital, racionalización y reducción de costos; dificultades en establecer una tasa normal de rendimiento equitativa para todas las actividades, que mantenga activos los factores productivos, y su compleja administración los señalan como un impuesto altamente inconveniente. Es así que una simplificación del sistema tributario debiera comenzar por su eliminación y no por la del impuesto a las ganancias eventuales, considerado «básico» en el mismo mensaje del Poder Ejecutivo que propicia suprimirlo.

En cuanto a las reformas proyectadas, consideramos que implican desaprovechar la experiencia argentina de 18 años y vulnerar la equidad en la aplicación del gravamen, abriendo nuevos caminos a la evasión legal al abandonarse al parecer —ya que el texto legal proyectado no es lo suficientemente explícito— la liquidación por empresa o explotación e irse simplemente a la idea de unidad jurídica de empresa como sujeto de gravamen, lo que facilitará las reuniones de empresas para minimizar la carga fiscal.

II. — Reforma al impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes

Consideramos el proyecto de ampliación del impuesto sustitutivo a todas las sociedades y a las empresas unipersonales como injustificado, desde el punto de vista racional.

El impuesto a la transmisión gratuita de bienes es un impuesto directo, personal y progresivo que no produce fenómeno de traslación e incide, por tanto, sobre los que la propia ley considera como contribuyentes. Mantenido en límites moderados, como ocurre entre nosotros en virtud de la jurisprudencia de la Corte, que tacha de inconstitucionales los impuestos que superen el 33 por ciento del monto imponible, este impuesto tampoco puede considerarse como un castigo para el ahorro y un freno para la capitalización.

El proyecto, en cambio, crea en su lugar un impuesto de tipo real y anual sobre el capital de las empresas que, en general, podrá trasladarse como un costo de producción en los precios de los bienes

y servicios y será pagado no por los poseedores del capital, sino en gran medida por los consumidores.

Además de este grave inconveniente, debe señalarse que el impuesto sustitutivo sobre las sociedades de capital podría tal vez justificarse por su fundamento práctico de evitar la evasión del impuesto sucesorio sobre las acciones al portador, no fácilmente verificables; pero este motivo no existe con respecto a las sociedades de personas y las empresas unipersonales.

El impuesto sustitutivo representa, además, una medida unilateral que avanza sobre las facultades impositivas propias de las provincias, sin justificación alguna por necesidad o emergencia nacional.

También ofrece muchas dificultades el concepto del patrimonio de la empresa unipersonal, que crea un desdoblamiento, ignorado por nuestros códigos de fondo, entre patrimonio particular y patrimonio de la empresa de cada persona física.

Opinión final

Las consideraciones efectuadas —como se señaló en el encabezamiento de este comentario— ponen claramente de manifiesto que el proyecto de reforma trasciende el alcance limitado que al mismo se le ha atribuido. Modificaciones de tanta importancia como las comentadas deben, en nuestra opinión, estar precedidas de un estudio integral del régimen tributario y de todas las implicaciones resultantes de las mismas.

En el informe sobre el sistema impositivo de la República Argentina preparado el año pasado por los doctores Stanley S. Surrey y Oliver Oldman se expresa que «la formulación de la política impositiva argentina parece estar fundada en enfoques ad hoc, con el sello de la participación muy personal de unos pocos altos funcionarios... En esas condiciones, la política fiscal del gobierno carece generalmente de fundamentos de investigación y análisis necesarios para obtener soluciones coordinadas y aceptables». (Informe citado, edición mimeográfica D. G. I., páginas 21 y 22.)

Lo precedentemente expuesto lleva a la conclusión de que debe procederse con cautela antes de introducir modificaciones de fondo al sistema tributario, por lo cual sería procedente tal vez adoptar alguno de los siguientes temperamentos:

1. Limitar el alcance de la reforma proyectada no innovando en materia de impuestos a las ganancias eventuales, réditos, beneficios extraordinarios y sustitutivo en los aspectos objeto de este comentario, difiriendo su consideración a las conclusiones de un análisis más exhaustivo. O bien,
2. Formar de inmediato una comisión asesora del Poder Legislativo, integrada por los funcionarios que proyectaron la reforma y especialistas y representantes de los sectores interesados para efectuar un nuevo análisis del anteproyecto.

Cátedras de finanzas públicas y de teoría y técnica impositiva, de la Facultad de Ciencias Económicas, Buenos Aires, 9 de noviembre de 1961.

Doctores Federico J. Herschel, profesor asociado de finanzas públicas; Dino Jarach, profesor asociado de finanzas públicas; Enrique Jorge Reig, profesor titular de teoría y técnica impositiva; Nicolás J. Scotti, profesor asociado de teoría y técnica impositiva.

3

CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO
Avenida Leandro N. Alem 36 (R. 1)
Buenos Aires

La Cámara Argentina de Comercio opina sobre la reforma impositiva

En una presentación realizada por la Cámara Argentina de Comercio ante la Cámara de Diputados de la Nación, la entidad pone de manifiesto sus observaciones de fondo al proyecto del Poder Ejecutivo sobre reformas impositivas, refiriéndose también a las disposiciones que se proponen para llenar necesidades del fisco.

El texto de la nota, dirigida al profesor Federico F. Monjardín, es el siguiente:

«Tengo el agrado de dirigirme a usted con motivo del proyecto elevado por el Poder Ejecutivo a esa Honorable Cámara sobre reformas al régimen impositivo nacional.

«Expresa el mensaje con que se acompaña el proyecto, que no se trata de una reforma que innove sustancialmente el actual sistema impositivo, sino que más bien se inspira en el propósito de adaptar el sistema fiscal argentino a las circunstancias y necesidades del país, agregando que en unos casos se trata de cambios meramente formales o de la supresión de disposiciones anacrónicas y que en otros, se trata de simplificar la percepción de los gravámenes, en la seguridad de que las modificaciones propuestas redundarán en beneficio del fisco y del contribuyente al propio tiempo.

«Como en oportunidades anteriores el país se encuentra frente a otro proyecto de reformas impositivas, que sólo tiende a introducir modificaciones parciales al sistema vigente, sin encarar, de acuerdo a las necesidades económicas del momento, la reestructuración total del sistema, a fin de dotar a la Nación de un instrumento de política fiscal que se adecue a los cambios que la estructura de la economía ha sufrido en los últimos años y que hacen necesario superar un ordenamiento impositivo de larga data, que ha sido retocado fragmentariamente, difiriéndose, sea por la falta de estudios de fondo o por satisfacer necesidades apremiantes del presupuesto, la revisión total que necesita y que el gobierno debe encarar, a fin de terminar con la inestabilidad que caracteriza al sistema vigente y con el excesivo discrecionalismo reglamentario que impera, ya que a fin de adecuar el mecanismo a las necesidades del momento, el Poder Ejecutivo viene constantemente introduciendo modificaciones y alteraciones sustanciales a las leyes fiscales, que son las únicas que pueden regular el derecho tributario sustantivo.

«Salvada esta primera objeción, que consideramos esencial, vamos a ocuparnos a continuación del proyecto presentado, a fin de que dentro de la tónica parcial que lo orienta, se rectifiquen ciertas iniciativas que consideramos peligrosas y excesivas dentro de un sistema impositivo que pretende calificarse de justo y de un ordenamiento estatal sometido a derecho, se corrijan ciertos aspectos técnicos que harán la imposición inequitativa y más gravosa y se suplan ciertas omisiones en que ha incurrido el Poder Ejecutivo, ya que a pesar del carácter parcial de la reforma, no podían dejar de considerarse ciertas cuestiones que son de urgente e imprescindible necesidad rever, pues así lo reclama la situación de los sectores de contribuyentes afectados por las mismas.

«Bajo la apariencia de la derogación de ciertos gravámenes, se busca obtener un aumento de recaudación de \$ 4.000.000.000 que está previsto en el presupuesto del año 1961/1962, bajo el rubro "Recursos como consecuencia de las modificaciones impositivas que se proyectan." Si el aumento de la recaudación es necesario, habrá que buscar el sistema que permita al mismo tiempo que mejorar los ingresos del fisco, distribuir más equitativamente la carga tributaria entre los distintos sectores de la población.

«Al dotarse al sistema tributario de unas más justas bases de imposición que permitan la capitalización de todos los sectores privados sin distinción, y que atenúen la creciente presión tributaria que incide sobre los contribuyentes más allá de sus capacidades contributivas y fijarse, paralelamente, una adecuada política de gastos públicos que elimine la sensación del contribuyente de que el sacrificio de sus mayores impuestos sólo se traduce en aumentos desmedidos de gastos no indispensables en un sistema de economía libre, se logrará no sólo el incremento de la recaudación sin deterioro de la economía privada, sino también la aquiescencia de los obligados, sobre la cual debe descansar la eficacia y rendimiento de un buen sistema impositivo, ya que la voluntad de pagar los impuestos es la que eliminará gradualmente al evasor, por propia acción de conciencia y, más aún, por la sanción que del mismo requerirán quienes debidamente cumplen con sus deberes. Esa acción de saneamiento y educación fiscal, debe ser acompañada al mismo tiempo por un reordenamiento de la administración fiscal, que mediante la aplicación de nuevos métodos de contralor y fiscalización, la mecanización de sus procedimientos, la moralización de sus actuaciones, un control serio, justo y responsable y una interpretación ajustada a derecho, dé al contribuyente, al mismo tiempo que la sanción de que está fiscalizado estrictamente, la seguridad de estar frente a una administración que sólo tiene por objeto exigir el cumplimiento de la ley, dentro de los cánones de la equidad y la justicia.

«Con reformas parciales que tienen por objeto aumentar la recaudación y montar un mecanismo de coerción impropio de un medio institucional democrático y jurídico, sólo se logrará la retracción del contribuyente, la agudización de la resistencia al fisco y finalmente la pérdida de las posibilidades de mejores recaudaciones.

«El procedimiento para la aplicación de los impuestos

«Entrando al análisis en particular del proyecto de reformas, comenzaremos por referirnos a las modificaciones que se introducen a la ley 11.683.

«Se proyecta modificar el régimen de las sanciones tributarias para acentuar el rigor de las mismas. Esta cámara siempre ha colaborado con el fisco en su lucha contra la evasión tributaria, por considerar que ello permitirá asegurar los postulados de igualdad y justicia en los impuestos y la posibilidad de disminución de las cargas que hoy soportan solamente los contribuyentes cumplidores; pero debemos señalar que al mismo tiempo que se exige a los deudores del fisco el estricto cumplimiento de sus obligaciones, debe también el Estado encuadrarse en derecho para cumplir debidamente con sus acreedores, ya que la compensación entre acreedor y deudor que funciona en la órbita del derecho privado no es oponible dentro de las relaciones tributarias, y como consecuencia de ello, los particulares deudores del fisco se ven amenazados con procedimientos coercitivos y suma-

rios, mientras carecen de los instrumentos legales para poder exigir del mismo modo al Estado el cumplimiento de su deuda por provisiones y servicios prestados. Es oportuno recordar que a pesar de la intención del gobierno de lograr la compensación de los créditos de los proveedores con sus respectivas deudas fiscales, el mecanismo imperante hace lenta y en ciertos casos imposible la referida compensación, que tanto necesitarían quienes se ven amenazados con procedimientos ejecutivos por el fisco.

Consideramos en principio necesaria la modificación del régimen actual, ya que es evidente la injusticia de que el contribuyente remiso en el cumplimiento de sus obligaciones, sólo está sancionado con los recargos por mora, mientras que aquel que cumple defectuosamente presentando una declaración jurada parcialmente inexacta, es sujeto de multa por omisión. Ahora, desaparecería la sanción de la multa por omisión para convertir al contribuyente moroso en un deudor del fisco, cuando las circunstancias del caso (importancia de sus ingresos, personalidad del infractor, etcétera) hagan presumir el conocimiento que tenía de la obligación de tributar y por ende, su actitud comportó una omisión dolosa en perjuicio del fisco. Aunque consideramos necesaria la acentuación de la sanción en casos como el previsto, siempre y cuando surjan los elementos necesarios para tipificar el ánimo de defraudar, no compartimos el criterio del proyecto de que en tales casos puedan aplicarse juntamente con la multa por defraudación los recargos por mora, ya que atento a la naturaleza penal de éstos, se estarían aplicando dos sanciones por el mismo hecho.

Consideramos excesiva la sanción moral que se adiciona a los defraudadores fiscales, mediante la publicación periódica de su nombre, domicilio, actividad y monto de la sanción impuesta. Dado que pasarían a ser defraudadores quienes dejan de pagar los impuestos, habrá de tenerse más una precaución de no sancionar más allá de lo justo, a aquellos que por imposibilidades materiales, ajenas al ánimo de defraudar, han caído en la calificación que ahora les extiende la ley. Téngase presente que se introducen por esta vía medios que pueden ser usados en forma arbitraria al servicio de fines políticos extrafiscales.

Llama la atención en este orden penal que la disposición agregada en el punto 29 del artículo 1º del proyecto, se aparte del principio de la aminoración de la pena más benigna. Las infracciones cometidas con anterioridad a la nueva ley serán reprimidas con el régimen anterior cuando esas infracciones hayan originado procedimientos sumariales que han terminado en intimaciones notificadas, dejando abierto en interrogante cuál será la ley aplicable para aquellas infracciones anteriores que no han dado lugar todavía a intimaciones notificadas.

Con el propósito de asegurar la igualdad jurídica de las partes en la relación tributario-procesal, sugerimos que el derecho de apelación de las sentencias dictadas en los juicios de apremio, sea concedido con iguales efectos a ambas partes, pues es contraria a ese principio, la intención del proyecto de acordar ese derecho solamente al fisco, cuando las excepciones opuestas por el contribuyente son declaradas procedentes.

En materia de notificaciones se introduce el sistema de la carta certificada con aviso de retorno, teniéndose por válida aquella que aparezca suscrita por un tercero. Es harto conocida la burlada forma de notificación que significan los avisos de retorno,

ante la imposibilidad práctica de determinar al receptor de los mismos; por ello, proponemos que el aviso sea válido si aparece suscrito por un tercero debidamente identificado, con lo que se evitarán tales situaciones.

Cléranse las reformas a la ley 11.683, con la creación de un extraño y desmedido privilegio a favor del fisco: un embargo legal, automático y universal, sobre todos los bienes del contribuyente a favor del fisco acreedor de impuestos firmes. Decimos extraño, porque del articulado del proyecto elevado al Congreso no se advierte con claridad el mecanismo de la institución y, más aún, se vislumbra los múltiples inconvenientes que pueden tornar teórica e impracticable su aplicación.

El fisco, en condiciones más expeditivas que cualquier otro acreedor (juicio de apremio), tiene los más amplios derechos para presentarse a la justicia y obtener embargos sobre determinados bienes del contribuyente hasta garantizar suficientemente su crédito, ya que los jueces despachan inmediatamente esas medidas cautelares contra la presentación de la boleta de deuda. Cuál es entonces la razón para que se introduzca una medida de orden tan excepcional, que sustraiga al Poder Judicial la facultad de decretar la indisponibilidad de los bienes del deudor, que es el resultado práctico del embargo. El artículo 17 de la Constitución dice que nadie podrá ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia fundada en ley, y una forma de tal privación es el ser impedido de disponer libremente de ella aunque no haya salido del dominio del titular.

No sólo el embargo que se pretende introducir es lesivo y contrario a nuestro sistema institucional en materia de garantías de los derechos individuales y a los mecanismos procesales que hacen efectivas dichas garantías, sino que es también de efectos extraordinariamente peligrosos que pueden lesionar seriamente las transacciones en general.

¿Cuál será la situación del contribuyente deudor que se encuentre imposibilitado de disponer de la totalidad de sus bienes como consecuencia del embargo legal? No sólo no podrá disponer de ninguno de sus bienes de capital, sino que tampoco podrá comerciar las mercaderías que se encuentren automáticamente embargadas, porque ello lo haría incurrir en el delito criminal de defraudación por vender bienes gravados como libres. ¿Es lícito paralizar de tal manera el giro comercial de un contribuyente, aplicándole una interdicción total sobre sus bienes? Dada la posibilidad de que cualquier persona tenga sus bienes embargados automáticamente por el fisco, ¿cómo se resguardarán las partes contratantes para asegurarse de que recíprocamente no están embargadas y consecuentemente inhibidas de disponer de los bienes objeto de la transacción? ¿Habrá que pedir certificados de libre deuda al fisco?

¿Cómo se determinará la publicidad del embargo, ya que éste sólo tendrá validez automática entre las partes—fisco y contribuyente— pues a los terceros no puede oponerse sin el requisito previo de la publicidad?

¿Podrá disponer el contribuyente embargado de los fondos necesarios para atender a su propio sustento y al de su familia? Teóricamente no podrá hacerlo, porque todos los fondos estarán indisponibles sin necesidad de notificación alguna, pues como está proyectada la norma el efecto del embargo legal es automático, siendo sólo necesaria la notificación para determinar la indisponibilidad de los bienes del deudor.

dor que estén en poder de terceros, que requieren un medio de conocimiento del embargo.

»Además, siendo posible utilizar las formas y medios más comunes en materia de embargos, no hay razón para que la dirección general pueda limitar el embargo y liberar los restantes bienes del deudor, sólo en caso de que notifique el embargo a uno o más terceros asegurando así el cobro del crédito fiscal, ya que esa seguridad puede obtenerla limitando el embargo sobre uno o más bienes del deudor que se encuentren en poder del mismo, evitando la innecesaria intervención de terceros.

»Por implicar el otorgamiento de privilegios extraordinarios al fisco, por importar una alteración de los principios que acuerdan exclusivamente al Poder Judicial la facultad de decretar restricciones al uso de la propiedad y por significar una obstrucción a las transacciones comerciales afectándolas de inseguridad, merece esta parte del proyecto el más profundo y meditado análisis de los legisladores, en defensa de nuestras instituciones jurídicas tradicionales y de los procedimientos democráticos y jurídicos con que debe actuar el Estado ante los particulares, en un régimen en que la libertad dentro del orden jurídico debe ser su principal característica.

»Aunque es una creación que ya viene de tiempo atrás en la ley 11.683, es oportuno recordar que también el embargo preventivo que ella autoriza por las cantidades que presumiblemente adeudaren los contribuyentes y responsables, lesiona también los principios jurídicos que regulan las relaciones crediticias, ya que mal puede obtenerse una medida precautoria en garantía de un crédito que no existe, como es aquel por impuestos no determinados. Una base elemental de justicia y de igualdad de la situación del fisco como acreedor en relación con los acreedores particulares, sería que el embargo preventivo, sólo se diera a favor del fisco en el caso de impuestos determinados, aun cuando la determinación estuviere cuestionada.

»Los impuestos a los réditos y a las ganancias eventuales

»Uno de los postulados de la reforma es la supresión del impuesto a las ganancias eventuales, reducido desde hace un tiempo a la tasa módica del 5%. Es evidente que este impuesto ha dejado de tener importancia fiscal para la mayoría de los casos, ya que en los supuestos de activos revaluados, las ganancias que se determinan son exiguas. Pero, tal atenuada imposición que podría ser ponderable que hubiera sido eliminada, en miras de una mayor simplicidad del sistema fiscal, ha sido alterada al trasladarse gran parte de los hechos imposables previstos en ella al campo del impuesto a los réditos.

»Las ganancias de capital están gravadas en la mayor parte de las legislaciones modernas, sea como tales o como incorporadas al impuesto a los réditos dentro de categorías especiales, ya que no se concibe, por razones de igualdad tributaria, que se las considere totalmente exentas, sin perjuicio de que su imposición deba ser inferior que la de las rentas que se caracterizan por su periodicidad. Si la derogación lisa y llana de todo impuesto a las ganancias de capital puede ser criticable, más lo es cuando la aparente derogación tiende a incluir ciertas ganancias de capital dentro de la órbita del impuesto a los réditos para acentuar la imposición sobre las mismas, creándose así una serie de situaciones desiguales como consecuencia del tratamiento diferencial de aquellas que quedan desgravadas y las que

entran en el impuesto a los réditos. Además, al derogar el impuesto a las ganancias eventuales, debió tenerse en cuenta que muchos contribuyentes al optar por la revaluación de activos y abonar el consiguiente gravamen, lo hacían para evitar o disminuir la incidencia de mayores cargas en ulteriores realizaciones, beneficio que ahora desaparecerá al estar exenta la ganancia derivada de las mismas y gravarse en su lugar el importe bruto de la venta con el impuesto de sellos a que más adelante nos referimos.

»En materia de transferencia de bienes inmuebles, dice el mensaje que se sustituye el impuesto a las ganancias eventuales mediante la creación de un impuesto de sellos a las escrituras públicas de transferencias de los mismos. El actual impuesto del 1,5% a tales escrituras, que soportaban en partes iguales compradores y vendedores, se eleva al 3% y estará a cargo exclusivamente del vendedor. Pero la sustitución sólo es parcial, ya que en otros casos es aumento de impuesto, pues las ventas de bienes inmuebles alcanzadas por el impuesto a los réditos (compañías de seguros, operaciones con habitualidad, inmuebles afectados al giro de la explotación) seguirán pagando ese impuesto más la tasa del 3% de sellos. Además, en el impuesto a las ganancias eventuales estaba exenta la ganancia obtenida en la venta de un inmueble destinado a casa habitación del contribuyente, cuando la misma era afectada a la adquisición de otro inmueble con el mismo destino. No habiendo ahora tal exención, se introduce un nuevo factor de encarecimiento de las transacciones inmobiliarias, en desmedro de la política de fomento a la vivienda propia.

»Por su imprecisión terminológica merece criticarse la modificación proyectada al inciso c) del artículo 43 de la ley del impuesto a los réditos, cuando dice que será rédito el ingreso que se perciba "por la transferencia temporaria o definitiva de derechos, aun cuando no se efectúen habitualmente estas clases de operaciones". ¿Qué debe entenderse por "derechos"? Es evidente que en la compraventa de bienes muebles o inmuebles se está transfiriendo el derecho de dominio y si nos atenemos a la interpretación jurídica y literal de la expresión "derechos", deberíamos concluir que todo ingreso derivado de la transferencia de bienes estaría alcanzado por el impuesto a los réditos. Del mensaje no cabe duda que la intención ha sido otra, por lo cual llamamos la atención de los legisladores para que limiten y precisen el alcance de los "derechos" cuya transferencia, si origina una ganancia, determinará la aplicación del impuesto de la ley 11.682. Correspondería repetir el texto del actual inciso c) suprimiendo la imprecisa expresión fiscal "y similares" y agregando el derecho al nombre y la transferencia de derechos de autor.

»Por el inciso h) que se agrega al artículo 43, se proyecta gravar con el impuesto a los réditos el mayor valor asignado a los bienes aportados como capital a una sociedad, introduciéndose una disposición antojadiza e injusta. En efecto, si un particular vende un inmueble a un tercero, la transferencia sólo estará alcanzada con el impuesto de sellos del 3% y si se trata de la venta de un bien mueble ella estará totalmente exenta (salvo el impuesto de sellos del 6% si la venta se instrumenta). En cambio, si el mismo particular transfiere el dominio de un bien inmueble a título de aporte a una sociedad, el mayor valor que se registre entre el asignado al aporte y el de costo, estará alcanzado con las elevadas tasas del impuesto a los réditos. No sólo es discutible esta inclusión, ya que en el supuesto se

trata de una ganancia de capital a la que faltan los presupuestos esenciales que califican al rédito, sino que además parecería que se quiere evitar la incorporación de bienes a sociedades, cuando por la reforma del impuesto sustitutivo parecería que se estimula la formación de las mismas.

Se grava también como rédito "la cesión a título oneroso de cuotas sociales". Advertimos un error de concepto, ya que no puede ser rédito la cesión, sino la utilidad o el beneficio proveniente de la cesión, y además se introduce un concepto falto de precisión jurídica, cual es el de las "cuotas sociales"; efectivamente: dentro del mismo podrían inclusive entrar las acciones de las sociedades anónimas, ya que como tales son cuotas representativas del capital social. Evidentemente tal no ha sido la intención, ya que la venta de acciones de sociedades anónimas hecha con habitualidad sigue impuesta por el artículo 3º de la ley del impuesto a los réditos y en cuanto faltare tal requisito, las mismas estaban anteriormente exentas del impuesto a las ganancias eventuales y ahora deben quedar exentas de cualquier otro gravamen.

Algunos interrogantes se han planteado respecto de la situación impositiva de la ganancia derivada de la venta de bienes muebles. Por cierto que si no se aclara el sentido del inciso a) del artículo 43 a que antes nos hemos referido, la misma estaría alcanzada por el impuesto a los réditos, pero al precisarse el alcance de tal concepto resultarían excluidos aquellos bienes muebles no comprendidos en los "derechos" del inciso en cuestión, que vendrán a quedar exentos de todo impuesto, en tanto no haya habitualidad en las operaciones, porque en tal caso caerían del ámbito del impuesto a los réditos.

Hasta acá nos hemos referido a las modificaciones que introduce el proyecto del Poder Ejecutivo, pero como decíamos al principio de esta nota, no podemos dejar de mencionar aquello que debió hacerse y se ha omitido.

Tenemos conocimiento de que la Dirección General Impositiva, en el proyecto de reforma que había preparado oportunamente, eliminaba del impuesto a los réditos el valor locativo que corresponde a las propiedades que los contribuyentes destinan a su habitación. La medida era ponderable, ya que actualmente el valor locativo deficientemente ajustado por los contribuyentes es sólo un medio para determinar quebranto en el rédito de la primera categoría. Ajustarlo quizá a niveles actuales sería introducir un factor de grave incidencia en la situación de los propietarios y atentar contra la vivienda propia.

En varias oportunidades se ha propiciado alentar por medios fiscales los del desarrollo tecnológico del país. Se ha eximido de impuesto a los réditos a los técnicos extranjeros que actúan contratados, pero un aporte importante en materia de asesoramiento tecnológico es el que se presta desde el exterior a las empresas del país, y en esos casos la suma que por tales retribuciones se abona está gravada con impuesto del 38,36 %, como condición para que la empresa pueda deducir el gasto afectado.

Sería necesario para aliviar los costos de las empresas argentinas, ya que generalmente las retribuciones se convienen "libres de impuesto", esto es, con el gravamen a cargo del agente pagador, que en los pagos por asesoramiento prestados desde el exterior, cuando ellos sean de carácter técnico-industrial y se presten a empresas manufactureras, de transportes, mineras o forestales, o se trate de ase-

soramientos a empresas comerciales en vista a la mecanización de sus sistemas, la retención se haga sólo sobre el 50 % de las sumas abonadas, como sucede en el caso de los intereses pagados por préstamos efectuados desde el exterior. Ello obedece a una razón de lógica y de justicia, ya que la totalidad de la retribución pagada no puede considerarse rédito neto, pues habrá gastos que deben deducirse contra el ingreso bruto y en estos supuestos, lo que la ley debe hacer es presumir un porcentaje determinado en concepto de gastos.

Por último, en materia de impuesto a los réditos no podemos dejar de señalar la alarma que en el mundo de los contribuyentes ocasiona el sistema del Poder Ejecutivo en materia de tasas. Desde distintos sectores se viene preconizando la necesidad de eliminar o reducir el impuesto a los réditos de la cuarta categoría; esto es al trabajo personal, sea o no en relación de dependencia. Es conocida la posición de esta Cámara en defensa de los contribuyentes de la cuarta categoría, y muy especialmente de aquellos que cumplen sus prestaciones en relación de dependencia, en razón de que estos últimos, en función de la retención que deben sufrir en el acto del pago, son por fuerza de la ley los mejores y más cumplidores contribuyentes.

Pero no creemos que la injusticia de la imposición se dé solamente respecto de las rentas de la cuarta categoría. La presión tributaria abruma a todos los contribuyentes y el problema está no en introducir soluciones de aumentos del mínimo no imponible o de las cargas de familia sino en encarar una reestructuración de la escala adicional del impuesto.

Valga señalar a título comparativo que actualmente en los Estados Unidos un ingreso imponible de 6.000 dólares, esto es un equivalente monetario de 500.000 pesos, tributa una tasa del 26 %, mientras que en la República Argentina un ingreso en pesos de ese monto está afectado por una tasa del 40 por ciento.

Las tasas adicionales del impuesto a los réditos han sido creadas en épocas en que las bases imponibles trasuntaban un poder adquisitivo y una consecuente capacidad contributiva muy por encima de la actual, como consecuencia de la desvalorización monetaria. Dicha escala fue establecida cuando los niveles de ingresos no llegaban a las cifras excesivas con que hoy se cuentan, y entonces ciertos montos, que hoy son los normales de cualquier ingreso medio, por lo común de funcionarios o empleados de cierta categoría, eran exponentes de una alta capacidad contributiva que podía estar sujeta a tasas elevadas. Hoy día, ¿cómo es posible pensar que un ingreso neto imponible del orden de \$ 100.000 pueda soportar una contribución de \$ 20.000 y que en otros niveles un ingreso de \$ 500.000 tenga que contribuir al fisco con la suma de \$ 200.000, sin perjuicio de la presión tributaria que además soporta por la incidencia de todos los impuestos indirectos, y en algunos casos de otros directos (inmobiliario, sustitutivo)?

No es inoportuno señalar que en los actuales momentos los Estados Unidos de América, país que no tiene el problema de la urgente capitalización de los sectores privados como el nuestro, está abocado a la cuestión de resolver la reducción de sus escalas impositivas, por considerar que las tasas actuales están impidiendo la expansión y el crecimiento del capital. Es así que el conocido proyecto Herlong Baker reduce la tasa actual sobre los réditos de 1.000 dólares del 20 % al 15 %, y la tasa máxima del

91 % para los réditos de más de 200.000 dólares al 47 %, dentro de un plan de reducción gradual de 5 años.

»En nuestro país es necesario permitir la formación del capital en todos los sectores privados sin distinciones, siendo insuficientes los actuales regímenes que sólo permiten la capitalización de ciertos sectores. La capitalización del país no debe ser solamente la de los sectores afectados a la producción sino la de todo el pueblo, como forma de contribuir al crecimiento del país y de mejorar el standard de vida de la población con sus recursos propios. Además no es nuestro problema solamente mejorar el índice de capitalización por vía de una reducción de impuestos, sino evitar el agotamiento de las fuentes productoras de riquezas y de impuestos, por tasas excesivas que actúan como factor de estímulo a la evasión.

»Impuesto de sellos

»Ponderamos en general las reformas introducidas a la ley del impuesto de sellos, en cuanto tienden a simplificar los actos, contratos y operaciones, eliminando imposiciones de complicado mecanismo y de escaso rendimiento fiscal.

»Lo que sí no compartimos, como antes lo hemos expresado, es la creación del impuesto del 3 % a las escrituras públicas de transferencias de inmuebles, en sustitución del impuesto a las ganancias eventuales, porque en algunos casos no se trata de sustitución sino de aumento de impuestos, y además porque se sustituye un impuesto nacional del que participaban las provincias, por un impuesto local, que permitirá a los entes estatales la creación de similares gravámenes, con lo cual en vez de la mayor simplicidad y uniformidad se logrará la multiplicidad y desigualdad de gravámenes.

»El impuesto sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes

»Continuando la tendencia fiscal a eliminar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, se extiende la aplicación del gravamen de la ley 14.060 a las sociedades de personas matriculadas como comerciantes y a las empresas unipersonales, también matriculadas en el Registro Público de Comercio.

»Vemos con agrado esta tendencia a la eliminación del impuesto sucesorio, que como todo gravamen al capital, es destructor de las fuentes de riquezas. El impuesto sustitutivo, aunque gravando también al capital, es de mayor rendimiento fiscal, y quizás de mayor significación para el contribuyente a lo largo de su vida, pero es de efectos más atenuados, ya que el impuesto del 1 % pasa a ser uno de los tantos gastos de la explotación anual de los negocios; bien se ha dicho que es un seguro contra el impuesto sucesorio.

»No obstante debemos señalar que desde el punto de vista técnico-jurídico la aplicación del gravamen a las empresas unipersonales implica desdoblamiento de la personalidad del individuo, distinguiendo entre el patrimonio destinado a la empresa y el patrimonio particular de cada uno, viniéndose así en el orden fiscal a introducir algo parecido a esa institución tan discutida, cual es la empresa individual de responsabilidad limitada.

»En orden a la extensión de este gravamen habría sido conveniente que se incluyera entre los sujetos del

mismo a las sociedades civiles, que aun tienen amplio campo de actuación en el orden de las actividades agropecuarias y también de las profesionales. El hecho de la ausencia de todo registro de las mismas no puede ser óbice para aplicarles este impuesto, ya que bastaría exigirles el cumplimiento de ciertos recaudos en materia de balances para estar en la misma situación que los demás contribuyentes.

»Por último, cabe advertir sobre los posibles problemas de superposición a que puede dar lugar la extensión del gravamen cuando los bienes que integran al activo de las sociedades de personas o de las empresas unipersonales se encuentran en jurisdicciones provinciales.

»En ese sentido, las provincias en ejercicio de su autonomía tributaria no están obligadas a adherirse al nuevo régimen y podrían válidamente conservar el poder de imponer con el impuesto a la transmisión gratuita de bienes las transmisiones de tales activos. Es evidente que la invitación que se hace a las provincias a adherirse a este régimen es un caso más, entre los tantos, en que el poder impositivo central va anulando las facultades impositivas de los Estados locales.

»Terminamos esta nota poniéndonos a disposición de las comisiones de esa Honorable Cámara que deben entender en este proyecto, ofreciendo nuestra colaboración, la de nuestros técnicos y asesores, para que ese cuerpo legislativo pueda contar con los mayores elementos de juicio para sancionar una ley de tanta repercusión para la vida del país.

»Aprovecho la oportunidad para saludar al señor presidente con la mayor consideración. — *Eduardo L. García*, presidente; *Aldo R. Luciani*, director secretario.

4

UNION INDUSTRIAL ARGENTINA

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1961.

Al señor presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical del Pueblo, doctor Anselmo A. Marini.

S / D.

De nuestra consideración:

La Unión Industrial Argentina, preocupada por el grave problema que significa la descapitalización de nuestra clase media, que ve esfumarse la posibilidad de mejorar su posición económica y social debido a un tratamiento impositivo injusto, se ha dirigido a la Dirección General Impositiva puntualizando este hecho y pidiendo se adopten los recaudos pertinentes para ponerle remedio.

Es necesario que el asunto sea estudiado con seriedad inmediatamente, y por ello rogamos se lo incluya en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. La modificación de la ley de impuesto a los réditos, desgravando las rentas de cuarta categoría, es una decisión que debe adoptar nuestro Poder Legislativo sin demoras y que impone la realidad económica del país, pues éste no podrá progresar si no se alienta la preparación, el perfeccionamiento técnico y científico y la capitalización de ese gran sector del pueblo argentino.

Para su información, le acompañamos copia de la nota cursada al señor interventor en la Dirección General Impositiva, en la que fundamos nuestra posición.

Confiamos en que se dará curso favorable al pedido que dejamos formulado, agradeciéndole desde ahora la atención que dispense al mismo.

Con tal motivo, le saludamos con nuestra más alta distinción. — *Juan M. Oneto Gaona*, presidente; *Héctor Amorosi*, prosecretario.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1961.

Al señor interventor en la Dirección General Impositiva, doctor Manuel Rapoport. — Lavalley 1268, Capital.

De nuestra consideración:

El Poder Ejecutivo de la Nación ha elevado una vez más a la consideración del Honorable Congreso un proyecto de reformas parciales al régimen impositivo vigente, inspirado, al decir del mensaje que lo acompaña, «en el propósito de adaptar el sistema fiscal argentino a las circunstancias y necesidades del país».

Decimos «una vez más», pues en los últimos años se ha convertido en una persistente modalidad de nuestra política fiscal el introducir continuas modificaciones a las leyes impositivas, quitándoles con ello la estabilidad necesaria a fin de permitir a las fuerzas económicas del país adoptar con certidumbre las previsiones indispensables para el normal desarrollo de sus actividades y tener una seguridad sobre la medida en que gravitará la carga tributaria en sus negocios y las retribuciones de su gestión.

Lo grave de estas continuas reformas es que generalmente se encaran con un interés eminentemente fiscalista, con un simple espíritu de cajero, olvidándose que hoy día la técnica y la política fiscal han dejado de constituir un simple medio de recoger fondos y que deben estar orientadas con miras amplias, como son las del desarrollo de la economía nacional y su función social, que dé lugar a un ascenso en el nivel de vida y la capitalización de su población.

Se observa así que en el proyecto elevado, que incluye en su mayor parte modificaciones a las disposiciones de procedimiento y a las punitivas, se olvida atender la solución de un problema fundamental para nuestra economía y estabilización social, que es el que origina la pesada carga tributaria a un gran sector de los contribuyentes. El Estado se ha hecho ciego a la consideración de este problema en materia del impuesto a los réditos (ley 11.682), al no querer rever o actualizar los índices que sirven de base para la aplicación del gravamen adicional progresivo y reajustar las deducciones que la ley admite como cargas de familia y mínimo no imponible, teniendo en cuenta la verdadera capacidad adquisitiva de nuestro signo monetario, afectado por un largo proceso inflatorio.

La pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, índice de la capacidad contributiva de los administrados, ha quitado en la realidad económica toda equidad y razonabilidad a la distribución de la carga pública, que ha pretendido regularse en el impuesto a los réditos mediante la tasa adicional progresiva sobre el conjunto de los beneficios gravables.

El gobierno, equivocadamente, no afronta ese problema que gangrena nuestra economía. Se deja llevar por un espíritu mezquino de recaudar más fondos para satisfacer sus gastos productivos e improductivos, alegando que las necesidades del presupuesto no permiten una desgravación a la población, cuando en realidad lo que ocurre por el simple juego de la inflación y el mantenimiento de tasas progresivas anacrónicas es que se incrementan natural y paula-

tinamente en forma desproporcionada, por un lado, los ingresos fiscales y, por otro, el peso de la carga impositiva.

Dados estos factores, una razonable modificación de las escalas progresivas del impuesto, adecuándolas a la realidad económica, no constituye un acto de desgravación sino el retrotraer la carga fiscal a su límite natural.

Los esporádicos paliativos con que se ha pretendido atenuar este mal, mediante pequeños ajustes del monto de los mínimos no imponibles, deducciones por cargas de familia y adicionales, han sido generalmente tardíos y han estado muy lejos de rectificar el agravio que causa al contribuyente un impuesto global inadecuado a la realidad, que resta de sus recursos los medios indispensables para sus necesidades y para obtener una lógica evolución económica, con un mínimo de capitalización.

Este mal se hace sentir en mayor grado en un núcleo importante de la población, formado por aquellos que obtienen sus recursos principalmente de su trabajo personal, y que con su técnica y capacidad, frutos de largos años de esfuerzo, práctica y estudio, constituyen un factor de significación en el desarrollo de la economía nacional.

Un país en desarrollo debe impulsar la productividad, el empeño de los hombres en progresar y la inversión de capitales, que le permitan obtener una evolución favorable para superar los problemas que se oponen a la estabilización social. La política fiscal a seguirse no puede, por lo tanto, prescindir de un principio indiscutido como es el de que la carga fiscal no debe desalentar la iniciativa del trabajo y la formación del capital.

Cabe recordar al respecto la opinión del profesor Maurice Masoin, que sobre el problema considerado expusiera en las Jornadas Internacionales de Derecho Fiscal realizadas en nuestro país el año pasado. Expresa que en las naciones insuficientemente desarrolladas, en las que la presión inflacionista gravita sobre los precios interiores, pesando en el valor representativo de las remuneraciones del trabajo personal, tanto manual como intelectual, el impuesto a los ingresos profesionales debe ser modesto, muy modesto, siendo progresivo quizá, pero sobre todo a título educativo.

En cambio ¿cuál es y ha sido la política fiscal seguida en nuestro país al respecto? Todo lo contrario, y por ello es necesario que los señores legisladores reflexionen de una vez sobre la gravedad del problema y lo afronten en forma enérgica.

Actualizando los montos de las deducciones permitidas en concepto de mínimo no imponible y por cargas de familia y las escalas de las rentas gravadas con el impuesto adicional, vigentes en distintos años que abarca el proceso inflatorio, a valores equivalentes en poder adquisitivo al de nuestra moneda actual, tomando como base el índice costo de vida, es fácil observar en qué medida desmesurada ha ido incidiendo el impuesto a los réditos global sobre las remuneraciones provenientes del trabajo personal y aun de otras actividades.

Comparemos, en primer lugar, las deducciones admitidas para la liquidación del impuesto a los réditos en el caso de un contribuyente con rentas de trabajo personal, con una familia tipo a su cargo (esposa y dos hijos), partiendo del año 1943 como base para el índice costo de vida (100), y que en julio de 1961 llega a 4.092,7, reduciendo su valor nominal de cada año al equivalente en poder adquisitivo de la moneda actual:

Año	Monto de las deducciones admitidas. Valor nominal \$	Valor equivalente en m\$n. Año 1961 \$
1943	9.000	368.400
1951	24.000	242.400
1955	30.600	184.300
1956	30.600	161.800
1958	44.400	143.000
1959	69.600	104.900
1960	100.000	118.400
1961	151.000	151.000

Como observamos por las cifras precedentes, las deducciones admitidas por las disposiciones en vigor no alcanzan ni al 50 por ciento del monto de los valores equivalentes cuya deducción se permitía en el año 1943, y eso que aquéllos no se consideraban razonables en un país en desarrollo.

Pero si a esta demostración le agregamos la que resulta del juego del impuesto adicional progresivo, cuyas escalas se modificaban haciéndolas más gravosas, se observa qué repercusión ha tenido el impuesto a los réditos sobre las retribuciones del trabajo personal, ahogando la natural evolución económica y social del contribuyente.

Tomemos como ejemplo la incidencia que han tenido las escalas progresivas del impuesto adicional, aplicándolas sobre las valores equivalentes a una renta neta imponible actual de \$ 300.000, 500.000 y 1.000.000.

1.— *Renta neta imposible correspondiente en cada año en relación a su poder adquisitivo:*

Valores equivalentes representados en m\$n. de cada año						
1961 \$	1943 \$	1951 \$	1955 \$	1958 \$	1959 \$	1961 \$
300.000	7.200	29.700	49.800	93.000	198.900	198.900
500.000	12.200	49.500	83.000	155.000	331.500	331.500
1.000.000	24.400	99.000	166.000	310.000	663.000	663.000

2.— *Porcentaje que corresponde al impuesto adicional progresivo sobre los mismos valores equivalentes según la tabla en vigor en cada año:*

Valor índice Año 1961 \$	1943	1951	1955	1958	1959	1961
300.000	0,63	6,59	8,97	13,52	20,81	25,58
500.000	1,55	9,55	12,77	18,26	26,76	30,55
1.000.000	3,90	13,79	18,26	23,54	32,87	35,52

3.— *Porcentaje que corresponde al impuesto global (básico más adicional progresivo) sobre los mismos valores equivalentes de renta neta imponible:*

\$	1943	1951	1955	1958	1959	1961
300.000	3,63	13,59	15,97	20,52	29,81	34,58
500.000	4,55	16,55	19,77	25,26	35,76	39,55
1.000.000	7,90	20,79	25,26	30,54	41,87	44,52

Queda demostrado así cómo la aplicación de las escalas progresivas del impuesto a los réditos, sustentadas en valores ficticios, ha repercutido perniciosamente sobre las retribuciones del trabajo personal, desalentando la iniciativa y esfuerzos del ele-

mento humano tan necesarios para el desarrollo de nuestra economía.

El peso de la carga tributaria, incrementado en forma desmedida durante el proceso inflatorio, hace que aquellos que obtienen sus recursos de su capacidad técnica y profesional, no sólo se vean impedidos de formar un capital, sino que tengan que observar cómo la acción fiscal hace que se desvanezcan los ahorros que pudieron reunir en años de estabilidad.

Es lógico, pues, que con frecuencia, ante lo irrazonable de la política fiscal, nos encontremos con un aumento de la evasión impositiva, aun por parte de aquellos en cuyo espíritu no está el no cumplir con sus obligaciones tributarias, pero que se ven abocados al problema o de subsistir económicamente o ahogarse en manos del fisco.

Por estas razones es que se hace difícil comprender que una reforma impositiva que no contempla el problema analizado pueda llevar el propósito de adaptar el sistema fiscal argentino a las circunstancias y necesidades del país.

Confiamos en que el señor interventor tendrá en cuenta lo expuesto, a sus efectos, y nos complacemos en saludarle con nuestra más alta distinción. — *Unión Industrial Argentina.* — Juan M. Oneto Gaona, presidente. — Héctor Amorosi, prosecretario.

5

Anteproyecto

Artículo 1º— Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir anualmente (hasta) con la denominación de Bonos de Ahorro Social Argentino, títulos con las características y modalidades que se determinan en el artículo 4º. El monto de cada emisión será equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del total que ingresaren anualmente a la Dirección General Impositiva —en concepto de impuesto a los réditos— los contribuyentes mencionados en el artículo 60 de la ley 11.682 (t.o. 1960).

Art. 2º— A efectos de la determinación de la cantidad anual de bonos a emitirse, la Dirección General Impositiva informará a la Secretaría de Hacienda de la Nación sobre el monto total de los fondos percibidos de los contribuyentes, con indicación de la cantidad y monto total de los certificados —a que se hace referencia en el artículo 3º— que se hubieren entregado a los respectivos contribuyentes.

Art. 3º— La Dirección General Impositiva procederá a entregar a los contribuyentes indicados en el artículo 1º, juntamente con la habitual constancia de pago del impuesto ingresado por éstos, un certificado nominativo con determinación de la cantidad de bonos que, en virtud de lo dispuesto por esta ley, quedan —automáticamente— suscritos e integrados por el contribuyente, cantidad que será equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del importe total ingresado por éste. A los fines de la liquidación de este certificado, no se computarán las fracciones menores de quinientos pesos (\$ 500). Los referidos certificados serán canjeados por los correspondientes bonos dentro de los plazos que se indiquen en el decreto reglamentario.

Art. 4º— Los Bonos de Ahorro Social Argentino serán al portador, valor nominal quinientos pesos (\$ 500) cada uno, pudiendo emitirse en láminas de hasta diez bonos, y se individualizarán con el año de su emisión, número de serie y orden, debiendo además reunir las características y formalidades es-

tablecidas por la legislación vigente para títulos públicos nacionales. Devengarán el 2 ½ por ciento anual a partir del sexto año de su emisión, desde cuya oportunidad también serán cotizables en el mercado de títulos. Estarán exentos de todo impuesto actual o futuro.

Art. 5º — El rescate de cada emisión se efectuará por tercios y por sorteo cada cinco años, en plazo total de quince años, para lo cual se formará el co-

rrespondiente fondo de rescate y servicio de intereses. El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo relacionado con el procedimiento del rescate y pago de intereses y la formación del respectivo fondo.

Art. 6º — El sistema de ahorro establecido por esta ley beneficiará exclusivamente a los contribuyentes sindicados que cumplan su obligación fiscal dentro del plazo que anualmente establezca la Dirección General Impositiva.

2

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA

VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL. — PROMEDIOS COMPARADOS 10 PRIMEROS MESES 1961-1960

CONCEPTOS	Períodos		Variaciones %
	1961 (1)	Diez meses 1960	
Nivel general	126,4	113,5	+ 11,4
Industrias extractivas	304,7	221,6	+ 37,5
Industrias manufactureras	120,2	109,2	+ 10,1
Bienes durables	135,1	122,1	+ 10,6
Bienes no durables	111,9	102,1	+ 9,6
Alimentos y bebidas	116,2	113,3	+ 2,6
Tabaco	98,1	93,6	+ 4,8
Textiles	90,9	86,0	+ 5,7
Confecciones	107,6	82,3	+ 30,7
Madera	107,0	101,4	+ 5,5
Papel y cartón	181,7	156,4	+ 16,2
Imprenta y publicaciones	191,3	168,1	+ 13,8
Productos químicos	124,0	116,4	+ 6,5
Derivados del petróleo	178,9	163,5	+ 9,4
Caucho	198,1	136,7	+ 44,9
Cuero	73,9	63,6	+ 16,2
Piedras, vidrio y cerámica	137,9	124,0	+ 11,2
Metales, excluida maquinaria	172,6	151,9	+ 13,6
Vehículos y maquinarias (excluida la eléctrica)	108,1	101,7	+ 6,3
Maquinaria y aparatos eléctricos	137,1	118,5	+ 15,7
Varios	35,3	41,8	- 15,6
Electricidad (2)	128,1	118,0	+ 8,6

(1) Cifras provisionales.

(2) Del grupo electricidad y gas se ha excluido gas manufacturado y sus subproductos.

II

ASUNTOS ENTRADOS

I

Comunicaciones oficiales

La Comisión Permanente de Coordinación Escolar solicita un subsidio. (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)

II

Comunicaciones de comisión

La Comisión de Defensa Nacional comunica que ha producido anteproyecto de dictamen en el proyecto de ley por el que se autoriza a vender en pública su-

basta o en forma directa, a instituciones nacionales, provinciales, municipales y particulares, varios inmuebles de propiedad del Estado nacional asignados en uso al ejército. (Al Archivo.)

III

Dictámenes de comisión

LEGISLACIÓN GENERAL, PRESUPUESTO Y HACIENDA Y FINANZAS:

En el proyecto de ley por el que se establece la obligatoriedad por parte del vendedor de entregar al comprador una factura por duplicado cuando en la compraventa de mercaderías se convenga un plazo mayor de 30 días.